

DESCONCENTRACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA EN ANDALUCÍA. CRITERIOS PARA LA DELIMITACIÓN DE UNIDADES TERRITORIALES INFERIORES AL MUNICIPIO. APLICACIÓN EN EL TÉRMINO DE JEREZ DE LA FRONTERA.

Máster Universitario en Ordenación y
Gestión del Desarrollo Territorial y
Local

TRABAJO FIN DE MÁSTER

Curso 2010/2011



Autor:

Luis Copano Ortiz

Geógrafo

Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía

Tutor:

Dr. Jesús Ventura Fernández

Profesor Titular en Análisis Geográfico

Regional

Universidad de Sevilla

DESCONCENTRACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA EN ANDALUCÍA. CRITERIOS PARA LA DELIMITACIÓN DE UNIDADES TERRITORIALES INFERIORES AL MUNICIPIO. APLICACIÓN EN EL TÉRMINO DE JEREZ DE LA FRONTERA.

Autor:

Luis Copano Ortiz

Geógrafo

Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía

Tutor:

Dr. Jesús Ventura Fernández

Profesor Titular en Análisis Geográfico Regional

Universidad de Sevilla



Índice.

1. RESUMEN Y JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO.....	5
2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA.....	13
3. MARCO TEÓRICO.....	17
4. UNA NUEVA PERSPECTIVA PARA LA ADMINISTRACIÓN LOCAL EN ANDALUCÍA.....	20
4.1. MARCO NORMATIVO.....	20
4.2. NECESIDAD DE MODIFICAR LA LEY 7/1993, DE DEMARCACIÓN MUNICIPAL DE ANDALUCÍA.....	23
4.3. MUNICIPIO Y AUTONOMÍA LOCAL EN ANDALUCÍA.....	25
4.4. LA IMPORTANCIA DE LA DEMARCACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL TERRITORIO MUNICIPAL EN LA LAULA.....	28
4.5. LA ORGANIZACIÓN DEL TERRITORIO SUBMUNICIPAL.....	29
4.5.1. Antecedentes normativos.....	29
4.5.2. Normativa estatal vigente.....	33
4.5.3. Normativa autonómica andaluza. Antecedentes.....	35
4.5.4. La Ley de Autonomía Local de Andalucía (LAULA).....	37
4.5.5. El nuevo enfoque de las Entidades Locales Autónomas.....	41
4.5.6. Las Entidades Vecinales.....	44
4.5.7. Aspectos comunes de la regulación de las Entidades Vecinales y las Entidades Locales Autónomas.....	45
4.5.8. El mapa andaluz de Entidades Locales Autónomas.....	48
4.5.9. Las posibilidades segregacionistas de las Entidades Locales Autónomas con la entrada en vigor de la LAULA.....	51
5. CRITERIOS PARA LA DELIMITACIÓN DE UNIDADES TERRITORIALES INFERIORES AL MUNICIPIO.....	52
5.1. LA NECESIDAD DE REALIZAR UN ANÁLISIS TERRITORIAL DEL MUNICIPIO...	54
5.2. DETERMINACIÓN DE LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES EN EL MUNICIPIO.....	56
5.2.1. El concepto de núcleo de población.....	56

5.2.2. Identidad común y diferenciada.....	59
5.3. DETERMINACIÓN DEL ÁMBITO TERRITORIAL DONDE DEBEN EJERCER SUS COMPETENCIAS LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN.....	60
5.3.1. Entidades Locales Autónomas con ámbito territorial.....	63
5.3.2. Entidades Locales Autónomas sin ámbito territorial.....	68
5.4. DETERMINACIÓN DE UNIDADES TERRITORIALES INFRAMUNICIPALES AUSENTES DE NÚCLEOS DE POBLACIÓN.....	72
5.5. CRITERIOS A UTILIZAR.....	73
6. PROPUESTA DE DELIMITACIÓN PARA EL TÉRMINO MUNICIPAL DE JEREZ.....	75
6.1. CRITERIOS HISTÓRICOS. ESTUDIO DEL POBLAMIENTO.....	75
6.1.1. Conformación del alfoz jerezano y surgimiento de entidades de población.....	75
6.1.2. Tratamiento urbanístico de las entidades de población.....	101
6.1.3. Surgimiento de movimientos segregacionistas.....	108
6.1.4. La actual organización territorial de Jerez en Áreas de Planificación.....	110
6.1.5. Determinación y estudio de las entidades de población.....	114
6.1.6. Desconcentración o descentralización administrativa municipal.....	124
6.2. CRITERIOS ADMINISTRATIVOS.....	125
6.2.1. Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía.....	125
6.2.2. Política de empleo en Andalucía.....	128
6.2.3. Política educativa andaluza.....	129
6.2.4. Códigos postales.....	131
6.2.5. Seccionado censal.....	133
6.2.6. Nomenclátor de entidades de población.....	136
6.3. CRITERIOS CUANTITATIVOS.....	138
6.4. CRITERIOS TERRITORIALES.....	145
6.5. CRITERIOS SOCIOPOLÍTICOS.....	149
7. RESULTADOS.....	155
8. CONCLUSIONES.....	191
9. BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS UTILIZADAS.....	193
10. ANEXOS.....	201
ANEXO 1. Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar (1845-1850).....	201
ANEXO 2. Nomenclátor de Andalucía de 1860.....	204
ANEXO 3. Nomenclátor de Unidades Poblacionales de 2010.....	212

1 Resumen y justificación del estudio.

La Ley 5/2010, de Autonomía Local de Andalucía (LAULA) ofrece a los municipios la posibilidad de organizar espacialmente su término municipal, o parte de él, en circunscripciones territoriales como manifestación de su plena autonomía política, con el fin de acercar la acción administrativa a la población, facilitar la participación ciudadana y dotar de mayor eficacia a la prestación de servicios. Esta opción se fundamenta en la potestad de autoorganización que se les otorga en la presente Ley con objeto de poder definir sus propias estructuras administrativas, adaptadas a sus necesidades para permitir una gestión eficaz.

Podríamos considerar que el municipio tiene plena libertad para establecer o no circunscripciones territoriales en su término municipal en función de la potestad de autoorganización que le otorga el artículo 91.3 de la Ley Orgánica 2/2007, de Reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía y como manifestación de su plena autonomía política. En este sentido, en el artículo 90 del Estatuto vigente, se establecen los principios de organización territorial andaluza, que deberán regirse *“por los principios de autonomía, responsabilidad, cooperación, desconcentración, descentralización, subsidiariedad, coordinación, suficiencia financiera y lealtad institucional”*. Estos principios deben ser aplicados en todos los elementos de la estructura territorial andaluza que está compuesta por los municipios, provincias y demás entes territoriales.

El municipio, como entidad territorial básica (artículo 91.1 del Estatuto y artículo 3.2 de la LAULA), tiene que aplicar el principio de organización territorial de Andalucía que, si bien el artículo 109 de la LAULA parece plantear que la organización territorial del municipio es simplemente una posibilidad que le otorga la Ley en función del ejercicio de su potestad de autoorganización, se establece, para las entidades territoriales, de forma expresa, que deberán regirse, entre otros, por los principios de desconcentración y descentralización. Por tanto, a pesar de que la potestad de

autoorganización territorial corresponde al municipio, éste deberá valorar (mandato) las posibilidades de organizarse espacialmente en circunscripciones territoriales que podrán ser desconcentradas (distritos, barrios, aldeas, pedanías u otras denominaciones análogas) y/o descentralizadas (entidades vecinales o entidades locales autónomas).

En definitiva, los municipios tienen la obligación de valorar cómo se organizarán territorialmente teniendo en cuenta las particularidades de su término municipal, con el objetivo final de prestar a todos los ciudadanos el mismo nivel de servicios e involucrarlos en los procesos de participación ciudadana, que deben estar definidos en su normativa y funcionando de forma eficiente por medio de canales de comunicación adecuados.

Apostar por la descentralización o desconcentración política municipal es una elección que el municipio decidirá en función su propia realidad socioeconómica y territorial. El objetivo que se persigue es acercar la Administración Local a la ciudadanía para mejorar la eficacia de la gestión municipal e introducir de forma real la participación ciudadana en todos los asuntos que les afectan. Por tanto, las entidades que asuman competencias descentralizadas (propias) o desconcentradas (delegadas) por parte del municipio deben ser capaces de gestionarlas de tal forma que mejoren la eficacia municipal.

Se tiende a interpretar de forma errónea que la descentralización política supone poseer mayores capacidades funcionales por poseer competencias consideradas como propias; sin embargo, la desconcentración puede significar un mayor número de competencias que, aunque no sean propias sino delegadas, permiten tener una mayor capacidad decisoria. Es más, habitualmente los ayuntamientos tienden a ofrecer un mayor número de funciones a las entidades de carácter desconcentrado ya que sobre ellas tienen plenos poderes para establecer su metodología de trabajo. Por su parte, las entidades descentralizadas, por lo general, son vistas por los ayuntamientos como una imposición de la administración regional y/o estatal que ha otorgado competencias propias a estas entidades sin su consentimiento, por lo que no son integradas en sus esquemas organizativos, siendo frecuente la existencia de trabas administrativas que

impiden gestionar de forma eficaz las competencias que son propias de estas entidades descentralizadas.

En ciertas ocasiones se apuesta por un modelo complementario, donde conviven un modelo descentralizado junto a otro desconcentrado; así, algunas Entidades Locales Autónomas tienen asumidas competencias propias que podríamos considerar que abarcan unos servicios mínimos para su población pero, a su vez, el ayuntamiento matriz delega competencias que amplían dichas funciones, con el fin de acercar la acción administrativa y de facilitar la participación ciudadana en las políticas locales.

Definir el carácter desconcentrado o descentralizado que han de tener las circunscripciones territoriales, aunque importante para establecer el modelo competencial del municipio, no es lo más interesante en este discurso, pues lo fundamental es conocer el ámbito territorial donde las diferentes entidades que se establezcan van a ejercer sus competencias (ya sean propias o delegadas). Es conveniente que los municipios, en virtud de su plena autonomía para organizarse internamente, realicen un exhaustivo análisis territorial, centrado en el estudio del poblamiento para la determinación de los asentamientos poblacionales (núcleos y entidades en diseminado) existentes en su territorio, teniendo presente las diversas características históricas, geográficas, sociales, económicas, culturales o administrativas que revelasen unos intereses colectivos peculiares.

La aprobación de la Ley de Autonomía Local se planteaba como una necesidad, puesto que la Ley 7/1993, reguladora de la Demarcación Municipal de Andalucía presentaba ciertos problemas en relación con las Entidades Locales Autónomas (ELAs). Sobre la base de la Disposición Transitoria Segunda de dicha Ley, la entonces Consejería de Gobernación reguló, mediante Orden de 13 de junio de 1997, el proceso de adaptación de las Entidades de Ámbito Territorial Inferior al Municipio (EATIMes) en ELAs. Dicha Orden fue impugnada por las EATIMes de La Redondela (Isla Cristina), Fuente Carretero (Fuente Palmera) y Algallarín (Adamuz), siendo declarada nula por sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y, posteriormente, ratificadas por el Tribunal Supremo en sus sentencias de 13 de octubre de 2005 y 4 de abril de 2006

Una vez declarada nula la Orden de 13 de junio, se reguló el procedimiento de adaptación en el Decreto 185/2005, de 30 de agosto, por el que se aprobó el Reglamento de Demarcación Municipal de Andalucía y del Registro Andaluz de Entidades Locales. No obstante, contra este Reglamento fue interpuesto el recurso Contencioso-Administrativo 725/2005 por la Federación Andaluza de Entidades Locales Municipales, dictándose Sentencia el 14 de abril de 2008 por el TSJA declarando la nulidad de una serie de preceptos del Decreto 185/2005, entre los que se incluían los artículos contenidos en su Capítulo referido al procedimiento de adaptación de las EATIMes al régimen de ELAs. Tras la interposición de un recurso de casación por el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, con fecha de 15 de junio de 2010, fue dictada Sentencia por el Tribunal Supremo, inadmitiendo tal recurso, por lo que quedó confirmada la nulidad del procedimiento de adaptación de las EATIMes al régimen de ELAs según lo previsto también en el Decreto 185/2005. Tal Sentencia afirmaba que *“la Disposición transitoria de la ley no permite que bajo el amparo de un nuevo procedimiento de adaptación se haga recorrer prácticamente el mismo camino a las entidades ya existentes sino que se ha de tratar solo el aspecto formal antes descrito al que nos referíamos en la sentencia de 2000. Y ello es así por la aplicación del artículo 47 de la ley que dispone que también gozarán de aquella condición aquellas entidades creadas con anterioridad a la aprobación de esta ley. El reconocimiento es ope legis”*, es decir, por imperativo legal.

Sin embargo, en la actualidad aún quedan cuestiones por aclarar a pesar del reconocimiento legal de las EATIMes como Entidades Locales Autónomas, ya que en el artículo 116.2 de la Ley de Autonomía Local, en relación al contenido mínimo que debe contener el estatuto de creación de la ELA, se indica, en su apartado f), la necesidad de establecer el ámbito territorial en que haya de ejercitar sus competencias. En este sentido, en Andalucía tenemos 25 ELAs que tienen delimitado su territorio (por Orden o Decreto de la Junta de Andalucía) frente a las 25 que no lo poseen y donde sería necesario establecerlo para que dichas Entidades pudieran ejercitar sus competencias más allá de donde hasta el momento lo hacen, limitándose a los núcleos de población que ostentan la capitalidad de la entidad.

Es recurrente la consideración de que las ELAs tienen atribuidas competencias exclusivamente de carácter urbano por interpretar que las listadas en el artículo 123 de

la LAULA así lo son: concesión de licencias de obras menores; pavimentación, conservación y reparación de vías urbanas; alumbrado público; limpieza viaria; ferias y fiestas locales; abastos; alcantarillado, recogida de residuos, entre otras; por lo que no se llega a considerar la importancia de delimitar su ámbito territorial. Sin embargo, en las sociedades actuales, competencias como la limpieza viaria, el alcantarillado o la recogida de residuos han ampliado su radio de acción a áreas catalogadas como rústicas, por lo que es fundamental concretar su territorio de actuación.

Se plantea, por tanto, una problemática legal y práctica que es necesario solventar. Los municipios en el ejercicio de su potestad de autoorganización tienen plena capacidad para establecer circunscripciones territoriales en la totalidad de su término municipal o sólo en parte del mismo, pero la LAULA no le ofrece ni criterios específicos ni generales sobre cómo realizar la delimitación (una especie de Directrices o Catálogo de Buenas Prácticas) de aquellas entidades ya constituidas que aún no tienen definido su territorio. En el artículo 110 de la vigente Ley se dice que *“la organización territorial del término municipal...valorará fundamentalmente los criterios de volumen de población, situación geográfica, necesidades sociales, diferenciación histórica y cultural, orientación de las actividades económicas más significativas y existencia de intereses peculiares de cada zona...”*, y el artículo 112, dedicado a las entidades de gestión descentralizada (Entidades Locales Autónomas y Entidades Vecinales), determina que la creación de las mismas se efectuará sobre la base de uno o varios núcleos separados de aquel en que se halle la capitalidad del municipio.

El presente trabajo pretende aportar criterios de análisis territorial para orientar a los municipios en la tarea de estudiar la idoneidad de establecer unidades territoriales inframunicipales y la delimitación de las mismas. Se propone realizar un estudio global del término municipal a partir del poblamiento existente que permitirá determinar la existencia de asentamientos poblacionales: núcleos y entidades en diseminado. Se establecen 5 criterios a tener en cuenta:

1. Se propone realizar un estudio del poblamiento para determinar los núcleos de población existentes en un municipio que, según la LAULA, deben ser la base para establecer circunscripciones territoriales. Por medio de este estudio se podrán detectar líneas límite usadas en otros períodos históricos y que en la

actualidad pudieran ser tenidas en cuenta como referencia para la delimitación (criterio histórico).

2. Existen en la actualidad algunos límites territoriales que tienen carácter de oficial, como por ejemplo el ámbito territorial de las entidades locales autónomas que poseen territorio o algunas delimitaciones inframunicipales utilizadas por ciertos organismos para la planificación sectorial (como el Nomenclátor de Entidades de Población o el Seccionado Censal). En estos casos es recomendable que se mantengan dichos límites si se ajustan en gran medida a la realidad territorial actual (criterio administrativo).
3. La delimitación territorial es una labor administrativa difícil de ejecutar debido a los múltiples intereses que entran en juego, que suponen un constante *“tira y afloja”* entre las entidades implicadas, por lo que se hace necesario aplicar e integrar criterios de carácter cuantitativo que justifiquen la propuesta de delimitación (criterio cuantitativo).
4. Los límites territoriales que se establezcan deben ajustarse a accidentes geográficos o elementos de carácter permanente y fácilmente identificables sobre el terreno (criterio territorial).
5. Dado que la potestad de autoorganización debe servir para facilitar la participación ciudadana y la iniciativa para la creación de entidades descentralizadas es recomendable que surja de los vecinos interesados, es importante, por tanto, constatar el grado de acuerdo o desacuerdo de la población respecto a las delimitaciones propuestas, así como sus distintos posicionamientos políticos (criterio sociopolítico).

Existen dos conceptos que hay que aclarar. Por un lado está el de circunscripción territorial, término utilizado por la Ley de Autonomía Local para referirse a la organización espacial del municipio a partir de la existencia de núcleos de población con características geográficas, sociales, históricas, culturales o administrativas comunes; y por otro el de unidad territorial, utilizado en este estudio para la delimitación de ámbitos territoriales referidos no sólo a los núcleos de población, sino también a entidades en diseminado o incluso despoblados.

Además, es necesario plasmar los conceptos teóricos sobre una realidad concreta. Por diversos motivos se ha elegido al municipio de Jerez de la Frontera para

la aplicación práctica, ya que su extensión superficial y complejidad territorial lo hacen idóneo como experiencia piloto para tratar diferentes problemáticas existentes en el resto del territorio andaluz.

Jerez es uno de los municipios más extensos de Andalucía (1.188,23 km²) con la existencia de un gran número de núcleos de población localizados, principalmente, en el valle del Guadalete y surgidos, en su mayoría, a raíz de los Planes de Colonización Agraria del régimen franquista, aunque existen otros muchos núcleos y asentamientos de diverso origen y configuración. En la actualidad existen 7 Entidades Locales Autónomas: Nueva Jarilla, Guadalcanal, Estrella del Marqués, San Isidro del Guadalete, El Torno, Torrecera y La Barca de la Florida; con una problemática común que no es otra que la inexistencia de una delimitación territorial que permita conocer el ámbito donde ejercer las competencias que le son propias, a pesar de lo cual esto no impide que realicen las funciones que tienen encomendadas, lo que supone un modelo descentralizado. De forma complementaria, el Ayuntamiento de Jerez ha delegado competencias (desconcentración) en una serie de entidades (15) que, aunque sin personalidad jurídica, ejecutan una serie de actividades mínimas por medio de un delegado de Alcaldía.

Por otro lado, se trata de un municipio caracterizado por la presencia de amplias zonas despobladas. Al este, se sitúan los terrenos de mayor altitud del municipio, correspondiendo con el antiguo municipio de Tempul y coincidente con los Montes de Propios de Jerez (Parque Natural Los Alcornocales). Años atrás su población se concentraba en torno al Cortijo de La Jarda donde residían las personas empleadas en las labores forestales de los Montes. Al sur del valle del Guadalete, la población queda reducida a algunos cortijos que aún mantienen una escasa población a pesar de que hace unos 30 años superaban (junto a su diseminado), y en la mayor parte de los casos, el centenar de residentes.

Pero sin duda, mi participación como técnico en el proyecto NERA (Nueva Estrategia Rural para Andalucía) dentro del organigrama del Grupo de Desarrollo Rural de la Campiña de Jerez, supuso el punto de inflexión para interesarme de forma decidida por tratar la temática rural de este territorio. El proyecto NERA supuso un proceso de reflexión, promovido por la Junta de Andalucía, cuyo objetivo era que la

sociedad rural y los agentes sociales, económicos y políticos participaran en un debate y en un análisis de la situación de los asentamientos rurales y sobre los deseos de futuro de sus habitantes. Supuso una nueva forma de trabajo para promover el desarrollo de las zonas rurales, en el que las propias *comarcas* elaboraran un diagnóstico participativo a partir del cual se construiría la estrategia de desarrollo rural para el período 2007-2013.

Durante el desarrollo del proyecto NERA se puso de manifiesto una identidad común y diferenciada de lo que se denomina el “*Jerez Rural*”, en contraposición del núcleo urbano de Jerez, caracterizado por una forma distinta de pensar y actuar, con un marcado origen agrícola de su población y unas relaciones con el núcleo principal muy desarticuladas. Sin embargo, estos aspectos comunes que lo diferencian de la ciudad, no presentan una unidad entre todos sus elementos. Cada persona se identifica con la pedanía o barriada rural (clasificación utilizada por sus gentes) en la que reside, prevaleciendo el sentimiento de diferencia respecto a sus vecinos rurales.

Cabe mencionar, que el presente estudio es una ampliación de los trabajos ya realizados con motivo del Trabajo Final de Carrera de la Licenciatura en Geografía de la Universidad de Sevilla (año 2003), cuyo título fue “*La comarca de Jerez*” centrado en la estructura de asentamientos existente y su nivel dotacional para concluir con la construcción de una matriz DAFO comarcal; y del Trabajo Final de Experto en Planificación y Desarrollo Subregional, título propio de la Universidad de Sevilla (año 2009), denominado “*Proceso de comarcalización y descentralización administrativa municipal del alfoz jerezano. La influencia del poblamiento*”. Ambos trabajos fueron tutorizados por el Dr. Jesús Ventura Fernández, profesor titular en Análisis Geográfico Regional, con el que espero proseguir mi formación investigadora con la realización del doctorado en una de sus líneas de investigación.

El resultado final del estudio es la elaboración de un mapa del término municipal jerezano dividido en 31 unidades territoriales inframunicipales (si bien no caracterizaremos a la Unidad Territorial de Jerez de la Frontera, centrándonos en el denominado “*Jerez Rural*”), cada una de las cuales se presentará en formato ficha mostrando información sobre la superficie delimitada, los asentamientos humanos existentes, su volumen poblacional y los usos del suelo predominantes.

2

Objetivos y metodología.

El principal objetivo que se persigue con el presente estudio es el de ofrecer una herramienta para los Ayuntamientos en materia de organización territorial de sus municipios ya que, desde la entrada en vigor de la Ley 5/2010, de Autonomía Local de Andalucía, la potestad de autoorganización espacial de los términos recae en los mismos. El principio de autonomía política local se refuerza en esta nueva Ley, dejando atrás antiguos posicionamientos en materia de régimen local en el que la competencia exclusiva en organización territorial municipal recaía en la Administración Autonómica (desde la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local).

No obstante, el Estatuto andaluz determina como competencias exclusivas el de la ordenación del territorio que incluye, entre otras cuestiones, la promoción del equilibrio territorial, siendo básico para alcanzarlo, poseer cierta capacidad competencial en materia de organización inframunicipal, por lo que la elaboración de unas directrices generales en esta materia sería recomendable. Aunque la potestad de autoorganización territorial del municipio corresponda ahora a los Ayuntamientos, al igual que ocurre con otras materias como la planificación urbanística, la Administración Autonómica debe establecer un procedimiento de aceptación de los planteamientos municipales para aquellos casos en los que no encajen con la política de ordenación territorial.

Mientras tanto, para evitar que los municipios afronten este reto sin una referencia normativa o metodológica, y para fomentar el uso de herramientas de análisis para tratar la materia sobre organización territorial del municipio, se establecen una serie de criterios técnicos que tienen como objetivo final convertirse en un *“Catálogo de Buenas Prácticas”* que fomente el debate intermunicipal para seguir una línea común de trabajo que se adecue a la política de Ordenación del Territorio.

Como objetivos secundarios del trabajo de investigación se plantean los siguientes:

1. Profundizar en los planteamientos normativos de la Ley de Autonomía Local de Andalucía en lo referente al Título VII sobre la administración del territorio municipal.
2. Poner de relieve que las políticas de desconcentración y descentralización municipal no son opuestas sino complementarias.
3. Mostrar el mapa actual de Entidades Locales Autónomas de Andalucía, analizando las diferencias existentes entre aquellas que poseen delimitado su ámbito territorial y su partida presupuestaria y aquellas que, aunque funcionan como tal, se encuentran en una situación apartada de los parámetros legales.
4. Plantear la necesidad de realizar un análisis territorial del municipio al completo, sin limitarse a estudiar núcleos de población concretos e individualizados para la delimitación de su ámbito territorial, ya que el territorio es dinámico y futuras iniciativas vecinales de constitución de ELAs o Entidades Vecinales (o incluso circunscripciones de carácter desconcentrado) pudieran verse perjudicadas por estudios parciales.
5. Establecer una definición del concepto de núcleo de población que se ajuste a los planteamientos normativos de las leyes estatal y autonómica, pero que aporte una mayor concreción para evitar ambigüedades.
6. Afrontar la problemática territorial del Jerez Rural, con la existencia de 7 Entidades Locales Autónomas sin delimitación de su ámbito territorial aprobado por Decreto, además de diversos núcleos de población y entidades en diseminado que actualmente participan de una política de desconcentración de competencias.

La metodología de análisis planteada en esta investigación parte de un amplio y profundo conocimiento de los aspectos legales relacionados con el régimen local y la administración del territorio municipal. La Ley 5/2010, de Autonomía Local de Andalucía parece que ha solventado diversas cuestiones problemáticas de la anterior Ley 7/1993, reguladora de la Demarcación Municipal de Andalucía, como la constitución "*ope legis*" (por mandato de Ley) de las EATIMes en Entidades Locales Autónomas, si bien no se ha pronunciado respecto a aquéllas que aún no tienen definido un ámbito territorial

donde ejercer sus competencias propias y que, según el artículo 116 de la LAULA, es parte del contenido mínimo para la constitución de una ELA o una Entidad Vecinal.

Esta falta de concreción ha motivado que durante el discurso expuesto en el presente trabajo, se realice una crítica al articulado contenido en esta Ley, si bien, por otra parte, ha permitido que surja un tema propicio para la elaboración de un estudio de investigación centrado en un elemento tan geográfico como son los límites territoriales.

Una vez acotado el tema de investigación, y sobre la base de un profundo conocimiento de la legislación de régimen local, el siguiente paso era ofrecer una serie de soluciones para establecer la delimitación de aquellas Entidades Locales Autónomas que aún no tenían definido su ámbito territorial. En este sentido, la legislación vigente no concreta criterios específicos para la delimitación de circunscripciones territoriales, aunque deben basarse en el principio de organización territorial del municipio.

Para el establecimiento de unidades territoriales, se parte de la idea de la necesidad de realizar un estudio que abarque a todo el municipio, ya que dentro del análisis deben ser tenidos en cuenta todas las identidades existentes, así como las posibles iniciativas de constitución de entidades de gestión descentralizadas que en el futuro pudieran surgir.

Se han considerado una serie de criterios: histórico, administrativo, cuantitativo, territorial y sociopolítico, para el establecimiento de límites y su aplicación en el municipio de Jerez de la Frontera; su orden no es aleatorio puesto que el punto inicial de toda tarea delimitadora es conocer el territorio en cuestión por medio de un estudio del poblamiento, que permita la determinación de los núcleos de población existentes y de antiguos límites que pudieran tener alguna validez en el momento actual. Por otro lado, existen delimitaciones de distintos organismos para la plasmación territorial de sus políticas y planes, lo que sugiere la existencia de límites ya definidos. Como en toda investigación científica, es necesario aplicar técnicas cuantitativas que aporten lógica matemática a realidades territoriales y sociales, si bien consideramos que la delimitación territorial, debido a su relación directa con la identidad poblacional, debe limitarse a matizar los límites ya establecidos, ponderando una serie de factores (en el

presente estudio por medio del criterio proporcionalidad territorio/población y a través de los polígonos de Voronoi). También el territorio a constituir debe ser continuo y delimitado en función de la consideración de accidentes geográficos o elementos de carácter permanente y fácilmente identificables, siempre que sea posible y aconsejable. Por último, y no menos importante, se debe facilitar la participación ciudadana en los procesos de delimitación de ámbitos territoriales, pues aportan la necesaria aprobación democrática y razón de ser del principio de autonomía local reforzado en la LAULA, así como conocer también las indicaciones políticas-ideológicas de las distintas partes del territorio municipal.

3 Marco teórico.

Para que las distintas Administraciones Públicas puedan ejercer sus competencias necesitan disponer de una delimitación precisa de su ámbito. Hacia 1870 se inician en Andalucía las primeras tareas de delimitación municipal, recogiendo en Actas de Deslinde los Acuerdos a los que llegaban las Comisiones de los Ayuntamientos implicados. Unos años después, y ligados a los trabajos iniciales del Mapa Topográfico Nacional 1:50.000, el entonces Instituto Geográfico y Estadístico aborda los levantamientos topográficos de las líneas límite acordadas, junto con la elaboración de planimetrías y altimetrías a escala 1:25.000 de los términos municipales. Más de un siglo después, el Instituto de Cartografía de Andalucía comenzó a recrear aquellas condiciones de trabajo y a replantear sobre el terreno las líneas límite descritas en las Actas de Deslinde con la finalidad de dotar a los mojones localizados de coordenadas precisas en el Sistema Geodésico de Referencia actual (ETRS89).

Para ello, fue necesario realizar una importante labor de análisis de los documentos históricos existentes, reconstruir el Sistema de Referencia utilizado en aquellos momentos y, finalmente, repetir los trabajos topográficos utilizando las técnicas más modernas de toma de datos.

El motivo principal de comenzar este apartado de tal forma no es otro que poner de manifiesto que la mayor parte de las fuentes bibliográficas relativas a la delimitación territorial están referidas al establecimiento de límites municipales, puesto que se considera la unidad básica territorial del Estado y a lo largo de la historia ha sufrido importantes modificaciones (no tanto los límites provinciales y ninguna los autonómicos).

Además, se considera una materia legal que le corresponde definir a las Administraciones Públicas, por lo que pocos investigadores (ajenos a ellas) se han introducido en esta temática, si bien destacan algunos de los trabajos y artículos del profesor de la Universitat de Lleida Jesús Burgueño Rivero que, aunque centrados en muchas ocasiones en una escala supramunicipal o provincial, también trata la problemática municipal, como por ejemplo en dos de sus artículos *“Geografía y Administración. Proyectar territorios en el siglo XIX”* y *“El eterno debate sobre la reforma del mapa municipal. El caso de Cataluña”*.

En relación con la delimitación del ámbito territorial o área de influencia que deben poseer las Entidades de Ámbito Territorial Inferior al Municipio, después de realizar un profundo análisis bibliográfico, debemos destacar el trabajo del profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Extremadura, Manuel Beato Espejo, denominado: *“El ámbito territorial en las entidades locales creadas por motivo de colonización interior”*, donde expone de manera pormenorizada la normativa a tener en cuenta, además de criterios cuantitativos, para la delimitación del área de influencia. Sin embargo, debido a su especialización científica, no aborda la cuestión que tantas veces se discute, que no es otra que la determinación de los límites de las entidades locales inframunicipales.

En cuanto a trabajos de investigación que delimiten con exactitud el ámbito territorial de una entidad poblacional, ya sea una EATIM o una Entidad Local Autónoma, debemos destacar el trabajo de investigación de doctorado de José Manuel Astillero Ramos, dirigido por el Dr. Juan Francisco Ojeda Rivera, bajo el nombre de *“Delimitación del ámbito territorial de una entidad local autónoma: método de análisis y propuestas”*. En este estudio se plantean una serie de aspectos a tener en cuenta para el análisis: legales, geográficos y territoriales, poblacionales y demográficos, históricos y económicos; y se aplican para dos entidades locales: Guadalcaacín (Jerez de la Frontera) y Zahara de los Atunes (Barbate).

Para conocer más trabajos sobre la delimitación de entidades locales inframunicipales tendríamos que remitirnos a normativa legal (Decreto, Orden) sobre la determinación de límites territoriales. Un caso muy llamativo es el Decreto 163/2006, de 12 de septiembre, por el que se determinan los límites territoriales de la Entidad de

Ámbito Territorial Inferior al Municipio de La Redondela del municipio de Isla Cristina (Huelva), puesto que fue muy discutido, la fijación de límites, aplicándose diversos criterios citados en su contenido en posteriores procesos delimitadores.

Por tanto, consideramos que el presente estudio aporta aspectos novedosos en la materia sobre el establecimiento de límites para la subdivisión de municipios en unidades territoriales.

4 Una nueva perspectiva para la Administración Local en Andalucía.

4.1 MARCO NORMATIVO.

En el Título VIII de la Constitución Española de 1978, que trata sobre la Organización Territorial del Estado, se establece una división territorial en municipios, provincias y Comunidades Autónomas que presentan plena capacidad para la gestión de sus propios intereses; se concreta lo relativo a la Administración Local en su Capítulo II, concediéndose autonomía y personalidad jurídica propia a los Ayuntamientos (Art. 140) y las Diputaciones (Art. 141.1), quedando estas últimas determinadas por la agrupación de municipios (consideradas como entidades locales); además, podrán crearse agrupaciones de municipios diferentes a la provincia (Art. 141.3).

El Estatuto de Autonomía de Andalucía de 1981 venía a integrar y completar lo referido a la administración local y entidades locales (Título Preliminar, Artículos 3, 4 y 5), definiendo al municipio como la entidad territorial básica de la Comunidad Autónoma y fijando las pautas generales que deben regir los procesos de alteración de términos municipales y fusión de municipios limítrofes; se definían de forma más concreta las competencias de las provincias y se introducía un aspecto territorial novedoso, la posibilidad de creación de comarcas mediante su regulación por Ley del Parlamento Andaluz, que deberían estar integradas por municipios limítrofes de la misma provincia atendiendo a características geográficas, económicas, sociales e históricas, y en el que se requeriría el acuerdo de todos los municipios afectados con la aprobación del Consejo de Gobierno.

Para completar el marco legislativo de las entidades locales surge la Ley 7/1985, de 2 de Abril, de Bases del Régimen Local (modificada por la Ley 57/2003, de 16 de

diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local), que traza las líneas maestras definitivas en relación a los ámbitos competenciales y establece una tipología de entidades locales: aparte de las ya definidas provincias, islas, municipios y comarcas, se nombran otras nuevas como las Entidades de Ámbito Territorial Inferior al Municipio (EATIM), las Áreas Metropolitanas y las Mancomunidades de municipios, siendo estas últimas las únicas que no poseerán carácter territorial, estando limitadas a la prestación de servicios y ejecución de obras.

El Reglamento de Población y de Demarcación Territorial de las Entidades Locales (Real Decreto 1690/1986) dedica el Título Primero al territorio, estableciendo el procedimiento relativo a las alteraciones, deslindes y capitalidad de términos municipales; constitución, organización y funcionamiento de las Mancomunidades y Entidades de Ámbito Territorial Inferior al Municipio (EATIM); además para la determinación territorial de las EATIMes se establecen normas para la delimitación de aquéllas que no posean ámbito territorial con anterioridad al presente Real Decreto.

Sentadas las bases legales del Estado español en lo referido a la organización territorial y al régimen local, las Comunidades Autónomas comienzan a desarrollar instrumentos normativos en la misma materia, dentro de las competencias otorgadas por la Constitución Española, la Ley 7/1985 de Bases del Régimen Local y el Real Decreto 1690/1986, por el que se aprueba el Reglamento de Población y de Demarcación Territorial de las Entidades Locales.

Las competencias estatutarias de Andalucía junto con la experiencia adquirida como Administración Autónoma, demandaban y permitían un nuevo paso en la promulgación de la legislación de desarrollo, ya iniciada con la Ley 11/1987, de 26 de diciembre, reguladora de las relaciones entre la Comunidad Autónoma de Andalucía y las Diputaciones Provinciales de su territorio y delimitada por los artículos 149.1.18 de la Constitución, el 13.3 del Estatuto Andaluz y la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local.

La Ley 7/1993, Reguladora de la Demarcación Municipal de Andalucía (LRDMA), dentro del marco de política global del Estado que representa el común denominador normativo, contemplaba las peculiaridades de la realidad andaluza en materia de

demarcación municipal, entendida ésta como *“espacio penetrable por otras Administraciones que se superponen y tienden a confundirse en una constante búsqueda de elementos de relación que faciliten la articulación de todo el sistema administrativo, sin pérdida de la esencia autónoma de cada municipio”*.

Esta Ley retomaba para dar forma al espinoso tema de las modificaciones de términos municipales (Título II): para las fusiones se evitan aquellas medidas coercitivas que pudieran forzar a una pérdida de representatividad política de núcleos de población en beneficio del supuesto de funcionalidad, y en cuanto a las segregaciones se trata de garantizar la eficacia alterando lo menos posible la realidad municipal existente, por lo que se fijaron unos mínimos de población y distancia del núcleo del que se pretendía la segregación, que avalaran la viabilidad de aquél en el supuesto de que se culminara el proceso de independencia.

En cuanto a las agrupaciones de municipios (Título III), se aconsejaba y regulaba la potenciación de fórmulas asociativas que racionalizaran y aunaran esfuerzos y recursos, ya que la tendencia era a adecuar los diversos ámbitos territoriales de las Administraciones Públicas a las exigencias derivadas del desarrollo económico y social; así, se regularon las Mancomunidades de municipios (Capítulo I), y una nueva figura como son los Consorcios (Capítulo II), que no se limitaban a la asociación de municipios, sino que otras Administraciones e incluso entidades privadas sin ánimo de lucro podrían pertenecer a los mismos.

El Área Metropolitana (Título IV) lo definía como asociación de municipios muy singular, sólo se aconsejaba un esbozo normativo de la misma, dejando la regulación específica y minuciosa de cada uno de los supuestos que pudieran plantearse a la Ley propia que los creara.

Esta Ley recogía en su articulado figuras legales con capacidad jurídica que suponían la descentralización administrativa de los Municipios con la aparición de las Entidades Locales Autónomas (Título V), para las que se establecía el procedimiento de constitución (Capítulo I), extinción (Capítulo IV) y registro de las mismas (Capítulo V), su régimen jurídico, organización y competencias (Capítulo II) y la determinación de sus Haciendas (Capítulo III).

Mediante la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de Reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, se da mayor protagonismo a las cuestiones territoriales y a las entidades locales, concediendo el Título III a la Organización Territorial de la Comunidad Autónoma. En su artículo 98, se hace mención a la necesidad de disponer de una ley de régimen local, en el marco de la legislación básica del Estado, que deberá regular las relaciones entre las instituciones de la Junta de Andalucía y los entes locales, así como las técnicas de organización y de relación para la cooperación y la colaboración entre los entes locales y entre éstos y la Administración de la Comunidad Autónoma.

Fruto de la necesidad de contar con una ley de régimen local que potenciara la autonomía local de los municipios andaluces, surge la Ley 5/2010 de Autonomía Local de Andalucía (LAULA), cuyo objeto es la determinación de las *“competencias y las potestades de los municipios y de los demás entes locales como expresión propia de la autonomía local”*. Así mismo, *“contiene la regulación de la demarcación territorial municipal y de la organización administrativa de su territorio, con respeto a la potestad de autoorganización que ostentan las entidades locales”*.

4.2. NECESIDAD DE MODIFICAR LA LEY 7/1993, DE DEMARCACIÓN MUNICIPAL DE ANDALUCÍA.

En primer lugar hay que tener en cuenta que la Ley 7/1993 tenía diecisiete años de vigencia y era necesario valorar si las líneas maestras que inspiraron su regulación habían sido eficaces desde la perspectiva de la conformación de la estructura territorial local.

En este sentido habría que tener en cuenta, por ejemplo, que si una finalidad de dicha ley fue poner limitaciones al procedimiento de segregación para la creación de un nuevo municipio a sólo aquellos casos que fueran estrictamente necesarios, el resultado se ha mostrado eficaz, pues durante su período de vigencia sólo prosperaron uno de los pocos procedimientos iniciados con tal finalidad (en concreto la creación del

municipio de Villanueva de la Concepción por segregación del de Antequera). Merece por tanto concluir en este aspecto que, si para una futura reforma de ley (lege ferenda) se perseguían fines similares a la anterior Ley 7/1993, también su formulación positiva podía en muchos aspectos permanecer en su sustancia igual, incluyendo aquellas modulaciones, matices o correcciones sistémicas que fueran convenientes.

Sin embargo, éste no fue el caso pues la mayor parte del contenido de la derogada Ley de Demarcación se avenía mal con el concepto que le servía de base. Ni la regulación de áreas metropolitanas, ni las entidades de corte asociativo (mancomunidades y consorcios), ni la cooperación interadministrativa a través de convenios u otros instrumentos jurídicos, ni por supuesto las entidades de ámbito inferior al municipio son materias jurídicas que coincidan en su naturaleza con la demarcación municipal.

Por ello, aunque parecía necesario retocar con cierta profundidad la regulación de mancomunidades y consorcios, cuya diferenciación no se advertía de forma totalmente nítida en la formulación precedente y en las que algunas circunstancias esenciales de su desenvolvimiento jurídico no estaban suficientemente tratadas (por ejemplo, las garantías de su gestión frente a municipios incumplidores de sus obligaciones financieras, la supresión y liquidación o la separación de uno o varios municipios que provoque la inarticulación de la propia mancomunidad, etc.), igualmente destacable era la necesidad de que, en la sistemática de la nueva Ley, la regulación de estas figuras abandonase su anterior posición dentro de lo que se entiende por "*demarcación municipal*" y que encontrase su acomodo dentro del sistema de relaciones interadministrativas de cooperación (Título V).

Y al contrario, existían aspectos íntimamente vinculados al concepto "*demarcación*" que debían entrar en la regulación de la Ley de Autonomía Local de Andalucía y que o no estaban tratados o su regulación no profundizaba lo necesario en la Ley de Demarcación de 1993. En este sentido habría que mencionar el deslinde y amojonamiento de términos municipales y sus eventuales replanteos, así como la denominación y capitalidad del municipio y sus posibles modificaciones.

4.3 MUNICIPIO Y AUTONOMÍA LOCAL EN ANDALUCÍA.

La reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobada mediante Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, supone la consolidación del municipalismo para la Andalucía del siglo XXI, ya que es símbolo de garantía y protección de la autonomía local. El artículo 92.2 reconoce a los municipios competencias propias y el artículo 192.1 establece que una ley regulará la participación de las entidades locales en los tributos de la Comunidad Autónoma, que se instrumentará a través de un fondo de nivelación municipal, de carácter incondicionado. Este nuevo Estatuto, el más municipalista de todos los vigentes en el territorio español, supone un punto de inflexión en la garantía de la autonomía local, la suficiencia financiera y el blindaje de las competencias de los municipios.

El artículo 98 del nuevo Estatuto de Autonomía hace una remisión expresa a una nueva ley de régimen local, en el marco de la legislación básica estatal, para regular, entre otras materias, aquellas que se deduzcan de su artículo 60, concretadas en su apartado 1.b) donde se dice que es competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma en materia de régimen local: la determinación de las competencias y potestades propias de los municipios y demás entes locales, de conformidad con el Título III (referido a la organización territorial de la Comunidad Autónoma).

Se ha instalado ya en la doctrina legal española la aseveración de que los elementos del municipio son el territorio (llamado término municipal), la población y la organización (artículo 11.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local). Si referido al ente "*Estado*" se han dado casos de estados sin territorio (p.e. durante años el estado palestino), no es posible, sin embargo, decir lo mismo referido al municipio. El municipio, lejos de tener una existencia basada en el Derecho natural, es una creación del Derecho administrativo, por lo que depende de una actuación administrativa para su creación y de otra para su extinción. Y, desde luego, el asentamiento en el territorio de una colectividad humana es imprescindible. Otra cosa sería plantear un orden de importancia entre los elementos citados y considerar en la cúspide al territorio o término municipal. Es evidente que cualquier creación jurídica y

política, cualquier creación administrativa, tiene en las personas físicas su razón de ser y, por tanto, su referente principal. La población es en este sentido el elemento fundamental de cualquier ente jurídico y, por ende, también del municipio. El territorio no puede ser considerado sino en referencia a una población o, mejor, al conjunto de personas que, constituyendo una comunidad de intereses, habitan en él.

Podríamos considerar al término municipal desde una doble perspectiva: estática o dinámica.

Desde el punto de vista estático la legislación poco más había previsto que una definición conceptual del término municipal (bastante vaga e imprecisa) y, a nivel reglamentario, la regulación de las técnicas para obtener una nítida perceptibilidad de su contorno superficial (el deslinde y amojonamiento). El artículo 89 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, Autonomía Local de Andalucía define al término municipal en su punto 1, como *“el espacio en el que el municipio puede ejercer válidamente sus competencias”*. Esta definición difiere de la formulada tradicionalmente, contenida en el artículo 12 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril: *“territorio en el que el Ayuntamiento ejerce sus competencias”*, que era necesario superar, ya que:

- No debe confundirse municipio con Ayuntamiento ya que existen municipios que no poseen Ayuntamiento, como los que se rigen por el sistema del “Concejo abierto”, en el que sus vecinos son la máxima expresión de la democracia, reuniéndose para tomar sus decisiones por mayoría.
- Muchos servicios y actividades municipales no se ejercen directamente por el Ayuntamiento, sino por otras entidades vinculadas o dependientes, o simplemente relacionadas por algún vínculo contractual.
- Por último, algunas de las actividades de los municipios no se ejercen dentro del término municipal debido a su naturaleza, siendo necesario ejercitarlas fuera de su territorio, como es la promoción turística.

Es precisamente la opción dinámica la que ha sido tratada con más frecuencia por las normas jurídicas y la que ha seguido un proceso de mayor interiorización por los ordenamientos jurídicos autonómicos; no en vano el artículo 148.1.2. de la Constitución considera una de las materias que pueden ser asumidas como competencia de las

Comunidades Autónomas en sus estatutos, *"las alteraciones de los términos municipales comprendidos en su territorio..."*.

Efectivamente, las modificaciones en la extensión y límites del término municipal son consustanciales a la creación, la extinción o la mera alteración de los municipios y, por eso, ha sido usual regular la creación o extinción de los municipios como consecuencia de las modificaciones de los términos municipales, cuando en realidad la voluntad política y administrativa sobre la existencia o no de un determinado municipio es la premisa principal y la modificación de unas determinadas líneas en el mapa municipal su consecuencia lógica.

En cualquier caso, la perspectiva dinámica del territorio o término municipal afecta a la esencia misma de la autonomía local, a su propia entidad y a sus transformaciones. Eso hace que fuera preciso en la elaboración de la Ley referirse a un concepto más amplio que englobara en sí al de término municipal pero que, a la vez, le dotara de la amplitud suficiente para acoger también a las dinámicas jurídicas que se le asocian y a los demás atributos que mayor significancia le otorgan a su personalidad desde el plano físico. Por eso, siguiendo los antecedentes normativos más inmediatos, ha sido acertado que la Ley de Autonomía Local de Andalucía se haya referido en la rúbrica del Título VI correspondiente a la regulación de estas cuestiones.

Debemos entender por demarcación municipal de Andalucía el número, extensión y límites de los términos municipales existentes en el territorio de la Comunidad Autónoma y las reglas para sus posibles modificaciones, así como la denominación y capitalidad de sus respectivos municipios.

Pero el término municipal, por su propia naturaleza de componente físico del ente político-jurídico municipal, tiene vocación a cubrir un espacio de cierta amplitud, por lo que se entiende preciso que el Derecho se involucre también en las posibles técnicas y formas que hagan posible una administración eficaz, necesariamente diversificada para atender sus singularidades, coherente, eficiente y orientada a permitir la mayor participación democrática de los vecinos en los procedimientos y decisiones que les afecten. Ello hacía necesario, por una parte, que las cuestiones relativas al gobierno y administración del interior del municipio se separasen del

concepto "*demarcación*", que fomentaba bajo el imperio de la anterior normativa que la existencia de entidades inframunicipales se desenvolviese en un plano afín al de la creación de municipios y las relaciones intermunicipales, y, por otro lado, a que esta materia se la regulase en el marco más respetuoso de la libertad de auto organización del municipio, base y postulado esencial del concepto de "*autonomía*" local que acrisola la nueva ley andaluza.

De esta forma el Título VII, dedicado a la administración del territorio municipal, manifiesta que el municipio "*podrá organizar espacialmente el término municipal, o parte de él, en circunscripciones territoriales*", siendo éstas de carácter desconcentradas (que carecen de personalidad jurídica) o descentralizadas (poseen competencias propias). Además, el artículo 111 dedicado a los órganos de gestión desconcentrada concluye que la creación, modificación o supresión de las circunscripciones territoriales se efectuarán por acuerdo del pleno del ayuntamiento adoptado por mayoría absoluta. Esto supone un giro radical respecto a la visión de la Ley 7/1993, de Demarcación Municipal de Andalucía, donde se exponía en su artículo 48 que las entidades locales se crearían por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.

4.4. LA IMPORTANCIA DE LA DEMARCACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL TERRITORIO MUNICIPAL EN LA LAULA.

La ubicación sistemática que los contenidos sobre demarcación y administración del territorio municipal ocupan en la Ley de Autonomía Local de Andalucía, situados en los dos últimos títulos de la misma, pone de relieve que para el legislador andaluz la verdadera esencia de la autonomía política local reside en las competencias que le son propias, tanto por mandato constitucional como estatutario. Y esto a pesar de que para los cuerpos jurídicos que constituyen la legislación básica estatal (tanto la Ley reguladora de las bases del Régimen Local como el Texto Refundido de disposiciones legales vigentes sobre Régimen Local), la regulación afectante al territorio adquiriese un lugar preferente en el texto legal.

Los municipios y provincias tienen la garantía constitucional y estatutaria por ser entes necesarios para la articulación política, en parámetros democráticos, de nuestra sociedad y tener reservado, por ello, determinados ámbitos de ordenación y gestión de una parte importante de los asuntos públicos.

Establecido el fin al que están ordenados los entes locales, se ha entendido más oportuno regular después las formas que se ponen a su alcance para conseguir su cumplimiento, los recursos a ello dispuestos y la cooperación interadministrativa para facilitarlo. Sólo después de acometer estos aspectos regulativos sustanciales sobre el "qué" hacen los municipios, "para qué" y "cómo" lo hacen, nos introducimos en el "dónde" adquieren validez sus actuaciones y la manera en que pueden organizar su propio espacio para mejor cumplir su función.

4.5. LA ORGANIZACIÓN DEL TERRITORIO SUBMUNICIPAL.

4.5.1. Antecedentes normativos.

La existencia de núcleos de población dispersos por el territorio español en aldeas, pueblos, parroquias, villas o lugares (a finales del siglo XVIII el mapa municipal de España estaba formado por 143 ciudades, 4.627 villas y 9.989 lugares) que se regían por ordenanzas, fueros, privilegios y, sobre todo, por las normas consuetudinarias, fue organizado territorialmente en Provincias y Municipios por la Constitución de 1812; en su Título VI dedicado al Gobierno interior de las Provincias y de los pueblos se establecía, en su pretensión de homogeneizar los diferentes regímenes municipales, que *"se pondrá Ayuntamiento en los pueblos que no lo tengan y en que convenga le haya, no pudiendo dejar de haberle en los que por sí o con su comarca lleguen a las mil almas y también se les señalará término correspondiente"*

Pero más allá de la realidad municipal, en España existían también, núcleos de poblaciones dispersas en los términos municipales, normalmente asentados alrededor

de la actividad agraria, o ganadera, que la Constitución de Cádiz no reconoció como entidad específica, ya que los pueblos que no superaban la cifra de población antes mencionada, como regla general, no podían contar con Ayuntamiento propio, pasando a depender del municipio más cercano.

El primer reconocimiento legal de los *“pueblos agregados”* a un término municipal, lo encontramos tras la Revolución de 1869, en la Ley Municipal de 20 de julio de 1870. Se dice que *“los pueblos que, formando con otros término municipal, tengan territorio propio, aguas, pastos, montes o cualquiera derechos que le sean peculiares, conservarán sobre ellos una Administración particular”*. Además, se establecen los ya clásicos requisitos necesarios para constituir un municipio: población, territorio apropiado y capacidad económica para poder sufragar los gastos municipales obligatorios. Es curiosa la cifra de población que se determina como necesaria para conformar municipio, que no debe ser inferior a 2.000 habitantes. Si aplicáramos este criterio a los 8.114 municipios españoles (a fecha 1 de enero de 2010), 5.788, es decir un 71% de los mismos, dejarían de ser municipios independientes, pasando a formar término municipal junto a otros (en Andalucía, de los 771 municipios un 40% ya no sería municipio). Con respecto al territorio, esta Ley se reduce a señalar cómo los residentes de los municipios *“debieran disponer de un territorio proporcionado a su población”*. Preocupación pionera por un tema clave en la ordenación territorial.

La Ley Municipal de 3 de octubre de 1877 mantiene la regulación de los pueblos agregados, sin incorporar grandes cambios, manteniéndose dicho régimen hasta el Proyecto de Maura de 1903 y sus sucesivas modificaciones. La novedad de esta regulación es la utilización del término Alcalde Pedáneo y la configuración de estas poblaciones como administraciones especiales dotadas de personalidad jurídica.

El Proyecto de Romanones de 1906, introduce la preocupación por la hacienda de los ahora llamados *“pueblos dispersos”* obligando al Ayuntamiento del Municipio a efectuar un reparto equitativo de su presupuesto para evitar desigualdades territoriales.

El segundo Proyecto de Maura de 1907, reproduce la regulación jurídica de la Ley de 1870 y atribuye a los pueblos agregados, por primera vez, las competencias de policía urbana y rural. Es importante este proyecto pues por primera vez se establece

de forma explícita la existencia de competencias que superan el ámbito urbano, por lo que de manera implícita se reconoce la existencia de un territorio de mayor amplitud que los terrenos directamente ligados a los núcleos de población y terrenos circundantes.

Por su parte, el Proyecto de Barroso de 1912, les reconoce capacidad jurídica para la defensa de sus intereses, dotándoles de competencias en contratación, ejercicio de acciones y Administración de su patrimonio.

El Estatuto Municipal de 1924, conocido como Estatuto de Calvo Sotelo, marca un nuevo hito en el régimen de estos núcleos de población, al introducir por primera vez el concepto *“Entidad Local Menor o fracciones de Municipios”*. Las competencias que se les atribuían son muy parecidas a las asignadas en las normas actuales y, en cuanto a los órganos de Gobierno y Administración, incorpora el régimen de Concejo Abierto para las Entidades Locales Menores de hasta 1.000 habitantes y para las que lo superen, un Presidente y una Junta con 2 vocales.

Por su parte, la Ley de Bases de 10 de julio de 1935 y la Ley Municipal de 31 de octubre de 1935 desarrolla el procedimiento jurídico para la creación y supresión y, como novedad, asigna al Presidente de la Entidad Local Menor las mismas facultades del Alcalde del Municipio, y la Junta Vecinal se adapta al funcionamiento de los órganos colegiados de los Ayuntamientos.

En la época franquista, sobre todo de la postguerra, se elimina todo lo que pudiera dotar de autonomía a la Administración Local, de este modo el Proyecto de Ley de Bases de Régimen Local de 14 de julio de 1945 reconocía la existencia de las Entidades Locales Menores donde tradicionalmente venían funcionando, pero centró sus esfuerzos en regular la supresión de estas Entidades por el Consejo de Ministros, cuando su existencia no pareciera conveniente o necesaria por motivos económicos.

El Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de mayo de 1952 se refiere a la Administración Local conformada por órganos administrativos y no por Entidades con personalidad jurídica pública. De este modo establecía que *“la Administración Local española está constituida por los Ayuntamientos, Juntas*

Vecinales y Concejos abiertos, las Diputaciones provinciales y Cabildos insulares y los órganos representativos de las Mancomunidades voluntarias municipales y de las Agrupaciones municipales forzosas”.

El Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales de 17 de mayo de 1952 en su artículo 1, calificaba a la Entidad Local Menor como Entidad Municipal, junto con el Municipio, la Mancomunidad municipal voluntaria y la Agrupación municipal forzosa.

La Ley de Bases de Régimen Local de 3 de diciembre de 1953 reconocía la existencia de las Entidades Locales Menores como entes naturales del Municipio, previendo su constitución para los casos de supresión de Municipios, creación de núcleos urbanos de nueva implantación y las que surjan de alteraciones de términos municipales. Esta Ley hay que contextualizarla en el marco de la actuación que, después de la guerra civil, había iniciado el Gobierno de Franco con los Planes de Reforma Agraria llevados a cabo por el Instituto Nacional de Colonización, que planificó nuevos núcleos de población para albergar organizadamente a población jornalera. De este modo, el origen de muchas Entidades Locales Menores actuales, se sitúa en los años 40 y sobre todo 50 del siglo pasado.

La Ley de Régimen Local de 1955 reprodujo, en su artículo 10, la clasificación de Entidades Municipales del Reglamento del año 52 y efectuó una regulación muy completa de las Entidades Locales Menores, antecedente de la actual. Por primera vez se configuran estos entes como una clara forma de descentralización de funciones administrativas. La diferencia más relevante del régimen jurídico del 55 con el actual, lo encontramos en la forma de designación de los órganos de Gobierno que, obviamente, al encontrarse inmersa en el régimen franquista, se efectúa por designación directa. El Alcalde Pedáneo es nombrado por el Gobernador Civil y los vocales de la Junta Vecinal por el Alcalde del Ayuntamiento.

El Proyecto de Ley de Bases de Régimen Local de 1971 cambió, de nuevo, la denominación de las Entidades Locales Menores, pasando a llamarlas “*Comunidades Municipales Menores*” a las que se les dotaba de la posibilidad de ejercer competencias municipales por sustitución o por delegación del Municipio.

La Ley de Bases 41/1975, de 19 de enero, Estatuto de Régimen Local, omite regulación alguna sobre las Entidades Locales Menores, reconociendo solo su existencia al enunciar las Entidades que conforman la Administración Local. Esta Ley restauró el sufragio universal como forma de elección de los miembros de la Corporación Municipal. El Real Decreto 3046/1977, de 6 de octubre, texto articulado parcial de la Ley de Bases del Estatuto de Régimen Local, no aporta ninguna novedad.

La Ley 39/1978, de 17 de julio, de Elecciones Locales, incorporó el sistema de elección directa del Alcalde Pedáneo por mayoría de los vecinos, mediante presentación de candidaturas de los partidos y formaciones políticas, y el de los vocales de la Junta Vecinal, en número de 2 a 4, elegidos por la Corporación Municipal, regulación que se ha mantenido hasta la actualidad.

El Proyecto de Ley de Bases de 1981 incorporaba una completa regulación y además, con la existencia del mapa autonómico, sustituía la competencia de la aprobación de la creación de estos entes, hasta ese momento del Ministerio de Gobernación, por la Comunidad Autónoma. Este Proyecto no llegó a ultimarse como Ley.

4.5.2. Normativa estatal vigente.

La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL), en su artículo 3, establece la distinción entre Entidades Locales Territoriales (Municipio, Provincia e Isla) y otras Entidades Locales que no tienen tal carácter de territorial (las Entidades de Ámbito Territorial inferior al Municipio, la Comarca, las Áreas Metropolitanas y las Mancomunidades).

De nuevo se produce un cambio de denominación de los núcleos de población separados del Municipio, abandonándose el de Entidad Local Menor, usado desde 1924, e incorporándose el nuevo de Entidad de Ámbito Territorial Inferior al Municipio (EATIM).

El concepto EATIM es el término genérico que, según la citada Ley, pueden tener diversas denominaciones, como caseríos, parroquias, aldeas, barrios, anteiglesias, concejos, pedanías, lugares anejos y otros análogos. Así mismo, se indica que las Leyes Autonómicas podrán establecer otras denominaciones, habilitación que ha dado como resultado una gran diversidad de nombres entre las distintas Comunidades Autónomas (Entidad Local Autónoma en Andalucía; Entidad Local Menor en Aragón, Castilla y León, Cantabria y Valencia; Entidad de Ámbito Territorial Inferior al Municipio en Castilla-La Mancha; Entidad Municipal Descentralizada en Cataluña; Pedanía o Diputación en Murcia; Parroquia Rural en Galicia y Asturias; o Concejo en Navarra).

Estas Entidades Locales, al no ser territoriales, sino institucionales, se configuran en base al principio de descentralización administrativa, consagrado en el artículo 103 de la Constitución de 1978. Por tanto, no estamos ante entes naturales creados jurídicamente per se, por sus características peculiares de distancia al núcleo urbano de la capitalidad del Municipio, o por el número de habitantes de su población, que le puedan hacer considerarse casi un Municipio. Para la LRBRL, estos elementos no son lo esencial para la creación de las EATIMes, la única y verdadera esencia es conseguir el objetivo de prestar a todos los ciudadanos del término municipal el mismo nivel de servicios y para ello, la descentralización administrativa institucional es la herramienta adecuada.

En cuanto a la regulación jurídica, de acuerdo con el marco competencial, se encomienda su desarrollo normativo a las Comunidades Autónomas, limitándose el artículo 45 a fijar las normas básicas que debe respetar dicha legislación, en cuanto a la iniciativa de creación y sobre la organización. La naturaleza básica de este artículo fue impugnada en el recurso de inconstitucionalidad 214/89, cuya sentencia de 21 de diciembre de 1989 dispuso la excepción de este carácter al punto 2 b) apartados primero y segundo.

El Real Decreto Legislativo 731/86, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local (TRDLRL), en sus artículos 38 a 45, desarrolla más ampliamente el régimen jurídico de

las EATIMes. Sin embargo, estos artículos no tienen carácter de básico, de acuerdo con la Disposición Final Séptima del mismo Texto.

La Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG), en su artículo 199, regula con carácter supletorio el régimen electoral de las EATIMes, habilitando expresamente a las Comunidades Autónomas para su regulación normativa.

El Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROFRJEL), en sus artículos 142 a 145, desarrolla el régimen jurídico de las Juntas Vecinales, también con carácter supletorio de la regulación autonómica.

En cuanto a los recursos económicos de las EATIMes, es el artículo 156 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas locales (TRLRHL) el que delimita su régimen jurídico, en este caso con carácter básico.

4.5.3. Normativa autonómica andaluza. Antecedentes.

La Ley 7/1993, de 27 de julio, Reguladora de la Demarcación Municipal de Andalucía (LRDMA), haciendo uso de la habilitación contenida en el artículo 45 LRBRL, establece en sus artículos, 47 al 70 el régimen jurídico de las Entidades que viene a denominar “*Entidades Locales Autónomas*” y que, también indica, pueden mantener denominaciones tradicionales como pedanías, villas, aldeas o cualquier otra.

Por un amplio sector de la normativa, se entendía que las antiguas Entidades Locales Menores, pasaron a denominarse por la LRBRL, Entidades Territoriales de Ámbito Territorial inferior al Municipio y que ahora nuestra Comunidad Autónoma pasaba a denominar como Entidades Locales Autónomas. En definitiva, distintos términos para aludir a los núcleos separados del Municipio para la gestión descentralizada de la administración de sus intereses.

Esta doctrina, encontró su oposición en la que mantenía que las Entidades Locales Autónomas (ELAs) eran otros entes diferenciados de las EATIMes, por lo que para alcanzar el régimen de ELA, era necesario que la EATIM se sometiera a un procedimiento de adaptación. Esta tesis se basaba en la Disposición Transitoria Segunda de la LRDMA que encomendaba a la Consejería de Gobernación la regulación del proceso de adaptación de las EATIMes en ELAs.

Aunque el párrafo segundo de la misma Disposición Transitoria Segunda parecía contradecir dicha tesis, puesto que reconocía la existencia de ELAs, con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley, y se disponía el mantenimiento del nivel de competencias y recursos de que disfrutaban, si éste fuese en algún aspecto superior al contemplado en esta Ley.

La Orden de la Consejería de Gobernación de 13 de junio de 1997 se decantó por el criterio de la segunda línea doctrinal, regulando un procedimiento de adaptación de las Entidades de Ámbito Territorial Inferior al Municipio al régimen de las Entidades Locales Autónomas, procedimiento similar al de la creación, aunque levemente simplificado.

El Decreto 185/2005, de 30 de agosto, Reglamento de Demarcación Municipal de Andalucía y del Registro Andaluz de Entidades Locales (RDMA), incorporó el citado procedimiento de adaptación en su Capítulo V del Título III, artículos 77 al 81.

Tanto la citada Orden de la Consejería de Gobernación, como el mencionado Reglamento fueron recurridos ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por la Federación Andaluza de Entidades Locales (FAEL) y por algunas Entidades concretas, como Balanegra (Almería) y La Barca de la Florida (Jerez de la Frontera), por entender que ambas Disposiciones se extralimitaban en el desarrollo normativo de la LRDMA.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en sentencias de 22 de mayo de 2000, 4 de febrero de 2002 y 15 de marzo de 2002 anuló la citada Orden y por sentencias del mismo Tribunal, de 14 de abril de 2008 (en recursos de la FAEL y de Balanegra) y 3 de mayo 2010 (en reclamación de la Barca de la Florida), anulan 64

artículos del Reglamento (RDMA), entre ellos los artículos 77 al 81 que regulaban el procedimiento de adaptación de las EATIMes en ELAs.

El Tribunal entiende que el RDMA se ha extralimitado en sus funciones de desarrollo normativo, llegando a regular en 64 artículos, cuestiones y procedimientos más allá de lo prevenido en la LRDMA.

En concreto, en cuanto a la justificación de la anulación de los artículos 77 al 81, el TSJA mantiene que *“las Entidades Locales Autónomas no son otras que las Entidades de Ámbito Territorial Inferior al Municipio”* y que *“el proceso de adaptación a que se refería la LRDMA solo puede referirse a cuestiones formales de cambio de denominación, inscripción correspondiente, etc.”*. Es decir, el Tribunal se decanta por la primera de las doctrinas comentada anteriormente.

La sentencia de 22 de mayo de 2000 que anula la Orden de la Consejería de Gobernación, es firme, no así el resto que fueron recurridas en casación por la Junta de Andalucía. No obstante, en cuanto a las sentencias de 14 de abril de 2008 (relativa a Balanegra) y la de 3 de mayo de 2010 (referida a la Barca de la Florida), el Tribunal dictó auto de ejecución provisional, por lo que la Consejería de Gobernación aprobó la Orden de 7 de septiembre de 2009, reconociendo provisionalmente a ambas EATIMes como Entidades Locales Autónomas, hasta tanto se resolviera la casación presentada.

4.5.4. La Ley de Autonomía Local de Andalucía (LAULA).

Paralelamente a las actuaciones judiciales anteriormente señaladas, el 24 de julio de 2010 entra en vigor la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, que ha venido a clarificar la materia, siendo destacable, en este sentido, el contenido de lo establecido en dos de sus disposiciones:

1. La disposición transitoria segunda, establece que *“las entidades locales autónomas existentes a la entrada en vigor de la presente ley y que se hubieren constituido bajo la vigencia de la Ley/1993, de 27 de julio, Reguladora de la Demarcación Municipal de Andalucía, y aquellas otras entidades de ámbito*

inferior al municipio que se hubiesen constituido conforme a normativas anteriores, se registrarán por lo dispuesto en la presente ley. No obstante mantendrán, si fuese el caso, el nivel de competencias y recursos de que dispusiesen si fuesen en algún aspecto superior al contemplado en esta Ley”.

2. La disposición derogatoria única, que deroga entre otras, la Ley 7/1993, de 27 de julio de Demarcación Municipal de Andalucía, no deroga, curiosamente, el Reglamento (RDMA), por lo que se puede considerar que se encuentra actualmente vigente en todo lo que no se oponga a la LAULA y en aquellos artículos no anulados por las sentencias de 14 de abril de 2008, hasta que no se apruebe un nuevo Reglamento que lo derogue expresamente.

El artículo 109 de esta nueva Ley, establece que el municipio *“podrá organizar espacialmente el término municipal, o parte de él, en circunscripciones territoriales”,* pudiendo ser de carácter desconcentradas (distritos, barrios, aldeas, pedanías u otras denominaciones) o descentralizadas (se introduce un nuevo concepto, el de *Entidades de Gestión Descentralizada* para referirse a las *Entidades Locales Autónomas* y a las *Entidades Vecinales*) estando *“presidida por el principio de racionalidad y economía administrativa”,* debiendo valorar *“fundamentalmente los criterios de volumen de población, situación geográfica, necesidades sociales, diferenciación histórica y cultural, orientación de las actividades económicas más significativas y existencia de intereses peculiares de cada zona, velando, en todo caso, por el mantenimiento o consecución de la solidaridad del conjunto de la comunidad vecinal y el acceso en condiciones de igualdad a los servicios públicos de todos los vecinos y vecinas con independencia de su lugar de residencia”.*

La opción de cualquier Ayuntamiento por la creación de entidades desconcentradas o descentralizadas dependerá del alcance y del grado de autonomía que se pretenda en su funcionamiento, estando muy influenciado por la extensión territorial, la existencia de núcleos de población tradicionales o la implicación del movimiento vecinal para exigir cierto grado de singularidad en el desarrollo de sus actividades.

Además, el artículo 116 permite a los municipios tener plena capacidad para la creación de estas circunscripciones territoriales, mencionando que *“para la aprobación*

de la creación de la nueva entidad habrá de obtenerse el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros del pleno del ayuntamiento”. Esto supone una apuesta por la autonomía local, dejando en manos de los municipios la administración y organización de su territorio, contraponiendo el principio inspirador y regulador de la Ley de Demarcación Municipal de Andalucía que, en su artículo 48, expone que *“las Entidades Locales Autónomas se crearán por acuerdo Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía”*.

A. Desconcentración territorial municipal.

Las circunscripciones territoriales desconcentradas carecen de personalidad jurídica y pueden extenderse sobre completos núcleos de población o sobre partes de alguno de ellos. De la misma manera, y aunque no lo explicita la norma, pueden crearse para la gestión indiferenciada de todos los asuntos municipales o para los de un área de acción determinada. Se trata de lo que se conocen por distritos, barrios, pedanías u otras denominaciones análogas. Y para desarrollar las funciones administrativas que se le encomienden (siempre en régimen de delegación o desconcentración) se les dotará de órganos representativos y de la estructura administrativa de personal o unidades administrativas que en cada momento se entiendan necesarias (artículo 111).

En el caso de estos órganos desconcentrados se pensó de *“lege ferenda”* (expresión latina que significa *para una futura reforma de la ley*) que lo más lógico y oportuno fuese su creación, modificación o supresión por acuerdo del superior órgano ejecutivo colegiado del ayuntamiento (es decir, de la Junta de Gobierno Local), ya que su función es fundamentalmente ejecutiva (salvo el enfoque a la participación ciudadana) y no está pensado para asumir funciones de control del ejecutivo local; pero los artículos 22.2.b) y 128 LRBRL, como preceptos básicos, vinculaban su creación a la competencia del Pleno del ayuntamiento, y el artículo 47 de la misma norma somete la aprobación del reglamento orgánico al voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación. Sin embargo, establecido el órgano por acuerdo del Pleno nada obsta para que su titular sea designado por el Alcalde y en su representación o por el miembro de la Junta de Gobierno local delegado de la

correspondiente área si es que el órgano desconcentrado tiene reducidas sus competencias a un determinado ramo administrativo municipal.

B. Descentralización territorial municipal.

Si se analizan las Leyes autonómicas de Régimen Local, la mayor parte sólo contempla un tipo de ente local referido a un núcleo de población separado de la capitalidad del Municipio, es decir, lo que la Ley de Bases define como Entidad de Ámbito Territorial Inferior al Municipio que, tal como ya se ha comentado, adquiere distintas denominaciones en las diversas Comunidades Autónomas aunque, en su mayoría, mantienen el antiguo concepto de Entidad Local Menor.

La LAULA recoge las denominadas Entidades de Gestión Descentralizada, término similar al utilizado por la Generalitat de Cataluña en su Ley 8/1987, de 15 de abril, Municipal y de Régimen Local de Cataluña, si bien, en este caso, para referirse exclusivamente a las Entidades de Ámbito Territorial Inferior al Municipio.

La Ley de Autonomía Local de Andalucía, en vez de rebajar el alcance jurídico y político que habían alcanzado las "*Entidades Locales Autónomas*" bajo la vigencia de la Ley 7/1993 de Demarcación Municipal de Andalucía, aún con variantes importantes en su régimen de creación y supresión y de relaciones con el municipio, lo que ha optado ha sido por crear un nuevo tipo de entidad (las llamadas "*Entidades Vecinales*") que, con un nivel de descentralización y de autonomía más limitado que las otras, pueden llenar un espacio de interesante uso en la vida municipal.

Al contrario de lo que sucede con las circunscripciones desconcentradas, las circunscripciones territoriales de gestión descentralizada son configuradas por la Ley de Autonomía Local como verdaderas entidades locales y, por consiguiente, con personalidad jurídica propia distinta de la del municipio. Aunque entre las opciones barajadas en la elaboración de la norma hubiera podido tener entrada su concepción como mera entidad instrumental dependiente o vinculada del municipio, la realidad preexistente y la pervivencia de los artículos 3.2.a) y 45 LRBRL (fundamentalmente) debió inclinar finalmente al legislador por la utilización de la expresión "*entidad local*" en

el artículo 113.2 y 3 LAULA a la hora de caracterizar a las figuras que se regulan en esta última norma.

La actual Ley no acota los requisitos mínimos indispensables para la constitución de las entidades descentralizadas, como lo hacía la anterior, y solo se refiere de una manera muy genérica (en su artículo 112) a la existencia de *“varios núcleos de población separados de aquel en que se halle la capitalidad del municipio”* cuando *“tuviesen características geográficas, sociales, históricas, culturales o administrativas comunes que de forma notoria revelasen unos intereses colectivos peculiares que hiciesen conveniente una gestión diferenciada del resto del municipio”*.

La regulación de estas entidades de gestión descentralizada viene dada por una parte común para todas ellas (arts. 112 a 116) y otras dos respectivas secciones que contienen las normas específicas de las entidades vecinales, por un lado (artículos 117 al 121), y de las entidades locales autónomas, por otro (artículos 122 al 132).

4.5.5. El nuevo enfoque de las Entidades Locales Autónomas.

En el Título VII de la Ley de Autonomía Local, dedicado a la administración del territorio municipal, se ofrece uno de los *“mayores signos de coherencia normativa”* (según lo expuesto por expertos juristas, si bien en mi opinión su fundamento radica de las dificultades de aplicación tanto de la Ley 7/1993 como del Decreto 185/2005, de Reglamento de Demarcación Municipal de Andalucía y Registro Andaluz Entidades Locales) con el postulado de autonomía local que da nombre a esta ley, al reconducir la existencia de un tipo de entidad local (las denominadas por el artículo 45 de la Ley 7/1985 RBRL entidades de ámbito inferior al municipio y por la Ley 7/1993 de Demarcación Municipal, entidades locales autónomas) a la única posición posible que les depara la conceptualización del municipio como entidad local básica y con garantía constitucional.

Se ha considerado necesario realizar una modificación en cuanto a la organización territorial del municipio y, sobre todo, en relación a las Entidades Locales

Autónomas (que ha llevado a la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJA a configurarlas como una entidad "*en tránsito*" al municipio). Sin embargo, la esencia misma de estas entidades no es la provisionalidad, pues tienen vocación de permanencia y un tratamiento ligado a la organización de la gestión de los servicios administrativos y a la participación ciudadana dentro del municipio. Era conveniente, por tanto, derogar en los supuestos de segregación municipal el régimen dulcificado que la Ley de Demarcación (artículo 8) presentaba para cuando el núcleo sobre el que se fundamenta la creación del nuevo municipio fuera una entidad local autónoma. Era también importante aclarar que las entidades locales inframunicipales eran entes dirigidos al ejercicio de competencias de titularidad municipal, pues cualquier otra interpretación sería contradictoria con el principio de autonomía municipal, que es la gran línea conductora de la LAULA.

Desde esta perspectiva, sería casi más conveniente recurrir al instrumento de la delegación de competencias desde el ente municipal al de ámbito inferior. El problema radica, por un lado, en cómo acometer la distorsión de la dinámica generada por la Ley 7/1993 (que en la práctica ha generado cuasi municipios que viven dentro de otros o en algunos casos, y lo que es peor, totalmente al margen de éstos) y, por otro, en la configuración de la representatividad democrática de primer grado que ostentan los órganos de gobierno y administración de tales entidades, que les hace merecedoras de una capacidad política de más largo alcance que la simple delegación de competencias.

Debido a estas razones, ha parecido conveniente que la nueva Ley les siga atribuyendo competencias propias (artículo 123), pero que éstas sean de mera gestión de servicios públicos o de ejercicio de competencias de titularidad municipal (de forma análoga a lo que se pretende formular en la relación municipio-provincia, pero en sentido descendente). En relación a esta idea se enumeran (artículo 122) las potestades que posean las entidades locales autónomas, adecuándola a la posición que tienen dentro del municipio.

En este sentido, parecía lógico pensar que si las competencias que le son propias son de simple gestión de servicios públicos municipales, sería necesario modificar profundamente el sistema de creación de estas entidades, alejándolas de la

decisión política de la Comunidad Autónoma e interiorizándola en la voluntad del propio municipio en el que radiquen. Era fundamental conceder al propio ayuntamiento la competencia para crear (y, por tanto, suprimir y en parte configurar) este tipo de entidades de ámbito inferior al municipal. De otra manera, la autonomía municipal se vería disminuida al no poder tener la última decisión sobre las competencias propias en parte de su propio término municipal.

Esta opción es absolutamente revolucionaria en la normativa autonómica y, al igual que la existencia de otras entidades locales dependen de la voluntad de los municipios (como es el caso de las mancomunidades) y están orientadas a facilitar el ejercicio de las competencias municipales, las entidades de ámbito inferior, con mayor razón deberían obedecer en su existencia a la voluntad del gobierno municipal y estar orientadas a favorecer la participación de los vecinos de determinadas porciones del territorio municipal en la elaboración y decisión de las políticas que le afecten especial y singularmente.

Aunque esta nueva concepción competencial de las entidades locales autónomas parece adecuarse al concepto de la autonomía local que venimos considerando, la LAULA debería haber realizado algunas objeciones al principio general, puesto según el artículo 59 de la Ley 2/2007, de Reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía, se concreta la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma sobre la organización territorial incluyendo *“la determinación, la creación, la modificación, la supresión de las entidades que configuran la organización territorial de Andalucía”*. En el artículo 89 sobre la estructura territorial se concreta que *“Andalucía se organiza territorialmente en municipios, provincias y demás entidades territoriales que puedan crearse por Ley”*. Por tanto, dentro de la organización territorial andaluza debemos encuadrar a las entidades locales autónomas, así como a las entidades vecinales. A su vez, el Estatuto andaluz determina como competencias exclusivas el de la ordenación del territorio, que incluye entre otras cuestiones la promoción del equilibrio territorial, siendo básico para alcanzarlo, poseer cierta capacidad competencial en materia de organización inframunicipal.

En definitiva, estamos de acuerdo en que la competencia sobre organización territorial de los municipios debe recaer en ellos, motivada por el principio de autonomía

política local. No obstante, la Comunidad Autónoma debería haberse reservado el derecho legal de actuar de oficio en determinadas situaciones que pudieran favorecer al equilibrio territorial de Andalucía. Estamos pensando en aquellos municipios con gran extensión superficial y que cuentan con un gran volumen de población situada lejos del núcleo principal y, de acuerdo con una adecuada ordenación territorial, sería conveniente la creación de entidades (ya no nos limitamos a las ELAs sino a cualquier figura tanto desconcentrada como descentralizada) siempre y cuando existiera una consolidada iniciativa vecinal de la población interesada.

4.5.6. Las Entidades Vecinales.

Las Entidades Vecinales se definen en la LAULA como *“entidades locales para la gestión descentralizada de servicios sociales de interés general y ejecución de obras de la competencia municipal que asumen por delegación del ayuntamiento”*. La misma Ley no aclara el tipo de competencias que deben asumir ya que por un lado las considera entidades de gestión descentralizada, lo que supone tener competencias propias transferidas desde el gobierno municipal y, por otro lado, se determina que las competencias que ejercerán son asumidas por delegación del ayuntamiento y, por tanto, serían exclusivamente de carácter desconcentrado.

En el caso de que asumieran de forma exclusiva competencias delegadas del ayuntamiento, poco o nada las diferenciaría en la práctica de las circunscripciones territoriales de carácter desconcentrado, salvo matices legales como la existencia de personalidad jurídica para las entidades vecinales. Sin embargo, se las ha incluido, junto a las entidades locales autónomas, en el epígrafe relativo a las entidades de gestión descentralizada, por lo que deben poseer ciertas competencias que asuman como propias por transferencia del gobierno local. Es más, la idea es encauzar a las futuras iniciativas vecinales que reivindiquen un cierto grado de autonomía local, hacia esta figura legal que supone un nivel inferior de competencias descentralizadas en relación a las entidades locales autónomas.

4.5.7. Aspectos comunes de la regulación de las entidades locales autónomas y las entidades vecinales.

Como normas comunes a ambos tipos de entidades se establece por la nueva Ley un procedimiento para la creación de las entidades de gestión descentralizada (iniciativa, instrucción y aprobación). La iniciativa corresponderá bien a la Junta de Gobierno Local, bien a cualquiera de los grupos políticos municipales o a la mayoría absoluta de los vecinos con derecho a voto en las elecciones locales que residan en el territorio que haya a ser base de la pretendida entidad.

No obstante, conviene mencionar que ante la situación creada por las sentencias aludidas del TSJA, el legislador andaluz parece haber querido evitar nuevos conflictos por lo que incorpora el criterio del TSJA, de tal modo que la LAULA, a través de su Disposición Transitoria Segunda, y con una redacción un tanto rebuscada, reconoce como ELAs a las EATIMes. Analizando esta Disposición debemos entender que:

- a) Se omite cualquier referencia a la necesidad de realizar un procedimiento de adaptación de las EATIMes en ELA. Sin embargo, debemos dejar presente que sólo el 50% de las mismas poseen una delimitación de su ámbito territorial y, por tanto, en la ejecución de sus competencias existe una problemática referida al territorio en el que pueden ejercerlas.
- b) La presente Ley sólo contempla como tipos posibles de Entidades de Gestión Descentralizada, las Entidades Locales Autónomas y las Entidades Vecinales y, por tanto, si las EATIMes constituidas con anterioridad han de regirse por lo dispuesto en la LAULA, o serán ELA o Entidad Vecinal, no existiendo posibilidad alguna de coexistir con otros entes distintos a los enunciados en la Ley.
- c) Al ser la diferencia entre ambos tipos de Entidad de Gestión Descentralizada que tengan competencias propias o delegadas, se puede concluir que aquellas EATIMes existentes son ELAs por poseer competencias propias. Además, mediante Decreto 65/2011, de 28 de marzo, por el que se convocan elecciones a los órganos de Gobierno de las Entidades Locales Autónomas existentes en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se listan en su anexo las 47 ELAs existentes en territorio andaluz, quedando integradas todas las EATIMes.

Se trata del primer documento oficial de la Junta de Andalucía donde las entidades bajo la figura de EATIM son consideradas ELA.

En cuanto a la iniciativa de creación de nuevas ELAs, la Ley no se refiere con claridad a qué órgano compete su aprobación, si bien puede entenderse que para los Municipios de Régimen Común el órgano colegiado es el Pleno y, para los Municipios de Gran Población, según el artículo 126.1 LBRL, la Junta de Gobierno Local. Posteriormente se incoa el oportuno procedimiento y se designa a una persona instructora del expediente.

En el curso de la instrucción se observan una serie de hitos a tener en cuenta: la elaboración de una memoria en la que han de *“ponderarse”* una serie de circunstancias que expresamente recoge el artículo 115.2 LAULA; una propuesta de resolución; información pública e informes de la diputación provincial y de la Consejería de la Junta de Andalucía competente sobre régimen local. Cabe destacar que las circunstancias que en el Decreto 185/2005 que aprobaba el Reglamento de Demarcación Municipal se erigían en requisitos de creación, en la actual regulación legal no pasan de ser parámetros que deben ser *“ponderados”* a la hora de elaborar la memoria y elevar la propuesta de resolución.

La aprobación de la nueva entidad se realizará por el Pleno mediante el voto favorable de la mayoría absoluta de sus miembros legales, que implicará igualmente la aprobación de los Estatutos de la nueva entidad. Es de destacar que las cuestiones a determinar por los Estatutos previstas en el artículo 116.2 LAULA son de tal cantidad y alcance cualitativo que, en realidad, el poder de configuración que el municipio tiene sobre el nuevo ente es amplísimo.

Por lo que se refiere a los informes de Diputación Provincial y Consejería de Gobernación, no se menciona nada sobre la naturaleza de los mismos en cuanto a si son vinculantes o no. Ante esta indeterminación habría que acudir a la regla general del artículo 83.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC), por lo que han de considerarse que son preceptivos y no vinculantes.

La atribución al Pleno de la Corporación de la competencia de aprobación del acuerdo de creación de la ELA es un paso determinante y pionero entre el resto de Comunidades Autónomas, pues sólo la también nueva Ley de Régimen Local Valenciana sigue la misma línea en relación a sus denominadas Entidades Locales Menores, pero con la salvedad de centrarse de forma exclusiva en los expedientes iniciados por el propio Ayuntamiento, ya que para los de iniciativa vecinal es el Consell autonómico el que mantiene la competencia.

Por otro lado, y aunque se encuentran regulados en preceptos de las respectivas secciones de normas específicas, la Ley de Autonomía Local establece iguales previsiones en materia de personal, presupuesto y supresión (en este caso con alguna mínima diferenciación).

El legislador andaluz debió tener presente en los supuestos de creación y supresión de entidades locales autónomas dos hechos de especial importancia a la hora de dar plenos poderes al municipio en materia de organización territorial municipal y, que pueden ser fuente de conflictos futuros:

1. Por un lado, cuando se produce una modificación de términos municipales por fusión o incorporación, la Comunidad Autónoma andaluza se debió reservar una cláusula en la norma que permitiese la posibilidad de creación de una Entidad Local Autónoma o Entidad Vecinal por acuerdo del Consejo de Gobierno, ya que el municipio que se incorpora a otro sobre la base de alguna de las circunstancias del artículo 94.2, o que se procede a su fusión con otro u otros motivada por el artículo 92.2, con los que pudiera mantener una relación de inferioridad, podría sentirse perjudicado si no se reconoce su identidad y una serie de competencias propias que, a pesar de ser inviable el mantenimiento de todas las competencias exigidas a un municipio, sí puede seguir atendiendo un nivel competencial semejante al de una ELA.
2. Por otro, se da plena capacidad al Ayuntamiento en materia de supresión de entidades locales autónomas (artículo 132) *“en los mismos supuestos y por el mismo procedimiento y con los mismos requisitos previstos para las entidades vecinales”* (artículo 121). No obstante, creemos que se debió aclarar que aquellas EATIMes que se han convertido de forma automática en ELAs (según

la LAULA), necesitarían de un procedimiento específico, no dependiente de la autonomía política local para organizar su ámbito territorial, ya que en el caso que un municipio decidiera suprimirlas no dejarían por ello de ser EATIMes (aspecto regulado por la LBRL).

4.5.8. El mapa andaluz de Entidades Locales Autónomas.

Como ya se ha comentado anteriormente, la Ley 5/2010 de Autonomía Local de Andalucía, en su Disposición Transitoria Segunda, establece que *“las entidades locales autónomas existentes a la entrada en vigor de la presente ley y que se hubieren constituido bajo la vigencia de la Ley/1993, de 27 de julio, Reguladora de la Demarcación Municipal de Andalucía, y aquellas otras entidades de ámbito inferior al municipio que se hubiesen constituido conforme a normativas anteriores, se regirán por lo dispuesto en la presente ley. No obstante mantendrán, si fuese el caso, el nivel de competencias y recursos de que dispusiesen si fuesen en algún aspecto superior al contemplado en esta Ley”*.

Esto supone un importante cambio en relación con la Ley ya derogada de demarcación municipal de Andalucía que establecía, curiosamente también en su Disposición Transitoria Segunda, y de forma intencionada para hacer notar el cambio de concepción respecto a las ELAs, que *“la Consejería de Gobernación regulará el proceso de adaptación de las Entidades de ámbito inferior al municipio, que incluirá, en todo caso, audiencias de las partes interesadas”*. La nueva normativa de autonomía local ya no exige la regulación de un proceso de adaptación a ELAs, haciendo notar que tanto las entidades constituidas como ELA según la Ley 7/1993, como las que tenían la denominación de EATIM por legislación estatal, se regirán, ambas, por lo expuesto en la LAULA. Así, el primer documento oficial publicado en BOJA donde se constata este hecho fue el Decreto 65/2011, de 28 de marzo, por el que se convocan elecciones a los órganos de Gobierno de las Entidades Locales Autónomas existentes en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Tabla 1. Entidades Locales Autónomas en Andalucía.

PROVINCIA	MUNICIPIO	ELA	TERRITORIO
Almería	Berja	Balanegra	No Posee
	Fondón	Fuente Victoria	No Posee
Cádiz	Barbate	Zahara de los Atunes	Posee
	Jerez de la Frontera	La Barca de la Florida	No Posee
		Estella del Marqués	No Posee
		Guadalcacín	No Posee
		Nueva Jarilla	No Posee
		San Isidro del Guadalete	No Posee
		El Torno	No Posee
		Torrecedera	No Posee
	Jimena de la Frontera	San Martín del Tesorillo	Posee
	Tarifa	Facinas	No Posee
		Tahivilla	No Posee
Córdoba	Adamuz	Algallarín	No Posee
	Córdoba	Encinarejo de Córdoba	No Posee
	Fuente Palmera	Aldea de Fuente Carreteros	No Posee
		Ochavillo del río	Posee
	Priego de Córdoba	Castil de Campos	Posee
	Santaella	La Guijarrosa	Posee
Granada	Alhama de Granada	Ventas de Zafarraya	Posee
	Arenas del Rey	Játar	Posee
		Fornes	No Posee
	Guadix	Bácor-Olivar	Posee
	Iznalloz	Domingo Pérez	Posee
		Dehesas Viejas	Posee
	Motril	Torrenueva	Posee
		Carchuna-Calahonda	Posee
	Pinos Puente	Valderrubio	Posee
	Nevada	Picena	No Posee
		Mairena	No Posee
Huelva	Alosno	Tharsis	Posee
	Calañas	La Zarza-Perrunal	Posee
	Isla Cristina	La Redondela	Posee

PROVINCIA	MUNICIPIO	ELA	TERRITORIO
Jaén	Alcalá la Real	Mures	Posee
	Alcaudete	La Bobadilla	Posee
	Andújar	La Ropera	No Posee
		Los Villares	No Posee
	Baños de la Encina	El Centenillo	No Posee
	Linares	Estación Linares-Baeza	Posee
	Marmolejo	San Julián	No Posee
	Rus	El Mármol	No Posee
	Villanueva de la Reina	La Quintería	No Posee
	Bédmar y Garcéz	Garcéz	Posee
Málaga	Ronda	Serrato	Posee
		Montecorto	Posee
Sevilla	Las Cabezas de San Juan	Las Marismillas	Posee
	Écija	Isla Redonda-La Aceñuela	Posee
	Utrera	El Palmar de Troya	Posee

Fuente: Registro Andalúz de Entidades Locales (RAEELL) y decretos de creación de las entidades locales autónomas correspondientes.

Se pueden distinguir dos tipos de Entidades Locales Autónomas: unas que poseen un ámbito territorial delimitado por Orden o Decreto de la Junta de Andalucía, y otras ausentes de territorio en el que ejercer de forma efectiva sus funciones.

El legislador andaluz no ha tenido en cuenta que para la correcta gestión de competencias propias y/o delegadas, aparte de la determinación de las mismas, es necesario establecer unos límites físicos o territoriales, por lo que no ha exigido a los municipios que, en un plazo concreto, establezcan un ámbito territorial para aquellas ELAs que no lo tengan asignado.

Y esta necesidad, es una cuestión que viene determinada por Ley, así el artículo 116 de la LAULA relativo a la aprobación de la creación de entidades descentralizadas (por tanto debemos considerar que las entidades vecinales también deben poseerlo), en su apartado f), se dice que el estatuto de creación de la entidad debe contener como mínimo, entre otras cuestiones, el *“ámbito territorial en que haya de ejercitar las competencias”*.

4.5.9. Las posibilidades segregacionistas de las Entidades Locales Autónomas con la entrada en vigor de la LAULA.

La nueva normativa andaluza sobre autonomía local, en su artículo 93.2, deja claro el carácter excepcional de la creación de un nuevo municipio por segregación de otro ya existente, siendo necesario, en todo caso, el acuerdo *“del pleno del ayuntamiento del municipio que sufre la segregación”*. Esto supone un giro radical en relación a lo que recogía la Ley Reguladora de Demarcación Municipal de Andalucía.

También se exige como requisito básico para la segregación la conformidad expresa, acordada por mayoría absoluta, del pleno del ayuntamiento; lo que unido a la omisión (en la LAULA) de un apartado similar al del artículo 12.2 de la Ley 7/1993, que permitía incoar expedientes de creación y alteración de municipios por una Comisión promotora que representase a la mayoría de los vecinos del núcleo que pretendía segregarse, hace que estemos hablando de una posibilidad teórica o legal en relación con la creación de nuevos municipios por segregación, ya que el pleno del ayuntamiento tiene plena autonomía (concepto que en todo el documento queremos remarcar) para organizarse territorialmente. En la práctica, un municipio no permitirá que parte de su territorio se segregue y suponga una pérdida de su capacidad económica y territorial.

5 Criterios para la delimitación de unidades territoriales inferiores al municipio.

El artículo 109 de la Ley 5/2010 de Autonomía Local de Andalucía establece que el municipio *“podrá organizar espacialmente el término municipal, o parte de él, en circunscripciones territoriales”*. Por tanto, no es un mandato u obligación de la normativa respecto a los municipios, que tendrán la potestad de autoorganización (artículo 91.3 de la Ley Orgánica 2/2007, de Reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía) como manifestación de su plena autonomía política. La inclusión de esta posibilidad que se le ofrece a los municipios no es casual, la administración andaluza recomienda esta práctica *“con la finalidad de acercar la acción administrativa a la población, facilitar la participación ciudadana y dotar de mayor eficacia a la prestación de servicios”*.

Por otro lado, la Reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, en su artículo 90, establece los principios de la organización territorial andaluza, que deberán regirse *“por los principios de autonomía, responsabilidad, cooperación, desconcentración, descentralización, subsidiariedad, coordinación, suficiencia financiera y lealtad institucional”*. Estos principios deben ser aplicados en todos los elementos de la estructura territorial de la Comunidad Autónoma, compuesta por los *“municipios, provincias y demás entidades territoriales que puedan crearse por ley”* (artículo 89).

El municipio, como entidad territorial básica (artículo 91.1 del Estatuto y artículo 3.2 de la LAULA), tiene que aplicar el principio de organización territorial de Andalucía

y, tal y como se recoge en el artículo 110 de la Ley de Autonomía Local, también deberá tener en cuenta el principio de la organización territorial del municipio *“que estará presidida por el principio de racionalidad y economía administrativa, valorará fundamentalmente los criterios de volumen de población, situación geográfica, necesidades sociales, diferenciación histórica y cultural, orientación de las actividades económicas más significativas y existencia de intereses peculiares de cada zona”*.

Aunque el artículo 109 de la LAULA parece plantear que la organización territorial del municipio es simplemente una posibilidad que le otorga la Ley en función del ejercicio de su potestad de autoorganización, debemos tener presente que el principio de organización territorial de Andalucía establece para las entidades territoriales, de forma expresa, que deberán regirse, entre otros, por los principios de desconcentración y descentralización. Por tanto, a pesar de que la potestad de autoorganización territorial corresponde al municipio, éste deberá valorar (mandato) las posibilidades de organizarse en circunscripciones territoriales que podrán ser desconcentradas (distritos, barrios, aldeas, pedanías u otras denominaciones análogas) y/o descentralizadas (entidades vecinales o entidades locales autónomas).

La legislación vigente no concreta criterios específicos para la delimitación de circunscripciones territoriales, aunque deben basarse en el principio de organización territorial del municipio y en lo expuesto en el artículo 112 de la LAULA (aunque en este caso sólo referido a las entidades locales autónomas y las entidades vecinales), que ofrece unas consideraciones generales en la materia:

“Cuando uno o, en su caso, varios núcleos de población separados de aquel en que se halle la capitalidad del municipio tuviesen características geográficas, sociales, históricas, culturales o administrativas comunes que de forma notoria revelasen unos intereses colectivos peculiares que hiciesen conveniente una gestión diferenciada del resto del municipio, el ayuntamiento podrá constituir una entidad descentralizada para el exclusivo ejercicio de las competencias municipales que se determinen en el instrumento de creación o en sus posteriores modificaciones, sin perjuicio, en ningún caso, de la unidad de gobierno municipal y de la representación general que ostentan los correspondientes órganos municipales”.

5.1. LA NECESIDAD DE REALIZAR UN ANÁLISIS TERRITORIAL DEL MUNICIPIO.

La normativa sobre autonomía local concede a los municipios la potestad de autoorganización de su territorio, ya sea de forma desconcentrada o descentralizada. Esto supone una verdadera oportunidad para mejorar y acercar la acción administrativa a la población, ser más eficientes en la prestación de los servicios públicos y facilitar la participación ciudadana; sin embargo, también supone asumir responsabilidades y obligaciones en relación a la ordenación territorial de su municipio.

Tomar una decisión respecto al carácter desconcentrado o descentralizado de las circunscripciones territoriales, aunque importante para establecer el tipo de competencias asumidas por cada entidad, no es lo más interesante en este discurso, ya que aunque la descentralización supone poseer una mayor autonomía (por poseer competencias consideradas como propias), la desconcentración puede significar un mayor número de competencias que, aunque no sean propias sino delegadas, permiten una gestión más eficaz. Es más, incluso la propia LAULA, confunde ambos términos, al incluir dentro de las entidades de gestión descentralizada a las entidades vecinales que, tal y como se definen en el artículo 113.2, *“son entidades locales para la gestión descentralizada de servicios locales de competencia municipal que asumen por delegación del Ayuntamiento”*.

Por tanto, lo fundamental es conocer el ámbito territorial donde las diferentes entidades que se establezcan van a ejercer sus competencias (ya sean propias o delegadas). En este punto de la argumentación, hay que tener en cuenta que la legislación en materia de autonomía local poco aporta en relación a la determinación de las circunscripciones territoriales señaladas en el artículo 109.2, quedando reflejado este aspecto sólo en el contenido mínimo del estatuto de creación de entidades de gestión descentralizadas (artículo 116.2) que, en su apartado f) se exige la delimitación de un ámbito territorial en que la entidad puede ejercitar sus competencias.

Es conveniente que los municipios en virtud de su plena autonomía para organizarse internamente, realicen un exhaustivo análisis territorial, que debe incluir la

determinación de los núcleos de población existentes y de aquellos asentamientos de carácter diseminado, teniendo presente las diversas características históricas, geográficas, sociales, económicas, culturales o administrativas que revelasen unos intereses colectivos peculiares.

Actualmente, algunas realidades poblacionales ostentan la titularidad de competencias propias, gozando de personalidad jurídica mediante la adopción de la figura de Entidad Local Autónoma, incluso muchas poseen una delimitación clara y oficial respecto al ámbito territorial donde ejercer sus competencias, no así parte de ellas que llevan a cabo sus funciones en un ámbito exclusivamente urbano, limitándose al contorno de su núcleo de población (en ocasiones en más de un núcleo). Por otro lado, casi todas las EATIMes que no sufrieron un período de adaptación para su conversión en ELA según la Ley de Demarcación Municipal de Andalucía (ya derogada), a pesar de no poseer un ámbito territorial bien definido, no limitan su ámbito de actuación al contorno de sus núcleos, estando su alcance aumentado a aquellas parcelas destinadas a la actividad agrícola de sus pobladores.

También nos encontramos con núcleos de población que poseen competencias delegadas de sus ayuntamientos, en ocasiones casi tan amplias como las que pueden ostentar las ELAs, aunque sólo las ejercen para sus vecinos y no para un territorio dado. Otros, sin embargo, a pesar de no tener competencias asignadas, poseen un alto grado de asociacionismo, siendo sociedades muy participativas y reivindicativas, llegando a ejecutar competencias municipales que, a pesar de no estar delegadas, el ayuntamiento deja en manos de su comunidad (como por ejemplo los festejos y las actividades culturales).

En el marco normativo de la Ley de Autonomía Local, los municipios pueden organizar su territorio en entidades de gestión descentralizadas o en entidades de carácter desconcentrado, pero tal y como se recoge en su artículo 109.2, al tratarse de circunscripciones territoriales, se especifica de forma clara su carácter territorial, por lo que es necesario delimitarlas.

Esta delimitación territorial debe ser general para todo el término municipal, siendo recomendable tener en cuenta los ámbitos territoriales actuales de sus

entidades de población, así como las previsiones futuras de creación de entidades de gestión descentralizadas y/o circunscripciones desconcentradas. Es más, en aquellas zonas del municipio que conforman despoblados o asentamientos diseminados, con ausencia de núcleos de población y unas características geográficas especiales, como por ejemplo áreas naturales protegidas o zonas con usos del suelo homogéneos, que necesiten de una gestión específica orientada a un manejo más eficiente de sus recursos, es recomendable establecer delimitaciones territoriales propias.

El presente capítulo trata sobre el establecimiento de unidades territoriales inferiores al municipio y, hasta el momento, se ha hecho referencia a la delimitación de circunscripciones territoriales, ya que la LAULA recoge este concepto para referirse a la organización espacial del término municipal. Para evitar confusiones terminológicas, se ha creído conveniente hablar de unidades territoriales en lugar de circunscripciones, aunque no sólo motivado por ello ya que, como hemos indicado anteriormente, lo recomendable es realizar una delimitación territorial completa del municipio, existan o no núcleos de población en su interior. Con esto no se pretende que en todo municipio se definan unidades territoriales inframunicipales, ya que cada realidad municipal tiene su propia identidad y características históricas, geográficas, socio-económicas, etc.

5.2. DETERMINACIÓN DE LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES EN EL MUNICIPIO.

5.2.1. El concepto de núcleo de población.

Tal y como se señala en el artículo 112 de la LAULA, es necesario la existencia de un núcleo de población (o varios) separado del principal. Para comprender qué se entiende por “*núcleo de población*” sería necesario remitirnos a la Resolución, de 9 de abril de 1997, de la subsecretaría, por la que se dispone la publicación de la resolución de 1 de abril, de la presidenta del Instituto Nacional de Estadística y del director general de Cooperación Territorial, por la que se dictan instrucciones técnicas a los

ayuntamientos sobre la gestión y revisión del padrón municipal. En ella se establece una definición acotada del concepto de núcleo de población con *“objeto de conseguir una uniformidad de criterios para la determinación de las unidades poblacionales existentes en cada término municipal”*, de acuerdo con el artículo 76 del Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación de las Entidades Locales.

Mediante esta Resolución, se considera núcleo de población a un *“conjunto de al menos diez edificaciones, que están formando calles, plazas y otras vías urbanas. Excepcionalmente, el número de edificaciones podrá ser inferior a diez, siempre que la población supere los 50 habitantes. Se incluirán en el núcleo aquellas edificaciones que, estando aisladas, disten menos de 200 metros de los límites exteriores del mencionado conjunto, si bien en la determinación de dicha distancia han de excluirse los terrenos ocupados por instalaciones industriales, comerciales, cementerios, parques, jardines, zonas deportivas, canales o ríos que puedan ser cruzados por puentes, aparcamientos, otras infraestructuras de transporte, etc.”*

Por su parte, el artículo 3.3 del Decreto 185/2005, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Demarcación Municipal de Andalucía y del Registro Andaluz de Entidades Locales, *“entiende por núcleo de población todo conjunto de edificaciones de carácter urbano susceptible de ser habitado, separado y diferenciado espacialmente dentro de un término municipal y conocido por una denominación específica que la identifica sin posibilidad de confusión, ya esté dispuesto en calles, plazas y otras vías urbanas, ya esté diseminado”*.

Tras analizar ambas descripciones, se constata una evidente falta de concreción respecto al fenómeno *“núcleo de población”* en la definición aportada por el Decreto 185/2005, ya que no se ofrecen datos exactos, ni del número de edificaciones que pueden formar un conjunto, ni de la población que debe habitar en el mismo. Además, es ambiguo respecto al *“carácter urbano”* que deben poseer las edificaciones, ya que esa peculiaridad no sabemos si se la aporta la planificación urbanística o las labores asociadas a las mismas (se entiende que la existencia de núcleos de población rurales es un hecho). Por último, se exige que sean construcciones *“susceptibles de ser*

habitadas”, por lo que deja fuera del concepto a áreas industriales o comerciales, y a equipamientos educativos, sanitarios, deportivos, etc., incluyendo sólo a las viviendas.

Parece más acertado recoger lo propuesto por la definición del Instituto Nacional de Estadística, si bien sería necesario realizar ciertas matizaciones o aclaraciones.

- Para la existencia de un núcleo de población es fundamental formar un conjunto de al menos diez edificaciones conformando vías urbanas. Sin embargo, la realidad territorial nos ofrece situaciones en las que un conjunto de edificaciones (de número incluso superior) no llegan a formar viales urbanos en sí (aunque sí de tipo rural como caminos o sendas), ya que la orientación del asentamiento es predominantemente rural.
- Excepcionalmente, un conjunto de menos de diez edificaciones podría formar un núcleo poblacional si su población fuese superior a 50 personas (debemos entender que se trata de residentes habituales o empadronados). En este criterio sí se nos ofrece una limitación poblacional, aunque en el anterior no hay límites de población, siempre y cuando se superen un número total de edificaciones.
- De forma acertada, se permite incluir dentro de la delimitación de los núcleos de población, aquellas viviendas que estén a menos de 200 metros del conjunto, aunque no se tendrá en cuenta para la aplicación de esta distancia edificaciones no susceptibles de ser habitadas.

Después de realizar este análisis sobre el concepto de “*núcleo de población*”, se aporta una definición que pretende recoger las distintas propuestas y, en la medida de lo posible, acotar una descripción de los criterios a valorar. Así un núcleo de población estaría formado por un conjunto de al menos diez edificaciones conocido por una denominación específica que la identifica sin posibilidad de confusión, siendo necesario superar una población de 50 personas (residentes de forma habitual). Además se incluirían aquellas viviendas dispersas, susceptibles de ser habitadas, que estén a menos de 200 metros del contorno del conjunto.

Con este concepto, se ponen límites mínimos en relación al número de edificaciones y a la población residente en el asentamiento, que debe ser conocido por una denominación específica que la identifique (por lo tanto con un reconocimiento).

Para llegar a determinar con precisión el contorno se permite incluir a aquellas viviendas situadas a menos de 200 metros del conjunto.

5.2.2. Identidad común y diferenciada.

El artículo 112 de la LAULA señala que no es requisito único, para la constitución de entidades de gestión descentralizadas, la existencia de núcleos de población separados de aquel en que se halle la capitalidad del municipio, siendo necesario que concurren una serie de características históricas, geográficas, sociales, económicas, culturales o administrativas comunes que evidencien una identidad común y diferenciada.

Para analizar si se cumplen los requisitos legales y establecer las causas que hacen aconsejable la creación de la entidad, se deben ponderar una serie de factores que deben figurar en una memoria justificativa formulada por la persona instructora del procedimiento de creación de la entidad descentralizada.

1. Requisito poblacional. Aunque no se especifica un límite mínimo de población que, por otra parte, parece acertado ya que la realidad geográfica y territorial de cada municipio es muy variada, se tendrá en cuenta la tendencia demográfica del núcleo (se quiere evitar situaciones de creación de entidades que sufren un fuerte proceso de despoblación) y el predominio de residentes que tengan en el núcleo su domicilio único, evitando un alto índice de segundas residencias.
2. Requisito distancia. Se tendrá en cuenta la distancia (en un sentido amplio, tanto físico como temporal) existente desde el núcleo de población en cuestión a la capitalidad municipal, siendo importante determinar el grado de accesibilidad, fundamentalmente en relación con el transporte público.
3. Requisito dotacional y de servicios. La existencia de servicios, comercios, equipamientos de carácter educativo, sanitario, religioso, deportivo, recreativo que doten al núcleo de vida propia o, por el contrario, le hagan totalmente dependiente de la capitalidad del municipio.

4. Requisito económico. Las consecuencias económicas de la creación de la entidad y su viabilidad económica.

5.3. DETERMINACIÓN DEL ÁMBITO TERRITORIAL DONDE DEBEN EJERCER SUS COMPETENCIAS LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN.

A partir del estudio y localización de los núcleos de población existentes en el municipio, es necesario determinar qué núcleos son merecedores, en función de los intereses del Ayuntamiento y de sus características geográficas, sociales, históricas, culturales o administrativas, de configurarse como entidades de gestión descentralizada o en circunscripciones territoriales de carácter desconcentrado.

La complejidad territorial de los municipios andaluces, con variedad de situaciones en relación a su actual organización: municipios con poblamiento concentrado y otros disperso; existencia de entidades locales autónomas con la delimitación de su territorio aprobado por Decreto u Orden, y otras, en cambio, a la espera de que se concrete su ámbito; núcleos de población que gozan de competencias delegadas por el Ayuntamiento matriz; diferencia acusada en cuanto a la extensión superficial de los términos municipales, etc.; hacen que el establecer criterios generales para todos los municipios andaluces sea una tarea compleja, máxime cuando la potestad para la organización espacial del municipio le corresponde a los Ayuntamientos.

Por otro lado, se deben respetar, en la medida de lo posible, las actuales delimitaciones existentes en los municipios, como son los ámbitos territoriales de las entidades locales autónomas que tengan realizada y aprobada su delimitación. En relación con aquellas ELAs que aún tengan pendiente la concreción de sus límites, el estudio del ámbito que le corresponde debe realizarse teniendo presente una visión general de todas las situaciones municipales, tanto actuales como futuras, ya que pueden existir otros núcleos de población que aspiren a configurarse en Entidad Local Autónoma, Entidad Vecinal o cualquier figura de gestión desconcentrada.

El artículo 65 del Decreto 185/2005 por el que se aprueba el Reglamento de Demarcación Municipal de Andalucía y el Registro Andaluz de Entidades Locales, establece una serie de criterios para la delimitación del territorio vecinal de las entidades locales autónomas (podríamos tenerlo en cuenta para las entidades vecinales) que, en todo caso, deberá ser continuo:

- a) Se extenderá a los terrenos circundantes que pertenezcan a la población del núcleo o núcleos bases de la entidad.
- b) Habrá de ser el suficiente para ejercer las competencias que la Entidad Local Autónoma asuma, de tal modo que el territorio vecinal pueda albergar los servicios que hubiera de prestar en el ejercicio de tales competencias.
- c) El territorio vecinal habrá de responder como mínimo a las expectativas razonables de desarrollo urbano del núcleo o núcleos de población que sean base de la entidad, teniendo en cuenta los criterios de ordenación del territorio así como las previsiones urbanísticas del Municipio.
- d) Siempre que sea factible, se delimitará en consideración a accidentes geográficos o elementos de carácter permanente y fácilmente identificables.
- e) En todo caso, y en atención a la naturaleza urbana de las competencias propias de las Entidades Locales Autónomas y a la salvaguarda de los intereses generales del Municipio, se utilizará un criterio restrictivo en la determinación de su territorio.

Tomando en consideración estos criterios, se detecta un interés explícito por reducir a la mínima expresión el territorio de una ELA, ya que se evidencia el carácter restrictivo como premisa en la determinación de su ámbito, además de considerar como competencias propias de estas entidades las de naturaleza urbana, limitándose a los terrenos circundantes que pertenezcan a la población del núcleo base de la entidad o que tengan la tipología de “urbanizable” en la planificación urbanística. Estas competencias aunque predominantemente urbanas, no son exclusivas de este ámbito, no sólo por entender que muchas de las entidades conformadas bajo la figura de EATIM poseían competencias mucho más amplias, como la de policía rural, sino por considerar que algunas de las competencias mínimas listadas en el artículo 123.1 de la LAULA, como la de alumbrado público, limpieza viaria, alcantarillado o recogida de

residuos, en una sociedad como la actual, han traspasado la frontera de lo urbano para alcanzar asentamientos rurales con diferente grado de concentración edificatoria.

Por otro lado, el Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación de las Entidades Locales, establece en su artículo 40, que *“podrán constituirse entidades de ámbito territorial inferior al municipio para la administración descentralizada de núcleos de población separados, bajo su denominación tradicional de caseríos, parroquias, aldeas, barrios, anteiglesias, concejos, pedanías, lugares anejos y otros análogos, o aquéllas que establezcan las leyes”*.

Los núcleos de población mencionados en el artículo anterior, podrán constituir entidades de ámbito territorial inferior al municipio (artículo 41):

- a) Cuando se suprima el municipio a que pertenezcan.
- b) Cuando por tratarse de núcleos urbanos de nueva creación se considere necesario dotarlos de administración propia.
- c) Cuando por alteración de los términos municipales pasen dichos núcleos a formar parte de otros municipios.
- d) Cuando las fincas adquiridas para colonización interior no reúnan los requisitos exigidos para constituir municipio, pero sean asiento permanente de un núcleo de población.

Un estudio riguroso del poblamiento debe servir de base para analizar la evolución seguida por las entidades de población a lo largo de la historia: conocer si en algún momento llegaron a ser municipios con Ayuntamiento propio; si su origen proviene de la planificación de poblados de colonización agraria surgidos, fundamentalmente, a mediados del siglo XX; descubrir delimitaciones antiguas que de alguna forma pudieran tenerse de referencia en la actualidad, recoger subdivisiones municipales creadas para la planificación y gestión de alguna política de rango autonómico o estatal (como el Nomenclátor de Entidades de Población y el Seccionado Censal), así como cualquier otra peculiaridad relativa al municipio.

5.3.1. Entidades Locales Autónomas con ámbito territorial.

El 52% de las Entidades Locales Autónomas de Andalucía tienen definido su ámbito territorial, determinado por una diversidad de criterios centrados en la identidad histórica, social y económica del núcleo de población que ostenta la capitalidad de la entidad.

En alguno de los casos, los límites establecidos tenían una fuerte influencia geográfica, como en el caso de Bácor-Olivar que se concretaron sus límites coincidentes con el del actual enclave conocido como Dehesas de los Cuartos. En otros, la circunstancia de haber sido municipio independiente obligó a ajustar sus límites (siempre y cuando se conocieran) a los preexistentes: Castil de Campos, aldea de Priego de Córdoba y que fue municipio independiente en el siglo XIX; Dehesas Viejas que lo fue hasta finales de 1972; Játar cuyo núcleo tuvo hasta 1973, fecha de su fusión con el de Arenas del Rey y Fornes, la categoría de municipio independiente; Serrato que fue una barriada que se segregó del municipio de Ronda en el siglo XVIII y tras su incorporación al de Cuevas del Becerro, los vecinos pidieron volver a formar parte del término rondeño; y Garcéz que sobre su territorio se organizó un señorío y después un condado con su nombre, para posteriormente, convertirse en municipio hasta la fusión con el vecino de Bédmar.

Los motivos técnicos y jurídicos que expone la Consejería de Gobernación para ofrecer informes positivos sobre la conversión en ELAs se basan en:

1. Que el núcleo de población *“cumple los requisitos establecidos por el artículo 47.2 de la Ley de Demarcación para constitución de una Entidad Local Autónoma. Así, está acreditada la existencia de una agrupación de edificaciones, familias y bienes, que forma un núcleo separado dentro del término municipal. También se ha acreditado que cuenta con unos intereses netamente diferenciados, generados por circunstancias peculiares de índole histórica y social, lo cual explica la integración de población y territorio en una unidad diferenciada. Por otra parte, esa integración del elemento físico y del*

humano es conforme con las previsiones de política territorial de la Comunidad Autónoma, según informe de la Consejería de Obras Públicas y Transportes”.

2. Y en que *“resultan patentes la objetividad y adecuación de la decisión que se adopta, puesto que ha sido documentada la viabilidad económica de los servicios que asume la nueva Entidad Local. En la misma línea, ha quedado de manifiesto la inexistencia de perjuicios a los intereses generales del Municipio y, por otra parte, la generación de beneficios para los vecinos con la gestión descentralizada de sus intereses”.*

Observando la tabla 2 podemos determinar que la extensión superficial que poseen las ELAs es bastante variada, siendo sus valores extremos los de la localidad de Bátor-Olivar con 66,94 km², perteneciente al municipio de Guadix, y Zahara de los Atunes (Barbate) con tan solo 88 hectáreas. La media se sitúa en 26,04 km² y el segundo valor más bajo pertenece a La Redondela (Isla Cristina), con 2,67 km².

Para la localidad de Zahara de los Atunes se ha delimitado un ámbito territorial con un criterio eminentemente restrictivo, centrado exclusivamente en el núcleo de población, no llegando ni siquiera al 1% del total superficial del municipio de Barbate. Según vemos en la columna referida al porcentaje del total que supone el territorio de la ELA en relación al término municipal del que forma parte, el siguiente valor más bajo lo encontramos en Isla Redonda-La Aceñuela, que supone un 1,15% del territorio de Écija, aunque se debe matizar que su ámbito territorial es de 11,25 km².

A efectos de cumplimentar el trámite relativo a la concreción provisional del territorio que debía servir de base a la nueva entidad de Zahara de los Atunes, el pleno del Ayuntamiento, con fecha de 14 de julio de 2009, aprobó la delimitación del territorio vecinal (justificada por los técnicos de Diputación Provincial), para la constitución en entidad local autónoma, lo que suponía una extensión de 23,96 km² (un 16,9% del término de Barbate, ocupada por un 5,7% de la población total). Sin embargo, en virtud de la previsión recogida en el artículo 65.2 del Decreto 185/2005, atendiendo a la naturaleza urbana de las competencias propias de las ELAs, debía utilizarse un criterio restrictivo en la determinación de su territorio, considerando innecesario que una entidad local autónoma superara en su delimitación los estrictos límites del núcleo

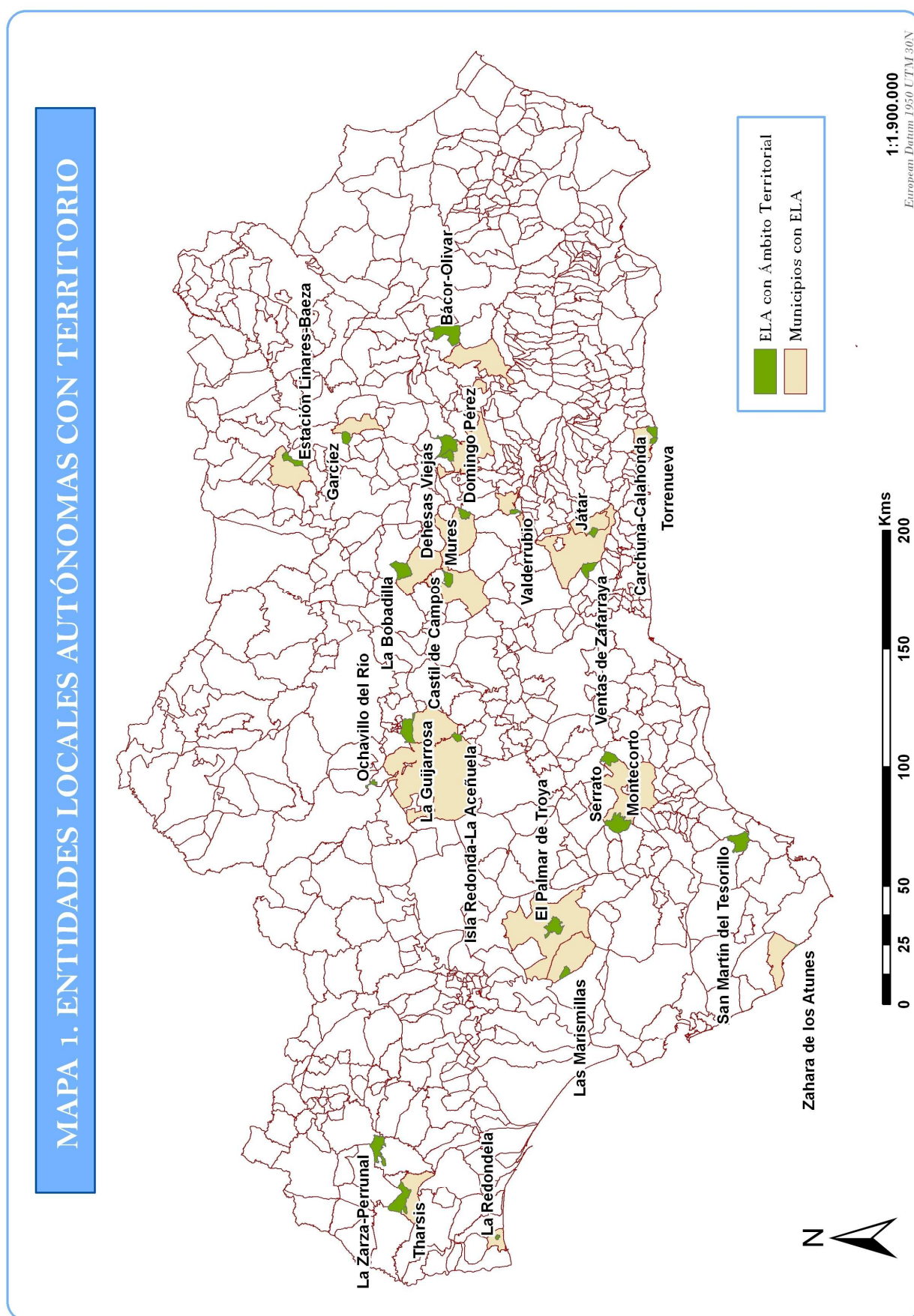
urbano, preferentemente delimitado por el vigente planeamiento urbanístico general, por su suelo urbano y urbanizable adyacente. Además, se efectúa la propuesta de vértices y linderos basándose en un accidente topográfico como es el arroyo del Cachón, elemento territorial claramente identificable, y la línea existente entre los municipios de Barbate y Tarifa.

Tabla 2. Entidades Locales Autónomas con ámbito territorial.

ELA	MUNICIPIO	LÍMITES	KM ²	% MUNICIPIO
Bácor-Olivar	Guadix	Orden 01/12/1994	66,94	20,66
Carchuna-Calahonda	Motril	Decreto 60/2005	14,52	13,22
Castil de Campos	Priego de Córdoba	Decreto 148/2001	18,83	6,53
Dehesas Viejas	Iznalloz	Decreto 83/2003	14,74	4,76
Domingo Pérez	Iznalloz	Decreto 59/2003	48,19	15,55
El Palmar de Troya	Utrera	Decreto 60/2003	36,49	5,33
Estación Linares-Baeza	Linares	Orden 30/06/1987	21,19	10,95
Garcíez	Bédmar y Garcíez	Decreto 283/2003	16,33	13,76
Isla Redonda-La Aceñuela	Écija	Decreto 95/1999	11,25	1,15
Játar	Arenas del Rey	Orden 19/06/2008	9,75	8,36
La Bobadilla	Alcaudete	Decreto 221/2005	41,15	17,39
La Guijarrosa	Santaella	Decreto 215/2006	45,81	16,87
La Redondela	Isla Cristina	Decreto 163/2006	2,67	5,38
La Zarza-Perrunal	Calañas	Orden 05/06/1997	45,09	15,93
Las Marismillas	Las Cabezas de San Juan	Decreto 56/1999	12,11	5,27
Montecorto	Ronda	Decreto 168/2002	54,39	11,30
Mures	Alcalá la Real	Decreto 116/2001	14,61	5,59
Ochavillo del río	Fuente Palmera	Decreto 286/2009	5,73	7,67
San Martín del Tesorillo	Jimena de la Frontera	Decreto 94/1999	49,18	14,22
Serrato	Ronda	Decreto 110/1999	25,78	5,36
Tharsis	Alosno	Orden 09/06/1993	58,25	30,41
Torrenueva	Motril	Orden 28/07/1993	6,54	5,95
Valderrubio	Pinos Puente	Decreto 107/2002	6,45	6,56
Ventas de Zafarraya	Alhama de Granada	Decreto 73/2002	24,13	5,57
Zahara de los Atunes	Barbate	Decreto 204/2011	0,88	0,61

Fuente: Información geográfica procedente de Datos Espaciales de Andalucía para escalas intermedias, 2009.

Mapa 1. Entidades Locales Autónomas con territorio.



Fuente: Información Geográfica procedente de Datos Espaciales de Andalucía para escalas intermedias, 2009.

El caso de La Redondela puede considerarse como una hoja de ruta para la delimitación del ámbito territorial de las entidades locales autónomas. En el Decreto 163/2006 se determinan los límites territoriales de la Entidad de Ámbito Territorial Inferior al Municipio. Este núcleo de población tuvo Ayuntamiento propio hasta 1887, contando con un territorio determinado geográficamente, pasando a ser considerada aldea el 30 de junio de dicho año, al producirse su anexión al municipio de Isla Cristina.

Por Real Decreto 624/1982, de 12 de febrero, se reconoció a La Redondela su condición de Entidad Local Menor, remitiéndose su artículo primero al entonces vigente Reglamento de Población y Demarcación Territorial, aprobado por el Decreto de 17 de mayo de 1952, para proceder a la concreción de sus límites territoriales. La Junta Vecinal de esta Entidad y el Ayuntamiento de Isla Cristina mantenían distintas posturas. Así, La Redondela consideraba que, para la determinación del territorio, se debería tener en cuenta la extensión del término municipal del antiguo municipio de La Redondela. Por otro lado, el Pleno del Ayuntamiento de Isla Cristina de 25 de mayo de 1984 acordaba circunscribir el ámbito territorial de La Redondela *"al casco de población que contempla el Plan General de Ordenación Urbana y contorno necesario para el ejercicio y desarrollo de las competencias determinadas por la Ley"*. La Sentencia de 13 de diciembre de 1991 de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, declaró conforme a Derecho el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento.

La Redondela solicitó la intervención de la Consejería de Gobernación en el proceso abierto y no resuelto sobre la delimitación territorial. Por oficio de 27 de octubre de 2005 se procedió a la apertura del trámite de audiencia presentándose las siguientes alegaciones a la propuesta de delimitación territorial:

- Alegaciones de Isla Cristina. De acuerdo con el criterio de proporcionalidad territorio/población, el Ayuntamiento de Isla Cristina consideraba que a La Redondela le corresponderían una superficie máxima de 245,25 hectáreas. Por otra parte, deberían excluirse de La Redondela un gran número de las hectáreas previstas, ya que, en razón a su uso o titularidad, carecían de vinculación agrícola con dicha entidad.
- Alegaciones de La Redondela. Por razones históricas, sociales y de titularidad de las propiedades agrícolas y de las empresas comercializadoras, consideraba

que múltiples fincas dedicadas a la agricultura debían incluirse en la superficie de La Redondela. También debería contemplarse su salida al mar, así como la inclusión de zonas urbanas.

Puesto que no había duda acerca del casco poblacional de La Redondela, la cuestión se centraba en determinar qué podía entenderse por "*contorno necesario*" para que la entidad pudiera ejercer sus competencias. Vuelve a utilizarse un carácter restrictivo, ajustando el territorio al criterio de proporcionalidad territorio/población. En consecuencia, debían excluirse del ámbito territorial de La Redondela los núcleos urbanos de Monterreina, La Dehesa, Pinar Bot, Las Colinas, Las Palmeritas, Urbasur e Islantilla, debido a la lejanía del casco urbano de la EATIM y por haberse acreditado en ellos una mayor vinculación con el Ayuntamiento de Isla Cristina, en cuanto a ejercicio de competencias e inversiones, sobre todo en las áreas turísticas de la franja costera.

Sin embargo, no siempre se ha utilizado el carácter restrictivo para la determinación del territorio de una ELA prueba de ello la encontramos en la extensión superficial media que se sitúa en unos 26 km², existiendo ejemplos claros de ámbitos territoriales que superan ampliamente, no sólo las zonas urbanas, urbanizables y terrenos circundantes de un núcleo de población, sino que conforman un territorio superior al de muchos municipios andaluces: Bácor-Olivar (66,94 km²), Tharsis (58,25 km²), Montecorto (54,39 km²), San Martín del Tesorillo (49,18 km²) o Domingo Pérez (48,19 km²).

5.3.2. Entidades Locales Autónomas sin ámbito territorial.

En Andalucía existen un total de 23 Entidades Locales Autónomas que aún no tienen delimitado un ámbito territorial donde ejercer sus competencias, lo que supone, en primer lugar, una problemática asociada a la gestión de sus funciones y, por otro lado, un incumplimiento de las diversas normativas que se han ido sucediendo en materia de régimen local o demarcación territorial municipal.

¿Por qué la cuestión de la demarcación y los límites territoriales de las entidades inferiores al municipio no han sido objeto de estudio? Indudablemente, son cuestiones que se han tratado y que, en ocasiones, han llevado a fuertes disputas entre el municipio matriz y estas entidades; sin embargo, al considerarse durante largo tiempo que las competencias que le son propias a estas últimas debían limitarse al ámbito urbano de su núcleo de población y, debido al principio de autonomía local que siempre ha impregnado a las normas sobre régimen local, se ha terminado por concluir que no se podía hablar de territorio, sino de área de influencia, que debía ejercerse exclusivamente sobre los núcleos urbanos y parcelas próximas.

Esta creencia (no puede ser llamada de otra forma) no tiene su respaldo legal. Así, por ejemplo, el Decreto 2697/1966, de 20 de octubre, sobre el régimen para la constitución y funcionamiento de los pueblos contruidos por el Instituto Nacional de Colonización como Entidades municipales, establece en su artículo 5 b) la necesidad de determinar la demarcación o los límites territoriales que le correspondan. Pero no es necesario retrotraerse a normas ya derogadas, el Real Decreto 1690/1986 en su artículo 45 dicta lo siguiente:

- “1. Una vez constituida la entidad, sus límites territoriales y la separación patrimonial correspondiente se determinarán, a propuesta de la junta vecinal u órgano colegiado de control, por acuerdo del Ayuntamiento, que habrá de adoptarlo en el plazo de treinta días.*
- 2. Si el Ayuntamiento no adoptase acuerdo en el plazo señalado en el párrafo anterior la Comunidad Autónoma fijará el ámbito territorial de la nueva entidad”.*

Este esfuerzo delimitador no se ha llevado a cabo, siendo necesario no demorar la fijación del ámbito territorial. No obstante, un importante grupo de expertos en materia de Derecho Municipal concluyen la existencia de *“entes territoriales y no territoriales”* argumentando que *“lo relevante no es el puro dato físico del territorio, lo relevante es, sin duda, el elemento de población”*. Lo que sí es un hecho, es que la Ley 5/2010 de Autonomía Local de Andalucía establece en su artículo 116.2, en su apartado f), que el instrumento de creación de entidades locales autónomas contendrá su estatuto, que deberá expresar el ámbito territorial en que haya de ejercitar las

competencias. Nos interesa por tanto, conocer si existen delimitaciones previas en relación con las EATIMes.

Para tener algún detalle más sobre esta cuestión, el artículo 47 del Real Decreto 1690/1986 da unas pautas para determinar el territorio de las entidades de ámbito territorial inferior al municipio que no lo tuvieran delimitado con anterioridad, teniéndose en cuenta, dentro de lo posible, las siguientes normas:

1. Cuando se trate de una parroquia rural constituida en entidad de ámbito territorial inferior al municipio, los límites serán los mismos que tenga la parroquia que haya servido de base a su reconocimiento legal, según la demarcación eclesiástica vigente.
2. Cuando se trate de un concejo abierto de carácter tradicional o de un antiguo municipio anexionado a otro, el territorio propio de la entidad de ámbito territorial inferior al municipio será, respectivamente, el que correspondiere al ámbito territorial del concejo abierto o al primitivo término municipal anexionado.
3. Cuando se trate de núcleos urbanos o rurales que no tengan las características de los anteriores, el ámbito territorial de la nueva entidad estará referido al casco de la parroquia, lugar, aldea, anteiglesia, barrio, anejo, pago u otro grupo semejante, y, además, a los terrenos circundantes que posean o cultiven los vecinos de la entidad o, constituyan el patrimonio de ésta, siempre que pueda establecerse fácilmente la línea divisoria entre esos terrenos y los que pertenezcan a los núcleos inmediatos.
4. En los demás casos el Ayuntamiento deberá asignar a la nueva entidad el ámbito territorial que sea preciso para el cumplimiento de sus fines.

De los anteriores, el punto 3 es el más controvertido, relacionado principalmente con la generación de poblados de colonización agraria, ya que se aporta una delimitación poco precisa de los límites del ámbito territorial a considerar, dejando claro que debe estar formado por los cascos de los núcleos urbanos o rurales y a los terrenos circundantes que posean o cultiven los vecinos de la entidad.

En la delimitación de las áreas o zonas de influencia de los pueblos surgidos a raíz de los Planes de Colonización se tendrán en cuenta las divisorias geográficas, los límites hidráulicos naturales como los ríos, o los artificiales como los canales, acequias y desagües, e igualmente las características de las explotaciones agrarias existentes para dar el toque de rigurosa homogeneidad de la que se partía.

Desde el punto de vista doctrinal se manifiesta que estos pueblos se emplazaron considerando que el área de influencia de cada uno habría de tener 2,50 kilómetros de radio, siendo el centro el casco urbano del poblado, de modo de los nuevos pueblos quedaron entre sí a unos cinco kilómetros de distancia. El derogado Decreto de 28 de octubre de 1955 se ajustaba en gran medida a esta confusa situación de origen, señalando en su artículo 2 que *“la demarcación territorial de cada una de estas Entidades locales será la misma que el I.N.C. haya señalado en el desarrollo de los Planes de Colonización al área de influencia del nuevo pueblo”*.

5.4. DETERMINACIÓN DE UNIDADES TERRITORIALES INFRAMUNICIPALES AUSENTES DE NÚCLEOS DE POBLACIÓN.

Hasta el momento se ha tenido en cuenta para la delimitación de unidades territoriales inframunicipales el criterio de la existencia de núcleos de población que gestionen competencias propias y/o delegadas del ayuntamiento matriz en un territorio dado. Sin embargo, existe una realidad en el territorio municipal andaluz que, aunque no generalizada, es visible en amplias zonas de montaña, principalmente, que han sufrido el fenómeno de despoblación rural que supuso el abandono completo de núcleos. Algunas de estas áreas son de especial significación, conformándose zonas protegidas bajo la figura de *“Parque Natural”* para el mantenimiento y conservación del patrimonio, la biodiversidad y los recursos naturales.

Los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) son el instrumento básico para la planificación de los recursos naturales y espacios naturales a proteger, siendo uno de sus objetivos *“identificar y georreferenciar los espacios y los elementos significativos del Patrimonio Natural de un territorio”*. Debido a ello, en su

contenido mínimo se recoge la *“delimitación del ámbito territorial objeto de ordenación, y descripción e interpretación de sus características físicas, geológicas y biológicas”*.

Por tanto, estamos ante una realidad territorial que puede servir para el establecimiento de unidades territoriales inframunicipales en áreas de acusado despoblamiento ausentes de núcleos de población, aunque con la existencia de asentamientos diseminados (de difícil accesibilidad y desconectados de las principales vías de comunicación, lo que refuerza su aislamiento y su identidad unitaria). Es necesario destacar que cuando los instrumentos de ordenación territorial, urbanística, de recursos naturales y, en general, física, existentes resulten contradictorios con los Planes de Ordenación de Recursos Naturales deberán adaptarse a éstos. En tanto dicha adaptación no tenga lugar, las determinaciones de los Planes de Ordenación de Recursos Naturales se aplicarán, en todo caso, prevaleciendo sobre dichos instrumentos.

Existe otro instrumento de planificación que concreta y desarrolla los objetivos, directrices y normas contenidos en los PORN, son los denominados Planes Rectores de Uso y Gestión (PRUG), donde se definen los objetivos que deben orientar los criterios de gestión y administración del Parque, la regulación de actividades y la propuesta de líneas de actuación.

5.5. CRITERIOS A UTILIZAR.

Una vez analizadas las diferentes situaciones existentes que pueden influir en la determinación de los límites de unidades territoriales inferiores al municipio, concluimos lo siguiente:

1. CRITERIO HISTÓRICO. Un estudio del poblamiento es fundamental para determinar los núcleos de población existentes en un municipio y debe servir de base a la delimitación. Siempre que no suponga una limitación a los intereses generales del municipio, deben mantenerse aquellos límites que, aunque no oficiales en la actualidad, existieran en otros períodos históricos.

2. **CRITERIO ADMINISTRATIVO.** Se recomienda mantener las delimitaciones oficiales existentes, como por ejemplo el ámbito territorial de las entidades locales autónomas que lo posean, permitiéndose su ampliación si el estudio y análisis territorial así lo aconsejan. En cuanto a las reducciones de territorio, deben justificarse mediante una memoria, teniendo el carácter de excepcional. Si existieran delimitaciones inframunicipales realizadas por otros organismos, como el Nomenclátor de Entidades de Población o el Seccionado Censal, se mantendrán dichos límites si se ajustan en gran medida a la realidad territorial actual. Se aconseja ajustar las unidades territoriales inframunicipales propuestas a las parcelas catastrales actuales que deberían, en la medida de lo posible, no quedar divididas en más de una unidad territorial.
3. **CRITERIO CUANTITATIVO.** Es recomendable la realización de estudios para la determinación de áreas gravitacionales, teniendo en cuenta factores como la población, la actividad comercial, el índice de asociacionismo, etc.
4. **CRITERIO TERRITORIAL.** Debe ser un territorio continuo y delimitado tomando en consideración a accidentes geográficos o elementos de carácter permanente y fácilmente identificables, siempre que sea posible y aconsejable.
5. **CRITERIO SOCIOPOLÍTICO.** Dado que la potestad de autoorganización debe servir para facilitar la participación ciudadana y la iniciativa para la creación de entidades descentralizadas es recomendable que surja de los vecinos interesados, es importante constatar el grado de acuerdo o desacuerdo de la población respecto a las delimitaciones propuestas.

6 **Propuesta de delimitación para el término municipal de Jerez de la Frontera.**

6.1. CRITERIOS HISTÓRICOS. ESTUDIO DEL POBLAMIENTO.

6.1.1. Conformación del alfoz jerezano y surgimiento de núcleos de población.

Para entender la dimensión superficial del alfoz jerezano y las claves históricas de su poblamiento, necesarias para comprender las actuales relaciones funcionales existentes con su entorno, es vital realizar una descripción y análisis de los sucesos ocurridos en su término, prestando especial interés a los hechos históricos, políticos, militares y socioeconómicos más determinantes surgidos a partir del último cuarto del siglo XIII.

El actual término municipal de Jerez de la Frontera es el resultado de una serie de acontecimientos cuyos orígenes comienzan en 1264 con la fundación de la ciudad cristiana por parte de Alfonso X, y la posterior cesión al concejo jerezano del término de Tempul en 1333. Podemos fijar estas fechas de referencia, no obstante, en la conformación del alfoz jerezano debemos tener en cuenta los precedentes romanos y visigodos, o los límites y divisiones administrativas de la Cora de Sidonia; y en época más moderna, la evolución seguida por los límites municipales hasta nuestros días, muy influenciados primero por la política monárquica en un territorio dominado por los

señoríos y, posteriormente, por la colonización agraria y las luchas segregacionistas de poblaciones que se consideraban marginadas por la cabecera municipal.

A. El Ager Ceretanus y el poblamiento romano de la Campiña de Jerez.

En época tardorrepública este territorio va a conocer su primera ordenación exhaustiva con el objeto de realizar una óptima explotación de sus recursos naturales y potenciar su dominio sobre la región, ya que Roma precisa de un abastecimiento continuado de productos: cereal, vino, aceite, salazones y otros, para el mantenimiento de su política de distribución gratuita de trigo a la ciudadanía y para asegurar el sustento de su amplio ejército.

La incorporación de numerosas ciudades, pueblos y aldeas al dominio romano abre la necesidad de abastecimiento a sus pobladores, más aún cuando van adquiriendo el derecho de ciudadanía (en Hispania con el edicto de Vespasiano de 74 d.C.); así se va organizando el ámbito interno provincial en civitates (núcleos urbanos) que administran los recursos de los territorios de su entorno, los denominados agri, en los que reside gran parte de la población realizando labores agrícolas y en los que las oligarquías locales desarrollan mecanismos de control del aparato de administración local.

Este proceso de conformación administrativa del territorio daría lugar en la campiña de Jerez al denominado Ager Ceretanus, nombrado así por Columela en unas referencias textuales dirigidas a su amigo Silvino en una carta:

“Sobre todo tú, Silvino, eres el principal testigo de la veracidad de mis palabras, pues recordarás bien que yo injerté en un bienio dos yugadas de vid con más de una viña tuya temprana que tienes en tu finca de los Campos Ceretanos” (Columela, De re rustica III 9,6).

El Ager Ceretanus sería una zona agrícola vinculada al abastecimiento de víveres para la capital del Imperio que, debido a la riqueza de sus suelos, se convirtió en un importante centro productor del policultivo mediterráneo conformado por el trigo, la vid y, en menor medida, el olivo.

En relación a esta comarca agraria tendríamos un centro urbano que controlaría y administraría sus recursos, la denominada Ceret, cuya localización geográfica es controvertida por su ausencia en las fuentes bibliográficas antiguas, pues no citan la ciudad ni Estrabón ni Plinio, aunque nos recuerdan que su entorno es un espacio abierto al mar. ¿Dónde estaría el centro administrativo de la población rural diseminada? Según Montero Vitores, se situaría en la Sierra de Gíbalbín pues es el único yacimiento de la zona que reúne características urbanas que van desde asentamientos prerromanos hasta la presencia visigoda e islámica, surgido tras el castigo a Hasta Regia por su rebeldía en tiempos de Julio César, seccionándose sus territorios y conformándose así el Ager Ceretanus, que abarcaría un territorio que iría desde la ribera occidental del Guadalete hasta el estero del mismo río que avanzaba por el sur y poniente de la actual Jerez y cuyas aguas llegaban hasta el pie de Gíbalbín. Desde este promontorio, Ceret controlaba y fiscalizaba los esteros, incluso la navegación por el Guadalete y por el Guadalquivir.

La administración romana impulsó Ceret y a otros núcleos de población de importancia en época prerromana para restar la fuerte influencia de Hasta Regia, castigada por su resistencia a Roma, por lo que se segregan de ella muchos de los territorios que administraba. Si en el siglo II a.C. perdió el control sobre Lascuta, y con ello seguramente gran parte del sur de la provincia de Cádiz, entre 100 y 80 a.C., como sugieren las emisiones de las cecas próximas (Nabrissa, Carissa, Ipora, Ceret) se están diseñando nuevas entidades administrativas romanas: cada una de ellas, una civitas que administra un ager.

A mediados del siglo I a.C. el Ager Ceretanus es ya una realidad que se ha formado con el asentamiento de colonos itálicos que conviven con una población local que, además, acelera su tendencia a abandonar el *oppidum* de Gíbalbín, cuya función militar y defensiva ya no es imprescindible y comienzan a instalarse en la llanura, en un paisaje rural de aldeas que coexisten con las nuevas villas romanas fruto de la colonización.

Desde mediados del siglo I d.C. el proceso de romanización es muy fuerte, las políticas provinciales de los emperadores Claudio y Vespasiano apuestan por la municipalización y el desarrollo de la ciudadanía romana (recuérdese el Edicto de

Vespasiano de 74 d.C.). Esta nueva situación determina un cambio importante en el patrón de asentamiento y de relación entre civitas y ager.

El peso del ager rural va prevaleciendo cada vez más sobre las civitas en el siglo II d.C., las referencias literarias directas y el material arqueológico van desapareciendo, tampoco hay referencias fiables sobre el papel de las oligarquías municipales y el abastecimiento de las ciudades próximas.

¿Y en el actual emplazamiento de la ciudad de Jerez existía alguna población? La arqueología no ha encontrado nada que se parezca a una ciudad, aunque sí numerosos alfares que hablan de población rural diseminada, junto a las colinas (Montealto, El Almendral, Los Villares) que bordeaban el estero del Guadalete.

B. La implantación visigoda.

El control definitivo del territorio por parte visigoda no se produce de forma efectiva hasta los primeros años del siglo VII, poniéndose de manifiesto que entre los siglos IV y VII no se produjo una reorganización del territorio, lo que implica el mantenimiento de la disposición catastral del Alto imperio. Los visigodos compartirían con los hispanorromanos las propiedades, intereses económicos y, en poco tiempo, también el poder y honores.

El control del territorio por parte de los visigodos está basado en un modelo espacial que incide en la existencia de un poblamiento rural agrupado, coexistiendo con el hábitat rural disperso, sentando las bases de lo que habría de ser el histórico y posterior régimen característico de cortijadas.

C. Los límites y las divisiones administrativas de la Cora de Sidonia.

No existen fuentes documentales que delimiten este espacio por lo que se debe recurrir a un estudio de las distintas circunscripciones limítrofes con la Cora de Sidonia, recogidas por cronistas árabes como al-Idrisi, que realiza una completa descripción de los territorios de al-Andalus a mediados del siglo XII, si bien sus fuentes son más antiguas.

La Cora de Sidonia incluiría las actuales poblaciones de Medina Sidonia, Arcos de la Frontera, Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa María, Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, San Fernando, Chiclana de la Frontera, Olvera y Grazalema, siendo un espacio geográfico que abarcaría desde la Bahía de Cádiz y desembocadura del Guadalquivir hasta las serranías subbéticas, con una superficie total que rondaría los 8.600 kilómetros cuadrados.

Al norte se encontraría la Cora de Sevilla, siendo el límite entre ambas circunscripciones el castillo de Alocaz: hacia el suroeste la linde se dirigía hacia las actuales poblaciones de Lebrija, Trebujena y Sanlúcar de Barrameda y al noreste limitaría con la Cora de Morón.

Los límites meridionales estarían más definidos, limitando con la Cora de Algeciras, siendo la laguna de La Janda y el río Barbate los accidentes naturales utilizados para separar ambas circunscripciones.

Por el este lindaba con la Cora de Takurunna, límite que resulta problemático pues en sus descripciones y en la interpretación que se ha hecho de ella aparece definida a veces como kura (cora) y otras como iqlm (comarca o distrito). La linde debió ubicarse en algún punto cercano a la fortaleza de Audita, en las estribaciones montañosas de la Sierra del Pinar.

También al este se encontraba la Cora de Rayya que según cronistas árabes encontraría su límite en las proximidades de la fortaleza de hisn al Ward, localizada por Vallvé cerca de Montemayor, en Banahavís (actual provincia de Málaga).

Podemos identificar a la Cora como una circunscripción provincial, subdividida a su vez por comarcas o distritos, denominados iqlm o aqalim, y de partidos, que recibían el nombre de yuz o ayza. Algunas argumentaciones sostienen que podrían identificarse con comarcas naturales, lo que provocaría que se fuese perfilando una organización territorial que no tiene como base la presencia de un núcleo de población importante, especie de cabecera de distrito, sino que simplemente son territorios diferenciados entre sí como espacios naturales específicos (BORRERO FERNÁNDEZ, Mercedes). No obstante, las importantes connotaciones urbanas anteriores y posteriores relativas

al dominio sobre un espacio rural, evidencian que la base administrativa prevalecería sobre los condicionantes naturales.

Las circunscripciones administrativas del siglo XI se simplificaron y desaparecen los pequeños distritos o comarcas, las Coras de Sidonia y Algeciras pasan a ser descritas como iqlm pertenecientes a al-Buhayra (Tarifa, Algeciras, Cádiz, Arcos, Becca, Jerez, Tasana y Madina Ibn al-Salim) y el iqlm de Sidonia incluirá a las ciudades de Sevilla, Carmona y Qalsana.

El modelo de poblamiento andalusí se sustentaba en la ciudad a partir del siglo X. La madina ejercía todo su poder, tanto civil como religioso, sobre el entorno, y se complementaba y se reconocía con otras unidades poblacionales: el castillo (hisn), la alquería (qarya), la villa (balda), la fortaleza (qal a:'alcala') y la torre (bury), ya fuese ésta un elemento arquitectónico de alguna explotación rural, ya fuese un elemento defensivo.

Las ciudades de al-Andalus articulaban un territorio del que es difícil precisar sus límites y las relaciones existentes entre la capital del distrito y su entorno. Eran centros comerciales y vertebradores del territorio aunque se desconoce como establecían los mecanismos de control sobre su entorno rural y las relaciones con otras urbes.

Los núcleos rurales o alquerías (qarya) constituían el núcleo de hábitat de base del poblamiento andalusí, tanto en torno a las ciudades importantes como en las regiones rurales; según el autor anónimo del Dirk, la cora de Sidonia estaría integrada por setecientas alquerías que dependían de la capital, lo que demuestra la alta densidad de población agraria y el acusado retroceso productivo de estas áreas tras la conquista cristiana.

D. El poblamiento cristiano.

Los límites del alfoz del Jerez islámico, que incluirían un territorio cuyos bordes septentrionales y meridionales estarían constituidos por la desembocadura del río Guadalquivir y el valle del Guadalete, aportan las claves para entender la organización y posterior evolución del término jerezano bajo dominio cristiano.

Se pueden establecer dos períodos fundacionales del término que dependía de Jerez de la Frontera: el primero (1264-1309) a finales del siglo XIII coincidiendo con los momentos iniciales de la dominación cristiana, y el segundo (1309-1350) relacionado con la cesión definitiva por parte de Alfonso XI del término de Tempul en los años treinta del siglo XIV. Estos dos grandes hitos históricos ayudan a comprender y explicar el extenso espacio bajo dominio jerezano.

El año 1264 es el momento de control definitivo de la ciudad por manos cristianas, ya que la revuelta mudéjar de ese mismo año obligó a un replanteamiento del poder cristiano sobre los territorios recién incorporados, siendo necesaria una reorganización del término que se efectuó entre 1264 y 1275. En este período se procedió a fijar los límites de este espacio y a la distribución y reparto de las tierras existentes que quedaron abandonadas, debido a la política cristiana basada en la expulsión de la población musulmana, y que tuvo dos consecuencias: el descenso de la población mudéjar y la desorganización de las estructuras cultural, social y económica de la civilización musulmana andalusí.

Las continuas invasiones meriníes y las tensas relaciones existentes entre los reinos de Castilla y Granada, desembocaron en una guerra fronteriza y en la militarización creciente de los territorios de frontera, lo que produjo abandonos de tierras entregadas, generalizándose el fenómeno de la despoblación, por lo que se optó por la reorganización territorial.

El papel de las ciudades de interior como Jerez, Arcos y Medina Sidonia va a ser crucial en el proceso de conquista y mantenimiento de los territorios recién incorporados a Castilla, estando vinculados a Sevilla, convertida en cabecera del reino al que da nombre. La organización territorial de Alfonso X se basará en un modelo de desarrollo interior por lo que el litoral atlántico gaditano perdió importancia como sede de asentamientos humanos y centro de actividades comerciales.

Hay que tener en cuenta la importancia de la frontera como una realidad y una entidad que resultaba propia y característica de este espacio, fundamental para la organización territorial, puesto que la política del monarca Alfonso X sobre el espacio gaditano-xericiense conjugó la importancia de los concejos de realengos, junto con la

actividad desplegada por los señores de la guerra; el resultado fue la aparición del señorío en los límites del espacio fronterizo en detrimento del realengo, teniendo como misión defender y poblar las tierras incorporadas a la corona.

Los límites del término jerezano se conocen debido a dos documentos que nos aportan información de gran interés: el testimonio de deslinde del término realizado en 1269 entre Medina, Jerez, Vejer, Tarifa, Algeciras y Alcalá de los Gazules y trasladado en 1505, y la carta plomada expedida por la cancillería de Alfonso X en Cuéllar en 1274, que aprobaba el deslinde de términos entre Jerez, Lebrija y Arcos.

Según el amojonamiento de 1274, el borde septentrional discurría tomando un punto de referencia entre las poblaciones de Jerez y Lebrija a los que quedaban vinculados los distintos núcleos rurales existentes; el límite oriental tenía en cuenta la influencia de la ciudad de Arcos perteneciendo a Jerez los lugares de Parchite, Olid, Casares, Vicos y Jédula; la parte meridional quedaba limitada en función de los referentes urbanos de Medina Sidonia y Alcalá de los Gazules, quedando ubicadas dentro de Jerez un elevado número de aldeas y propiedades fundiarias cuyo punto más meridional se encontraba *“a la altura de las salinas que se dicen de Sarraque”*, límite más reducido que el que poseerá en 1333, además tendrá salida al mar por la Argamasilla donde posteriormente se fundará Puerto Real.

La organización interna del término se recoge en el Libro del repartimiento rural del año 1269, en el que se limita a treinta el número de los donadíos gracias al privilegio dado por Alfonso X que los ajustó a ese número e impidió que hubiera una excesiva acumulación para permitir la repoblación, su estudio nos permite analizar la base estructural de la nueva sociedad hispano-cristiana y la tarea de reorganización que debía manifestarse estable y dinámica a la vez en las nuevas tierras anexionadas.

Estos repartos supusieron una renovación completa y duradera de la titularidad de la tierra, ya que la distribución de los lotes de tierra llevaba aparejada la expulsión de los pobladores mudéjares, sin embargo, la verdadera realidad no ha sido aclarada debido a la ausencia del mencionado Libro del repartimiento rural, no llegándose a conocer quiénes fueron los beneficiarios, la superficie de los donadíos o qué núcleos fueron repartidos; no obstante, sí se conocen sus ubicaciones aproximadas en función

de la división que propone Emilio Gutiérrez en cinco sectores (seis a partir del año 1333) del término jerezano, teniendo en cuenta la lista realizada por el archivero jerezano Agustín Muñoz y Gómez a finales del siglo XIX:

- Sector 1: Almocadén, Arana, Bujón, Miramundo, Montegil, Pozo de la Horca, Mesa de Asta, Crespellina, Casarejos, Cuervo, Villamaría, Prunes o Ventosillas, Lanzadota y Monteagudo.
- Sector 2: Plata, Romanina, Pedro Díaz o de Hinojosa, Grañina, Jara y Montecorto.
- Sector 3: Jédula, Majarromaque, Berlanga, Fuente del Rey y Aldefoso.
- Sector 4: Barja.
- Sector 5: Barbaina, Obispo de Cádiz. No localizados: Chillas, Uría y Zurita.

En este período la superficie del término debió rondar las 95.320 hectáreas, siendo los espacios cultivados o destinados al cultivo y repartidos, en torno a 69.000 hectáreas, lo que suponía un 72% del alfoz jerezano, porcentaje muy elevado si tenemos en cuenta lo acaecido en los concejos limítrofes y en función de la escasa población que se dirigió a la ciudad a partir de 1264. Esta diferencia se explica en que una vez producida la conquista y el reparto de tierras, los monarcas procedieron a ceder a los concejos las tierras comunales para el uso libre y gratuito no sólo de los propios vecinos de la villa, sino que se estableció una mancomunidad con otras villas para el aprovechamiento por parte del ganado y sobre la madera que cortasen para sus casas, arados y otras labores. Se constituía pues una verdadera comunidad económica de carácter supraconcejil (en palabras de González Jiménez) cuyo objetivo más inmediato fue procurar la trashumancia interior, del valle a las sierras.

En el segundo período fundacional dos hechos van a ser fundamentales para explicar el poblamiento: por un lado nos encontramos con una marcada depresión económica y las consecuencias derivadas del fracaso de la Repoblación Oficial, caracterizado por la crisis de la repoblación y las continuadas guerras fronterizas que determinarán esta primera etapa entre los años 1275 y 1325; por otro lado, entre 1325 y 1350 se va a lograr restablecer la estabilidad fronteriza aunque los problemas económicos y demográficos van a continuar.

El papel desempeñado por los señores en las actividades repobladoras tuvo como consecuencia la creación de un buen número de núcleos de población, que contribuyeron al control de la frontera por parte castellana y a la roturación de nuevas tierras para el mantenimiento de su población; además, supone un aumento de las tierras bajo el poder de los señoríos (casos de Sanlúcar de Barrameda, El Puerto de Santa María, La Isla de León, Chiclana, Vejer, Conil y Arcos) en detrimento de aquellos concejos de realengo. Sin embargo, durante el reinado de Alfonso XI los realengos del reino de Sevilla (Carmona, Écija, Sevilla, Jerez) van a jugar un papel principal como organizadores del poblamiento, contando con el apoyo de la corona de Castilla y vinculándose un buen número de aldeas a los municipios realengos, sobre todo aquellas fronterizas, sobre las que tenían la misión de poblarlas mediante el reparto de las tierras baldías entre los campesinos desfavorecidos y asegurar su defensa.

Jerez administró estas aldeas cedidas pero no recreó las condiciones necesarias para facilitar la llegada de pobladores y tampoco repartió las tierras entre los vecinos más pobres, alcanzando una posición hegemónica sobre la campiña en detrimento del término que hasta esos años poseía Arcos de la Frontera, pasando al alfoz jerezano las aldeas de Berlanga, Berlanguilla, Abadín y Suara que se encontraban bajo influencia arcense. El avance territorial se prolongaba a las inmediaciones del castillo de Tempul, conquistado en 1309, confirmándose la donación de este enclave en el año 1333, con lo que el monarca Alfonso XI fortalecía al concejo jerezano y lo colocaba en una posición de privilegio en el espacio fronterizo.

La orientación económica de estos nuevos espacios fue eminentemente pecuaria por lo que las aldeas orientales del término pasaron a convertirse en explotaciones agrarias, a excepción de Abadín y Gizonza que seguirán siendo importantes asentamientos rurales.

E. El poblamiento a finales de la Edad Media.

Tras la incorporación de Tempul al alfoz jerezano se va a proceder al establecimiento de los límites del término con las distintas localidades limítrofes, proceso caracterizado por los numerosos conflictos existentes con las poblaciones de Lebrija, Sanlúcar de Barrameda, El Puerto de Santa María, Cádiz, Medina Sidonia,

Alcalá de los Gazules, Ronda y Arcos de la Frontera, son los denominados pleitos de términos.

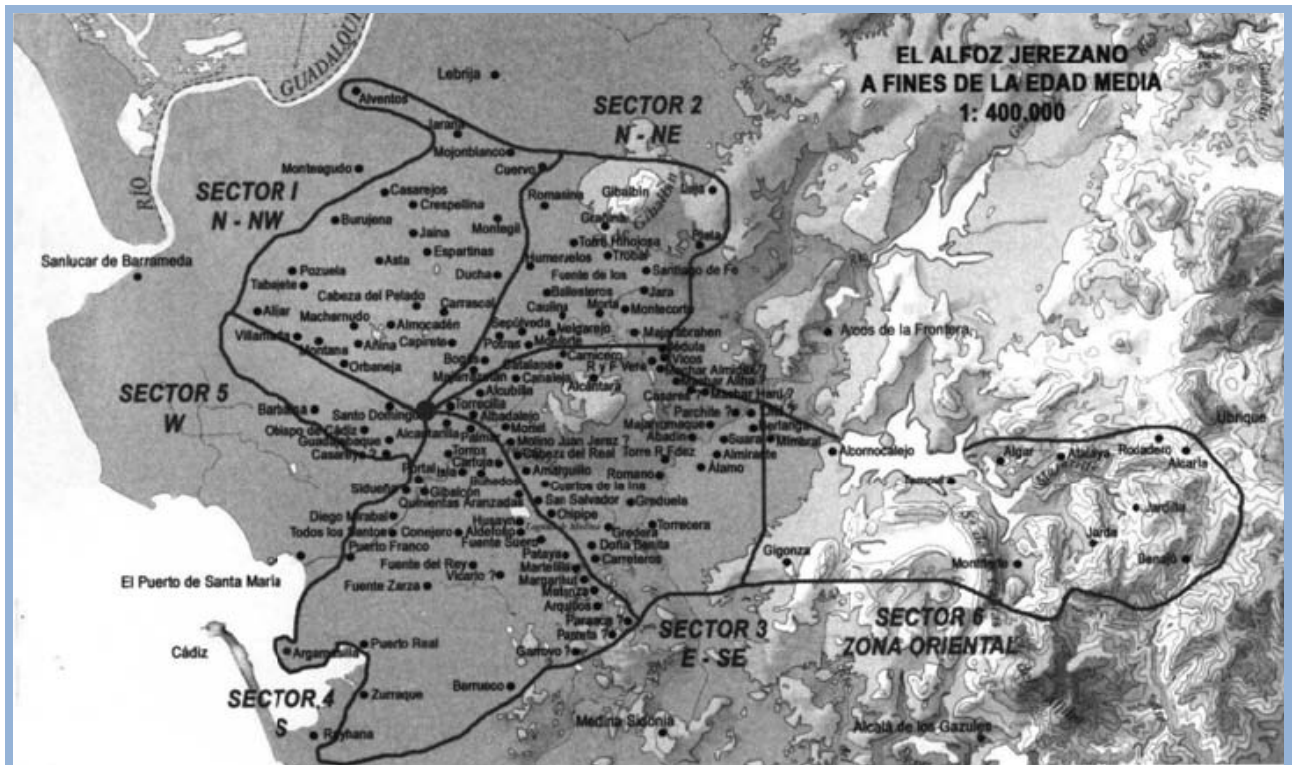
De los 62 núcleos de población que se contabilizaban para el primer período fundacional, solamente 25 se mantendrán durante este segundo período y escasamente 16 lo harán durante el siglo XV y el primer cuarto del XVI, de los que uno corresponde a la reactivación de la antigua alquería de Rayhana tras la fundación de Puerto Real, siendo algunos de ellos Asta, Burujena, Pozuela, Santiago de Fe, La Ina, Albadalejo, Chipipe, Cabeza del Real, Cartelilla, Portal y Gigonza. Los cambios en el poblamiento se encuentran asociados a lo que se viene denominando como fracaso de la repoblación oficial. Este fenómeno provocó una fractura de la estructura poblacional que hasta esos años había estado vigente en este territorio y que tuvo como consecuencia el abandono o el reagrupamiento de la población.

Aunque existieron algunos intentos populares de creación de nuevas poblaciones, la fundación de nuevas villas estuvo dirigida por la política de la corona, desarrollándose entre finales del siglo XV y principios del XVI:

- a) Molino de Juan de Xerez. Se ubicada en las cercanías del río Guadalete, siendo una iniciativa popular cuya petición fue realizada por el veinticuatro Juan Sánchez y recogida en las Actas Capitulares del año 1483, en la que se señala la intención de poblar y edificar casas en esta zona por parte de extranjeros y pescadores. No llegó a prosperar debido a que el concejo jerezano prestaba mayor interés en la salvaguarda de la economía pecuaria.
- b) Fuente del Rey y Vegas del Vicario. Surgen por iniciativa de la corona castellana para crear nuevas poblaciones en espacios comunales con intereses pecuarios evidentes, sus pobladores recibirían tierra para labrar por pan y otras parcelas para poner viñas, huertas y olivares, quedando exentos de pago los de Vegas del Vicario. Se prohibía que sus pobladores proviniesen de Jerez, Cádiz, Gibraltar o poblaciones del Reino de Granada y, en ningún momento, se especifican los límites de sus términos ni cómo debía ser la organización de su terrazgo.

c) Puerto Real. Se trata de la única población que va a prosperar debido a los intereses de la corona, ante la necesidad de buscar un puerto realengo en una bahía que estaba ampliamente dominada por los señoríos; así, los Reyes Católicos van a fundar, en 1483, un puerto que estuviese bajo su jurisdicción y solucionaban a la vez los conflictos de término con la ciudad de Cádiz por el control de la Argamasilla. Se fijó el número de pobladores en 200 vecinos que podían acudir de cualquier parte del reino castellano y se concedieron privilegios comerciales a la nueva villa, que seguiría perteneciendo al concejo de Jerez hasta el año 1543 (salvo los años comprendidos entre 1483 y 1488).

Mapa 3. El alfoz jerezano a fines de la Edad Media.



MARTÍN GUTIÉRREZ, Emilio: *La identidad rural de Jerez de la Frontera: territorio y poblamiento durante la Baja Edad Media*. Cádiz, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, 2003.

F. La voluntad colonizadora sobre el despoblado del Castillo de Tempul.

Los intentos de colonización y/o repoblación sobre Tempul se deben al notable incremento poblacional de la primera mitad del S.XVI y a la finalización de la realidad fronteriza tras la conquista definitiva del Reino de Granada; de este modo, Fernando de Padilla pretenderá colonizar el Tempul (y asegurarse un extenso patrimonio a costa del

concejo jerezano) al igual que los campesinos que habitaban tras las murallas de la ciudad, que quisieron asentarse de forma espontánea en tierras agrícolas idóneas para el cultivo.

El movimiento repoblador es generalizado a finales del siglo XV y principios del XVI: se produce la fundación de las localidades de Villamartín y Paterna, la repoblación de Trebujena, la búsqueda de nuevos asentamientos de los pobladores de Zahara, y de pobladores para las localidades de Benaocaz, Grazalema, Ubrique y Villaluenga entre otras.

El concejo de Jerez mostrará una oposición frontal a la creación de nuevas poblaciones, la preocupación de los poderosos se limitó a la defensa del castillo de Tempul y a procurarse la alcaldía mientras persistió el peligro musulmán; así, a mediados del siglo XVI este término se encontraba totalmente abandonado y aprovechadas sus tierras y montes para las actividades pecuarias de la cuantiosa cabaña local.

Fernando de Padilla, veinticuatro de Jerez, elevó a Carlos V un proyecto de repoblación en el término de Tempul siendo designado singular merced del Castillo de Tempul, con todos sus términos y pertenencias, por lo que se inició un pleito de Jerez contra el Rey sobre la propiedad de estas tierras, que fue ganado por el concejo. Pretendía crear una población de mil a dos mil vecinos, de carácter ganadero y de agricultura comercial: cereales, olivo, viñas, huerta y experimentación con cultivos exóticos, además de la instalación de numerosas industrias rurales (molinos, ingenios de azúcar, batanes, etc.), sin embargo, nada decía en su exposición al Rey sobre la roturación de los terrenos, reparto de suertes a los colonos y construcción de viviendas.

G. Las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y Andalucía: la iniciativa de la Dehesa de Algar.

La agricultura a finales del Antiguo Régimen se encontraba con fuertes impedimentos para lograr su pleno desarrollo, el régimen de propiedad pertenecía a las denominadas manos muertas (Iglesia, Municipios y Mayorazgos) que mantenían la

tierra inmovilizada y sometida a reglamentaciones que chocaban de pleno con el concepto de propiedad privada e individual, en pleno auge con las ideas burguesas.

Se sucederán una serie de reformas que componen la llamada Reforma Agraria Liberal, cuyo objetivo básico era cambiar el régimen de propiedad de los factores productivos para que la titularidad de los mismos fuera individual y privada, y en el que la libertad de uso y disposición de los mismos no estuviera mediatizada por decisiones ajenas a quien ostentara la titularidad de la propiedad, cimentada sobre cinco pilares básicos: la desamortización eclesiástica y municipal, la abolición del régimen señorial, la desvinculación de los mayorazgos, el reparto de las tierras comunales concejiles y la derogación de los privilegios mesteños.

La decidida política poblacionista de los Borbones en los tiempos de la Ilustración convertirá en tierras cultivables y en asentamientos para la población numerosos secanos y baldíos, siendo el germen de la política de colonización y regadío en España debido a que el campo será centro de atención de importantes tratadistas agrarios como Olavide y Jovellanos.

La génesis de Algar se inscribe dentro de la amplia operación colonizadora y repobladora de las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y Andalucía, puesta en marcha por el reformismo ilustrado borbónico en la etapa final del siglo XVIII, que presentaba soluciones técnicas y jurídicas que permitían intensificar los cultivos mediante el riego y el aprovechamiento de las aguas, y la distribución de tierras a pequeños propietarios en torno a poblaciones concentradas. Esta operación alcanzó su mayor intensidad en las provincias de Córdoba y Jaén, donde se concretaron la mayor parte de los nuevos asentamientos que son, por otra parte, los más ampliamente estudiados; no obstante, en la provincia de Cádiz tuvieron también lugar la instalación de Nuevas Poblaciones, reguladas e impulsadas por la misma coyuntura legal y política que aquéllas. Su distanciamiento respecto al foco principal de la repoblación hace, que las villas gaditanas de Algar y Prado del Rey, sean frecuentemente ignoradas en los estudios que sobre tales hechos se realizan.

Algar es fruto de una iniciativa individual, la del comerciante Domingo López de Carvajal quien, tras comprar al Concejo de Jerez de la Frontera (después de dilatado

litigio) las dehesas de Algar y la Mesa de Sotogordo, solicitó a la Corona la utilización del fuero colonizador que estaba ya en esos momentos aplicándose en el cercano Prado del Rey; de esta forma, otorgada en 1773 la concesión del monarca, por Real Provisión de 13 de octubre, se pudo comenzar la instalación de su proyectada población con iglesia, casa de Ayuntamiento, cárcel, hornos y otras oficinas.

Junto a todas estas razones la creación de Algar viene a suponer, y probablemente de forma primaria y real, un hecho de claro interés económico que se va a concretar en la instauración de un esquema de relación entre los colonos instalados y el mecenas que supone la reaparición de la institución señorial. Los 90 colonos con sus familias recibían un total de 25 fanegas, casa y almacén, con una entrega adicional de hasta 30 pesos para la compra de una yunta y, a cambio, se obligaban todos ellos al pago de la octava parte de los granos y frutos recolectados, teniendo además el comerciante Domingo, la facultad de nombrar alcalde y oficiales y aún de presentar tres opositores al beneficio de cura párroco (CARRERO GALOFRÉ, 1983).

H. Las intenciones colonizadoras sobre los despoblados.

Durante las dos primeras décadas del siglo XIX habría que hablar más que de proyectos, de intenciones colonizadoras, constatándose en el artículo 23 del Decreto de las Cortes de 29 de Junio de 1822, la capacidad de las Diputaciones provinciales a disponer la formación de nuevas poblaciones, concediendo a los pobladores hasta dos suertes, intentando plasmar un plan de colonización general para los despoblados de los términos municipales de Jerez, Medina Sidonia y Tarifa, municipios de gran extensión superficial y reacios a la creación de nuevos núcleos de población.

Los emplazamientos de las colonias se llevarían a cabo en tierras de propios, baldías, comunales, en la de los conventos suprimidos o asignadas al Crédito Público (como fue el caso para toda la provincia de Cádiz), elevándose a las Cortes nuevas poblaciones en Jerez: una en el cortijo de Vicos, otra a 6 kilómetros de la Cartuja jerezana y la última, algo posterior, en el lugar del Valle y Ermita del Mimbral, hoy pertenecientes al municipio de San José del Valle.

I. El Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de Pascual Madoz (1845-1850).

Esta recopilación exhaustiva de los elementos del territorio español marca un hito importante en el tratamiento estadístico de las unidades poblacionales, tanto es así que esta obra todavía es consultada por historiadores, investigadores y arqueólogos, ya que contiene interesante información sobre ruinas, restos y posibles yacimientos arqueológicos con la descripción que en aquel entonces éstos presentaban. Para el municipio jerezano se recogen casi cien entidades de poblamiento como son cortijos, pago de viñas, dehesas o despoblados (ver anexo I), aportándose para alguno de los mismos información descriptiva sobre su localización, calidad de los terrenos agrícolas, edificaciones existentes, etc. Supuso en la época una mejora importante respecto al *Diccionario geográfico y estadístico de España y Portugal*, que había terminado de publicarse en 1829 por Sebastián Miñano, pues su labor no fue sólo recopilatoria, ya que se dedicó gran parte de la obra a contrastar la información recibida por los informantes.

J. El Nomenclátor de España de 1860.

Los censos en España, como en otros países europeos, se limitaban a una relación de individuos, confeccionados por razones tributarias o militares en su mayoría. A la escueta cuantificación de las personas, sin más referencias a aspectos económicos, políticos y sociales, habría de unirse su baja fiabilidad que provenía del poco rigor en su realización, de los escasos medios humanos y materiales disponibles. Uno de los más antiguos censos fue el de la Corona de Castilla, de 1591. Y desde Felipe II, con las 636 Relaciones sobre los 13.000 pueblos peninsulares, hay un largo trecho, hasta los trabajos estadísticos del Marqués de la Ensenada a mediados del siglo XVIII, en el reinado de Fernando VI.

Antes del censo de Ensenada, los intentos recopiladores fueron apenas sistemáticos y nunca exhaustivos por su propia naturaleza. Bajo el reinado de Fernando VI, los intentos recopiladores fueron poco globalizadores, adoleciendo de resultados rudimentarios cuando no dudosos. De la época de Carlos III, el censo incompleto del Conde de Aranda (1763), fue, sin embargo, el más logrado hasta entonces; y verificado, en análogo planteamiento, en los sucesivos de Floridablanca

(1787) y Godoy (1797); perfeccionados en sus requerimientos de datos y en la organización de los cuadros y de las áreas territoriales a las que se referían dichos datos. En un contexto de creciente formación científica que tenían los dirigentes y expertos del Estado, se gestaría la realización del innovador Nomenclátor de 1860 que, tendría como referencia el Diccionario de Pascual Madoz que, como se ha mencionado anteriormente, supuso un claro avance metodológico y temático

Observando el anexo II del presente estudio, se detecta que la labor realizada por el Nomenclátor de 1860 es de tal envergadura que ni siquiera en los tiempos actuales sería una labor sencilla su elaboración. Son 353 entidades poblacionales, bajo diferentes tipologías (cortijada, cortijo, caserío, rancho, casa de dehesa, venta, albergue, etc.) las que se recogen sólo para el término municipal de Jerez, aportando información sobre la distancia al núcleo de Jerez y sobre los edificios, señalando si están siempre habitados o sólo temporalmente y los pisos de los mismos.

Para el presente trabajo se ha comenzado la labor de georreferenciar estos elementos del poblamiento por medio de fuentes de datos de toponimia actuales que poseen coordenadas geográficas, como son el NOMGEO (Nomenclátor Geográfico del Instituto Geográfico Nacional) y el Nomenclátor Geográfico de Andalucía (NGA); sin embargo, la dificultad de localizar gran parte de ellos mediante cruces automáticos de base de datos, ha propiciado que la publicación de estos resultados no se puedan incorporar en la presente investigación.

K. La Ley de Colonias Agrícolas de 1868.

Surge de la necesidad de acabar con el sistema tradicional de repoblación, aplicando metodologías de distribución homogénea de la población en el territorio, con la idea principal de hacer salir al campo a la población distribuyéndola en cotos redondos para mejorar las condiciones de cultivo, concediendo ventajas fiscales a los propietarios agrícolas por las mejoras que realizaran en sus fincas, mayores cuanto más distancia hubiera respecto a otras poblaciones.

Según Fermín Caballero, político que impulsó esta Ley, existían dos maneras de establecer la población en los campos: una fundando poblados en lugares alejados con

personas venidas de fuera y, otra, mediante la creación de casas de labor en los términos municipales donde trasladase su domicilio los labradores que habitaban en los pueblos, distribuyendo mejor la población rural existente con el fin de que cada labrador dispusiera de una finca como residencia, facilitando así la mejora de los cultivos.

Acogiéndose a esta Ley de 1868 sobre fomento de la agricultura y la población rural, se funda en 1878 la Colonia Rural de San José del Valle por parte de los hermanos Romero García, descendientes de una importante familia ganadera jerezana.

Los asentamientos humanos recientes en esta zona del Valle comienzan hacia las últimas décadas del siglo XVI, pero sobre todo a partir de la construcción hacia 1695 de un convento religioso de la Orden de los Carmelitas en las laderas del actual Monte de la Cruz. Los primeros asentamientos que conectan con la actual población están ligados a fundaciones de tipo religioso que reorganizarán la producción de la tierra, levantando nuevas edificaciones y siendo un foco de atracción para colonos y mano de obra.

Durante los siglos XVIII y XIX se produce un intenso flujo migratorio hacia esta zona por parte de colonos a los que se les reparten tierras del Concejo Jerezano para su roturación, así, tras la marcha de los Carmelitas Descalzos en 1835, desaparece el convento mientras siguen llegando nuevas oleadas de colonos, produciéndose un nuevo reparto de tierras a menor escala pero más equitativo que el anterior.

En el último cuarto del siglo XIX, concretamente en 1878, los hermanos Romero García, Vicente y Rafael, descendientes de una prestigiosa familia ganadera jerezana fundan la Colonia Rural de San José del Valle acogiendo a la Ley de 1868 “sobre fomento de la agricultura y la población”, por lo que se van a ir sustituyendo los antiguos chozos por edificaciones más sólidas.

L. La Ley de Colonización de 1907 y los proyectos regeneradores: el Pantano de Guadalquivir y la Colonia de Caulina.

Esta nueva etapa surge de la necesidad de superar la crisis agraria acaecida en los años finales del siglo XIX, como consecuencia de la entrada masiva de cereales

procedentes de América y otros lugares a precios más bajos, debido al fuerte desarrollo de los sistemas de transportes; así, mientras en otros países europeos se optó por modernizar la agricultura y orientar su producción a nuevos cultivos, en España se buscó el apoyo estatal y frenar la competencia mediante elevados aranceles. La agricultura jerezana también tuvo que enfrentarse a la plaga de la filoxera de sus viñedos, lo que se tradujo en una fuerte reducción de sus viñedos y obreros viticultores, y en la concentración de tierras en grandes propietarios que pudieron hacer frente a la replantación con vides americanas.

El principal proyecto agrario pretendía la construcción del Pantano de Guadalquivir mediante el embalse de las aguas del río Majaceite en la Angostura de Arcos, para poner en regadío más de 10.000 hectáreas de los términos municipales de Arcos y Jerez, lo que permitiría una intensificación de la agricultura y el acceso a la tierra de numerosas familias campesinas, mediante la colonización de la superficie regable. En 1906 se firmó el proyecto, mediante el cual, el Estado se comprometía a ejecutar las obras y a entregarlas a los firmantes del mismo, mientras que los propietarios quedaban obligados a pagar el 50% del importe de las mismas, concluyéndose las obras en 1910; sin embargo, la terminación no supuso el pleno funcionamiento del proyecto pues quedaban por construir los canales de distribución que comenzarían en 1913, apenas estando en regadío 12 hectáreas en el año 1924. La infrautilización de las posibilidades de riego por parte de los propietarios disminuyó los efectos del proyecto emprendido, cuyas iniciales expectativas sociales y económicas quedaron muy menguadas.

Aprovechando la coyuntura de la Ley de Colonización de 1907, cuya idea era poblar el campo, cultivar tierras incultas y beneficiar a familias desprovistas de medios de trabajo o capital, y la importante construcción del pantano de Guadalquivir, surgió un gran proyecto colonizador destinado a servir de laboratorio social y agrícola del regeneracionismo jerezano. En 1911 el Ayuntamiento cede al Estado la dehesa de su propiedad denominada "Hato de la Carne" cuyo aprovechamiento principal eran los pastos. En 1914, la Junta Central de Colonización y Repoblación aprobó la creación de la colonia de Caulina, que suponía la distribución de parcelas a los colonos (75 familias) y una experiencia de organización colectiva, ya que habría edificios comunes para los servicios básicos como sanidad, culto religioso, enseñanza o experimentación

agrícola; sin embargo, el riego no llegaría hasta 1939 lo que obligó a los colonos a orientar sus cultivos hacia el secano.

M. Las actuaciones del Instituto de Reforma Agraria.

La Reforma Agraria de la segunda república resultó un fracaso casi total debido a falta de financiación adecuada, el rechazo de los sindicatos anarcosindicalistas a participar en la misma, a los recursos legales planteados por muchos de los propietarios afectados y, sobre todo, por la caída del Gobierno republicano-socialista. Fueron cinco los proyectos que finalmente se ejecutaron aprobándose entre octubre de 1933 y el otoño de 1934:

1. El primer expediente aprobado fue el relativo a la finca “Torrecera” de 767 hectáreas, quedando el cortijo dividido en dos partes: una de regadío de 101 hectáreas cuyo asentamiento de colonos quedó paralizado por un problema en las mediciones y el recurso planteado por la esposa del propietario afectado, y otra de secano de 666 hectáreas que asentó a 34 familias procedentes de la Sierra de Cádiz, siendo sólo una de Jerez.
2. La actuación expropiatoria sobre el “Rancho Calderín”, de sólo 46 hectáreas, supuso el asentamiento de 4 familias jerezanas según el proyecto, sin embargo, una serie de problemas acabaron en una denuncia al presidente del I.R.A. y en la anulación del proceso en 1935.
3. Otra finca expropiada sin indemnización fue la finca “Doña Benita la Alta”, de 272 hectáreas situada en la carretera a Medina, que aunque la calidad de la tierra era buena se encontraba en una situación de semiabandono.
4. El proyecto más ambicioso sería la expropiación de la finca “La Florida”, de 622 hectáreas, ofrecidas algo más de la mitad de forma voluntaria por su propietario (Antonio Guerrero Lozano) y el resto con carácter forzoso; este asentamiento junto con los de “Torrecera” y “El Torno” debía formar un nuevo núcleo rural de población en torno a las ricas vegas del Guadalete.

5. En la finca “El Torno”, con 545 hectáreas reales, el I.R.A. ocupó 300 siendo 262 las que se dedicarían directamente al cultivo; se había previsto el asentamiento de 45 familias y luego se aumentó el número a 52, sin embargo, el número real fue de 42 componentes debido a los mismos problemas que se encontraron en “La Florida”: falta de viviendas y escasa retribución salarial en los anticipos que recibían por las labores.

Posteriormente, en febrero de 1936, coincidiendo con la victoria del Frente Popular, se ocupaban las fincas “Cabeza de Santa María” y “La Suara” de 333 y 100 hectáreas para asentar a 33 y 14 familias respectivamente, aunque no llegaron a establecerse colonos.

Tabla 3. Proyectos planificados por el Instituto de Reforma Agraria.

FINCAS	INCAUTACIÓN	COMUNIDAD	ASENTADOS	LOTES (HAS.)
Torrecedera	Noviembre 1933	Sep.1934 / Abril 1935	25/34	4/19,6
Rancho Calderín	Mayo 1934	Octubre 1934	4	12,3
Doña Benita	Noviembre 1934	Noviembre 1934	11	12
La Florida	Octubre 1934	Enero 1935	64	4,5
El Torno	Diciembre 1934	Enero 1935	45	6,6
La Suara	Abril 1936	-	14	-
Cabeza S ^a M ^a	Abril 1936	-	33	-

Fuente: Historia Jerez de la Frontera. El Jerez Moderno y Contemporáneo, 1999.

N. Los nuevos asentamientos del Instituto Nacional de Colonización.

El Instituto Nacional de Colonización (INC) se creará en 1939 como instrumento de la política agraria durante el franquismo, cuya función principal fue redactar y ejecutar nuevos planes de colonización, que si bien pretendían una desvinculación con la etapa política anterior, tendrán como base territorial algunas de las fincas de la Reforma Agraria republicana y se centrarán en la Zona Regable del Guadalquivir.

El Plan elaborado en 1944 establecía que la adquisición de tierras a colonizar se haría mediante acuerdo amistoso de expropiación o compra con sus antiguos propietarios, aunque un Decreto de 1947 declaraba zona de “Alto Interés Nacional” las acciones a emprender en la zona regable del Guadalquivir, lo que supuso contar con

más de cinco mil hectáreas para el comienzo de sus planes de obras y parcelación a comienzos de los años 50; además, la transformación y colonización de las zonas regables se realizará mediante la aplicación de las directrices y procedimientos contenidos en la Ley de 23 de Abril de 1949 sobre colonización y distribución de la propiedad en las zonas regables.

Con este importante volumen de tierras para los proyectos de parcelación, el problema sería la habitabilidad de los nuevos colonos en los asentamientos, que fue mejor resuelto que en la etapa anterior, así el Instituto Nacional de Colonización levantaría nuevos pueblos completos, que no debían rebasar los 1.000 habitantes y con la vivienda del colono cercana a la parcela asignada.

El resultado de esta estrategia fue el levantamiento de ocho nuevas poblaciones y tres zonas de hábitat diseminado:

1. La transformación, ampliación y reorganización de algunos de los asentamientos ya existentes de la reforma agraria republicana, que darían lugar a La Barca de la Florida y El Torno.
2. La creación de una nueva red de poblaciones: Guadalcaín, Nueva Jarilla, Estella del Marqués, Torrecera, José Antonio y San Isidro del Gualdalete.
3. La implantación de zonas de hábitat diseminado en Torremelgarejo, La Ina y Vegas de Arcos.

La mayoría de colonos provenían de la sierra gaditana aunque aumentaron los procedentes de Jerez, Arcos y comarcas interiores como La Janda (Alcalá de los Gazules, Medina Sidonia y Paterna de Rivera), a los que se sumaron los de provincias como Granada (expertos en el cultivo de regadío) y Sevilla.

A estos pueblos de colonización se les dotó de Casas Consistoriales, iglesias, edificios sociales, escuelas, alumbrado de calles, plazas, jardines, dispensarios y viviendas para maestros, lo que evidencia el interés del régimen por proveerlos de servicios e infraestructuras que no los hicieran depender del núcleo matriz.

A partir del segundo Plan de Desarrollo Económico y Social (1968-71), se contempla la actualización de la política de colonización, aumentando el radio de acción de los mismos y uniéndolos a poblaciones existentes cuando fuera posible, dando lugar a la creación de las Barriadas Rurales que gravitaban en torno a los núcleos de colonización para encontrar los servicios básicos que demandaban, pero cercanos a las explotaciones agrícolas de los grandes propietarios, siendo este período el de revitalización del hábitat diseminado existente que desembocará en la consolidación de importantes asentamientos dispersos por el alfoz jerezano.

O. La constitución de Entidades Locales Menores. El origen de la descentralización administrativa municipal jerezana.

El proceso de colonización contemporáneo supuso para el municipio de Jerez de la Frontera un verdadero cambio en el paisaje agrario, unas diez mil hectáreas fueron transformadas y puestas en regadío, la importante inversión en infraestructuras hidráulicas que supuso la construcción del embalse de Guadalquivir, a principios del siglo XX, y los cientos de kilómetros de canales de riego para llevar el agua hasta las parcelas modificaron los cultivos, el sistema de producción e incluso la propiedad de la tierra.

Pero esta importante transformación del paisaje agrario supuso un cambio territorial y social de la zona regable, ya que el asentamiento de nuevos pueblos construidos no se limitaba al simple establecimiento de campesinos que trabajaran la tierra, sino que los responsables y doctrinarios de la colonización pretendían la creación de un marco social comunitario nuevo.

Se originó un debate sobre la configuración física y social de los asentamientos: si debían ser aislados o concentrados, grupos sociales que formarían parte de las comunidades, estructura social diferenciada y jerarquizada y, sobre todo, el régimen jurídico administrativo de estos pueblos de colonización; la idea era organizar la vida rural en sus distintas concepciones (religiosa, social, sanitaria, educativa) para reproducir el modelo de pueblo ideal, por lo que era necesario realizar una adecuada planificación urbanística (edificación de inmuebles que serían la sede de futuros

consistorios municipales) que les permitiera en un futuro convertirse en municipios de carácter rural.

El acceso de estas poblaciones al rango de municipios no fue fácil debido a la fuerte y lógica oposición que se encontraron del ayuntamiento matriz, por lo que se consideró que constituir a estos poblados en simples entidades locales menores era la forma más adecuada, permitiendo cierta autonomía de los nuevos núcleos de población sin mermar el patrimonio de los municipios originarios.

La carencia casi absoluta de medios para subsistir y cubrir las necesidades y exigencias vecinales, convirtieron a estas entidades menores en una carga para el ayuntamiento que temía ver mermado no sólo su poder y su facultad de acción, sino también su administración, ingresos y bienes.

Sin embargo, los rigurosos y numerosos requisitos de forma que contemplaba la legislación municipal, provocaron la dilatación de los procesos de constitución de nuevas entidades inframunicipales con la excusa de realizar un profundo estudio de cada nuevo núcleo que permitiera su mejor conocimiento para optar por la solución más adecuada.

La Ley de Régimen Local, de 24 de junio de 1955 contemplaba con carácter general, siguiendo las líneas marcadas por las Leyes anteriores (1945, 50 y 53), la posibilidad de dotar con rango jurídico administrativo de Entidad Local Menor (ELM) a los nuevos poblados. La Ley configuraba dos vías de administración inframunicipal, de gobierno local:

- una descentralizada mediante la constitución de Entidades Locales Menores diferenciadas que siendo núcleos urbanos de nueva creación debían ser dotados de administración propia (Art.23);
- y otra desconcentrada mediante el nombramiento por el Alcalde del municipio de un Alcalde de barrio en cada núcleo de población, ya fueran barriadas o poblados separados del casco urbano, que no pudieran alcanzar la categoría de Entidad Local (Art. 70).

El Régimen Administrativo regulador de los poblados de colonización se inicia con un Decreto de 28 de octubre de 1955 por el que se regula el régimen local transitorio de los nuevos pueblos. Señala la norma la necesidad de establecer en dichos poblados, durante el período de acceso de los colonos a la propiedad, un régimen económico y orgánico de "*carácter transitorio o provisional*", que asegure su organización y el funcionamiento de los servicios municipales indispensables.

Ese "*carácter transitorio*" introdujo un cierto grado de excepcionalidad en el régimen administrativo general, que se concretó en:

- La constitución en ELM de los nuevos pueblos edificados al amparo de los Planes de Colonización.
- El Ministerio de la Gobernación, previa comunicación del INC, dictaría el Decreto de constitución de la ELM.
- La demarcación territorial de cada ELM coincidiría con la señalada por el INC en el desarrollo de los Planes de Colonización del área de influencia del nuevo pueblo (realmente esta demarcación territorial no fue tal debido a que se limitaba a un área escasa de parcelas cercanas y dependientes del poblado de colonización y sus poblaciones).
- La elección del Alcalde Pedáneo y Vocales de las Juntas Vecinales, se realizaría por el Gobernador Civil.
- El mantenimiento por parte del INC de la propiedad adquirida sobre los terrenos, edificios, servicios e instalaciones realizadas en los nuevos pueblos.

En virtud de este Decreto en el municipio de Jerez se erigieron como Entidad Local Menor los siguientes asentamientos territoriales permanentes de colonos: Torrecera, El Torno, San Isidro del Guadalete, La Barca de la Florida y Guadalcacín del Caudillo (1957).

Este régimen provisional y transitorio dentro del régimen ordinario de la Administración Local dio lugar al planteamiento de recursos contencioso-administrativos que concluyeron con una Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de diciembre de 1958 declarando inaplicable el citado Decreto; aunque no significó la

merma de la facultad discrecional del Gobierno para dotar a esos poblados de un régimen local necesario y transitorio. Tras casi una década surge la Ley de 23 de julio de 1966 relativa a Modificación parcial del Régimen Local por la que la Administración ejercerá aquellas facultades y así en su disposición final quinta señala que "el Gobierno en el plazo de 3 meses aprobará un Decreto sobre el régimen para la constitución y funcionamiento de los pueblos contruidos por el INC como ELM o municipios independientes, adaptando los preceptos de la Ley de Régimen Local (1955) y los de la presente Ley".

El Decreto 2697/66 de 20 de octubre, sobre régimen para la constitución y funcionamiento de los pueblos contruidos por el I.N.C. como Entidades municipales, vino a derogar el Decreto de 28 de octubre de 1955. La nueva normativa pretendía dotar a estos pueblos de un régimen administrativo especial y transitorio consagrando su carácter de Entidades municipales de rango inferior, si bien desde su creación tendrán todas las competencias en materia de organización de su hacienda y establecimiento y recaudación de arbitrios municipales, aunque dichas competencias no son necesariamente todas las comprendidas dentro del ámbito exclusivo de sus propios intereses, sino sólo aquellas que las normas les asignan o el Municipio decide que ejerzan.

La Ley de Bases de Régimen Local 7/1985, de 2 de abril derogaba a la de 1955, encomendando, en su artículo 45, a la legislación sobre Régimen Local de las Comunidades Autónomas *"la regulación de las entidades de ámbito territorial inferior al Municipio, para la administración descentralizada de núcleos de población separados, bajo la denominación de caseríos, pedanías, barrios..."*, debiendo respetar una serie de reglas básicas (base territorial, núcleo de población, separación del municipio...). Por medio de esta Ley una serie de núcleos de población del término jerezano alcanzarán la categoría de Entidades de Ámbito Territorial Inferior al Municipio (EATIM) por medio de la aprobación de sus respectivos Decretos: los núcleos que alcanzaron la categoría de Entidad Local Menor en el año 1957 (Torrecera, El Torno, San Isidro del Guadalete, La Barca de la Florida y Guadalcacín del Caudillo), Nueva Jarilla, Estella del Marqués, José Antonio o Majarromaque (que en la actualidad ha perdido tal condición) y San José del Valle (que en el año 1995 logró la independencia del municipio de Jerez).

P. La concentración y surgimiento de asentamientos espontáneos.

Los fuertes cambios producidos a lo largo de la primera mitad del siglo XX, con la planificación de los pueblos de colonización y la modernización agraria, caracterizada ahora por la intensificación del regadío, la demanda de obra puntual de las viñas y el empobrecimiento general del país, generan un aumento importante del número de jornaleros temporales en el término, desbordándose las posibilidades de alojamiento de los Cortijos; de esta forma, van proliferando nuevos asentamientos sobre vías pecuarias, en un primer momento comienzan siendo chozas de carácter temporal y, con el tiempo, evolucionan en cuanto a materiales de mejor calidad y adquiriendo el carácter de definitivas.

En los últimos años, el fenómeno del diseminado rural ha aumentado su complejidad debido a los procesos de parcelación urbanística que han generado nuevos asentamientos (Casas de Magallanes, Puente La Guareña, Mesas del Corral, Cañada de Puerto Real, El Chaparrito) o el crecimiento del diseminado tradicional (Cuartillos, Gibalbín, Rajamancera, Cañada del León, Las Pachecas, Las Tablas, Añina, El Polila, El Mojo, Barriada la Inmaculada, Baldío Gallardo, Cañada del Carrillo, Mesas de Santa Rosa, Pozo Romano), transformándose en verdaderos núcleos de población, siendo frecuente la construcción de viviendas para segunda residencia, o de primera para familias no relacionadas con el mundo agrario y vinculadas de forma directa con el núcleo matriz, perdiendo su razón de ser debido a la mejora de los medios de comunicación que permiten los desplazamientos diarios a los centros de producción y trabajo.

6.1.2. Tratamiento urbanístico de las entidades de población.

Los poblados de colonización presentaban una problemática común: deficiencias de accesibilidad y conexión entre los mismos y con el núcleo matriz, niveles bajos dotacionales en equipamientos comunitarios (sanitarios, educativos, culturales) e infraestructura básica (alcantarillado, abastecimiento de agua, suministro de

electricidad), sobredimensionamiento de los viales y del acerado a pesar del bajo grado de urbanización, hacinamiento de la población, etc.

Estas entidades estuvieron ausentes e ignoradas en el Planeamiento hasta el Plan de 1969 en el que se hacía una ligera alusión al señalar que quedaban calificadas como Suelo Rústico, sin especificar protección de las áreas cultivables ni previsión para su crecimiento, lo que provocó un crecimiento incontrolado, a espaldas de toda planificación, de viviendas de autoconstrucción sin licencia urbanística, generando problemas de dotación de equipamientos e infraestructuras.

A partir del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1984 se entenderá que la ordenación urbanística debe tener una visión integral del término municipal, permitiendo el desarrollo y crecimiento planificado de los núcleos rurales.

A. El Plan General de Ordenación Urbana de 1984.

El PGOU de 1984 se preocupa de la ordenación de todo el término de Jerez de la Frontera, podríamos considerar que se trata de un plan territorial debido a la amplia extensión municipal; presenta ya propuestas claras y relativas a las entidades de población, planteándose actuaciones que consolidarán su independencia del ayuntamiento matriz no sólo a efectos de servicios primarios y elementales (sanidad, educación, asistencia social...) sino a otros más avanzados como la programación de viviendas y el disfrute de bienes y servicios colectivos, potenciando la periferia para tratar de resolver problemas difíciles y heredados.

Los objetivos del Plan relativos al medio rural eran paliar los efectos nocivos de la edificación ilegal e incontrolada surgida en el entorno de los poblados de colonización, barriadas rurales y junto a las cañadas y caminos vecinales; para ello, se debía contener el crecimiento de aquellas entidades que presentaban una difícil solución y fomentar el desarrollo de aquéllas en las que existía cierto grado de dotaciones y servicios que pudieran ser incrementados.

Esto se tradujo en la integración dentro del suelo urbano de las Entidades Locales Menores o Barriadas Rurales que poseían suficiente entidad: San José del

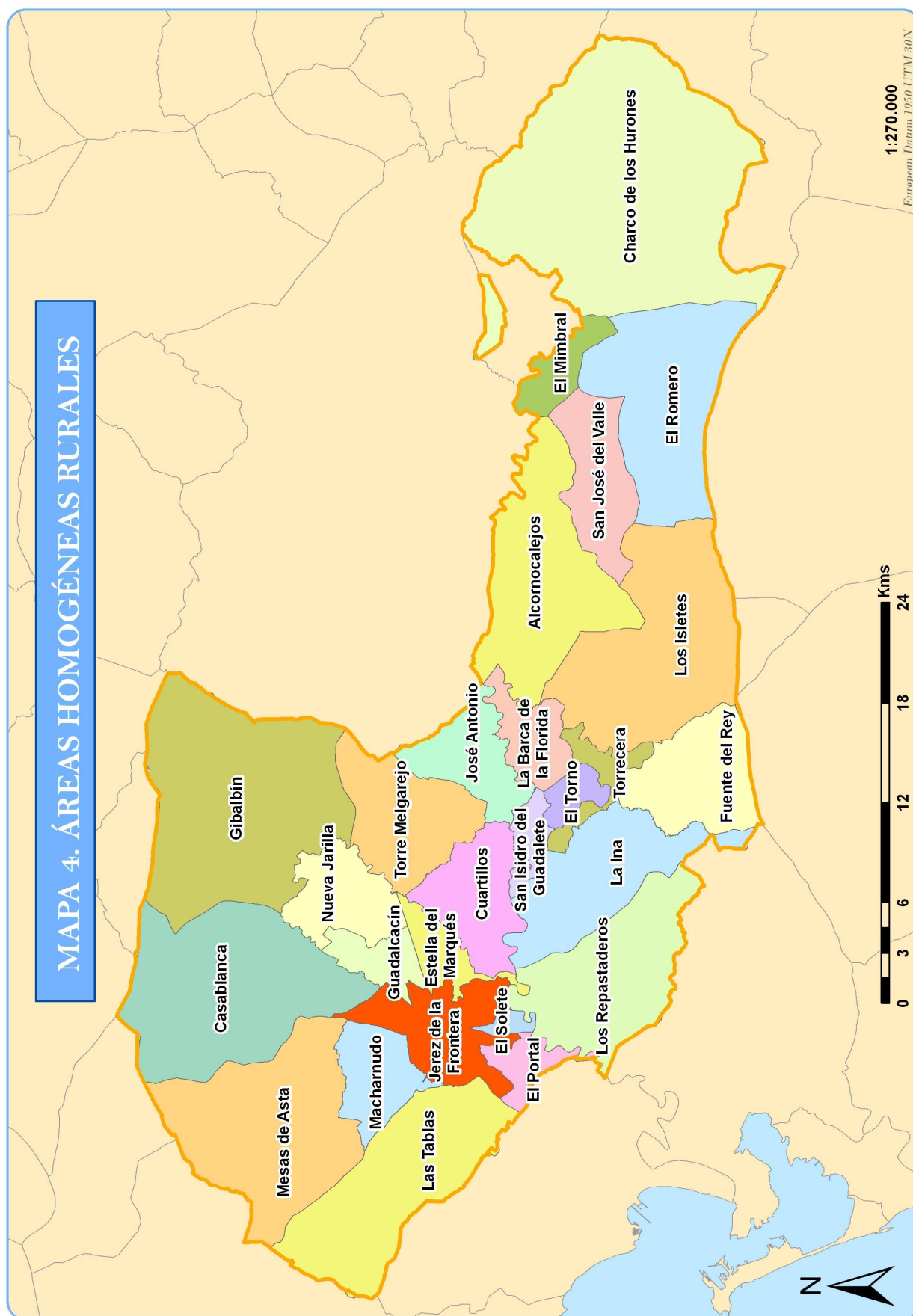
Valle, Majarromaque, La Barca de La Florida, Guadalcaçín, Nueva Jarilla, Torrecera, El Torno, Estella del Marqués, San Isidro del Guadalete, Mesas de Asta, Torremelgarejo y La Ina. La mayoría eran núcleos que habían tenido su origen en la planificación del Instituto Nacional de Colonización y su fisonomía no había cambiado desde entonces, experimentando un crecimiento físico escaso, lo que había provocado importantes problemas de hacinamiento.

Tabla 4. Áreas Homogéneas Rurales del PGOU de 1984.

ÁREAS HOMOGÉNEAS	POBLACIÓN	Nº EDIFICIOS	VIVIENDAS OCUPADAS	VIVIENDAS VACÍAS	Nº LOCALES
Alcornocales	906	110	256	4	-
Casablanca	111	53	67	10	-
Charco de los Hurones	286	109	78	28	1
Cuartillos	1.311	354	293	46	4
El Mimbral	112	26	19	5	1
El Portal	916	176	226	15	25
El Romero	136	34	29	5	-
El Solete	77	34	26	7	-
El Torno	1.287	211	237	2	27
Estella del Marqués	1.367	291	259	14	16
Fuente del Rey	99	27	26	-	-
Gibalbín	1.308	260	277	26	31
Guadalcaçín	3.860	774	780	81	79
José Antonio	835	191	207	-	-
La Barca de la Florida	3.135	685	730	52	122
La Ina	975	172	227	20	19
Las Tablas	594	165	178	30	25
Los Isletes	471	55	104	25	-
Los Repastaderos	622	138	145	22	-
Macharnudo	277	63	77	2	4
Mesas de Asta	662	180	183	8	4
Nueva Jarilla	1.465	301	242	30	26
San Isidro del Guadalete	595	114	117	4	13
San José del Valle	3.288	774	812	47	100
Torrecera	1.010	214	207	40	24
Torre Melgarejo	549	77	122	4	33

Fuente: Plan General de Ordenación Urbana de Jerez de la Frontera, 1984.

Mapa 4. Áreas Homogéneas Rurales del PGOU de 1984.



Fuente: Plan General de Ordenación Urbana de Jerez de la Frontera, 1984.

Este Plan ofrecía un aspecto novedoso para la ordenación del término municipal, estableciéndose Áreas Homogéneas de planificación, no sólo para el suelo urbano del núcleo principal, sino también para el territorio rural, lo que suponía una delimitación territorial del municipio. Se crearon áreas de carácter urbano (63) o destinadas a su urbanización, que hasta el año 1984 formaban diseminados o pequeñas barriadas rurales próximas al núcleo principal (de ellas, 3 áreas en la actualidad son consideradas como núcleos rurales periurbanos: Los Albarizones, Lomopardo y La Cartuja-La Corta), 6 áreas de planificación rural que contenían diseminados (Macharnudo, Casablanca, El Solete, Fuente del Rey, El Romero y Los Isletes), y 20 áreas constituidas por un núcleo rural y sus diseminados (El Portal, Las Tablas, Mesas de Asta, Guadalacín, Nueva Jarilla, Gibalbín, Torre Melgarejo, José Antonio, La Barca de La Florida, El Torno, San Isidro del Guadalete, Cuartillos, Estella del Marqués, Los Repastaderos, La Ina, Torrecera, Alcornocales, El Mimbral, Charco de los Hurones y San José del Valle).

B. Revisión del Plan General Municipal de Ordenación de 1995.

En la Revisión del Plan General Municipal de Ordenación (PGMO) de 1995 se continúa con la visión global de ordenación de la totalidad del término municipal, indicando que se va *“superando la visión urbana del planeamiento general para adentrarse en conceptos y propuestas que emanen del análisis y la estructuración territorial, teniendo en cuenta que los sistemas geográficos que se ordenan podrían ser objeto, por sus características y extensión, de un estudio subregional”*.

El Plan establecía una clasificación de los asentamientos y núcleos de población en Núcleos Menores (los comprendidos en suelo urbano por el PGOU de 1984) y en diseminado rural, compuesto por Núcleos Rurales, Diseminado Rural Tradicional y Diseminado en fuerte Transformación, clasificado como suelo no urbanizable; se pasaba de una planificación territorial por áreas homogéneas a una clasificación por tipologías de entidades en las que se eliminaba cualquier aspecto delimitador de las mismas, es decir, se producía un proceso de polarización de la ordenación en los núcleos en detrimento del territorio.

Los Núcleos Menores presentaban una serie de problemas que el Plan trataba de dar solución: escaso suelo residencial, carencia de suelos industriales, existencia de núcleos unidos físicamente al núcleo principal en los que sería necesario ordenar y diseñar dichas uniones, y la existencia de parcelaciones ilegales y ocupaciones de vías pecuarias.

Eran considerados como Núcleos Rurales los asentamientos de suficiente entidad como para demandar un determinado nivel de servicios urbanísticos, aunque fundamentalmente agrícolas se daban procesos de diversificación productiva, y el grado de consolidación urbana y crecimiento poblacional era suficiente como para considerarlos irreversibles. Como Núcleos Rurales consolidados se encontraban Gibalbín y Cuartillos, siendo los semiconsolidados Rajamancera, Cañada del León, Los Repastaderos (en realidad es una confusión respecto a Las Pachecas), Las Tablas, El Boquete y El Cuervo (la zona correspondiente al término de Jerez).

Sobre las entidades locales menores se pretendía la consolidación y conservación de las tramas morfológicas de los poblados de colonización, plantear nuevos crecimientos urbanos lógicos, reestructuración y racionalización de las tramas urbanas provenientes de actuaciones espontáneas y el reagrupamiento de las actividades industriales diseminadas por el valle del Guadalete.

El Diseminado Rural Tradicional estaba constituido por asentamientos de marcado carácter tradicional y vinculación agrícola: Alcornocales, Añina, Baldío Gallardo, Barriada de la Inmaculada, Cañada del Carrillo, El Polila, Mesas de Santa Rosa, Pozo Romano, San Cristóbal, Cuartillos (parte oeste), El Mimbral, Casablanca, Charco de los Hurones, El Tempul, Montecorto Bajo, Mesas de Santiago, La Parra, Las Quinientas, Casa de Plineiro y Cañada La Loba.

Los diseminados espontáneos de fuerte crecimiento reciente debido a parcelaciones urbanísticas y edificaciones ilegales para segunda residencia representaban al Diseminado en fuerte Transformación, estando constituido por Magallanes, Puente La Guareña, Cañada del Malduerme o del Pino, El Mojo y Cañada de Puerto Real.

Los objetivos que se pretendían para el diseminado rural pasaban por reconocer la existencia de asentamientos humanos tradicionales que permitieran el acceso de los mismos a la legalidad de sus edificaciones, el control del crecimiento excesivo de los núcleos rurales mediante la delimitación restrictiva de zonas para la consolidación urbana y la dotación de servicios privados para satisfacer las necesidades de cada población.

Hay que tener en cuenta varias circunstancias excepcionales: Guadalcaçín por ordenación quedará integrado en el núcleo principal, al igual que La Corta, Lomopardo y Los Albarizones (ya recogidos por el Plan de 1984); en el uso residencial fuera del núcleo de Jerez se incluirán Montecastillo y El Chaparrito (parcelación que data de los años 60).

C. Revisión y Adaptación del Plan General de Ordenación Urbanística de 2009.

Los objetivos generales relativos al medio rural pretenden *“el desarrollo en red del sistema urbano que permita un crecimiento equilibrado y sostenible del conjunto de los núcleos del sistema, un desarrollo de servicios complementarios y una articulación más completa y trabada entre los diferentes núcleos”*. Por tanto, se da un salto cualitativo en la planificación de las entidades singulares de población, ya que se entiende su desarrollo y ordenación de forma conjunta y no individualizada, para permitir una mejor articulación territorial, económica y social de los núcleos de población.

El presente plan establece una clasificación algo confusa y errónea para las entidades de población, ya que en la *“Memoria Informativa del Medio Rural”* se distinguen en función de su origen tres categorías: los Asentamientos Periurbanos (El Portal, La Corta, Los Albarizones y Guadalcaçín), las Pedanías (Majarromaque o José Antonio, La Barca de la Florida-Mesas del Corral, Nueva Jarilla, Torrecera, El Torno, Estella del Marqués, San Isidro del Guadalete, Mesas de Asta, Torremelgarejo, La Ina, Lomopardo, Montecastillo y El Chaparrito) y las Barriadas Rurales (Añina, Baldío Gallardo, Barriada de la Inmaculada, Barriada de El Cuervo, Cañada de Puerto Real, Cañada del Carrillo, Cañada del León, Rajamancera, Casas de Magallanes, Cuartillos, El Juncal de Albadalejo, El Mojo, Gibalbín, Las Guareñas, Las Pachecas, Las

Quinientas, Las Tablas, Montealegre Alto, El Polilla, Los Repastaderos, Mesas de Santa Rosa y Torrecera Baja).

Sin embargo, en el *Análisis del Sistema Poblacional Disperso* se adopta la clasificación del PGMO de 1995 ajustándola al hecho de la independencia de San José del Valle, excluyéndose aquellos núcleos o diseminados pertenecientes al nuevo municipio.

6.1.3. Surgimiento de movimientos segregacionistas.

La demanda de medios y equipamientos que desde los ayuntamientos pedáneos se hace hacia el ayuntamiento matriz se refuerza a medida que las administraciones regional y nacional abandonan sus planes de inversiones en la zona; viviendas, colegios, comunicaciones, servicios médicos, se convierten en campo de reivindicación para una población joven en rápido crecimiento.

El sentimiento "*diferencial*" de los habitantes del "*Jerez Rural*" respecto al resto de la población, creó las bases para el surgimiento de movimientos segregacionistas que, aprovechando las tensiones políticas existentes entre el Ayuntamiento de Jerez con el entorno político provincial y andaluz, culminaron en 1995 con la constitución de San José del Valle como municipio independiente y con el intento segregacionista de La Barca de la Florida.

Según la tipología de núcleos secesionistas aportada por el profesor Ventura Fernández (1988), La Barca de la Florida se encuadraría dentro de las entidades con una dinámica económica distinta a la de su capital municipal, fruto de la colonización interior; y San José del Valle formaría parte de la categoría de pedanías insertas en municipios muy extensos que sufren una situación de marginalidad motivada por la ausencia de servicios y equipamientos provocada por la distancia física con respecto al núcleo matriz.

A. La segregación y constitución de San José del Valle como municipio independiente.

En 1939, tras la Guerra Civil, comienzan las ya históricas reivindicaciones de San José del Valle para convertirse en municipio independiente, por lo que en 1950, bajo las directrices del Instituto Nacional de Colonización, se realizarán nuevas promociones de viviendas, un grupo escolar, la iglesia nueva, el ayuntamiento y el mercado de abastos, para dotar de infraestructuras y servicios a la población.

El 29 de Abril de 1991 la Diputación Provincial de Cádiz instó a la Junta de Andalucía la iniciación del expediente de segregación de parte del término municipal de Jerez de la Frontera para la constitución de un nuevo municipio con la denominación de San José del Valle (confirmándose mediante el Decreto 82/1995), proponiéndose una extensión superficial para el mismo que integrara a la población diseminada en el entorno del núcleo principal que, finalmente, no incluiría la zona de los Montes de Propios a pesar de su conveniencia funcional y contraviniendo las previsiones contenidas en el artículo 1.3 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, que aboga porque los términos municipales estén formados por territorios continuos, debido a que el municipio de Jerez de la Frontera podría interponer recurso por considerar que sus recursos se verían mermados.

B. Intento segregacionista de La Barca de la Florida.

El 16 de julio de 2002 una Comisión Promotora de designación vecinal por los núcleos de población de La Barca de la Florida, José Antonio (Majarromaque), Puente La Guareña y El Chaparrito, así como sus diseminados, solicitó la creación de un nuevo municipio con el nombre de La Barca de la Florida y capitalidad en dicho núcleo poblacional, pretendiendo la segregación de 14.000 hectáreas del término municipal de Jerez de la Frontera como su ámbito territorial.

Por medio del Decreto 296/2007, de 11 de Diciembre se desestimaba la creación del nuevo municipio por consideraciones que se basaban en la falta de concurrencia de algunas de las circunstancias previstas en la legislación, verificándose el cumplimiento del tamaño poblacional (mayor de 4.000 habitantes), la separación física (22

kilómetros) y una franja de terreno no urbanizable superior a 7,5 kilómetros, y con una superficie territorial que goza de identidad propia basada en razones históricas y geográficas. Sin embargo, se consideró que no quedaba acreditado que el territorio pretendido para la segregación permitiese atender a las necesidades demográficas, urbanísticas, sociales, financieras y de instalación de servicios de competencia municipal con mayor nivel de calidad sin que el municipio matriz disminuyera la prestación ni la calidad de sus servicios, ni que entre los núcleos de población que proyectaban segregarse hubiera una interdependencia y un entramado de relaciones sociales, culturales, económicas y de servicios mayores entre ellos que con dicho municipio.

6.1.4. La actual organización territorial de Jerez en Áreas de Planificación.

Tal y como se dice en la revisión-adaptación del PGOU actual *“la edificación residencial en el medio rural presenta una gran heterogeneidad, propiciada por la interacción de distintos factores en su génesis y desarrollo, que se plasma en diversas formas de implantación y, con ello, en la generación de un amplio abanico de situaciones sociales y territoriales”*.

Es necesaria una revisión de la clasificación de los Núcleos Secundarios de Jerez ya que la que se adopta en la normativa urbanística presenta contradicciones entre los diferentes documentos e incluso errores integrando a ciertos núcleos en categorías inadecuadas, como la consideración de Montecastillo y El Chaparrito como Pedanías; además, sería conveniente introducir nuevas categorías que permitiesen un acercamiento más certero a la realidad del poblamiento actual del alfoz jerezano y la delimitación de áreas o entornos de influencia, semejantes a las áreas homogéneas del PGOU de 1984, que permitan una mejor gestión territorial de los núcleos menores o diseminados.

En la actualidad, la Delegación del Medio Rural del Ayuntamiento de Jerez se sirve de una delimitación en *“Áreas de Planificación”*, cuyos límites son semejantes a los establecidos para las Áreas Homogéneas del PGOU de 1984 y concordantes (excepto Solete Alto que no se incluye) con las Entidades Singulares del Nomenclátor

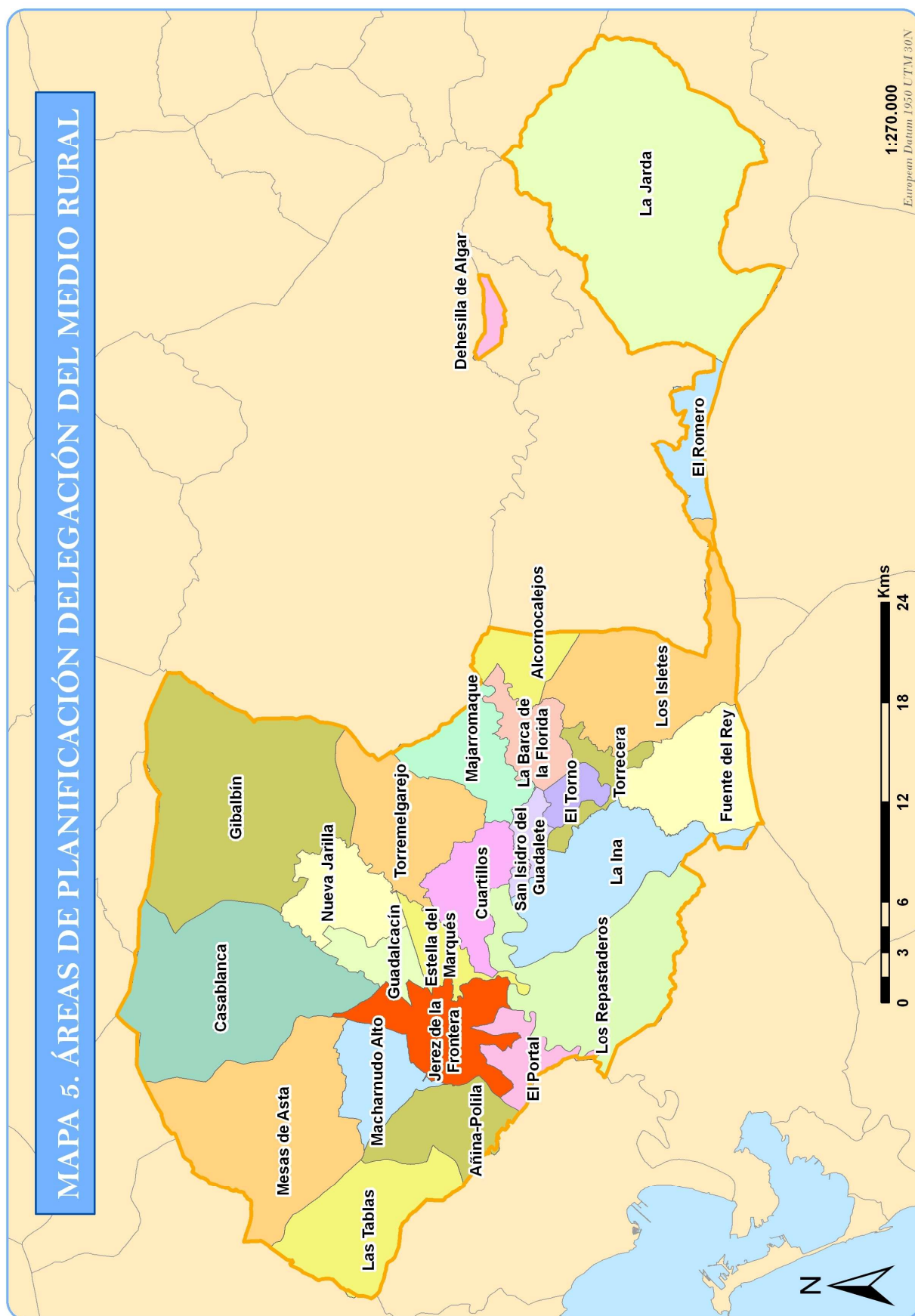
fijadas por el Instituto Nacional de Estadística, para la gestión territorial de las diferentes entidades de población del municipio.

Las Áreas de Planificación correspondientes con las Entidades Locales Autónomas pueden distinguirse por registrar los valores de densidad de población más elevados: Guadalcaçín (362), La Barca de la Florida (210), El Torno (145), Estella del Marqués (106), Torrecera (103), San Isidro del Guadalete (66) y Nueva Jarilla (52).

Estas unidades poblacionales se caracterizan por poseer un territorio mucho más reducido que los núcleos de población de carácter rural (Cuartillos, Gibalbín, La Ina, Mesas de Asta, Torremelgarejo), los cuales poseen una menor relevancia poblacional y un menor índice de actividad económica. Esto se debe al carácter restrictivo que el Ayuntamiento jerezano ha tenido con las primeras para la delimitación de estas áreas, con el fin de evitar que las actuales ELAs exigieran para la delimitación de sus ámbitos territoriales (según marca la LAULA y la normativa anterior) el territorio de actuación de las competencias municipales sobre estas unidades poblacionales.

En esta delimitación en áreas de planificación le corresponderían a las entidades locales autónomas jerezanas la siguiente extensión superficial: Nueva Jarilla 30 km², La Barca de la Florida 20 km², Estella del Marqués y Guadalcaçín 15 km², Torrecera 12 km², El Torno y San Isidro del Guadalete 9 km². Son cifras semejantes a las mostradas en la tabla 2, referidas a las entidades locales autónomas que tienen delimitado su territorio por Orden o Decreto de la Junta de Andalucía, por lo que es fácil pensar que pueden ser tenidas muy en cuenta en la delimitación territorial de estas ELAs. Podríamos afirmar que se ajustan a la realidad territorial aportando un dato revelador, en el expediente de segregación de La Barca de la Florida (que incluye a Majarromaque) se pretende un territorio de 14 km², cuando si sumáramos la extensión de las áreas de planificación de La Barca de la Florida y Majarromaque se obtendrían casi 50 km². En el lado opuesto encontramos a los diseminados históricos que siguen un proceso acentuado de despoblamiento: Dehesilla de Algar (0), El Romero (0), La Jarda (0,01), Fuente del Rey (0,05), Los Isletes (0,13) y Casablanca (0,16). En estas áreas, la ausencia de la acción planificadora del Instituto Nacional de Colonización (INC) no permitió el surgimiento de núcleos rurales en los que construir edificios para la prestación de servicios públicos como los educativos, religiosos, sanitarios, etc.

Mapa 5. Áreas de Planificación de la Delegación del Medio Rural del Ayuntamiento de Jerez.



Fuente: Delegación del Medio Rural del Ayuntamiento de Jerez.

En cambio, otras áreas como Torremelgarejo o La Ina, cuyo origen se encuentra en la implantación de zonas de hábitat diseminado por parte del INC, o barriadas rurales como Gibalbín y Cuartillos, surgidas por a la imposibilidad de alojamiento de la población en los cortijos, han visto aumentar sus equipamientos al mismo ritmo que la creciente población demandaba nuevos servicios.

Tabla 5. Extensión superficial y población de las Áreas de Planificación.

ÁREAS DE PLANIFICACIÓN	POBLACIÓN 2010	SUPERFICIE (km ²)	DENSIDAD (Hab/km ²)
Alcornocales	65	18,04	3,60
Añina-Polila	130	31,65	4,11
Casablanca	17	106,31	0,16
Cuartillos	1.042	27,79	37,49
Dehesilla de Algar	0	4,69	0
El Portal	548	15,48	35,40
El Romero	0	17,01	0
El Torno	1.276	8,79	145,16
Estella del Marqués	1.550	14,54	106,60
Fuente del Rey	2	44,08	0,05
Gibalbín	580	130,84	4,43
Guadalcaín	5.255	14,51	362,16
José Antonio o Majarromaque	695	29,86	23,28
La Barca de la Florida	4.221	20,08	210,21
La Ina	789	57,85	13,64
La Jarda	2	190,17	0,01
Las Tablas	169	50,79	3,33
Los Isletes	9	69,39	0,13
Los Repastaderos	925	77,05	12,01
Macharnudo Alto	79	25,33	3,12
Mesas de Asta	482	95,52	5,05
Nueva Jarilla	1585	30,42	52,10
San Isidro del Guadalete	600	8,99	66,74
Torreceda	1.231	11,93	103,19
Torremelgarejo	354	49,19	7,20

Fuente: Elaboración propia a partir de las Áreas de Planificación y el Nomenclátor del INE del año 2010.

6.1.5. Determinación y estudio de las entidades de población.

La particularidad poblacional del municipio de Jerez de la Frontera, con la existencia de numerosos asentamientos urbanos, núcleos y diseminados rurales de diverso origen, morfología, entidad poblacional, titularidad del terreno, vinculación de sus habitantes con las actividades agrarias, nivel de consolidación, tipología de residencia, funcionalidad y nivel competencial, genera una problemática asociada a la gestión y planificación territorial para un conjunto poblacional, el de la zona rural de Jerez, que estaría cercana a los 23.000 habitantes, lo que supone alrededor de un 11% del total poblacional del municipio.

Pero para determinar qué se considera núcleo de población es necesario acudir a la definición propuesta en el apartado 5.2.1 del presente trabajo: *“un núcleo de población estaría formado por un conjunto de al menos diez edificaciones conocido por una denominación específica que la identifica sin posibilidad de confusión, siendo necesario superar una población de 50 personas (residentes de forma habitual). Además se incluirían aquellas viviendas dispersas, susceptibles de ser habitadas, que estén a menos de 200 metros del contorno del conjunto”*.

Según este concepto de núcleo, y utilizando como base geográfica la información sobre poblamiento proporcionada por el producto cartográfico *“Datos Espaciales para escalas intermedias”*, generado por el antiguo Instituto de Cartografía de Andalucía; y como base poblacional el Nomenclátor de entidades poblacionales del Instituto Nacional de Estadística, se pueden clasificar los elementos del poblamiento en la categoría de núcleo o como entidades en diseminado.

Es necesario aclarar que existen algunas entidades poblacionales en el municipio, con una denominación específica, que no alcanzan la categoría de núcleo a pesar de formar un conjunto de más de 10 edificaciones, debido a que poseen una población inferior a 50 residentes habituales, bien por ser una entidad caracterizada por el predominio de la segunda residencia (Montecastillo) o motivada por la reducción de los efectivos poblacionales en asentamientos rurales cuya existencia se fundamentaba en la necesidad de mano de obra de los cortijos cercanos (Añina, Baldío Gallardo). En

otras ocasiones, a pesar de superar el límite poblacional para ser encuadrada en la categoría de núcleo (Casas de Magallanes, Macharnudo Alto, Solete Alto, El Chaparrito), su estructura edificatoria no es concentrada, alternando pequeñas agrupaciones de viviendas rurales con otras aisladas pero cercanas entre sí.

Tabla 6. Núcleos de población y entidades en diseminado del término de Jerez de la Frontera.

DENOMINACIÓN	CATEGORÍA	TIPOLOGÍA	POB.2010
Guadalacacín	Núcleo	Entidad Local Autónoma	4.521
La Barca de la Florida	Núcleo	Entidad Local Autónoma	4.043
Estella del Marqués	Núcleo	Entidad Local Autónoma	1.408
Nueva Jarilla	Núcleo	Entidad Local Autónoma	1.393
El Torno	Núcleo	Entidad Local Autónoma	1.276
Torrecedera	Núcleo	Entidad Local Autónoma	1.143
Cuartillos	Núcleo	Núcleo Menor Rural	986
San Isidro del Guadalete	Núcleo	Entidad Local Autónoma	600
La Corta	Núcleo	Núcleo Menor Periurbano	550
Gibalbín	Núcleo	Núcleo Menor Rural	519
El Portal	Núcleo	Núcleo Menor Periurbano	473
Las Pachecas	Núcleo	Núcleo Menor Rural	420
Los Albarizones	Núcleo	Núcleo Menor Periurbano	420
La Ina	Núcleo	Núcleo Menor Urbano	345
Lomopardo	Núcleo	Núcleo Menor Periurbano	338
Torremelgarejo	Núcleo	Núcleo Menor Rural	334
Majarromaque	Núcleo	Núcleo Menor Urbano	332
Mesas de Asta	Núcleo	Núcleo Menor Urbano	328
Puente La Guareña	Núcleo	Núcleo Menor Rural	257
Mesas del Corral	Núcleo	Barriada Rural	178
Cañada del León	Núcleo	Núcleo Menor Rural	169
Mesas de Santa Rosa	Núcleo	Núcleo Menor Rural	160
La Inmaculada	Núcleo	Barriada Rural	140
El Mojo	Núcleo	Núcleo Menor Rural	140
Las Tablas	Núcleo	Núcleo Menor Rural	125
Rajamancera	Núcleo	Núcleo Menor Rural	119
Casas de Magallanes	Entidad en Diseminado	Diseminado Reciente	106
El Polila	Núcleo	Núcleo Menor Rural	90
Macharnudo Alto	Entidad en Diseminado	Diseminado Histórico	79
Torrecedera Baja	Núcleo	Barriada Rural	67

DENOMINACIÓN	CATEGORÍA	TIPOLOGÍA	POB.2010
El Cuervo	Núcleo	Barriada Rural	61
Solete Alto	Entidad en Diseminado	Diseminado Histórico	57
El Chaparrito	Entidad en Diseminado	Diseminado Urbano	55
Cañada del Carrillo	Entidad en Diseminado	Diseminado Reciente	44
Añina	Entidad en Diseminado	Diseminado Tradicional	40
Las Quinientas	Entidad en Diseminado	Diseminado Tradicional	31
Baldío Gallardo	Entidad en Diseminado	Diseminado Tradicional	28
Los Repastaderos	Entidad en Diseminado	Diseminado Tradicional	27
Casablanca	Entidad en Diseminado	Diseminado Histórico	17
Alcornocalejos	Entidad en Diseminado	Diseminado Histórico	10
Los Isletes	Entidad en Diseminado	Diseminado Histórico	9
La Jarda	Entidad en Diseminado	Diseminado Histórico	2
Fuente del Rey	Entidad en Diseminado	Diseminado Histórico	2
Dehesilla de Algar	Entidad en Diseminado	Diseminado Histórico	0
Montecastillo	Entidad en Diseminado	Complejo Turístico-Deportivo	0

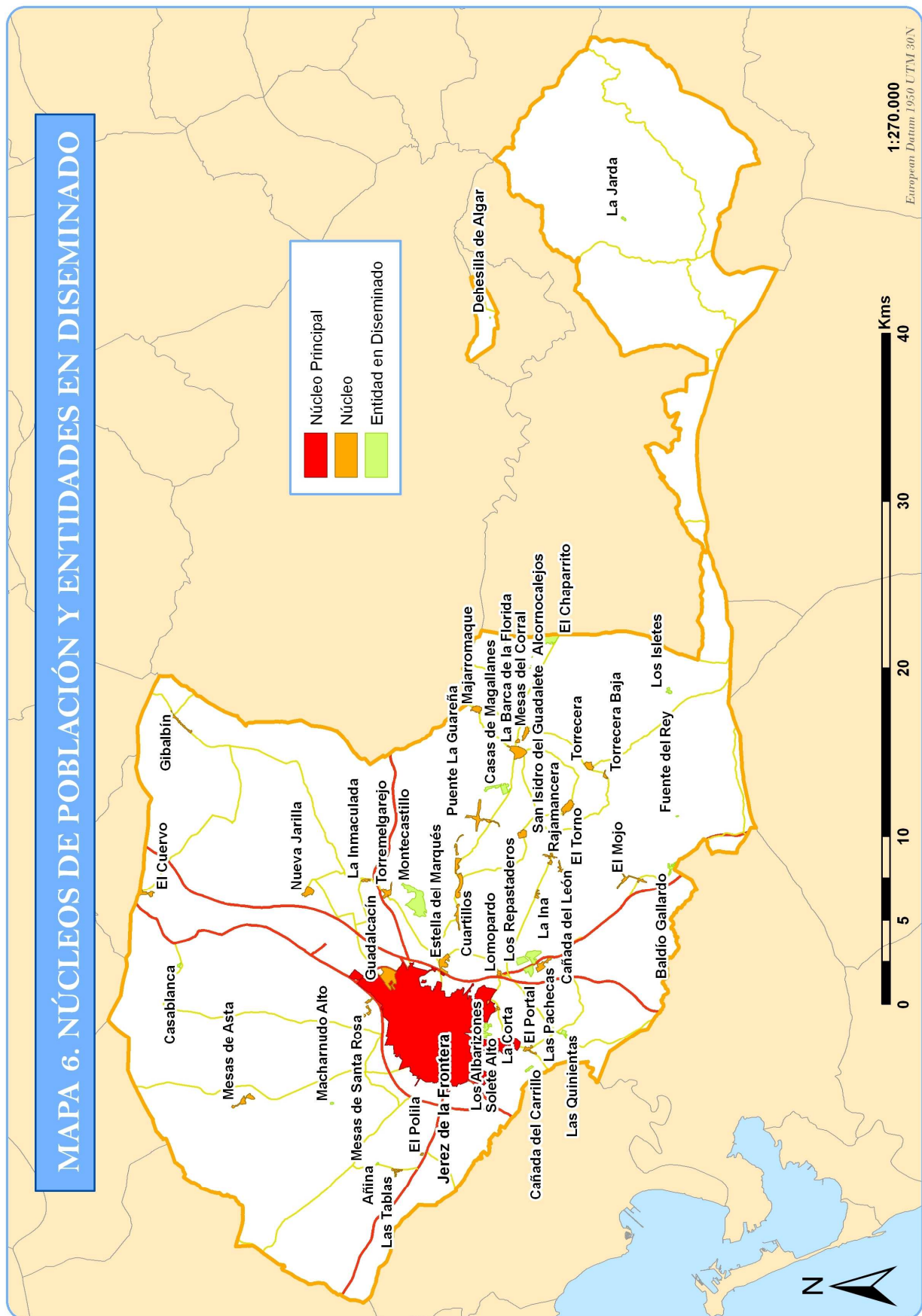
Fuente: Nomenclátor del INE, PGOU actual y aproximaciones propias a partir de otras fuentes de datos.

También existen otros elementos en el poblamiento, reconocidos por una denominación específica (Cañada de Puerto Real, Juncal de Albadalejo, La Greduela, Llanos de Caulina, Los Garciagos, Montealegre Alto, Pozo Romano) que no se han incluido en la relación de la tabla 6 debido a diversas causas: predominio de la segunda residencia, grado de dispersión en la edificación, cercanía al núcleo principal formando parte de su desarrollo urbanístico, etc.

Hace algunos años eran de muy escasa entidad y van adquiriendo relevancia territorial debido a la concentración edificatoria producida por procesos de crecimiento incontrolados de reparcelaciones, existiendo un grave peligro de formación de entidades en diseminado o incluso nuevos núcleos de población, carentes de servicios urbanísticos básicos, con las consiguientes repercusiones que su crecimiento acarrearían.

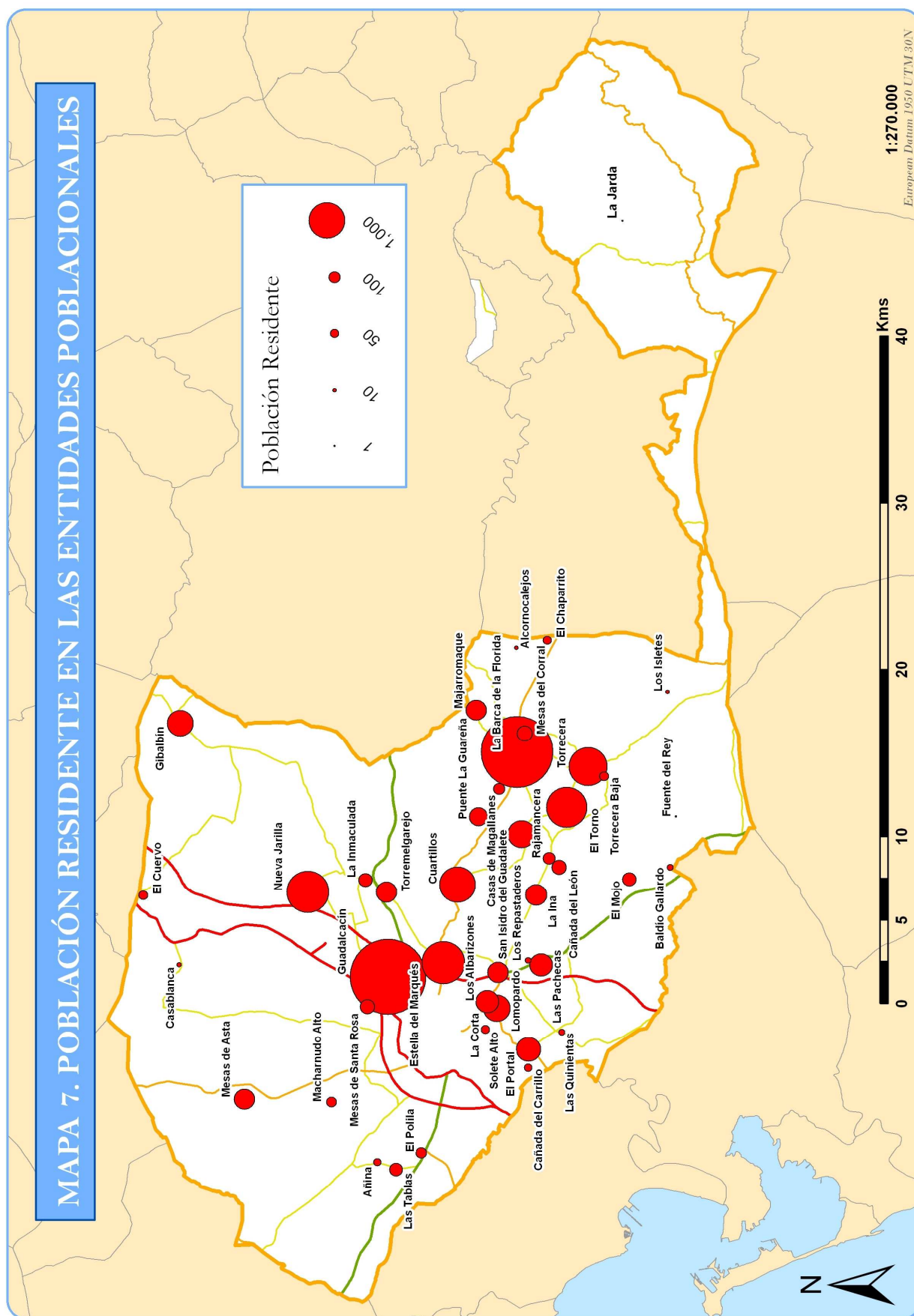
Una vez se han determinado las categorías de asentamientos existentes en el territorio, podemos establecer una tipología de los núcleos de población y entidades en diseminado en función del origen, actividades económicas predominantes o clasificación del suelo existente en la planificación urbanística:

Mapa 6. Núcleos de población y entidades en diseminado del municipio de Jerez de la Frontera.



Fuente: Ayuntamiento de Jerez, Nomenclátor de Entidades del INE y DEA100.

Mapa 7. Residentes de las entidades poblacionales del Jerez Rural.



Fuente: Ayuntamiento de Jerez, Nomenclátor de Entidades del INE y DEA100.

A. Entidades Locales Autónomas.

Está compuesto por aquellos núcleos que son considerados bajo la figura de Entidades Locales Autónomas a partir de la entrada en vigor de la Ley 5/2010 de Autonomía Local de Andalucía: Guadalcaçín, La Barca de la Florida, Estella del Marqués, Nueva Jarilla, El Torno, Torrecera y San Isidro del Guadalete. Durante muchos años se les negaba tal condición debido a distintas interpretaciones de la Ley 7/1993 de Demarcación Municipal de Andalucía, siendo consideradas hasta la entrada de la nueva ley como Entidades de Ámbito Territorial Inferior al Municipio.

Estas entidades locales tienen personalidad y plena capacidad jurídica para el cumplimiento de sus fines específicos ejecutando sus competencias en materia de alumbrado público, concesión de licencias de obras menores, pavimentación, conservación y reparación de vías urbanas, limpieza viaria, promoción cultural y turística, fomento del deporte, etc.; además, tienen servicios o equipamientos educativos y culturales (Educación Primaria y Secundaria - Guadalcaçín y La Barca de La Florida -, Biblioteca, Teatro o Salón de Actos), sanitarios (Centro de Salud de La Barca y Consultorios), asistenciales (Centros de día), políticos (Ayuntamientos pedáneos), religiosos, empresariales, transporte público, etc.

Poseen un elevado grado de urbanización y aglutinan en su conjunto alrededor de 15.000 habitantes, es decir, casi un 70% de la población del Jerez Rural, presentan un parcelario concentrado y apenas han modificado la morfológica originaria de hábitat rural concentrado de los planes de colonización del Instituto Nacional de Colonización.

B. Núcleos Menores Periurbanos.

Son núcleos englobados dentro del suelo urbano desde el PGOU de 1984 (El Portal, La Corta, Los Albarizones y Lomopardo), que debido a su cercanía con el núcleo matriz pueden ser confundidas sus tramas urbanas, si bien la morfológica de estos asentamientos presenta un marcado origen rural, conservando aún hoy actividades agrícolas. En cuanto a equipamientos y servicios, presentan una gran heterogeneidad aunque como aspecto común a todos ellos es la carencia de servicios que presta el

ayuntamiento a pesar de la cercanía al núcleo principal, de este modo se detecta en todos ellos la ausencia de un centro cultural o biblioteca o pistas polideportivas acondicionadas (a excepción de El Portal); no obstante, presentan algunos de ellos centros de barrio (El Portal, La Corta y Los Albarizones), equipamiento religioso (El Portal y Los Albarizones) y educativo (El Portal y Lomopardo), y en todos existen servicios de recogida de residuos, limpieza viaria y transporte público urbano.

C. Núcleos Menores Urbanos.

Se trata de un conjunto de núcleos clasificados como suelo urbano por el PGOU de 1984 que se encuentran distanciados del núcleo principal y donde las actividades agrícolas tradicionales de su población se han diversificado hacia otros sectores: La Ina, Majarromaque, Mesas de Asta y Torremelgarejo.

En lo relativo a los equipamientos y servicios con los que cuentan habría que individualizar cada caso:

- La Ina y Torremelgarejo: surgidas de los planes de colonización del Instituto Nacional de Colonización como zonas de hábitat diseminado, presentan servicios de transporte público, recogida de residuos y limpieza viaria, poseen centro de barrio y, en el caso de La Ina, equipamiento educativo.
- Mesas de Asta: surgió en los años 50 cuando un grupo de jornaleros levantaron chozas en un antiguo descansadero de ganado y tras una década consiguieron la propiedad de los terrenos sobre las que se levantaron las edificaciones. Poseen equipamiento educativo, sanitario y cultural.
- Majarromaque o José Antonio: su origen, estructura urbana y desarrollo es semejante al de las pedanías o ELAs. Como poblado planificado presenta iglesia y casa consistorial y, debido a su entidad, posee equipamiento educativo y deportivo.

D. Núcleos Menores Rurales.

Son los asentamientos rurales de mayor entidad, teniendo la consideración de verdaderos núcleos humanos, demandantes de un determinado nivel de servicios

urbanísticos, educativos, culturales, sanitarios, religiosos, etc. Su carácter es fundamentalmente agrícola pero se dan procesos de diversificación hacia otras actividades, siendo la mayoría de sus habitantes de primera residencia, aunque cada vez la vinculación con el núcleo principal es mayor debido a la mejora de las infraestructuras y el transporte público.

En esta categoría se integran los asentamientos rurales de Cuartillos y Gibalbín, siendo los de mayor entidad, crecimiento demográfico y consolidación urbanística, además de Las Pachecas, Puente La Guareña, Rajamancera y Cañada del León (muy próximos entre sí), Mesas de Santa Rosa, Las Tablas, El Mojo y El Polila. Dada la entidad que presentan, la calidad de sus edificaciones y el establecimiento definitivo de sus habitantes, resultan prácticamente irreversibles.

Poseen diferentes grados de dotaciones en equipamientos colectivos y servicios comunitarios, destacándose Cuartillos (986 habitantes) debido a su tamaño poblacional, contando con equipamiento educativo, sanitario, religioso, actividades industriales y comerciales, etc.

E. Barriadas Rurales.

Se trata de núcleos de población que forman parte de otros núcleos secundarios de mayor importancia y que, para la prestación de servicios y utilización de equipamientos, dependen totalmente de ellos, estando muy próximos a los mismos. Se trata de Mesas del Corral, La Inmaculada, Torrecera Baja y El Cuervo, dependientes de La Barca de la Florida, Torremelgarejo, Torrecera y El Cuervo, respectivamente.

El municipio de El Cuervo se sitúa al norte del de Jerez, encontrándose su cabecera entre ambos municipios, si bien la mayor parte se sitúa en el municipio sevillano. De la zona jerezana de este núcleo tendríamos una parte totalmente integrada en el núcleo principal y otra que discurre a lo largo de una vía pecuaria, con una evolución tendente a la concentración edificatoria.

Mesas del Corral es una barriada de La Barca de la Florida separada físicamente por el Río Guadalete y distante unos 400 metros por lo que, según la definición

planteada, no se podría integrar dentro del contorno nuclear barqueño. Por su parte, Torrecera Baja dista unos 700 metros de Torrecera y no posee un elemento físico que marque su separación. La barriada de La Inmaculada se ubica a menos de un kilómetro de Torremelgarejo y posee una estructura edificatoria compacta. Ninguna de estas entidades poblacionales posee una identidad diferenciada respecto a su núcleo de referencia, por lo que no pueden considerarse núcleos menores.

F. Diseminado Tradicional.

Son entidades en diseminado de marcado carácter tradicional y fuerte vinculación agrícola, de escasa población y evolución demográfica negativa en los casos de Añina y Baldío Gallardo, y positiva en Los Repastaderos, Las Quinientas y Cañada del Carrillo. Poseen un crecimiento vegetativo positivo, por lo que su población tiende principalmente al núcleo matriz debido a la falta de suelo para urbanizar, escasez de servicios y equipamientos, siendo sus pobladores, en la mayoría de los casos, de primera residencia.

G. Diseminado Reciente.

El Chaparrito es una entidad en diseminado surgida a partir de una parcelación ilegal de los años 60, que se ha ido consolidando a partir de la clasificación como suelo urbano efectuada por el PGOU de 1995, que le dio el carácter de legal para evitar que la inminente segregación de San José del Valle supusiera una mayor merma de territorio para el ayuntamiento jerezano. A pesar de superar el límite poblacional para ser considerado núcleo se ha categorizado como entidad en diseminado, ya que sus edificaciones no se encuentran formando un conjunto bien definido, aunque su tendencia es hacia la concentración y al aumento poblacional. Las viviendas son en su mayoría de segunda residencia, no posee equipamientos colectivos, se prestan servicios de recogida de residuos y no existe una identidad social propia.

Por su parte, Casas de Magallanes está formada por viviendas dispuestas linealmente junto a una cañada y por una reparcelación más reciente (años 80) de una propiedad cercana a la ELA de La Barca de la Florida que, en un principio, estaba dedicada de forma exclusiva al laboreo agrícola de pequeños huertos familiares, que

con el paso de los años ha sufrido un fuerte proceso urbanizador para segunda residencia que ha ido desembocando en viviendas de carácter permanente.

H. Diseminado Histórico.

Algunas entidades en diseminado como Alcornocalejos, Casablanca, Fuente del Rey, Los Isletes, La Jarda y Macharnudo Alto se han considerado debido a su importancia territorial, ya que se localizan en zonas ausentes de núcleos de población y, aunque en la actualidad están casi despobladas (destaca Macharnudo Alto que debido a su relativa cercanía al núcleo principal de Jerez aún cuenta con 79 habitantes) en el pasado poseían cierta relevancia poblacional, contando aún con una importante población diseminada hace 30 años, cuyo origen estaba motivado por los asentamientos de jornaleros en torno a determinados cortijos de laboreo, sufriendo en la actualidad un fuerte declive demográfico debido al retroceso de las labores agrícolas y la mejora de las comunicaciones e infraestructuras viarias que hacen posible el traslado diario de los trabajadores del campo hasta las explotaciones.

En cuanto al diseminado histórico de La Jarda, situado en los Montes de Propios de Jerez (Parque Natural de Los Alcornocales) en el extremo este del municipio y que formaba parte en el año 1981 de la unidad poblacional del Charco de los Hurones (actualmente perteneciente a San José del Valle), su despoblamiento obedece también a la mejora de las comunicaciones que hacen posible a los trabajadores de la finca del mismo nombre, acudir a diario para las labores forestales.

Tabla 7. Diseminado histórico del término de Jerez de la Frontera.

DISEMINADO	POB.1981	POB.2000	POB.2008	POB.2010
Alcornocalejos	-	47	12	10
Macharnudo Alto	277	113	89	79
Casablanca	111	27	15	17
Solete Alto	77	83	62	57
Fuente del Rey	99	7	2	2
Los Isletes	471	14	8	9
La Jarda	-	18	10	2
Dehesilla de Algar	-	0	0	0

Fuente: PGOU de 1984 y Nomenclátor del INE.

El Solete Alto ha sido el único diseminado histórico que, aunque con una evolución demográfica negativa, ésta no ha sido tan importante debido a su cercanía al núcleo principal y su clasificación desde el Plan urbanístico de 1984 como suelo urbano (lo que generó un aumento poblacional), por lo que en la actualidad casi ha perdido su identidad rural originaria que sería preciso conservar. La reducción poblacional actual se debe a la existencia de edificaciones dispersas que se han integrado en el núcleo principal de Jerez de la Frontera, como El Geraldino y la Hijuela del Solete.

I. Complejo Turístico-Deportivo.

En el caso de Montecastillo, su inclusión está motivada por el gran tamaño del complejo turístico-deportivo (campos de fútbol, golf, circuito de velocidad, hoteles, apartamentos, viviendas de lujo de segunda residencia, etc.) a pesar de no poseer población habitual, tan sólo son residentes temporales que se alojan en viviendas de alto nivel y en los hoteles localizados dentro del complejo.

6.1.6. Desconcentración y descentralización administrativa municipal para Jerez de la Frontera.

En la actualidad, existen en el municipio jerezano 7 Entidades Locales Autónomas que poseen competencias propias en materia de alumbrado público, concesión de licencias de obras menores, pavimentación, conservación y reparación de vías urbanas, limpieza viaria, promoción cultural y turística, fomento del deporte; lo que supone una verdadera política de descentralización municipal. Por otra parte, el ayuntamiento jerezano impulsa desde hace años una política de carácter desconcentrado tendente a ofrecer a las entidades poblacionales del “*Jerez Rural*” una oportunidad para gestionar ciertas competencias delegadas, fundamentalmente relacionadas con aspectos culturales y festejos.

De esta forma, ha establecido un total de 15 delegados/as de alcaldía en diferentes núcleos: Cuartillos, La Corta, Gibalbín, Los Albarizones, El Portal, Las Pachecas, Lomopardo, Mesas de Asta, Torremelgarejo, Majarromaque, La Ina, Puente

La Guareña, Las Tablas-El Polila-Añina, El Mojo-Baldío Gallardo, Rajamancera y Mesas de Santa Rosa, insertadas en la estructura organizativa de la Delegación del Medio Rural del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.

6.2. CRITERIO ADMINISTRATIVO.

Para la aplicación de este criterio es necesario conocer con detalle las distintas políticas públicas que afectan al municipio jerezano y que suponen algún tipo de subdivisión de su término en unidades territoriales inframunicipales, siendo conveniente mantener sus límites siempre que sea posible y se ajusten a la realidad territorial y a la identidad diferenciada de los núcleos de población y entidades en diseminado existentes.

6.2.1. Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía.

El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), aprobado por el Decreto 206/2006, tiene como finalidad general definir la organización física para las funciones territoriales de Andalucía, adecuadas a sus necesidades y potencialidades actuales y diseñar una estrategia territorial andaluza global, para garantizar el fin de los desequilibrios internos y asegurar una adecuada conexión del territorio andaluz con el exterior.

El Modelo Territorial propuesto aporta una zonificación de la región en Unidades Territoriales que son el resultado espacial de la integración de diversos referentes considerados: las ciudades y los asentamientos junto con sus estructuras y redes, los ejes de articulación física regional y la base natural y patrimonial. Se establecen una serie de sistemas y redes de asentamientos que organizan ámbitos territoriales en función de la influencia o atracción que ejercen sus centros poblacionales; obteniendo un sistema polinuclear de centros regionales, redes de ciudades medias y redes de asentamientos en áreas rurales.

Las Unidades Territoriales que se definen son áreas continuas básicas caracterizadas por su homogeneidad, siendo básicas para el desarrollo de estrategias territoriales en una doble orientación:

- a) Son referentes asociados con modelos específicos de gestión del uso del suelo y de utilización de los recursos naturales, el paisaje o la prevención de riesgos.
- b) Son referentes en los que contextualizar los grandes Sistemas Regionales (ciudades, transportes, hidráulico, energético y patrimonial). Esto significa que no se contemplan como recintos cerrados, sino como referencias que se influyen mutuamente y de manera dinámica.

Esta característica eminentemente funcional y vertebradora del territorio, y la omisión del concepto comarcal o subregional, permite que la delimitación de Unidades Territoriales sea novedosa, ya que encontramos excepciones donde no se reducen los límites a las fronteras administrativas provinciales o municipales, siendo posible la integración de territorios con fuertes vinculaciones e identidad propia a pesar de su pertenencia a provincias distintas.

De este modo, en el artículo 156 de la normativa del POTA, referido a la identificación de las Unidades Territoriales, se dice lo siguiente:

“La Unidades Territoriales delimitadas toman como criterio básico las Estructuras Urbanas Intermedias entendidas desde sus componentes básicos, los núcleos urbanos y las características socioterritoriales de sus ámbitos municipales. La delimitación política administrativa de sus contornos presenta, sin embargo algunas justificadas excepciones:

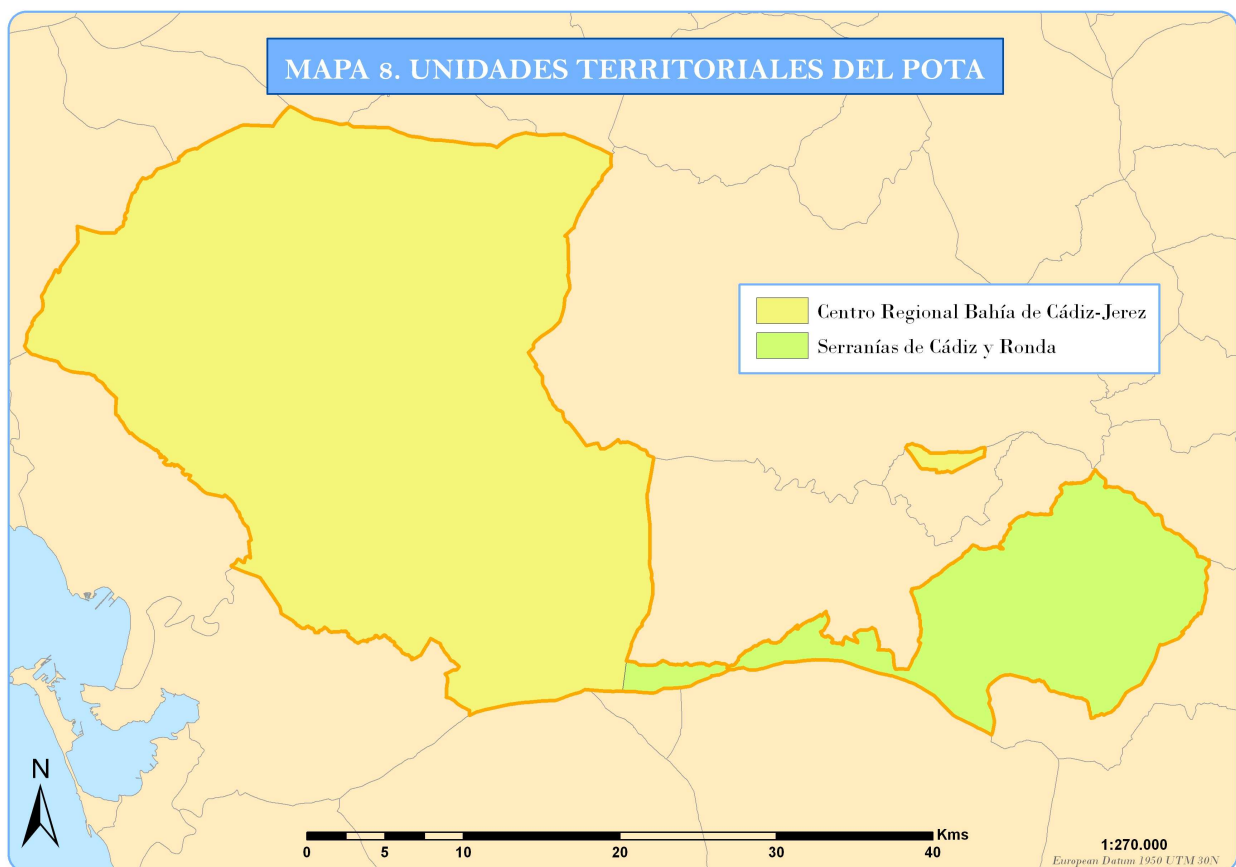
- a) *Términos municipales adscritos a dos Unidades Territoriales. Algunos municipios, por la posición territorial de sus núcleos urbanos y las características físicas de su término, presentan una difícil adscripción unívoca a una Unidad Territorial. Son zonas de transición con límites más o menos indeterminados, que ejercen funciones de goznes entre diferentes Unidades. Son elementos territoriales con una especial riqueza y complejidad en su posición geográfica y*

en su influencia sobre el resto del espacio que han de ser considerados expresamente en la delimitación de ámbitos de planificación, siendo posible que por ello puedan estar en varios ámbitos de planificación.

- b) Unidades Territoriales interprovinciales. Algunas estructuras conformadas a través de procesos territoriales recientes justifican algunas continuidades a efectos de reconocer su funcionalidad y la potencia de relaciones territoriales, más allá de los límites provinciales. Este criterio no es óbice para identificar ámbitos internos más idóneos y coherentes para determinadas funciones.*

El municipio de Jerez se encuadraría en el grupo de términos que pertenecen a dos Unidades Territoriales: formando parte del Centro Regional Bahía de Cádiz-Jerez se ubicarían la totalidad de núcleos de población del Jerez Rural, y en las Serranías de Cádiz y Ronda se situaría el diseminado histórico de de La Jarda.

Mapa 8. Unidades Territoriales del POTA en el municipio de Jerez de la Frontera.



Fuente: Elaboración propia a partir del POTA.

Esta delimitación, aunque muy básica, ya nos aporta un dato de gran interés para determinar dos áreas claramente diferenciadas en el municipio, caracterizadas por su homogeneidad física y funcional, así como por presentar problemas y oportunidades comunes en materias relacionadas con el uso económico del territorio y la gestión de sus recursos patrimoniales.

6.2.2. Política de Empleo en Andalucía.

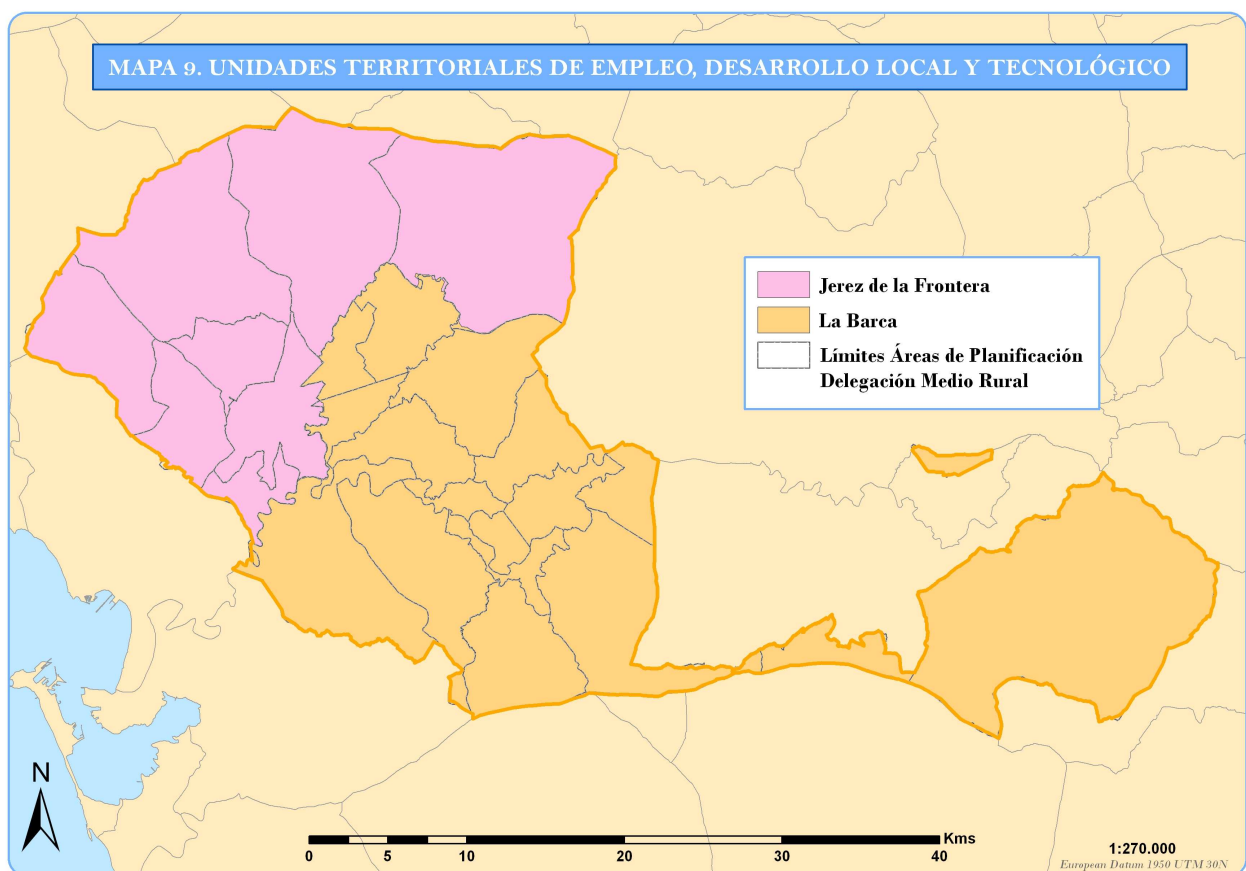
Las Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico (UTEDLT) eran dispositivos creados para fomentar el empleo y promover el desarrollo local y tecnológico en Andalucía que respondían a una estrategia global, fruto de la cooperación, participación, solidaridad y consenso con el ámbito local, facilitando la pronta resolución de gestiones a la ciudadanía, dinamización del empleo local y sus recursos, teniendo presente lo específico de las actuaciones dependiendo de las características de cada territorio. Eran el relevo de las anteriores Unidades de Promoción de Empleo (UPE) surgidas mediante el Decreto 150/1985 que, en concierto con los entes locales, estimularon y apoyaron las iniciativas procedentes de los Ayuntamientos para la consecución de proyectos que diversificaran la actividad económica y generaran empleo a través del asesoramiento técnico y financiero de las unidades, por lo que podemos afirmar que sigue vigente esta política sectorial de incidencia territorial.

Actualmente, han sido sustituidas por las Áreas Territoriales de Empleo (ATEs) que se estructuran en base a unidades de ámbito supramunicipal, en las que se agrupan los instrumentos que prestan servicios a personas demandantes de empleo, empresas y familias, se promueve el desarrollo local y económico, y se apoya el proceso para la adopción de decisiones sobre políticas activas de empleo en su zona de influencia.

Aunque las UTEDLT ya no están en funcionamiento, es interesante conocer cómo delimitaban su área de actuación. En ocasiones, tenían un carácter supramunicipal agrupando varios municipios con características similares dentro de

una misma unidad, otras veces sus límites coincidían exactamente con municipios completos individuales y, en el caso de Jerez de la Frontera, éste quedaba dividido en dos Unidades, tal y como se puede apreciar en el mapa 9 de este estudio. Para conocer los límites que fueron utilizados para subdividir el municipio jerezano en dos ámbitos o unidades, se han superpuesto los límites de las Áreas de Planificación utilizadas por la Delegación del Medio Rural, observando que los límites de referencia coinciden con los establecidos para las UTEDLT que, a su vez, son prácticamente iguales a los establecidos para las secciones censales.

Mapa 9. Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico de Jerez de la Frontera.



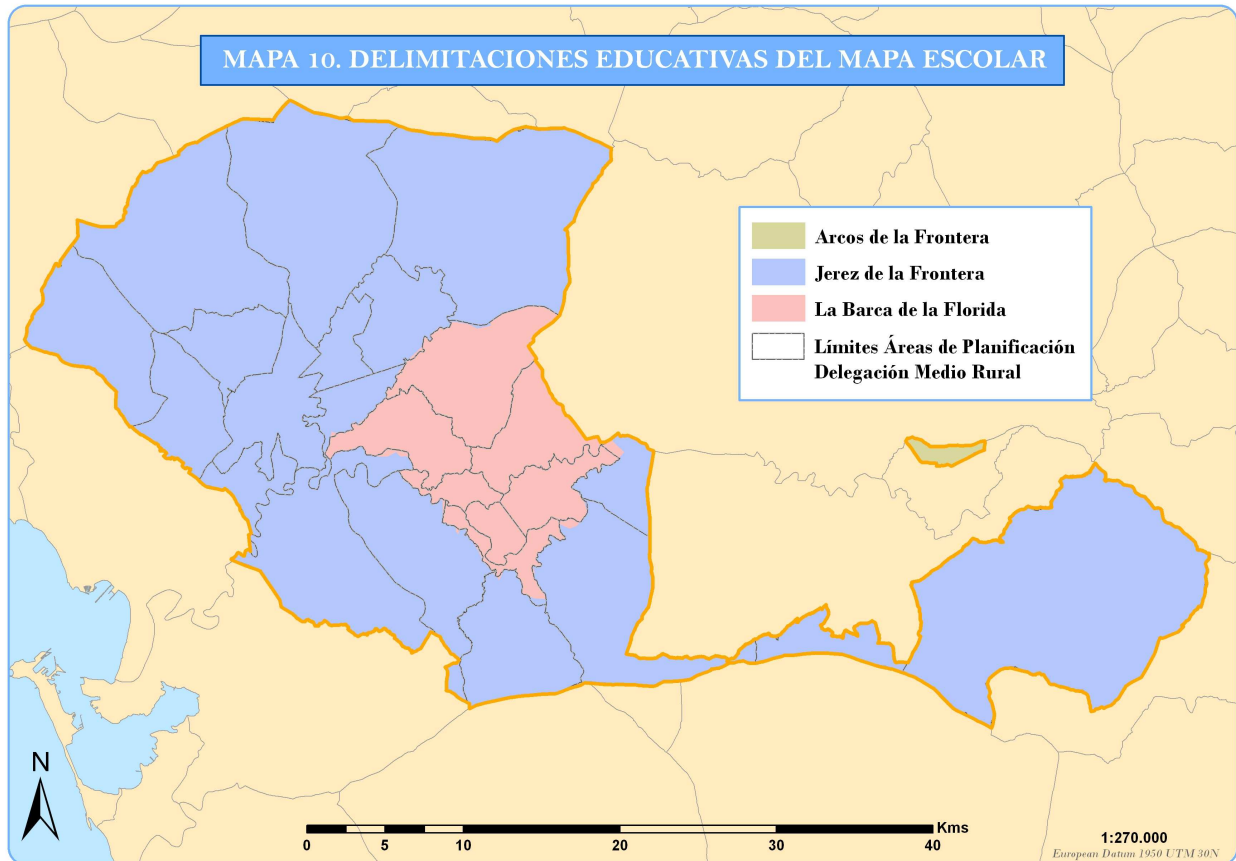
Fuente: Datos Espaciales de Andalucía para escalas intermedias, 2009.

6.2.3. Política educativa andaluza.

La Propuesta de Comarcalización de Andalucía de 1983 sirvió de base para la elaboración de los denominados Mapas Escolares de Andalucía en los que, desde el

curso 84/85, se establecían los equipamientos educativos básicos que le correspondían a cada ámbito comarcal en función del nivel educativo. A medida que la política educativa se desarrolla se aprecia una notable reducción del carácter programático de sus propuestas planificadoras, sirviendo como simple boceto divulgativo de la situación educativa andaluza.

Mapa 10. Delimitaciones Educativas del Mapa Escolar en Jerez de la Frontera.



Fuente: Datos Espaciales de Andalucía para escalas intermedias, 2009.

Tras la puesta en marcha de la Ley Orgánica de Orientación General del Sistema Educativo (LOGSE) del año, aparece el Mapa de Enseñanzas y Red de Centros de Andalucía para los niveles no universitarios en el que se establece la oferta prevista para cada ayuntamiento o entidad de población que cuente con equipamiento docente.

Observando el mapa sobre las delimitaciones educativas del mapa escolar, se detecta que, al igual que pasaba con las UTEDLT, los límites que se establecen son similares a los de las Áreas de Planificación de la Delegación del Medio Rural del

Ayuntamiento de Jerez; las particularidades parecen deberse más a la calidad de la información geográfica que a diferencias en la delimitación.

6.2.4. Códigos postales.

La Sociedad Estatal Correos y Telégrafos es la encargada de la asignación de códigos a las direcciones postales, de tal modo que el conjunto de códigos postales debe recoger todas las direcciones físicas existentes, es decir, cada dirección debe tener asignado un código postal. Este sistema ha permitido durante largo tiempo que aunque se desconozca la localización de una vía, pudiera conocerse su aproximación postal mediante su código. Sin embargo, este sistema que se ha mostrado eficaz para las áreas urbanas, presenta graves deficiencias en las zonas rurales, principalmente por no establecerse una verdadera delimitación para el establecimiento de códigos postales, ya que la asignación de códigos se realiza de forma alfanumérica mediante una tabla de relación entre códigos y direcciones postales.

El conocimiento del territorio es uno de los campos en los que más se ha avanzado en los últimos años debido al gran avance que ha supuesto para la sociedad los Sistemas de Información Geográfica; no obstante, siguen existiendo deficiencias, sobre todo en zonas rurales, en las cuales siguen sin localizarse multitud de direcciones postales de tipo “cortijo”, “pago”, “paraje”, “lugar”, etc.

A partir de la información alfanumérica proporcionada por Correos, diversas entidades públicas y privadas han elaborado sus propias capas de información de códigos postales que van actualizando a medida que la sociedad estatal va introduciendo cambios alfanuméricos. El presente estudio después de analizar las capas generadas por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, en su producto cartográfico denominado “*Datos Espaciales de Andalucía para escalas intermedias*”, y la capa incorporada en el proyecto de CartoCiudad, considera conveniente utilizar la capa de CartoCiudad para cartografiar los códigos postales ya que aportan una delimitación en áreas más ajustada a la realidad.

Los límites de los códigos postales no tienen en cuenta la realidad territorial ni la identidad de los asentamientos de población existentes, es una delimitación exclusivamente administrativa para la gestión de los envíos postales, por lo que es complicado que se puedan tener en cuenta para la generación de unidades territoriales.

6.2.5. Seccionado censal.

La sección censal se define, salvo excepciones, como un territorio continuo habitado por una población entre 500 y 2.500 habitantes, y perfectamente delimitado por accidentes del territorio, geográficos y/o urbanísticos. Desde un punto de vista social, su pequeña amplitud asegura una constatable homogeneidad para sus habitantes y familias, por lo que podrían aceptarse válidas para cada unidad que la compone, las características medias de todos los demás individuos de la sección.

En Veres (1991) se justificaba el uso de la sección estadística o sección censal en las investigaciones de carácter estadístico debido a que la sección censal es:

- *“una unidad espacial perfectamente delimitada por la Administración Pública Estadística y Electoral, que mantiene un proceso administrativo-estadístico para garantizar su existencia, a la vez que se responsabiliza de introducir pertinentes modificaciones en relación a los sucesivos Censos de Población y Padrones de Habitantes;*
- *una unidad de tamaño reducido que, de por sí, favorece la homogeneidad de los elementos unitarios (las viviendas) que la componen, aunque no la garantiza;*
- *una unidad administrativa de frecuente uso en relación a los procesos electorales que avalan su permanente actualización;*
- *una unidad de la Administración Municipal que sirve de referencia, a través de las hojas padronales, a los habitantes de un municipio y de las viviendas que habitan ...”*

Así pues, la existencia de legislaciones de carácter estadístico, electoral y municipal, obliga al mantenimiento permanentemente actualizado de estos

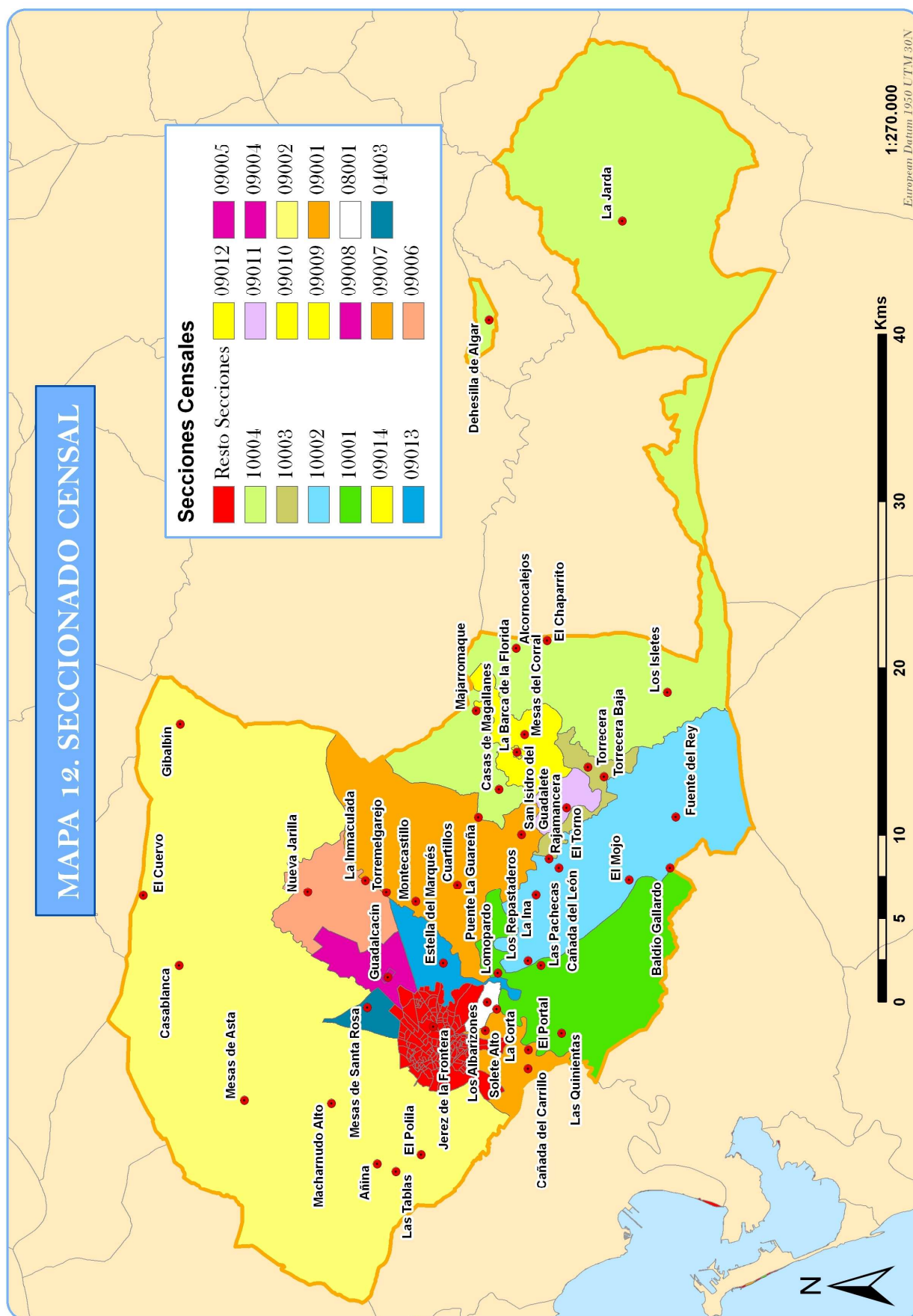
conglomerados de viviendas, delimitados con exactitud a partir de límites geográficos objetivos. Y aún es más, las secciones estadísticas deberían llegar a ser el término de localización de otros elementos, como establecimientos comerciales e industriales, vehículos matriculados, edificios singulares, etc., de forma que la existencia de esta rica información localizada permitiera, por ejemplo, una mejor planificación del territorio”.

Es cierto que las secciones censales al ser la unidad estadística y geográfica mínima pueden ser utilizadas para la planificación territorial pues, debido a su relación con el Censo de Población y el Padrón de Habitantes, se pueden obtener datos demográficos y socioeconómicos para la generación de mapas temáticos; no obstante, su delimitación obedece a criterios exclusivamente demográficos, ajenos a cualquier realidad identitaria y socioeconómica que nos ayude a comprender el territorio municipal. Por tanto, para establecer unidades territoriales inframunicipales pueden utilizarse como base, aunque debido a sus continuas modificaciones en función del volumen poblacional, desaconsejan asimilar estas unidades a las secciones.

El Instituto de Estadística y Cartografía publicó en el año 2011 el producto “Cartografía Censal de Andalucía, período 2001-2009”, que permite incluir en la difusión de los resultados de los Censos de Población y Viviendas de 2001 para Andalucía (completado con la información que aportan los padrones de los años 2002 a 2009) mapas temáticos mediante los cuales se puede, para un municipio concreto, presentar la distribución a nivel de sección censal de las variables recogidas en los censos, tanto de población como de vivienda. Entre ellas se encuentran, por citar sólo algunas, la población clasificada por sexo y edad, nacionalidad, estado civil o nivel de estudios; y en relación a las viviendas, la clasificación por superficie, número de habitaciones, número de residentes, y régimen de tenencia, entre otras.

Para el término jerezano se han agrupado las secciones pertenecientes al núcleo urbano principal, al igual que para La Barca de la Florida y Guadalcazín (ya que poseen varias secciones censales al superar los 2.500 habitantes), obteniendo una delimitación cuyos límites son muy semejantes a los de las Áreas de Planificación de la delegación del Medio Rural del ayuntamiento de Jerez.

Mapa 12. Secciones censales del municipio de Jerez de la Frontera.



Fuente: Secciones censales del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.

6.2.6. Nomenclátor de Entidades de Población.

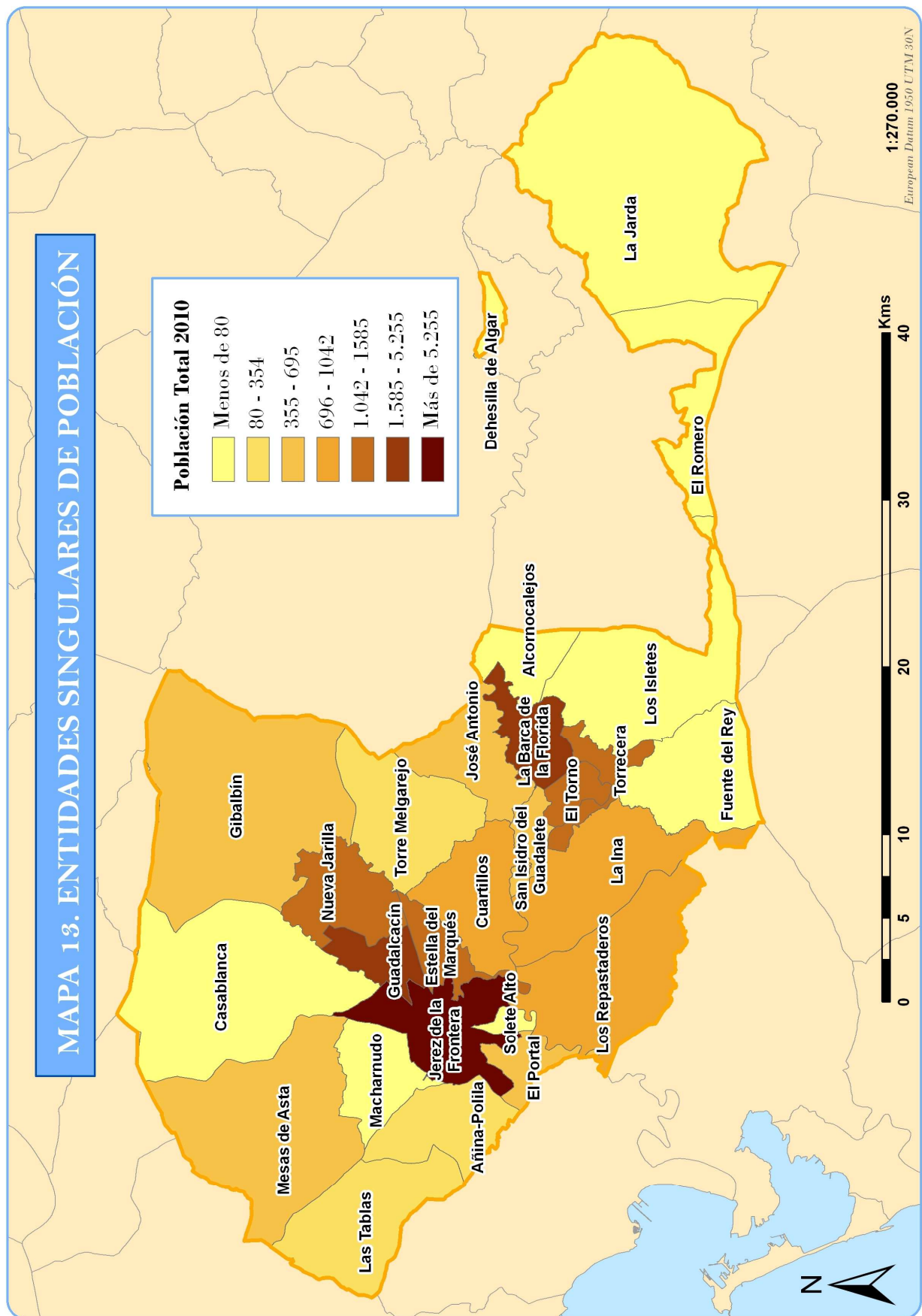
La división administrativa del territorio nacional en comunidades autónomas, provincias y municipios es insuficiente, desde un punto de vista estadístico, para conocer de qué forma se asienta la población en los municipios.

Por este motivo se realiza una subdivisión de los mismos, que no posee carácter oficial, pero sí gran tradición: las entidades de población, colectivas y singulares, así como los núcleos y diseminados de estas últimas. El Nomenclátor contiene el número de habitantes separado por sexo para todos los municipios y entidades de población de rango inferior al municipio.

La utilización de esta fuente de información plantea dos problemas:

1. Por un lado se presenta en forma de tablas con datos alfanuméricos que no tienen su plasmación geográfica o territorial aunque, en cierta medida, debe tenerla en cuenta ya que se ofrece información sobre los totales poblacionales del diseminado de cada una de las entidades singulares existentes en el municipio. En el caso jerezano, si comparamos la información que nos aporta con la delimitación establecida en el PGOU de 1984 (teniendo en cuenta la segregación de San José del Valle), se puede afirmar sin temor a dar datos erróneos, que los límites de las denominadas Áreas Homogéneas (a excepción de Añina-Polila que se incluye en Las Tablas) coinciden con la información alfanumérica de las entidades singulares.
2. Por otro, no sufre un mantenimiento continuo de su información por lo que los datos que ofrece no se ajustan a la realidad territorial actual. De esta forma, muchos núcleos de población surgidos en los últimos años no aparecen recogidos como tales dentro de la entidad singular correspondiente, estando incluida su población en los diseminados. Es más, se deberían actualizar las actuales entidades de población ya que alguna como El Romero y Alcornocalejos tenían razón de ser antes de la segregación del término municipal de San José del Valle.

Mapa 12. Entidades Singulares de población de Jerez de la Frontera.



Fuente: Elaboración propia a partir del mapa de Áreas Homogéneas del PGOU de 1984 y el Nomenclátor INE, 2010.

6.3. CRITERIO CUANTITATIVO.

Los anteriores criterios han permitido determinar los asentamientos de población existentes (ya sean núcleos o entidades en diseminado) y conocer las distintas delimitaciones inframunicipales utilizadas para la planificación de diferentes políticas estatales, regionales y municipales. Mediante un análisis de los límites se puede observar la existencia de numerosas coincidencias lo que evidencia que ciertas fronteras entre entidades, áreas o unidades tienen una cierta tradición en el territorio ya que, en gran parte de las ocasiones, se sitúan sobre accidentes geográficos (como la red hidrográfica) o infraestructuras de transporte (principalmente carreteras)

No obstante, es recomendable realizar estudios de carácter cuantitativo para la delimitación de unidades territoriales inframunicipales por medio de la generación de áreas gravitacionales, teniendo en cuenta factores como la población, la actividad comercial, el índice de asociacionismo, etc. Para las Entidades Locales Autónomas se apuesta en la legislación, claramente, por un criterio de proporcionalidad que toma en consideración la relación entre territorio y población. Según este criterio y teniendo en cuenta que el término municipal jerezano tiene una extensión de 1.188,23 km², a cada núcleo de población o entidad en diseminado le correspondería una superficie máxima que queda reflejada en la tabla 8.

Tabla 8. Núcleos de población y entidades en diseminado, según el criterio territorio/población.

DENOMINACIÓN	TIPOLOGÍA	POB.2010	SUP/POB (km ²)
Guadalcaín	Entidad Local Autónoma	4.521	18,21
La Barca de la Florida	Entidad Local Autónoma	4.043	16,29
Estella del Marqués	Entidad Local Autónoma	1.408	5,67
Nueva Jarilla	Entidad Local Autónoma	1.323	5,33
El Torno	Entidad Local Autónoma	1.276	5,14
Torrecedera	Entidad Local Autónoma	1.143	4,60
Cuartillos	Núcleo Menor Rural	986	3,97
San Isidro del Guadalete	Entidad Local Autónoma	600	2,42
La Corta	Núcleo Menor Periurbano	550	2,22
Gibalbín	Núcleo Menor Rural	519	2,09
El Portal	Núcleo Menor Periurbano	473	1,91

DENOMINACIÓN	TIPOLOGÍA	POB.2010	POB/SUP (km ²)
Las Pachecas	Núcleo Menor Rural	420	1,69
Los Albarizones	Núcleo Menor Periurbano	420	1,69
La Ina	Núcleo Menor Urbano	345	1,39
Lomopardo	Núcleo Menor Periurbano	338	1,36
Torremelgarejo	Núcleo Menor Rural	334	1,35
Majarromaque	Núcleo Menor Urbano	332	1,34
Mesas de Asta	Núcleo Menor Urbano	328	1,32
Puente La Guareña	Núcleo Menor Rural	257	1,04
Mesas del Corral	Barriada Rural	178	0,72
Cañada del León	Núcleo Menor Rural	169	0,68
Mesas de Santa Rosa	Núcleo Menor Rural	160	0,64
La Inmaculada	Barriada Rural	140	0,56
El Mojo	Núcleo Menor Rural	140	0,56
Las Tablas	Núcleo Menor Rural	125	0,50
Rajamancera	Núcleo Menor Rural	119	0,48
Casas de Magallanes	Diseminado Reciente	106	0,43
El Polila	Núcleo Menor Rural	90	0,36
Macharnudo Alto	Diseminado Histórico	79	0,32
Torrejera Baja	Barriada Rural	67	0,27
El Cuervo	Barriada Rural	61	0,25
Solete Alto	Diseminado Histórico	57	0,23
El Chaparrito	Diseminado Urbano	55	0,22
Cañada del Carrillo	Diseminado Reciente	44	0,18
Añina	Diseminado Tradicional	40	0,16
Las Quinientas	Diseminado Tradicional	31	0,12
Baldío Gallardo	Diseminado Tradicional	28	0,11
Los Repastaderos	Diseminado Tradicional	27	0,11
Casablanca	Diseminado Histórico	17	0,07
Alcornocales	Diseminado Histórico	10	0,04
Los Isletes	Diseminado Histórico	9	0,04
La Jarda	Diseminado Histórico	2	0,01
Fuente del Rey	Diseminado Histórico	2	0,01
Dehesilla de Algar	Diseminado Histórico	0	0
Montecastillo	Complejo Turístico-Deportivo	0	0

Fuente: Nomenclátor del INE, PGOU actual y aproximaciones propias a partir de otras fuentes de datos.

Este criterio restrictivo tendría sentido aplicarlo sobre las Entidades Locales Autónomas y sobre aquellos núcleos que pudieran tener la aspiración de llegar a serlo (en el momento actual parece imposible que ningún núcleo pretenda alcanzar tal condición, en tal caso buscarían la fórmula de las Entidades Vecinales), ya que para el resto de asentamientos poblacionales la delimitación que se proponga tiene como objetivo la delegación de competencias municipales que, en ningún caso, supondrían una pérdida patrimonial del ayuntamiento jerezano.

Utilizando el anterior criterio de proporcionalidad territorio/población realmente se ha puesto en relación la superficie total del término municipal con los habitantes de cada núcleo o entidad en diseminado, pero no se ha tenido en cuenta el territorio, es decir, al considerar en el presente estudio que todo el municipio debe ser objeto de delimitación, sería fundamental relacionar cada parte del municipio con la entidad poblacional más cercana, lo que permitiría una mejora teórica de la accesibilidad de su población a los servicios que se localicen en la capitalidad de cada unidad territorial inframunicipal.

Para ello, se va a utilizar el método de delimitación de áreas próximas o polígonos de Voronoi que trata de establecer una división exhaustiva del territorio o regionalización a partir de un número de puntos dado. La relación de proximidad es una de las más importantes que en el territorio tienen lugar. Tal afirmación es válida no sólo para un sinfín de procesos físicos-naturales y ambientales, sino también para numerosas actividades humanas. Identificar qué lugar de referencia (parque de bomberos, humedal, almacén, etc.) queda más cerca de cualquier parte del territorio, y establecer una zonificación acorde con esa premisa ayuda a comprender conductas y a tomar decisiones.

La cuestión se concreta así: a partir de un conjunto de lugares conocidos (en nuestro caso núcleos de población y entidades en diseminado) se busca obtener una regionalización o partición del territorio (unidades territoriales) de acuerdo con el principio de distancia o coste de acceso mínimo, asumiendo que el movimiento tiene lugar a través de una superficie sin limitaciones. Se establecerá un valor de distancia que limitará el alcance espacial del proceso de asignación de territorio. El resultado

será una capa poligonal donde para cada entidad poblacional se concretará una unidad territorial inframunicipal.

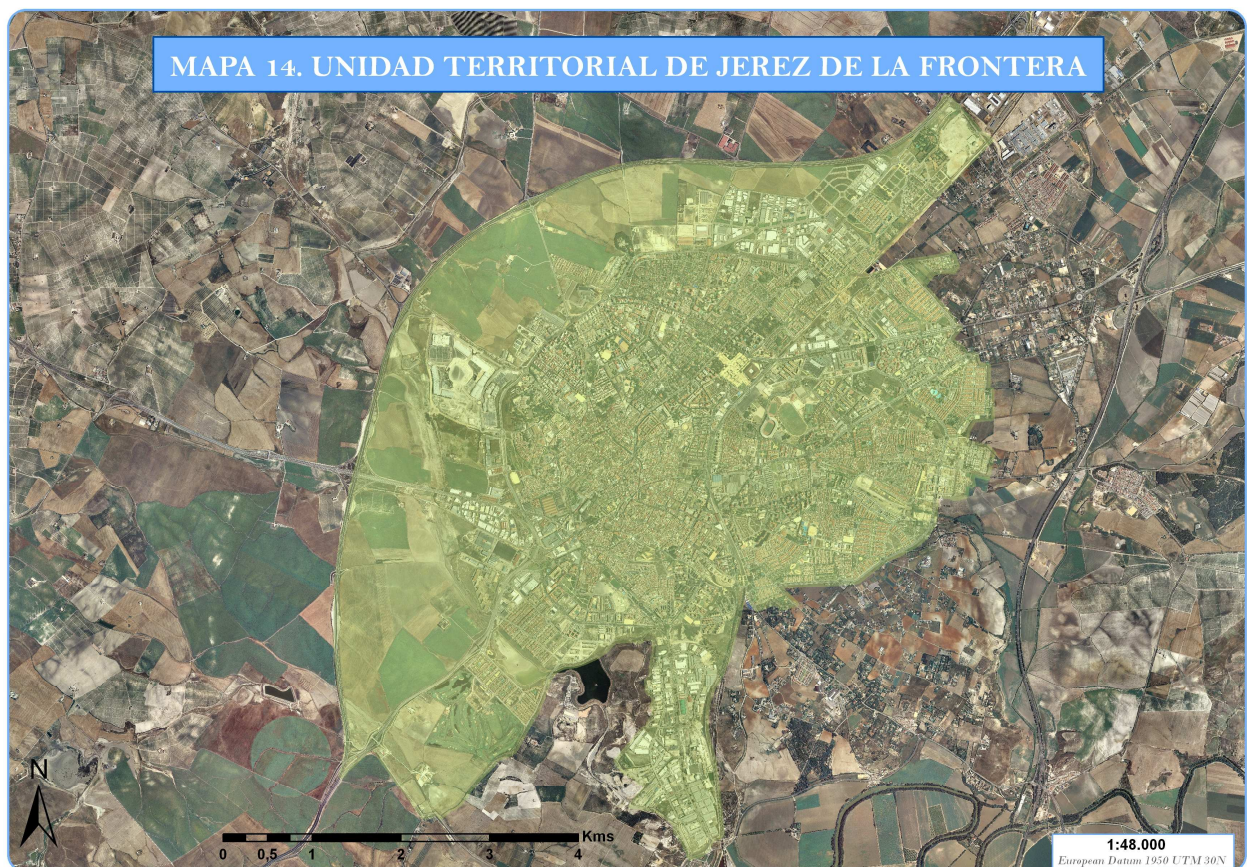
Antes de elaborar tal zonificación, es necesario determinar el área que le corresponderá al núcleo principal, que será preestablecida y no formará parte del análisis propuesto, ajustándose en la medida de lo posible a la clasificación de suelo urbano y urbanizable recogida en el Plan General de Ordenación Urbanística del año 2009, aunque no sería conveniente su coincidencia total debido a diferentes factores:

1. Guadalcaín, Los Albarizones y La Corta se incluyen dentro del “*Suelo urbano*” del núcleo principal.
2. Gran parte de las parcelas reconocidas como Solete Alto se sitúan en “*Suelo urbanizable*”.
3. Existen terrenos clasificados como “*Suelo No Urbanizable*” que se sitúan entre el suelo urbano y el nuevo trazado de la carretera N-IV (vía de dos o tres carriles por sentido) que supone una verdadera barrera física, por lo que no tendría sentido asignar esas parcelas de difícil acceso a alguna entidad de población secundaria.
4. Existen otras áreas de hábitat disperso localizadas al oeste de la avenida Juan Carlos I (ronda de circunvalación oeste) que, aunque algunas clasificadas como urbanizable, deberían considerarse fuera del núcleo principal.

Por otra parte, no todos los núcleos de población y entidades en diseminado se van a utilizar en el análisis de polígonos Voronoi; se van a seleccionar una serie de entidades que, en función del análisis del poblamiento realizado en el apartado 5.1, poseen una identidad propia y diferenciada, para lo cual haremos uso de la experiencia en desconcentración competencial llevada a cabo por el ayuntamiento de Jerez, que ha permitido tener funciones desconcentradas a 15 entidades del Jerez Rural que poseen desde hace años delegados (o delegadas) de alcaldía. De esta forma, las entidades seleccionadas (Dehesilla de Algar no formará parte del análisis debido a que los polígonos Voronoi necesitan partir de territorios continuos y, en este caso, estamos hablando de un exclave del municipio jerezano) son las siguientes:

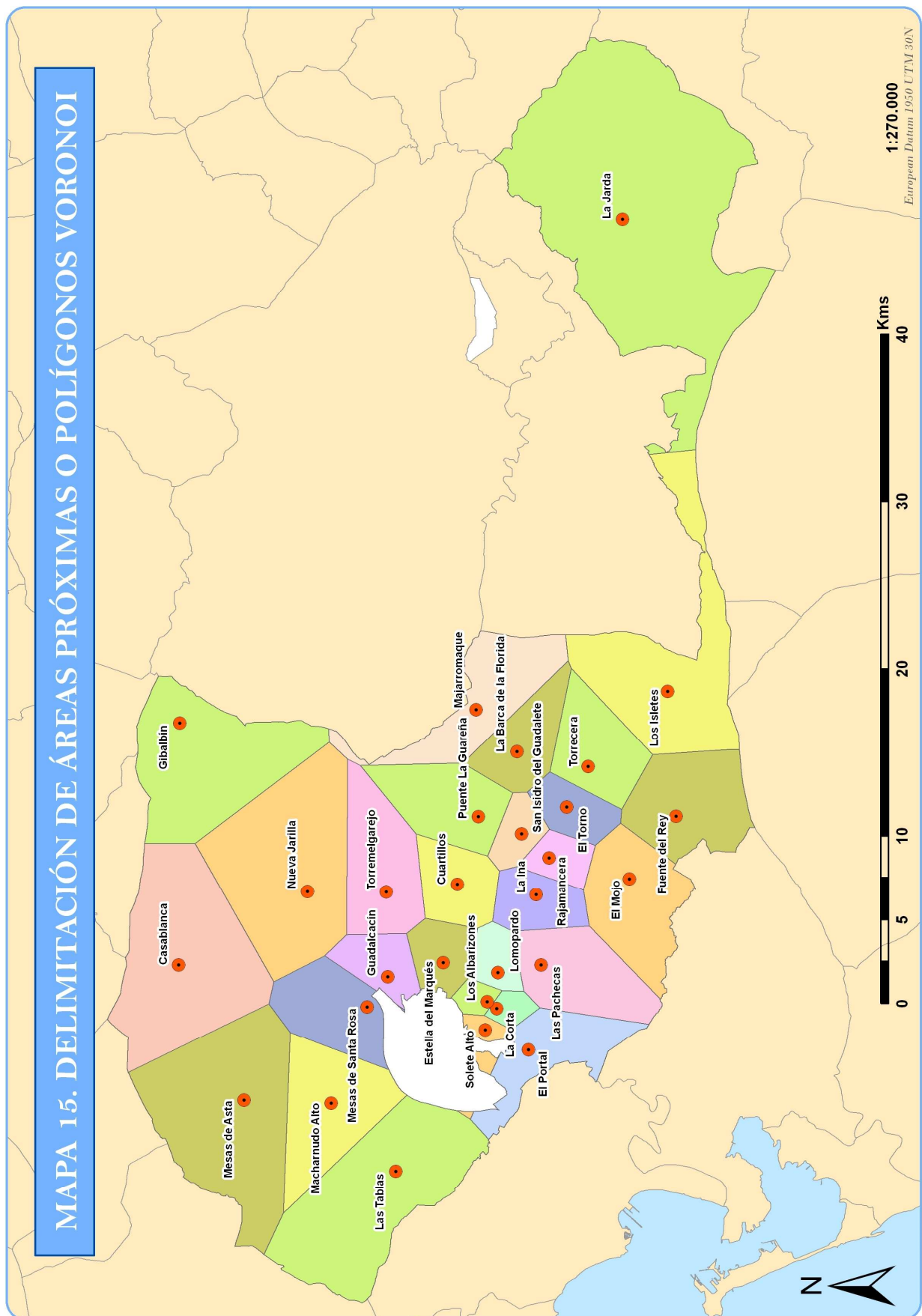
- Entidades Locales Autónomas (7): Nueva Jarilla, Guadalcacín, Estella del Marqués, San Isidro del Guadalete, El Torno, La Barca de la Florida (junto a Mesas del Corral y Casas de Magallanes) y Torrecera (incluida Torrecera Baja).
- Entidades con Delegados de Alcaldía (15): Cuartillos, La Corta, Gibalbín, Los Albarizones, El Portal (incluidas las entidades en diseminado de Las Quinientas y Cañada del Carrillo), Las Pachecas (teniendo en cuenta a Los Repastaderos), Lomopardo, Mesas de Asta, Torremelgarejo (junto a la Barriada La Inmaculada), Majarromaque, La Ina, Puente La Guareña, Las Tablas-El Polila-Añina, El Mojo-Baldío Gallardo, Rajamancera (incluida Cañada del León) y Mesas de Santa Rosa
- Diseminados Históricos (5): La Jarda, Los Isletes, Fuente del Rey, Casablanca, Solete Alto y Macharnudo Alto, que se incluyen en este análisis por su importancia pasada en el sistema de asentamientos de Jerez y por situarse en áreas de hábitat muy disperso e incluso despobladas.

Mapa 14. Unidad Territorial de Jerez de la Frontera.



Fuente: Elaboración propia a partir del suelo urbano y urbanizable del PGOU actual y las Áreas de Planificación.

Mapa 15. Delimitación de áreas próximas o polígonos Voronoi.



Fuente: Elaboración propia utilizando el método de polígonos Voronoi con el módulo Geostatistical Analyst de ArcGIS 9.

Se ha considerado inadecuado realizar la poligonación de Voronoi asignándole un peso en función de la población, ya que se podrían dar situaciones en las que se crearan delimitaciones muy reducidas como consecuencia de la mayor influencia de una entidad sobre las de su entorno. Tampoco tenía sentido determinar la cercanía en función de las vías de comunicación existentes, ya que sería habitual la creación de unidades territoriales inframunicipales poco compactas, con la existencia de marcados apéndices en la forma de las unidades.

Tabla 9. Superficie de las entidades poblacionales según los polígonos de Voronoi.

DENOMINACIÓN	SUPERFICIE (km ²)	DENOMINACIÓN	SUPERFICIE (km ²)
Casablanca	80,72	Lomopardo	9,77
Cuartillos	20,39	Los Albarizones	4,17
El Mojo-Baldío Gallardo	39,36	Los Isletes	68,99
El Portal	28,27	Macharnudo Alto	41,52
El Torno	13,90	Majarromaque	37,67
Estella del Marqués	14,11	Mesas de Asta	83,04
Fuente del Rey	38,86	Mesas de Santa Rosa	28,84
Gibalbín	65,97	Nueva Jarilla	80,66
Guadalcaín	14,89	Puente La Guareña	30,78
La Barca de la Florida	22,84	Rajamancera	9,87
La Corta	4,62	San Isidro del Guadalete	9,94
La Ina	16,71	Solete Alto	4,79
La Jarda	199,34	Torredera	27,54
Las Pachecas	34,55	Torremelgarejo	36,20
Las Tablas-Polila-Añina	78,45		

Fuente: Nomenclátor del INE, PGOU actual y aproximaciones propias a partir de otras fuentes de datos.

Al analizar los datos mostrados en la tabla 9, se constata una mayor superficie de las unidades situadas más alejadas de los focos de concentración demográfica, que son el núcleo principal y el valle del Guadalete; así las unidades territoriales de mayor extensión son: La Jarda (199,34 km²), Mesas de Asta (83,04 km²), Casablanca (80,72 km²), Nueva Jarilla (80,66 km²), Las Tablas-Polila-Añina (78,45 km²), Los Isletes (68,99 km²), Gibalbín (65,97 km²) y Macharnudo Alto (41,52 km²), por tanto, todo el este, norte y oeste del municipio jerezano.

6.4. CRITERIO TERRITORIAL.

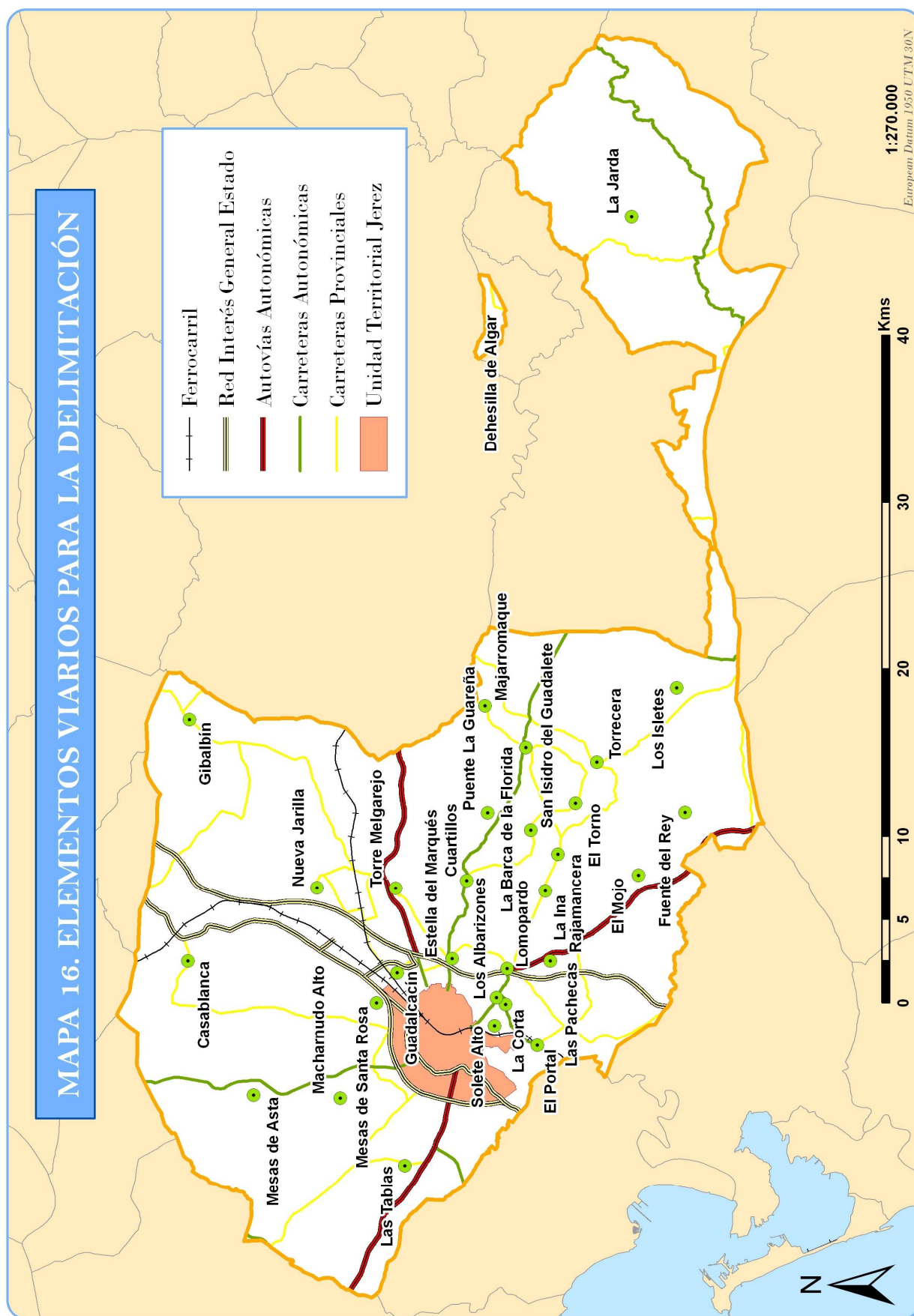
La aplicación de este criterio tiene fuertes dosis de subjetividad, ya que no solo se trata de realizar una delimitación en base a unidades territoriales inframunicipales continuas y tomando en consideración a accidentes geográficos o elementos de carácter permanente y fácilmente identificables, siempre que sea posible y aconsejable, sino que se van a analizar los criterios histórico, administrativo y cuantitativo con el objetivo de proponer una delimitación final.

Además, hay que tener en cuenta la superficie que se considerará suficiente para que las Entidades Locales Autónomas puedan ejercer sus competencias transferidas con plena capacidad, sin que ello suponga una reducción de las garantías de prestación de servicios del resto de la población del municipio jerezano. En cualquier caso, no deben poseer una superficie que se sitúe fuera de los rangos existentes para las ELAs constituidas que ya poseen una delimitación territorial, donde Bácor-Olivar, con 66,94 km², se sitúa en el límite máximo.

Uno de los criterios de delimitación de las Entidades Locales Autónomas al que siempre se alude en la normativa de constitución de los límites de la misma es que las parcelas catastrales contenidas en el ámbito territorial sean de propiedad de los habitantes del núcleo de población sobre el que se sustenta la ELA. Sin embargo, no parece lógico utilizar dicho criterio de forma general, ya que esa premisa puede ser válida para pueblos surgidos tras procesos de planificación agrícola o rural donde la propiedad de la tierra fue repartida entre los colonos del nuevo núcleo poblacional. Ni siquiera puede considerarse un criterio fundamental en el caso de que la delimitación territorial se realice muchos años después del repartimiento de tierras, ya que la titularidad de la propiedad ha sido modificada. Otro problema surge cuando se quiere disponer de la información sobre propiedad catastral, la cual está muy restringida para el uso de investigadores ajenos a la administración pública.

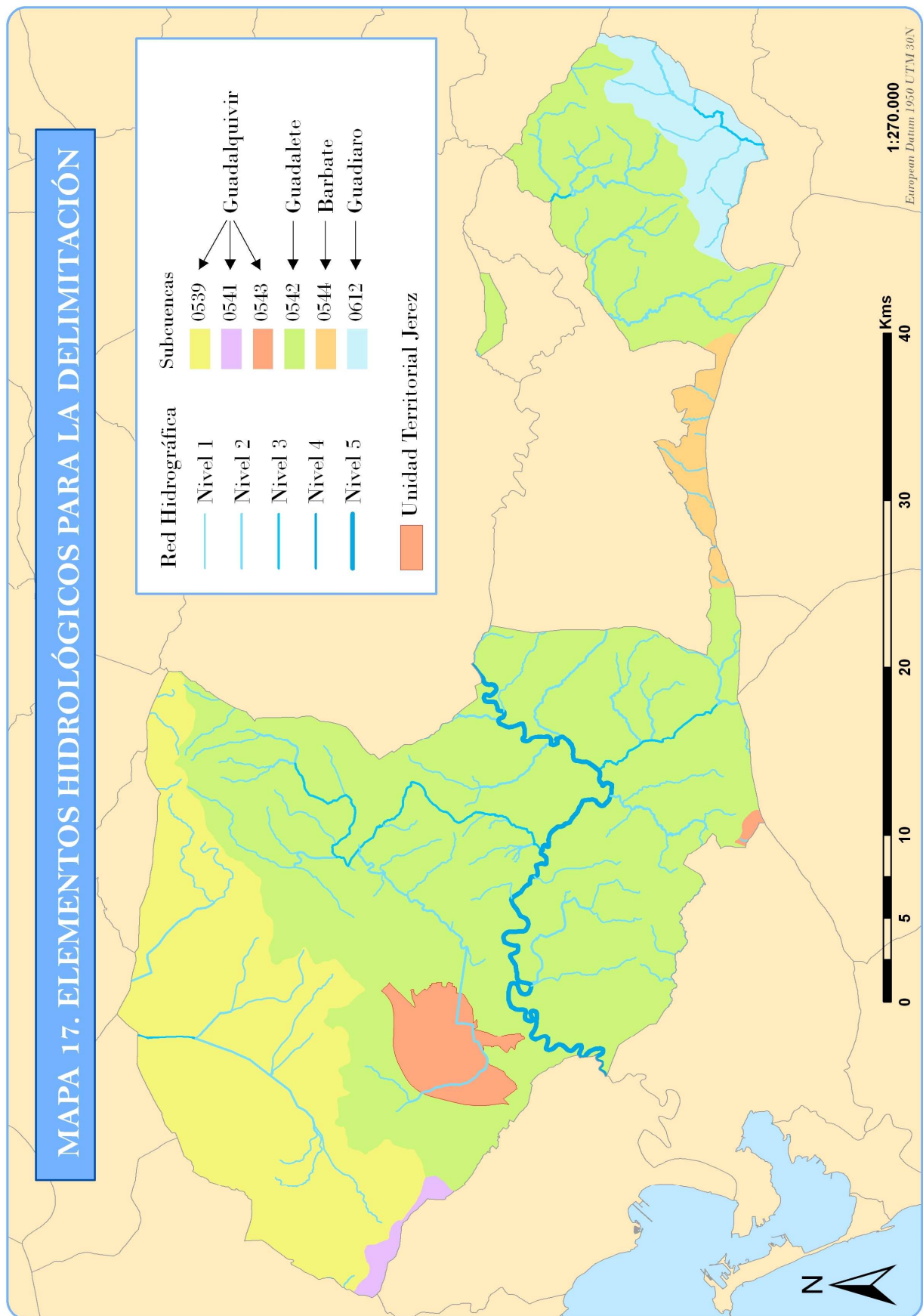
Para el establecimiento detallado de los límites de las unidades territoriales inframunicipales es importante utilizar la siguiente información geográfica:

Mapa 16. Elementos viarios a utilizar para la delimitación definitiva de Unidades Territoriales.



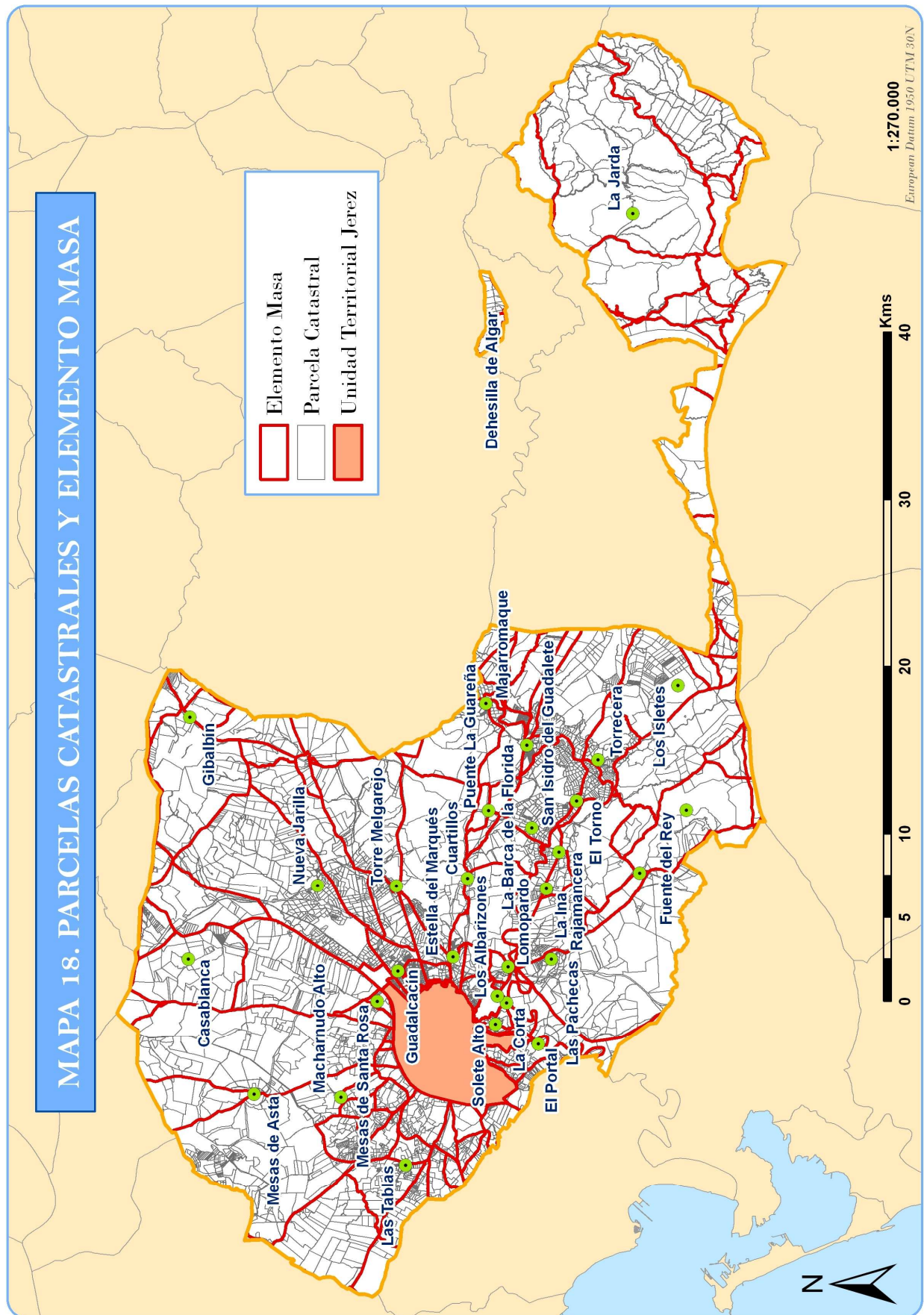
Fuente: DEA100, Sistema de Información de Carreteras de Andalucía y elaboración propia.

Mapa 17. Elementos hidrológicos a utilizar para la delimitación definitiva de Unidades Territoriales.



Fuente: Datos Espaciales de Andalucía para escalas intermedias, 2009.

Mapa 18. Parcelas catastrales y elemento masa para la delimitación definitiva de Unidades Territoriales.



Fuente: Dirección General del Catastro.

- Las vías de comunicación, fundamentalmente líneas de ferrocarril, autovías y autopistas, son elementos de carácter permanente y fácilmente identificables que suponen barreras físicas a tener en cuenta (mapa 16).
- La red hidrográfica en muchas ocasiones supone una barrera importante, sobre todo ante la existencia de ríos caudalosos con ausencia de puentes para su paso. Por su parte, las cuencas y/o subcuencas hidrográficas son elementos físicos perdurables y en ocasiones identificables con facilidad (mapa17).
- Información de masa (agrupación de manzanas) y parcela de la Dirección General de Catastro. Con la primera, podemos detectar una serie de unidades catastrales que subdividen el municipio y que engloban a parcelas completas. Se trata de límites íntimamente relacionados con la separación física que generan las infraestructuras viarias. La información parcelaria nos aporta unidades mínimas que, en la medida de lo posible, deberemos incluir de forma íntegra dentro de las unidades territoriales (mapa 18).

6.5. CRITERIO SOCIOPOLÍTICO.

Dado que la potestad de autoorganización debe servir para facilitar la participación ciudadana y la iniciativa para la creación de entidades descentralizadas es recomendable que surja de movimientos vecinales, es importante constatar el grado de acuerdo o desacuerdo de la población y de los agentes sociales respecto a las delimitaciones propuestas. Durante los últimos años se viene potenciando la necesidad de un proceso de participación pública, de identificación e incorporación de las preocupaciones, necesidades y valores de los distintos agentes en la toma de decisiones. Una correcta participación pública consiste en un proceso de comunicación bidireccional que proporciona un mecanismo para intercambiar información y fomentar la interacción de los agentes con el equipo gestor del proyecto.

Algunas Administraciones prestan muy poca atención a la participación de los agentes, bien considerando que los profesionales son los más adecuados para tomar las decisiones con una orientación técnica, bien porque los políticos locales piensan

que ellos representan mejor los intereses de los distintos agentes. Sin embargo, queda de manifiesto que la participación ciudadana genera una serie de beneficios:

- Aporta el punto de vista de los usuarios/clientes que puede mejorar los proyectos y planes.
- Demuestra un compromiso con una gestión eficaz y transparente.
- Potencia el papel de los agentes aumentando la aceptación general del proyecto.
- Ayuda y mejora la toma de decisiones en todas sus fases.
- Puede evitar serios problemas de contestación que demoren o invaliden el proyecto.
- Facilita el desarrollo de los proyectos en fase de construcción.

La participación ciudadana debe comenzar desde las primeras fases de cualquier política, plan, programa o proyecto, aunque es recomendable potenciarla cuando se tenga una propuesta y planteamientos bien definidos de cómo se va a actuar. Para el caso que nos ocupa, que no es otro que la delimitación de unidades territoriales inframunicipales, se deben definir procesos participativos tras la obtención de una propuesta técnica que cumpla con los objetivos iniciales.

Utilizar herramientas como los foros y las encuestas de opinión permiten al técnico o investigador conocer las diferentes opiniones de la población y obtener una lista controlada de propuestas y sugerencias. Aportar datos estadísticos sobre una encuesta dirigida a los principales agentes sociales del Jerez Rural (presidentes de ELAs, delegados de alcaldía en diversas entidades rurales, Grupo de Desarrollo Rural, asociaciones y colectivos, sindicatos, partidos políticos y personas individuales sin ninguna relación con los anteriores organismos) y, así, conocer el grado de aceptación de la propuesta técnica planteada en este estudio, hubiera sido interesante su inserción en esta investigación; no obstante, el objetivo del trabajo era el de aportar una herramienta metodológica y técnica para la organización espacial del término municipal, lo cual se ha alcanzado y se muestra en el siguiente capítulo.

No obstante, se presentan a continuación los resultados electorales a presidente/a de Entidad Local Autónoma de Andalucía del año 2011, convocadas

mediante el Decreto 65/2011, de 28 de marzo, por el que se convocan elecciones a los órganos de Gobierno de las Entidades Locales Autónomas existentes en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, lo que nos permitirá observar qué ideologías políticas son las más apoyadas en el Jerez Rural.

Tabla 10. La Barca de la Florida. Resultado Elecciones a Presidente/a de ELA 2011.

NOMBRE Y APELLIDOS	CANDIDATURA	VOTOS	% VOTOS
Alejandro López Valenzuela	PARTIDO POPULAR	1.023	40,3
Pedro Torrejón Guerrero	PARTIDO INDEPENDIENTE BARQUEÑOS UNIDOS	478	18,8
Manuela Moreno Arillo	PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA	390	15,4
José María Quiñones Díaz	UNIÓN RURAL JEREZANA	171	6,7
Silvia del Pilar Gilabert Duarte	FORO CIUDADANO DE JEREZ	142	5,6
Óscar Pineda Rodríguez	IZQUIERDA UNIDA LOS VERDES-CONVOCATORIA POR ANDALUCÍA	104	4,1
Eva María Rodríguez Gómez	PARTIDO SOCIALISTA DE ANDALUCÍA-ESPACIO PLURAL ANDALUZ	102	4,0
Juliana Navas Díaz	UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA	25	1,0
Votos en Blanco:		54	2,1
Votos Nulos:		48	1,9

Fuente: Web de la Consejería de Gobernación y Justicia.

Tabla 11. Guadalcaín. Resultado Elecciones a Presidente/a de ELA 2011.

NOMBRE Y APELLIDOS	CANDIDATURA	VOTOS	% VOTOS
Maria de las Nieves Mendoza Mancheño	UNIÓN RURAL JEREZANA	979	38,6
Ana María Lirio Aguilochó	PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA	862	34,0
José Vázquez Barea	PARTIDO POPULAR	556	21,9
Francisco Javier Domínguez Márquez	FORO CIUDADANO DE JEREZ	111	4,4
Votos en Blanco:		54	2,1
Votos Nulos:		48	1,9

Fuente: Web de la Consejería de Gobernación y Justicia.

Es destacable el surgimiento de un nuevo partido político, Unión Rural Jerezana, cuyo principal objetivo es defender los intereses de todos los núcleos rurales del municipio jerezano ya que, según sus impulsores (Manuel Becerra y Roque Valenzuela, antiguos presidentes socialistas de Guadalcaín y La Barca de la Florida, respectivamente), consideran que el acceso a los servicios básicos y equipamientos presenta un importante déficit en relación a la población del núcleo principal. Se pensaba que podía restar muchos votos al PSOE en las presidencias a ELAs (tradicionalmente el partido con mejores resultados en la zona rural), sin embargo, sólo se dejó notar significativamente en Guadalcaín donde con un 38,6% de los votos

consiguió la presidencia por medio de Maria de las Nieves Mendoza Mancheño. En las elecciones a la alcaldía de Jerez tenían el objetivo de alcanzar representación buscando el voto rural, sin embargo sus resultados fueron poco esperanzadores, con tan sólo 1.265 votos (1,29%).

Por otro lado, el Partido Popular, a pesar de haber logrado un amplio triunfo en las elecciones municipales (46,56% del total de votos), en las de presidencia a ELA sólo consiguió imponerse en La Barca de la Florida por medio de Alejandro López Valenzuela, lo que evidencia que a pesar del descalabro del PSOE (pasando de 15 concejales en 2007 a los 5 actuales), el Jerez Rural sigue dando su apoyo a este partido, consiguiendo la presidencia de Nueva Jarilla (55% de los votos), El Torno (60,4%) y San Isidro del Guadalete (61,65).

Tabla 12. Nueva Jarilla. Resultado Elecciones a Presidente/a de ELA 2011.

NOMBRE Y APELLIDOS	CANDIDATURA	VOTOS	% VOTOS
Javier Contreras García	PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA	553	55,0
Juan Jesús Bernabé Martínez	PARTIDO SOCIALISTA DE ANDALUCÍA-ESPACIO PLURAL ANDALUZ	190	18,9
Antonio Reyes Curtido	PARTIDO POPULAR	189	18,8
José González Durán	FORO CIUDADANO DE JEREZ	31	3,1
José Antonio Martínez Bellido	UNIÓN RURAL JEREZANA	15	1,5
Votos Nulos:		16	1,6
Votos en Blanco:		11	1,1

Fuente: Web de la Consejería de Gobernación y Justicia.

Tabla 13. El Torno. Resultado Elecciones a Presidente/a de ELA 2011.

NOMBRE Y APELLIDOS	CANDIDATURA	VOTOS	% VOTOS
Miguel Ángel Morales Navas	PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA	517	60,4
Antonio García Rodríguez	PARTIDO SOCIALISTA DE ANDALUCÍA-ESPACIO PLURAL ANDALUZ	195	22,8
Francisco José Cabrera López	FORO CIUDADANO DE JEREZ	77	9,0
José Luis López Quirós	PARTIDO POPULAR	33	3,9
Adrián Sánchez Monte de Oca	UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA	14	1,6
Votos en Blanco:		14	1,6
Votos Nulos:		6	0,7

Fuente: Web de la Consejería de Gobernación y Justicia.

En este nuevo mandato a presidente/a de Entidad Local Autónoma repiten en su cargo los presidentes de Torrecera, Estella del Marqués, Nueva Jarilla, San Isidro del

Guadalete y El Torno. En Guadalcazín la anterior presidente, Ana María Lirio Aguilucho no pudo repetir su triunfo de 2007, obteniendo un 34% de los votos, por los 38,6% de María de las Nieves Mendoza; y en La Barca de la Florida, las importantes desavenencias entre el anterior presidente socialista Roque Valenzuela y la alcaldesa de Jerez, Pilar Sánchez, propiciaron la entrada, como fuerza más votada, del Partido Popular.

Tabla 14. San Isidro del Guadalete. Resultado Elecciones a Presidente/a de ELA 2011.

NOMBRE Y APELLIDOS	CANDIDATURA	VOTOS	% VOTOS
Antonio Ramos Rosales	PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA	268	61,6
Alejandro Francisco López Cañero	UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA	125	28,7
Antonio Domínguez Benítez	PARTIDO POPULAR	19	4,4
Votos en Blanco:		13	3
Votos Nulos:		10	2,3

Fuente: Web de la Consejería de Gobernación y Justicia.

Tabla 15. Estella del Marqués. Resultado Elecciones a Presidente/a de ELA 2011.

NOMBRE Y APELLIDOS	CANDIDATURA	VOTOS	% VOTOS
Blas Moreno Algeciras	PARTIDO SOCIALISTA DE ANDALUCÍA-ESPACIO PLURAL ANDALUZ	368	36,5
María Morales Holgado	PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA	172	17
Ricardo Sánchez Vega	INICIATIVA PROGRESISTA JEREZANA	147	14,6
Nicolás Brenes Gómez	PARTIDO POPULAR	136	13,5
Francisco Javier Veas Vega	IZQUIERDA UNIDA LOS VERDES-CONVOCATORIA POR ANDALUCÍA	98	9,7
Lorenzo Hinojosa Moreno	FORO CIUDADANO DE JEREZ	54	5,4
Juan Lema Briante	UNIÓN RURAL JEREZANA	8	0,8
Votos en Blanco:		14	1,4
Votos Nulos:		12	1,1

Fuente: Web de la Consejería de Gobernación y Justicia.

Este proceso electoral es simultáneo al que se realiza desde la Administración General del Estado para las elecciones municipales en toda España. En función del resultado de las elecciones municipales en el ámbito de las Entidades Locales Autónomas, las Juntas Electorales de Zona correspondientes designarán los miembros de las Juntas Vecinales de estas Entidades, con arreglo al procedimiento diseñado en la Ley de Autonomía Local de Andalucía. A cada una de las Entidades Locales Autónomas, le corresponden, en función de un criterio poblacional establecido en el

artículo 127.2 de la Ley de Autonomía Local, una serie de vocalías: 8 a Guadalcazín, 6 a La Barca de la Florida y 4 al resto de entidades.

Tabla 16. Torrecera. Resultado Elecciones a Presidente/a de ELA 2011.

NOMBRE Y APELLIDOS	CANDIDATURA	VOTOS	% VOTOS
Manuel Bertolet Romero	FORO CIUDADANO DE JEREZ	371	41,7
Antonio Zambrano Perea	PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA	282	31,7
Juan José Vázquez Calderón	PARTIDO POPULAR	149	16,7
Juan Jurado Ruiz	IZQUIERDA UNIDA LOS VERDES-CONVOCATORIA POR ANDALUCÍA	59	6,6
Alicia Rodríguez Romero	PARTIDO SOCIALISTA DE ANDALUCÍA-ESPACIO PLURAL ANDALUZ	18	2
Votos en Blanco:		6	0,7
Votos Nulos:		5	0,6

Fuente: Web de la Consejería de Gobernación y Justicia.

7 Resultados.

Habiendo aplicado para el municipio de Jerez de la Frontera los criterios histórico, administrativo, cuantitativo, territorial y sociopolítico, para la delimitación de unidades territoriales inframunicipales, se han obtenido 30 territorios submunicipales (uno más sin contamos la existencia del propio ámbito urbano de Jerez de la Frontera), que quedan listados en la tabla 10.

Tabla 17. Superficie, poblamiento y población de las unidades territoriales inframunicipales propuestas.

UNIDAD TERRITORIAL	SUPERFICIE	ENTIDADES	POBLACIÓN	POB.TOTAL
Casablanca	93,59	Casablanca	17	78
		El Cuervo	61	
Cuartillos	25,60	Cuartillos	986	1.048
		Diseminado	56	
Dehesilla de Algar	4,90	Dehesilla de Algar	0	0
El Mojo-Baldío Gallardo	46,83	El Mojo	140	168
		Baldío Gallardo	28	
El Portal	28,74	El Portal	473	548
		Cañada del Carrillo	44	
		Las Quinientas	31	
El Torno	15,42	El Torno	1.276	1.276
Estella del Marqués	19,46	Estella del Marqués	1.408	1.550
		Diseminado	142	
Fuente del Rey	34,95	Fuente del Rey	2	2
Gibalbín	95,04	Gibalbín	519	519
Guadalcacín	21,22	Guadalcacín	4.521	5.255
		Diseminado	734	
La Barca de la Florida	43,07	La Barca de la Florida	4.043	4.382
		Mesas del Corral	178	
		Casas de Magallanes	106	
		El Chaparrito	55	

UNIDAD TERRITORIAL	SUPERFICIE	ENTIDADES	POBLACIÓN	POB.TOTAL
La Corta	7,13	La Corta	550	550
La Ina	16,28	La Ina	345	473
		Diseminado	128	
La Jarda	207,51	La Jarda	2	2
Las Pachecas	24,99	Las Pachecas	420	447
		Los Repastaderos	27	
Las Tablas-Polila-Añina	77,26	Las Tablas	215	299
		El Polila	90	
		Añina	40	
		Diseminado	44	
Lomopardo	4,42	Lomopardo	338	338
Los Albarizones	3,42	Los Albarizones	420	420
Los Isletes	58,58	Los Isletes	9	9
Macharnudo Alto	48,62	Macharnudo Alto	79	79
Majarromaque	30,27	Majarromaque	332	342
		Alcornocales	10	
Mesas de Asta	80,11	Mesas de Asta	328	482
		Diseminado	154	
Mesas de Santa Rosa	18,29	Mesas de Santa Rosa	160	160
Nueva Jarilla	31,48	Nueva Jarilla	1.393	1.445
		Diseminado	52	
Puente La Guareña	22,40	Puente La Guareña	257	257
Rajamancera	12,15	Rajamancera	119	288
		Cañada del León	169	
San Isidro del Guadalete	14,87	San Isidro del Guadalete	600	600
Solete Alto	2,07	Solete Alto	57	57
Torrecera	18,79	Torrecera	1.143	1.231
		Torrecera Baja	67	
		Diseminado	21	
Torremelgarejo	44,27	Torremelgarejo	354	494
		La Inmaculada	140	
		Montecastillo	0	
		Diseminado	20	

Fuente: Elaboración propia a partir de aproximaciones poblacionales efectuadas utilizando el Nomenclátor.

A las 7 Entidades Locales Autónomas se les ha asignado, según la delimitación propuesta, una superficie acorde con las del resto de ELAs andaluzas: La Barca de la Florida 43,07 km², Nueva Jarilla 31,48 km², Guadalcaín 21,22 km², Estella del Marqués 19,46 km², Torrecera 18,79 km², El Torno 15,42 km² y San Isidro del Guadalete 14,87 km². Para las mismas no se ha aplicado el carácter excesivamente restrictivo realizado para la delimitación del ámbito territorial de Zahara de los Atunes, que no alcanza siquiera el kilómetro cuadrado, lo que supone apenas el 0,61% de la superficie del municipio barbateño. Todas ellas suponen un 13,8% del término municipal, por lo que dicho valor se sitúa en una posición intermedia en relación con aquellos municipios andaluces que integran en su término ELAs con ámbito territorial establecido (ver tabla 2), situándose el límite superior en el municipio de Alosno (Huelva), donde Tharsis tiene un ámbito territorial que supone el 30,41% del total.

Parecen unos números razonables dentro del contexto andaluz, incluso generosos si realizamos una comparativa de las superficies asignadas por las distintas delimitaciones mostradas en el capítulo 6 del presente estudio. Así, si aplicamos el criterio restrictivo que pone en relación el territorio con la población, aparecerían los valores máximos de territorio que la ELA podría poseer, detectándose unas cifras muy reducidas (por debajo de 6 km²) para todas las entidades, a excepción de Guadalcaín (18,21 km²) y La Barca de la Florida (16,29 km²) por su mayor volumen poblacional.

Tabla 18. Superficie en km² para las Entidades Locales Autónomas en las diferentes zonificaciones.

ELA	AREAS PGOU'84	AREAS PLANIFICACIÓN	SECCIONES CENSALES	CRITERIO TERR/POB	POLIGONOS VORONOI	PROPUESTA
Estella del Marqués	14,54	14,54	14,01	5,67	14,11	19,46
El Torno	8,79	8,79	8,83	5,14	13,90	15,42
Guadalcaín	14,51	14,51	14,37	18,21	14,89	21,22
La Barca de la Florida	20,08	20,08	21,16	16,29	22,84	43,07
Nueva Jarilla	30,42	30,42	30,75	5,73	80,66	31,48
San Isidro del Guadalete	8,99	8,99	-	2,42	9,94	14,87
Torrecera	11,93	11,93	11,76	4,60	27,54	18,79

Fuente: Elaboración propia.

Hay que mencionar que las Áreas Homogéneas del PGOU de 1984, las Áreas de Planificación de la Delegación del Medio Rural, y las secciones censales, poseen superficies muy similares (de hecho iguales en las dos primeras) para las distintas

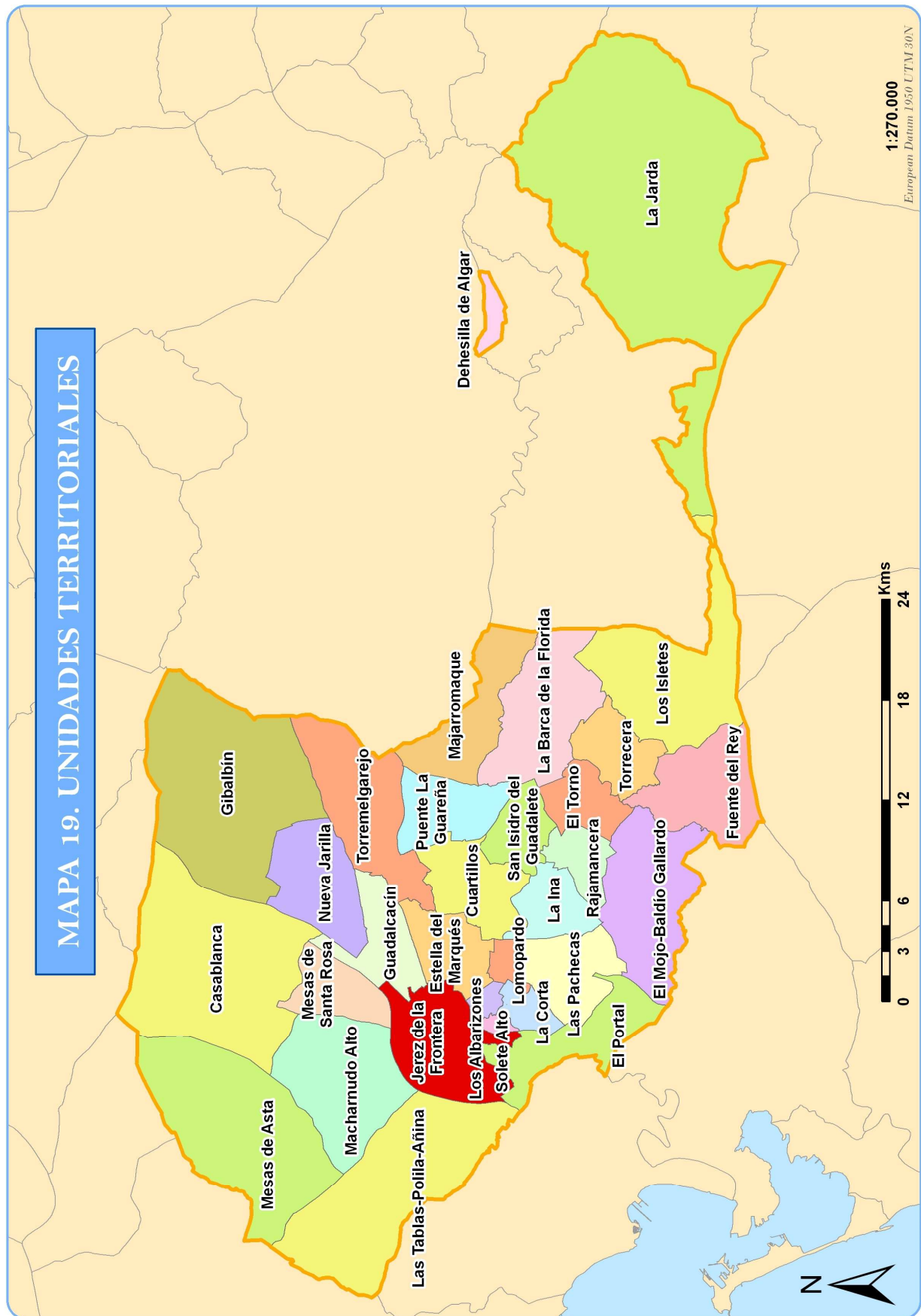
entidades poblacionales mostradas en la tabla 11, siendo siempre inferiores a esta propuesta de delimitación, llegando a doblarse la superficie de La Barca de la Florida y El Torno.

Mediante el uso del método cuantitativo de los polígonos Voronoi, se obtienen valores razonables para las ELAs, a excepción de Nueva Jarilla, que multiplica por 2,5 su superficie respecto a la propuesta en esta investigación o en relación con las áreas de planificación del Medio Rural, motivada por la dispersión y lejanía de núcleos de población en la zona norte del municipio jerezano.

Podemos concluir que, en la delimitación propuesta en unidades territoriales, no se ha utilizado un criterio restrictivo, es más, se ha ampliado, sin excepción, la superficie existente en las actuales áreas de planificación de la Delegación del Medio Rural del Ayuntamiento de Jerez. La extensión de la Unidad Territorial de La Barca de la Florida ha experimentado una ampliación superficial considerable, motivada por la actualización, incorporada al presente trabajo, de las Unidades Poblacionales establecidas por el Instituto Nacional de Estadística, ya que la Entidad Singular de Alcornocales no tiene sentido mantenerla en el municipio jerezano desde que San José del Valle se segregó (1995), quedando encuadrado el núcleo de población de Alcornocales en este último municipio. Por su parte, Torrecera también se ha visto ampliamente favorecido por la integración en su unidad de parcelas agrícolas de su entorno, antes pertenecientes a Los Isletes pero que debido a su acusado descenso poblacional, no tendría sentido que siguiera limitando al territorio torrecereño.

En cuanto al resto de Unidades Territoriales, destacan por su extensión La Jarda (207,51 km²), Casablanca (93,59 km²), Mesas de Asta (80,11 km²), Los Isletes (58,58 km²), Las Tablas-Polila-Añina (77,26 km²), Gibalbín (95,04 km²), Macharnudo Alto (48,62 km²) y El Mojo-Baldío Gallardo (46,83 km²). Si exceptuamos los núcleos de población de Gibalbín, Mesas de Asta, El Mojo y Las Tablas-Polila-Añina (estos últimos son realmente tres entidades poblacionales, pero que debido a su cercanía la consideraremos ahora como una sola), el resto de territorio presenta un acusado proceso de despoblamiento.

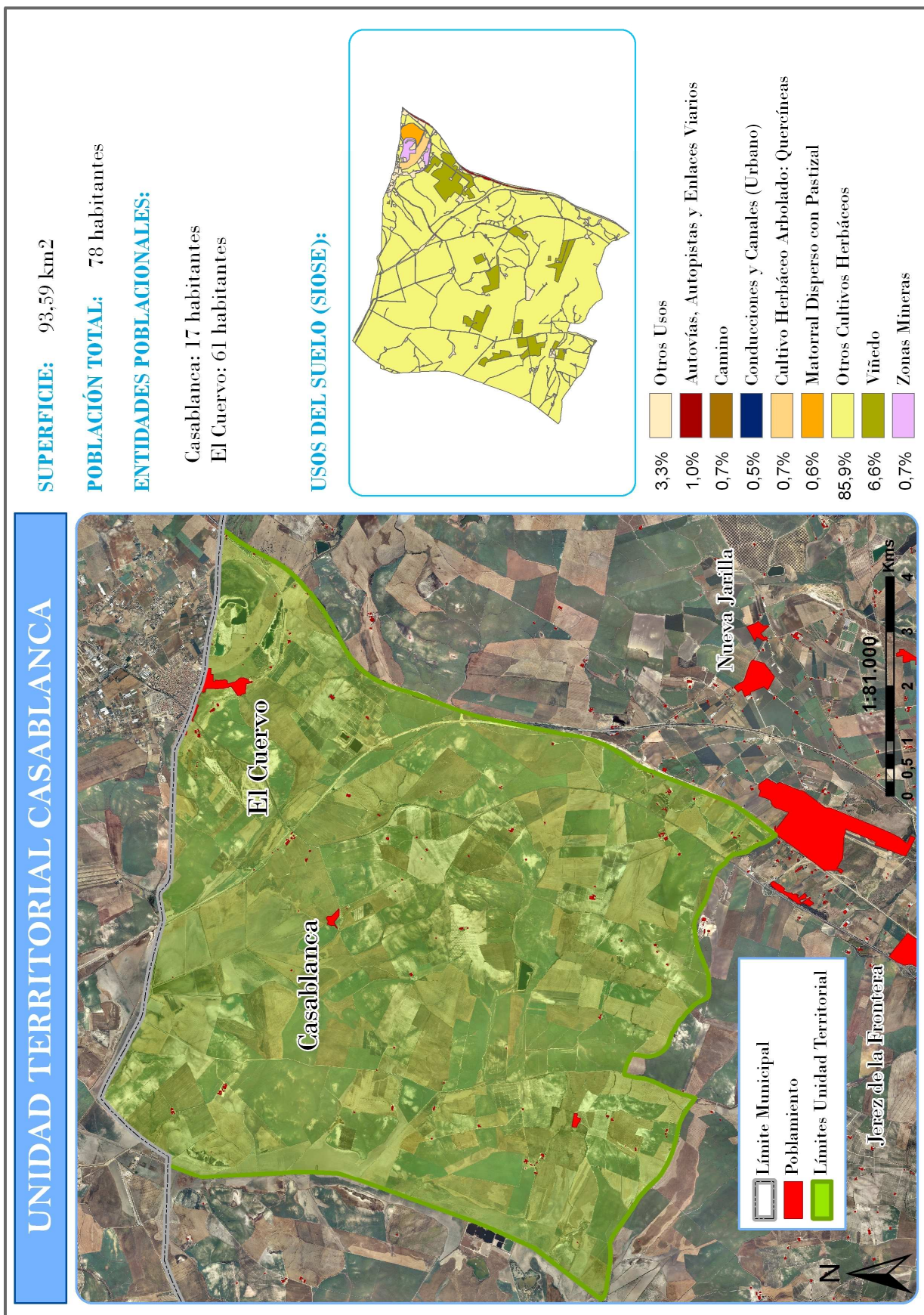
Mapa 19. Unidades Territoriales inframunicipales del municipio de Jerez de la Frontera.



Fuente: Elaboración propia

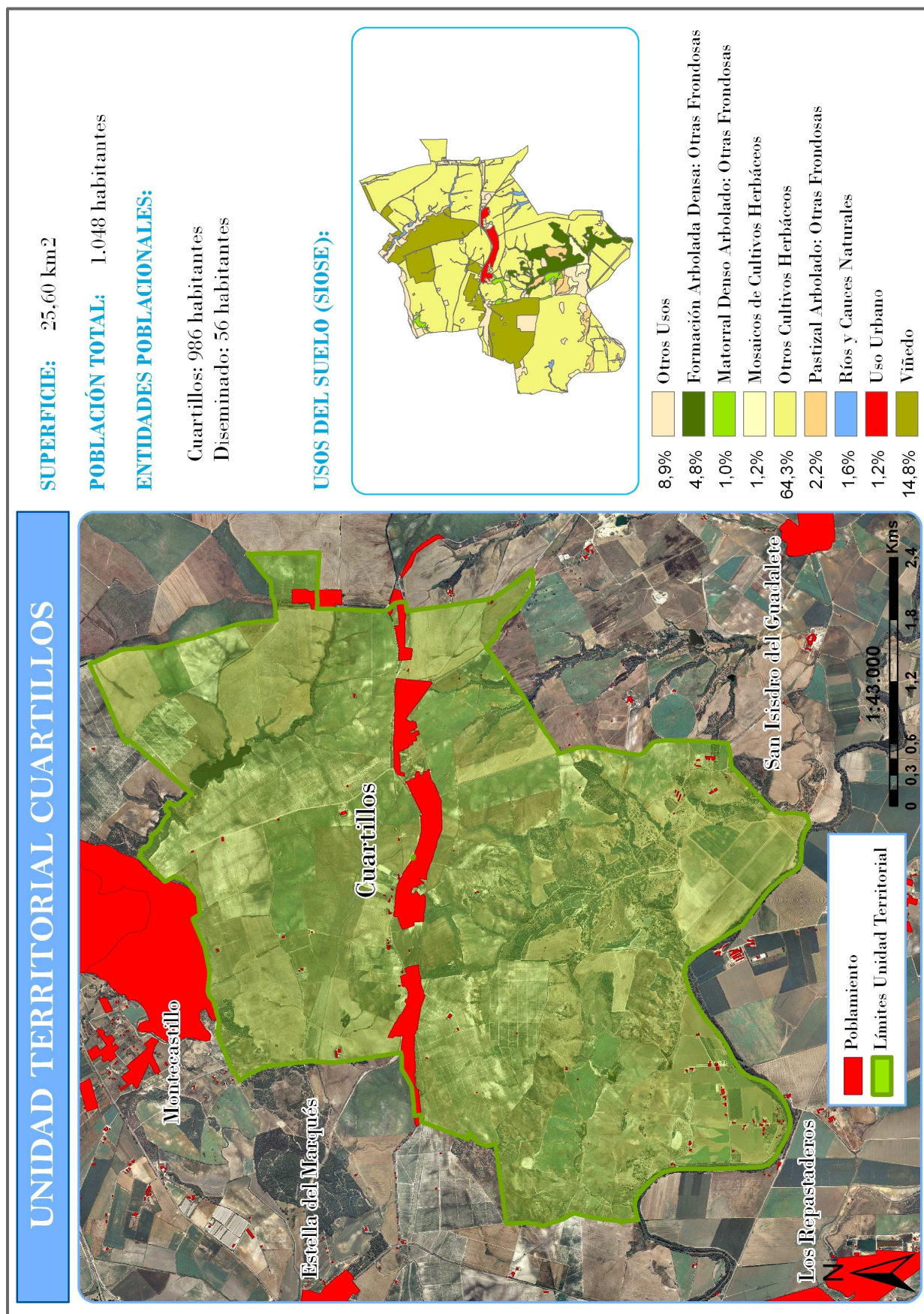
A partir de la delimitación de las Unidades Territoriales inframunicipales propuestas para todo el territorio de Jerez de la Frontera, se han elaborado una serie de fichas de cada una de ellas con información relativa a su extensión superficial, entidades de población existentes junto a su número de habitantes, y los usos de suelo predominantes según la clasificación del Sistema de Información de Ocupación de Suelos de España.

Ficha 1. Unidad Territorial Casablanca.



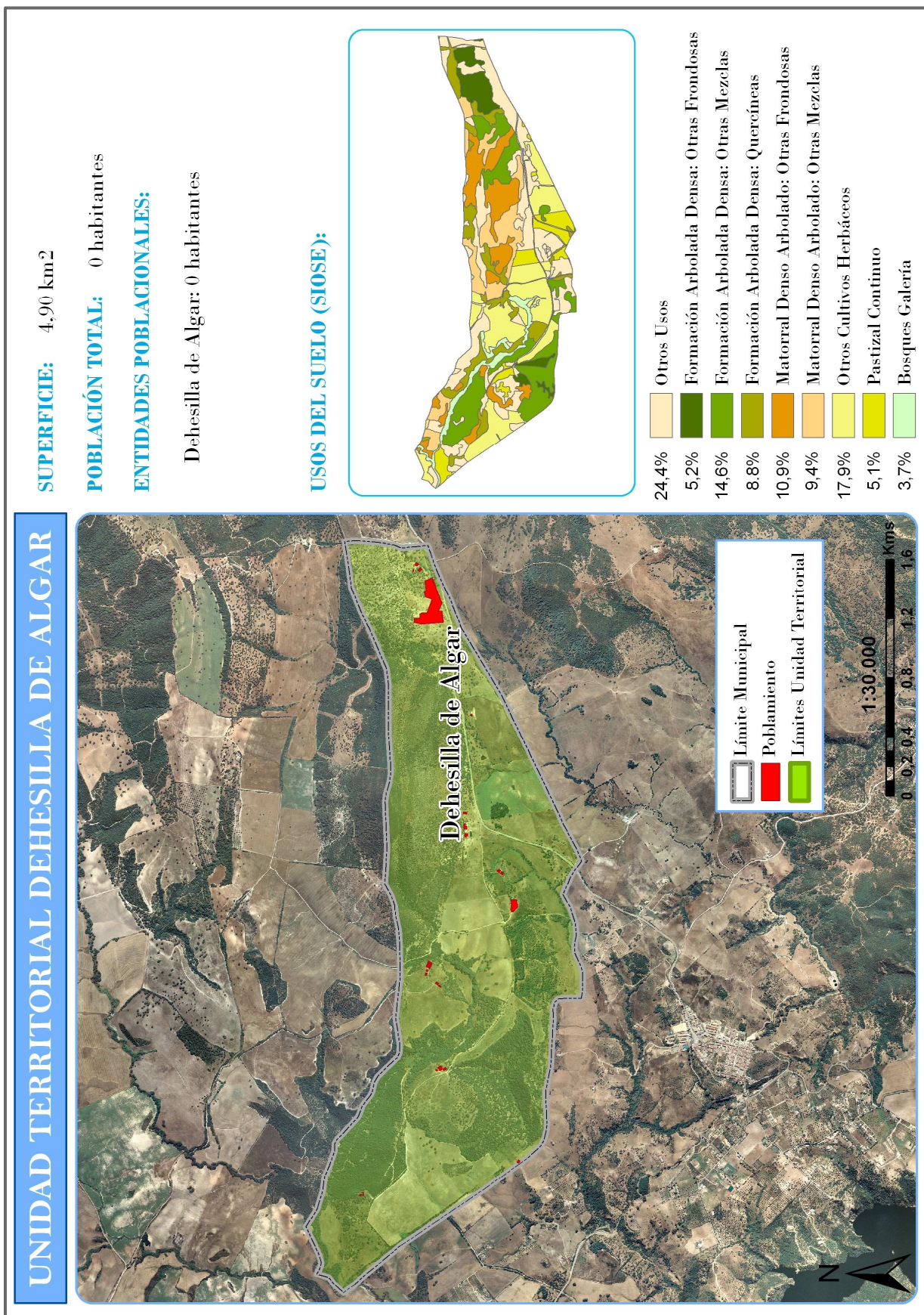
Fuente: Elaboración propia a partir del SIOSE Andalucía (2005), Nomenclátor del INE (2010), Ortofotografía de Andalucía (2010) y DEA100 (2009).

Ficha 2. Unidad Territorial Cuartillos.



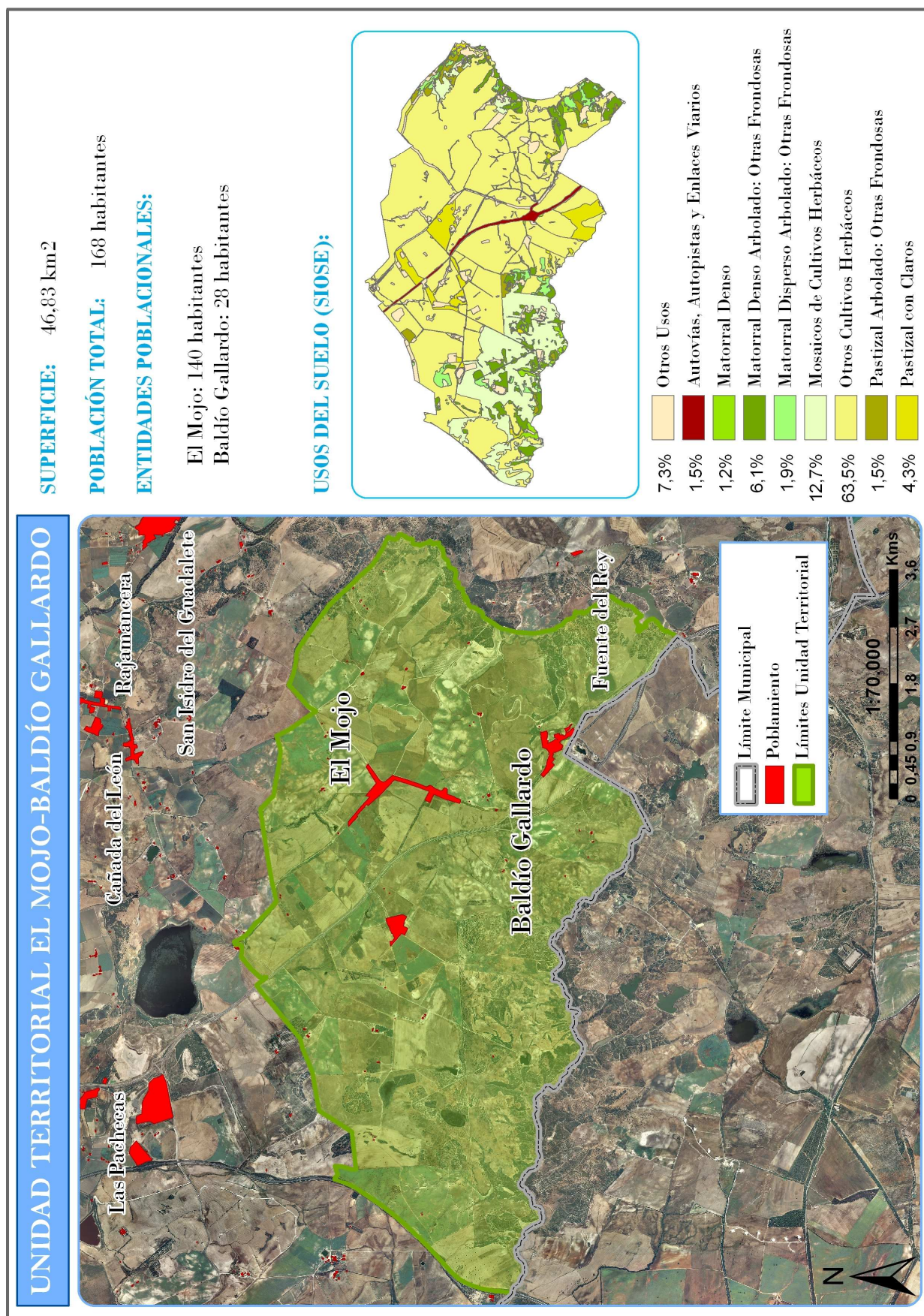
Fuente: Elaboración propia a partir del SIOSE Andalucía (2005), Nomenclátor del INE (2010), Ortofotografía de Andalucía (2010) y DEA100 (2009).

Ficha 3. Unidad Territorial Dehesilla de Algar.



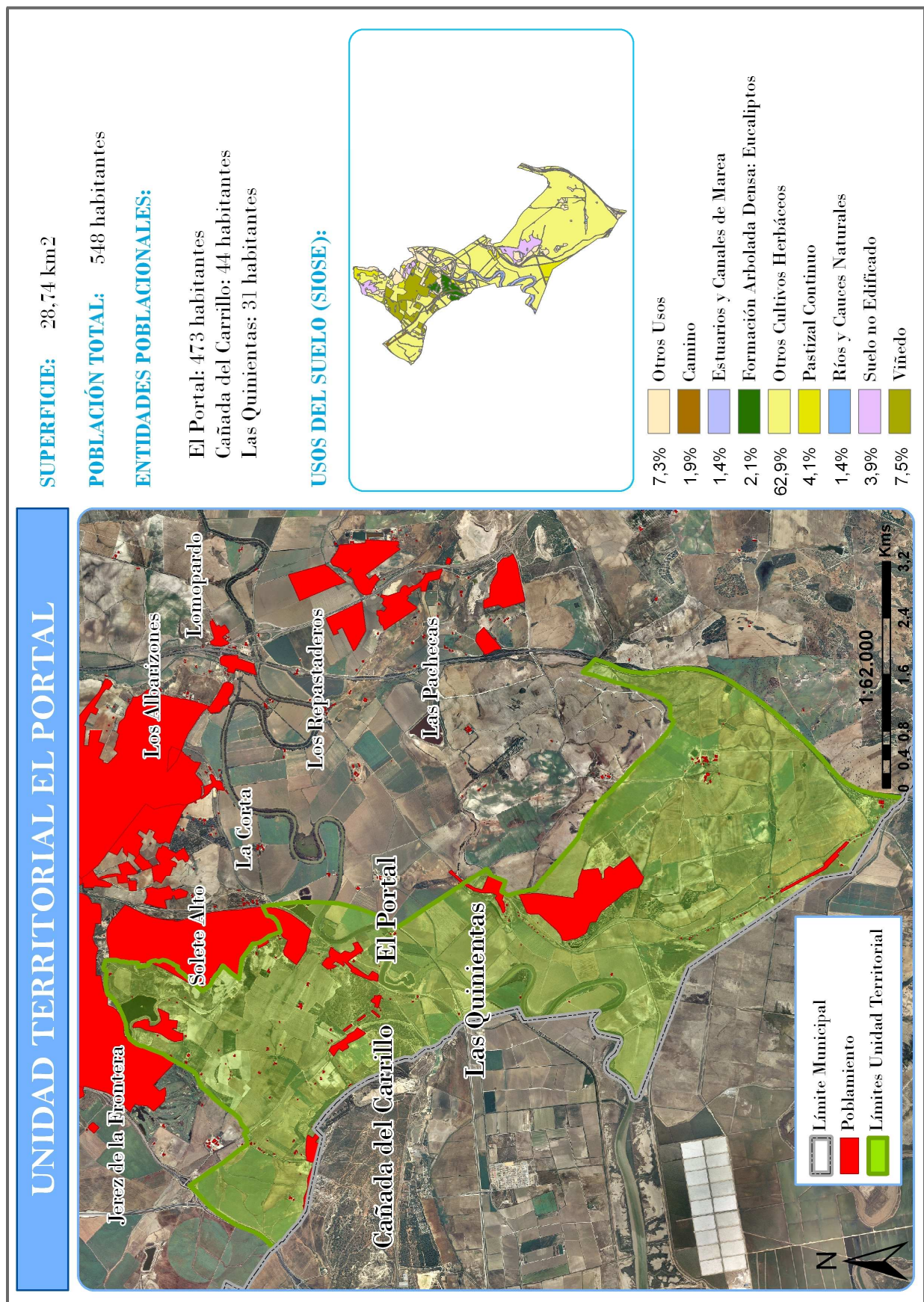
Fuente: Elaboración propia a partir del SIOSE Andalucía (2005), Nomenclátor del INE (2010), Ortofotografía de Andalucía (2010) y DEA100 (2009).

Ficha 4. Unidad Territorial El Mojo-Baldío Gallardo.



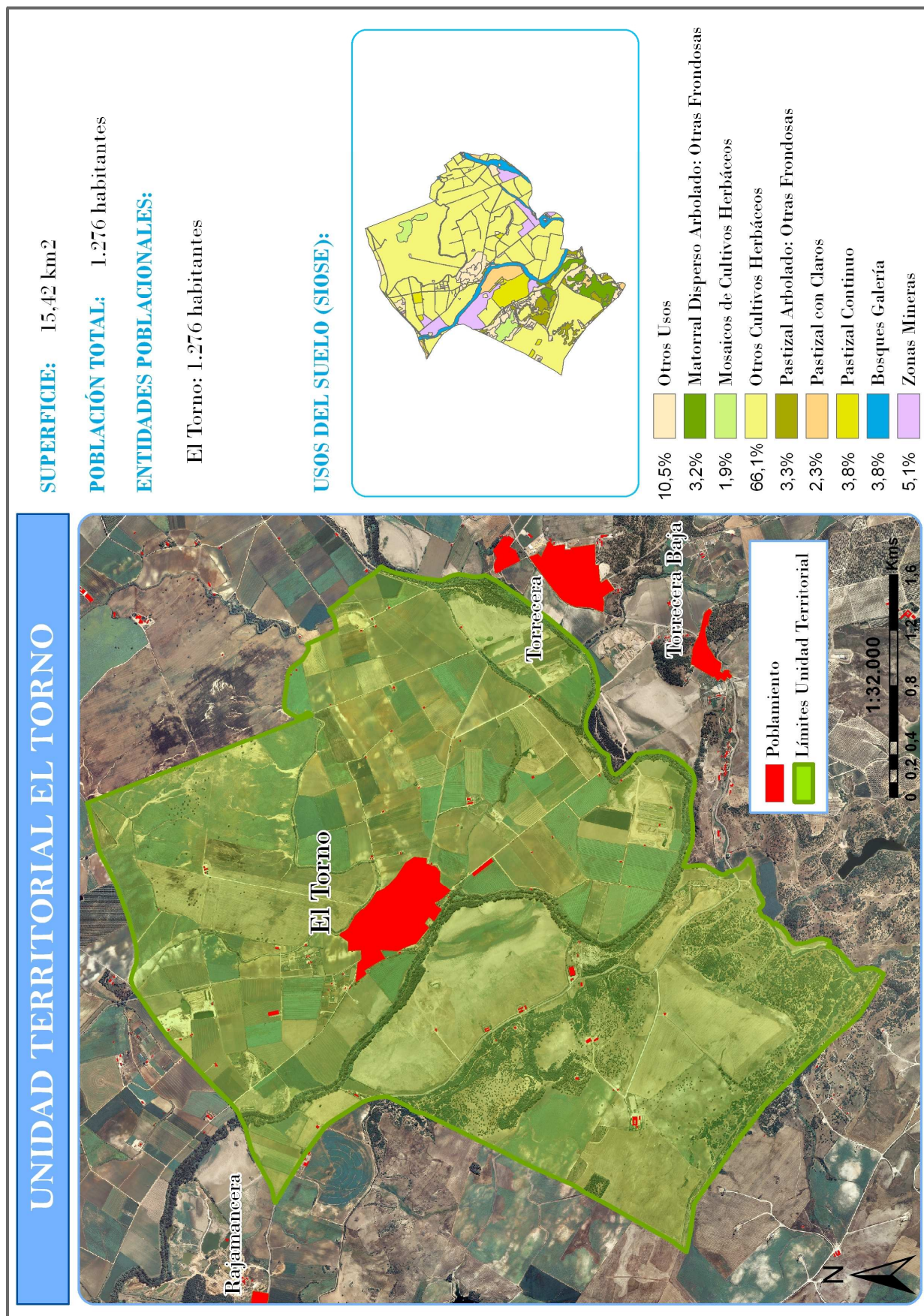
Fuente: Elaboración propia a partir del SIOSE Andalucía (2005), Nomenclátor del INE (2010), Ortofotografía de Andalucía (2010) y DEA100 (2009).

Ficha 5. Unidad Territorial El Portal.



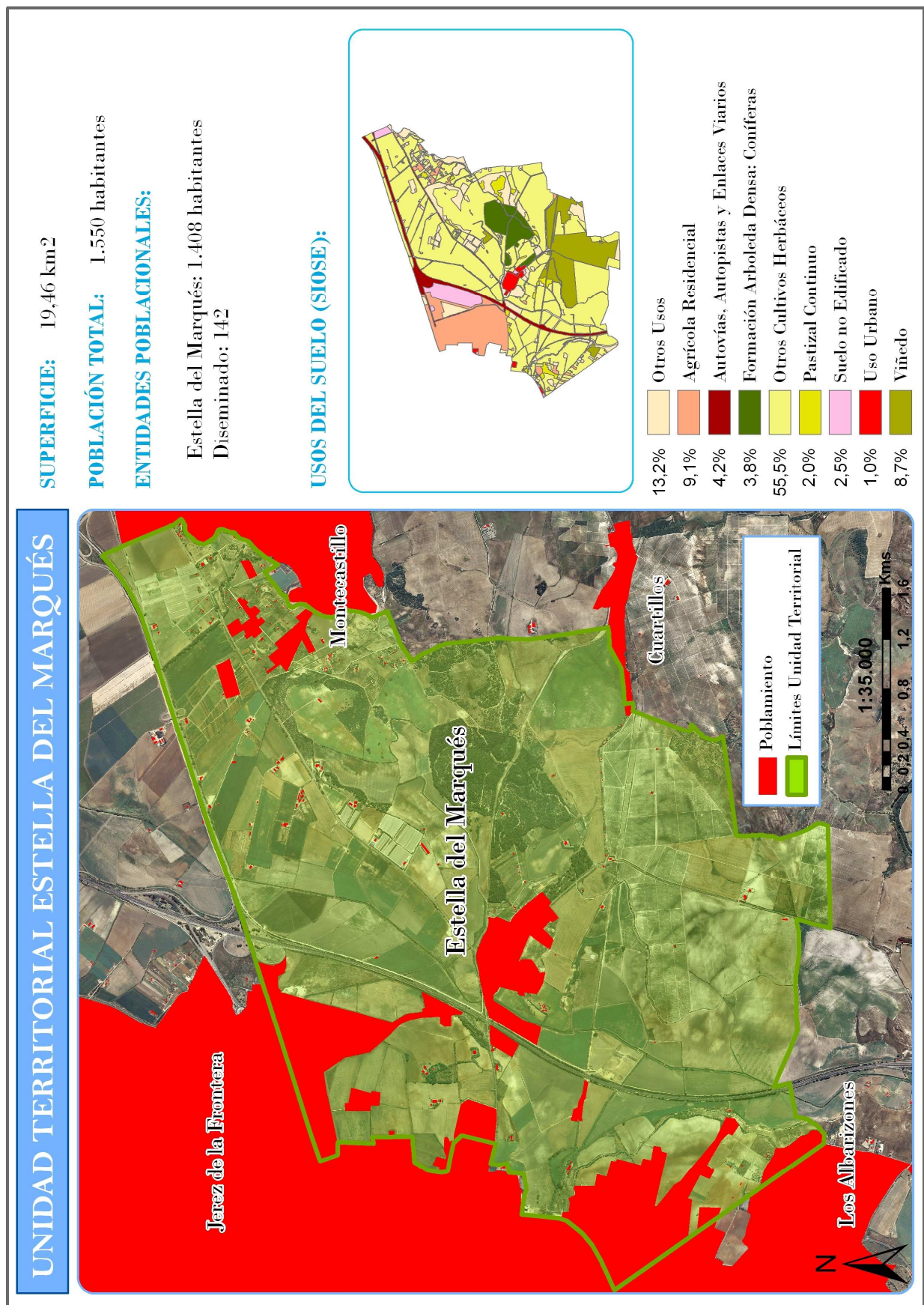
Fuente: Elaboración propia a partir del SIOSE Andalucía (2005), Nomenclátor del INE (2010), Ortofotografía de Andalucía (2010) y DEA100 (2009).

Ficha 6. Unidad Territorial El Torno.



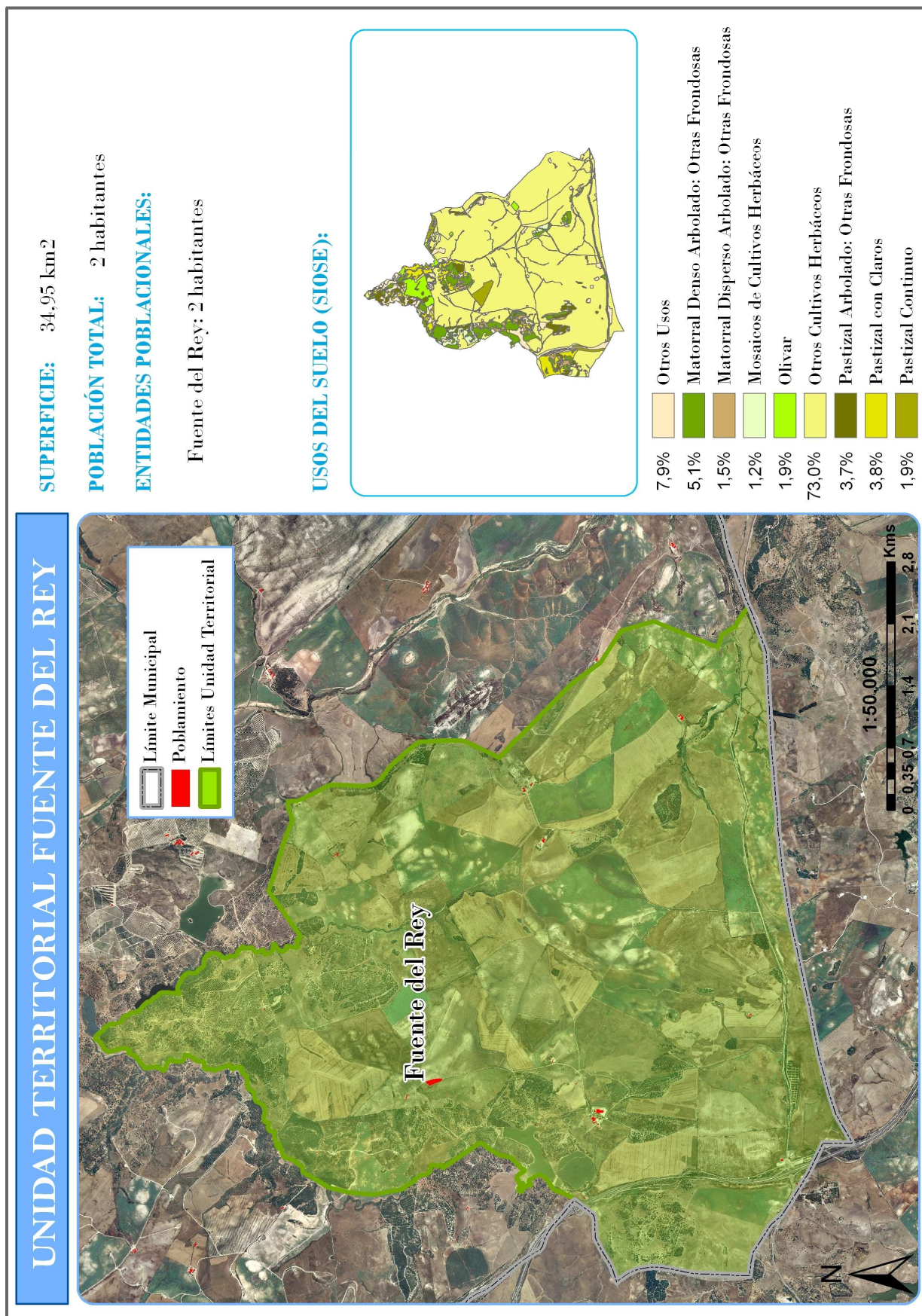
Fuente: Elaboración propia a partir del SIOSE Andalucía (2005), Nomenclátor del INE (2010), Ortofotografía de Andalucía (2010) y DEA100 (2009).

Ficha 7. Unidad Territorial Estella del Marqués.



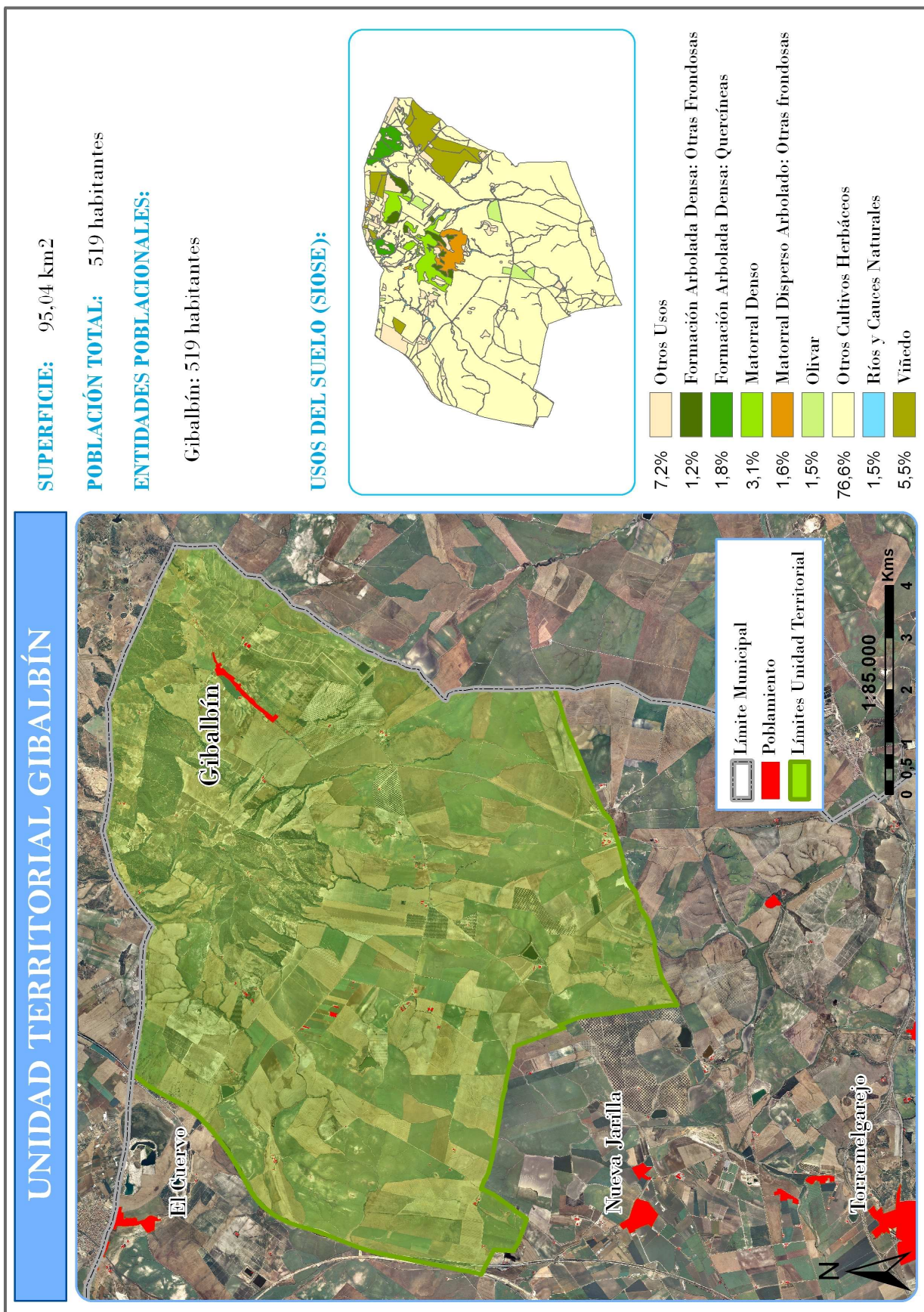
Fuente: Elaboración propia a partir del SIOSE Andalucía (2005), Nomenclátor del INE (2010), Ortofotografía de Andalucía (2010) y DEA100 (2009).

Ficha 8. Unidad Territorial Fuente del Rey.



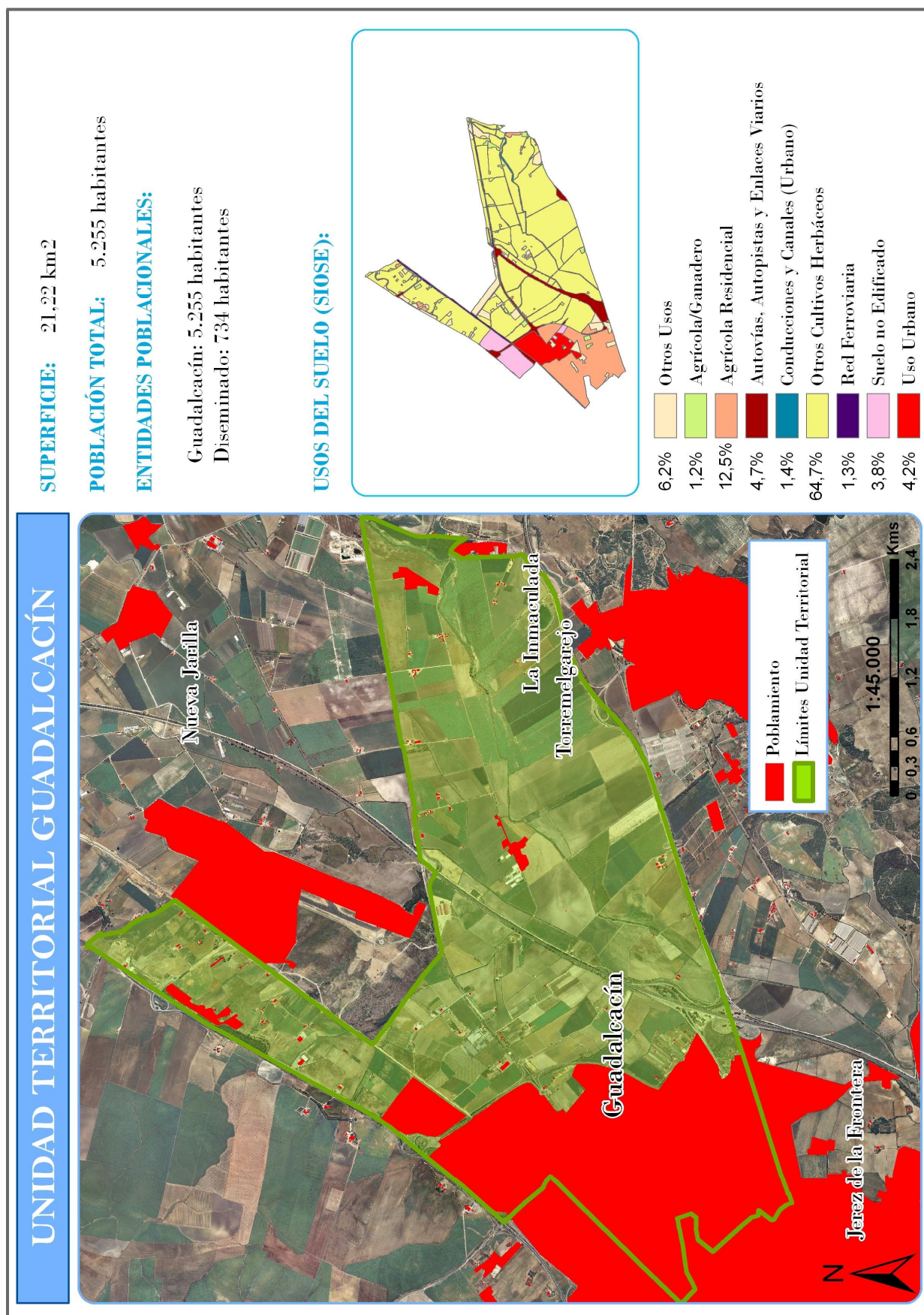
Fuente: Elaboración propia a partir del SIOSE Andalucía (2005), Nomenclátor del INE (2010), Ortofotografía de Andalucía (2010) y DEA100 (2009).

Ficha 9. Unidad Territorial Gibalbín.



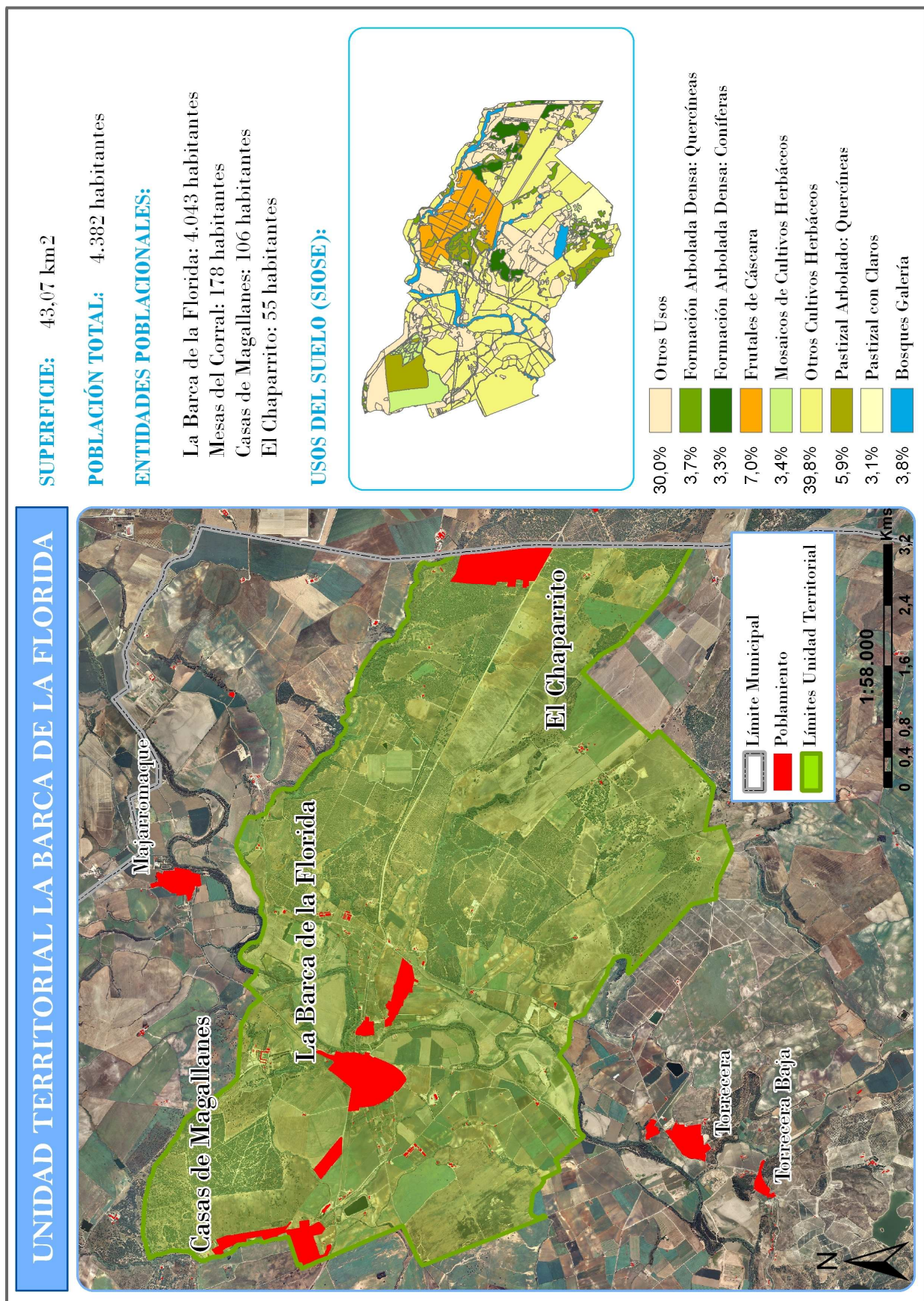
Fuente: Elaboración propia a partir del SIOSE Andalucía (2005), Nomenclátor del INE (2010), Ortofotografía de Andalucía (2010) y DEA100 (2009).

Ficha 10. Unidad Territorial Guadalcaén.



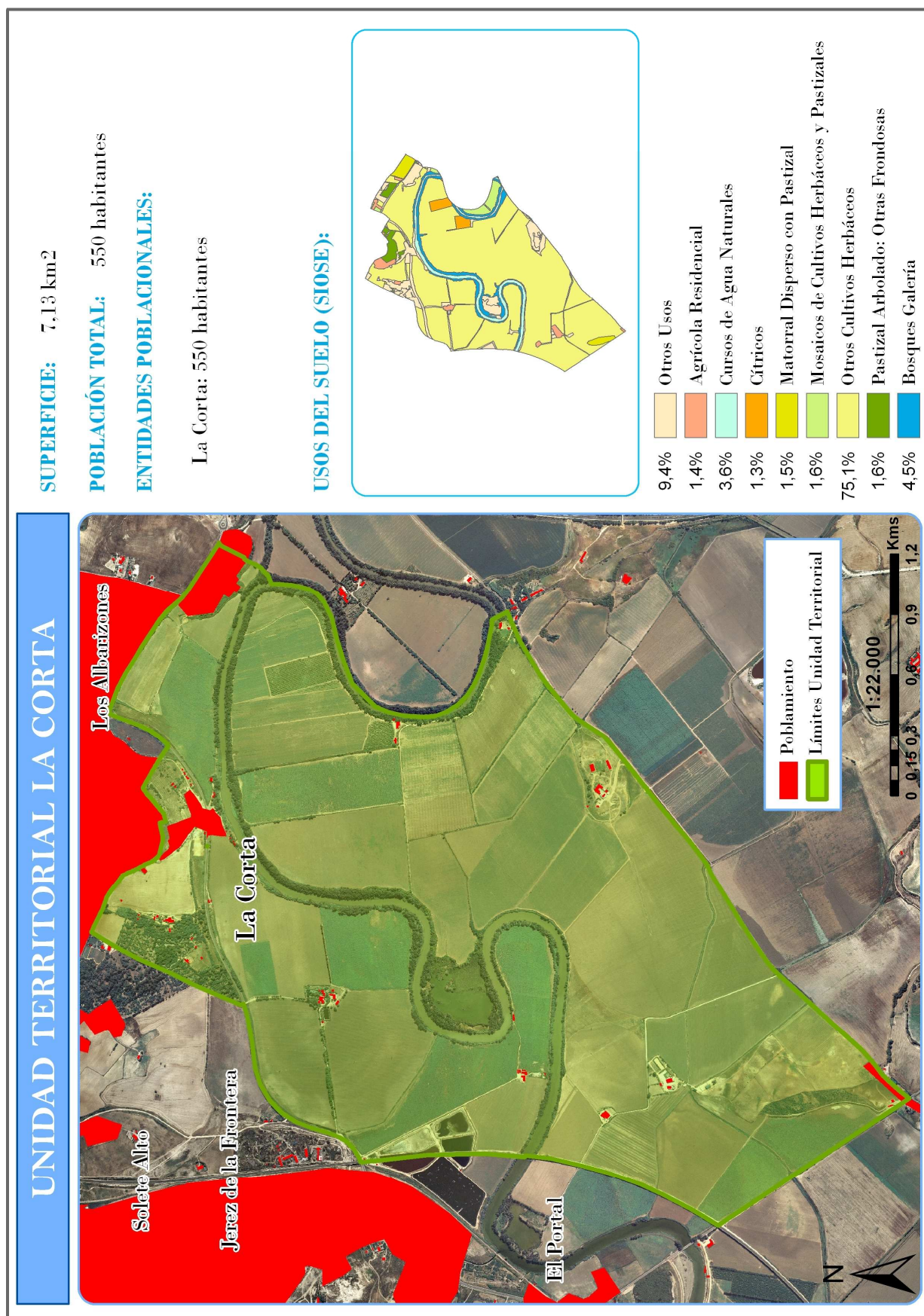
Fuente: Elaboración propia a partir del SIOSE Andalucía (2005), Nomenclátor del INE (2010), Ortofotografía de Andalucía (2010) y DEA100 (2009).

Ficha 11. Unidad Territorial La Barca de la Florida.



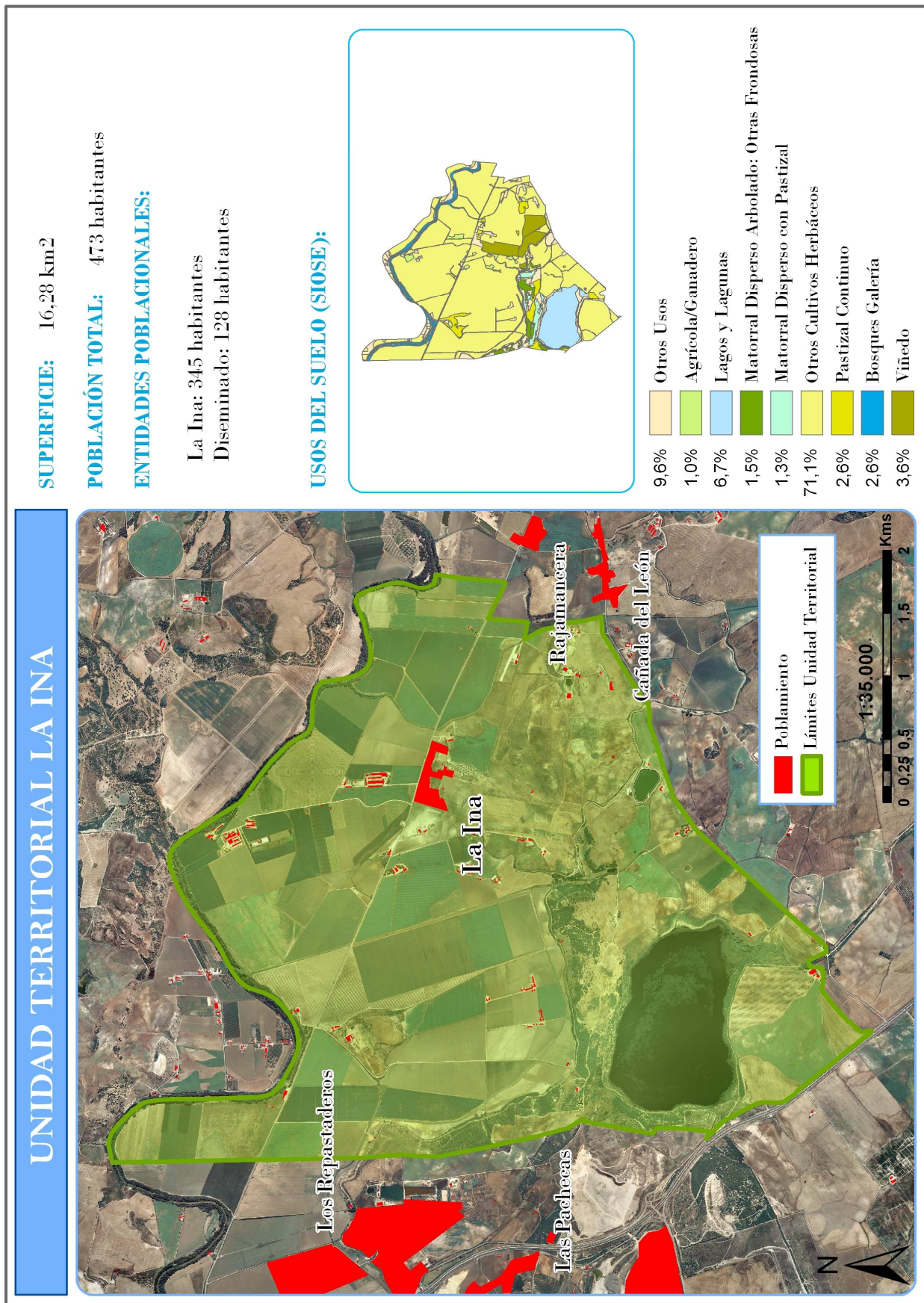
Fuente: Elaboración propia a partir del SIOSE Andalucía (2005), Nomenclátor del INE (2010), Ortofotografía de Andalucía (2010) y DEA100 (2009).

Ficha 12. Unidad Territorial La Corta.



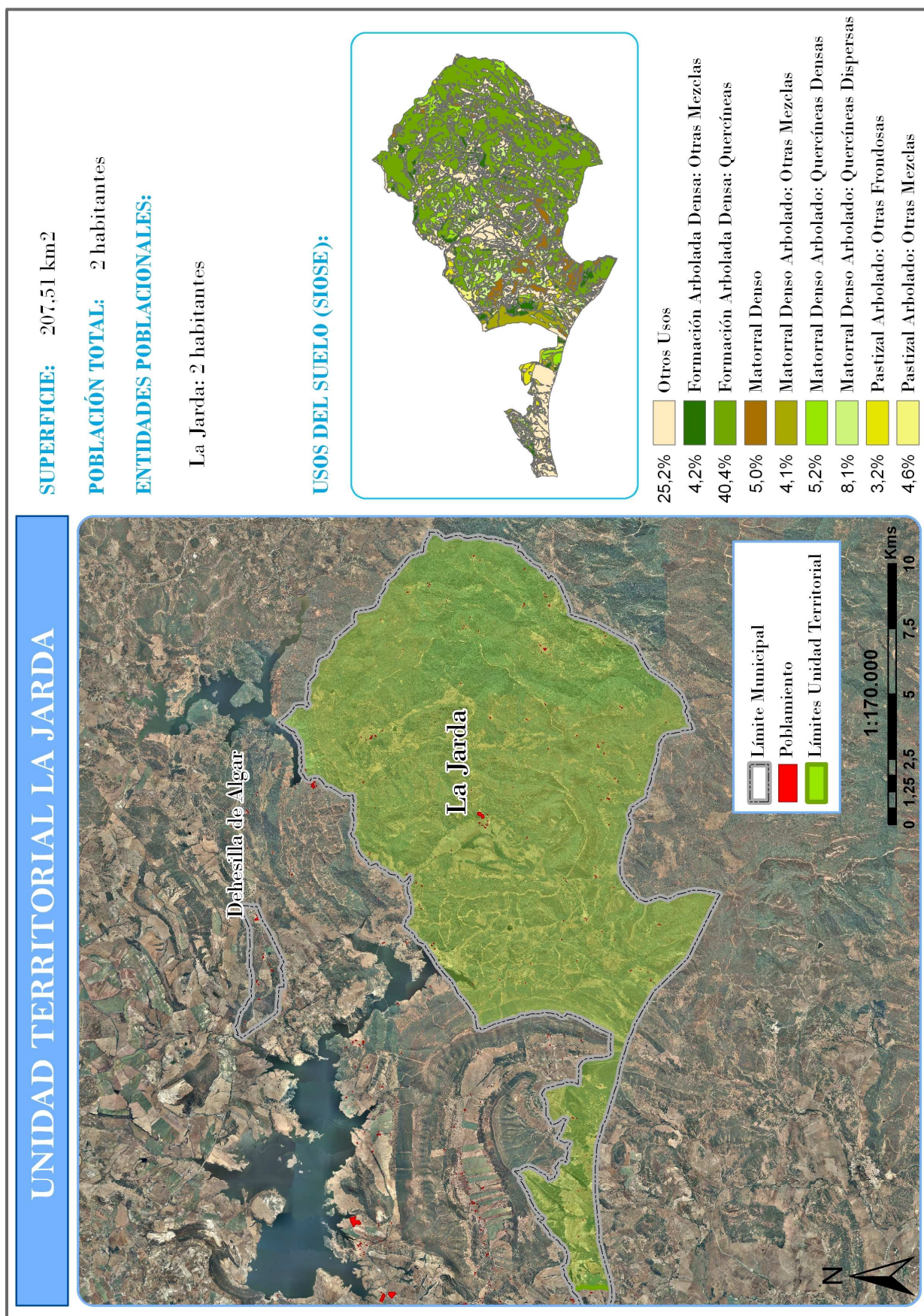
Fuente: Elaboración propia a partir del SIOSE Andalucía (2005), Nomenclátor del INE (2010), Ortofotografía de Andalucía (2010) y DEA100 (2009).

Ficha 13. Unidad Territorial La Ina.



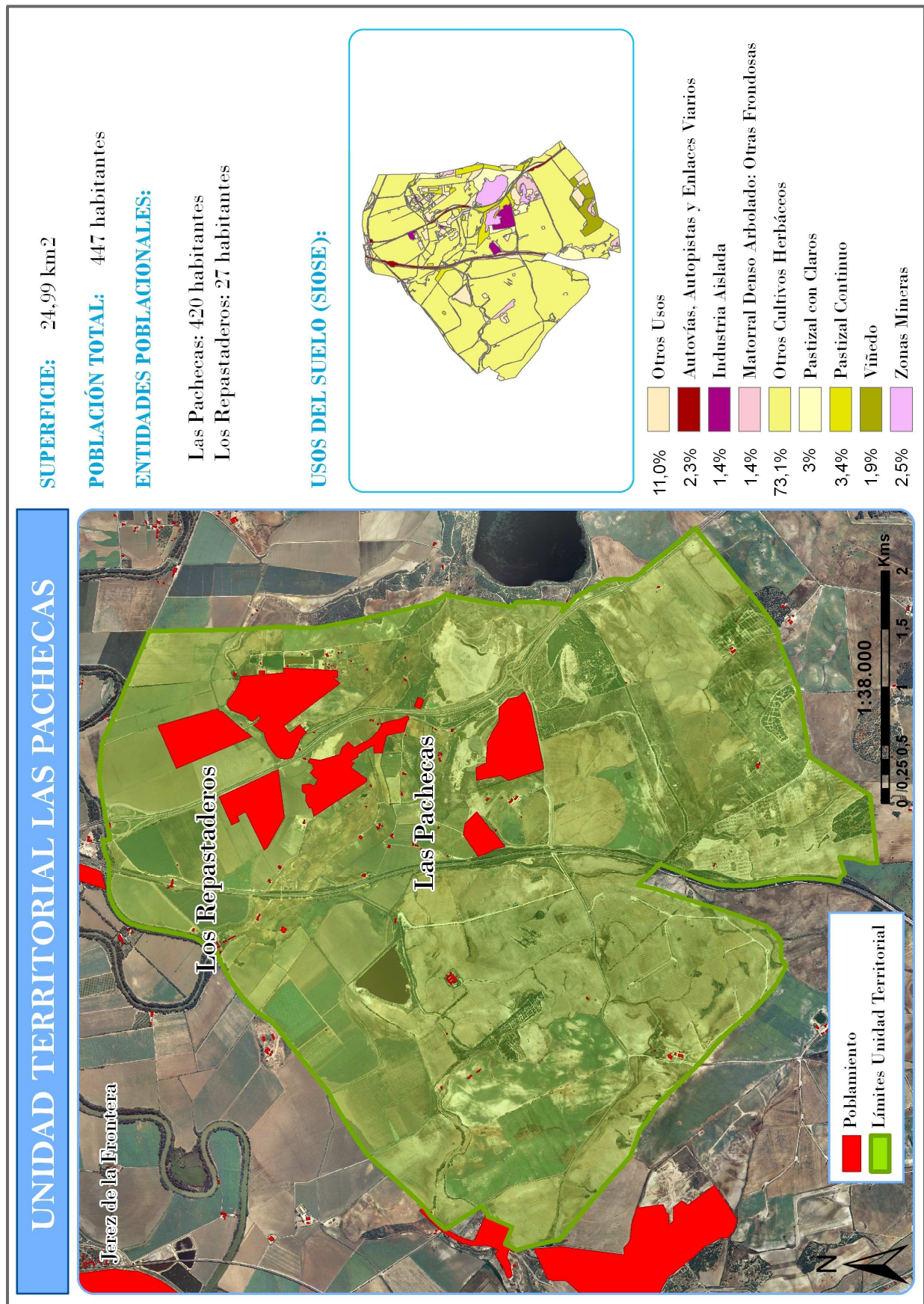
Fuente: Elaboración propia a partir del SIOSE Andalucía (2005), Nomenclátor del INE (2010), Ortofotografía de Andalucía (2010) y DEA100 (2009).

Ficha 14. Unidad Territorial La Jarda.



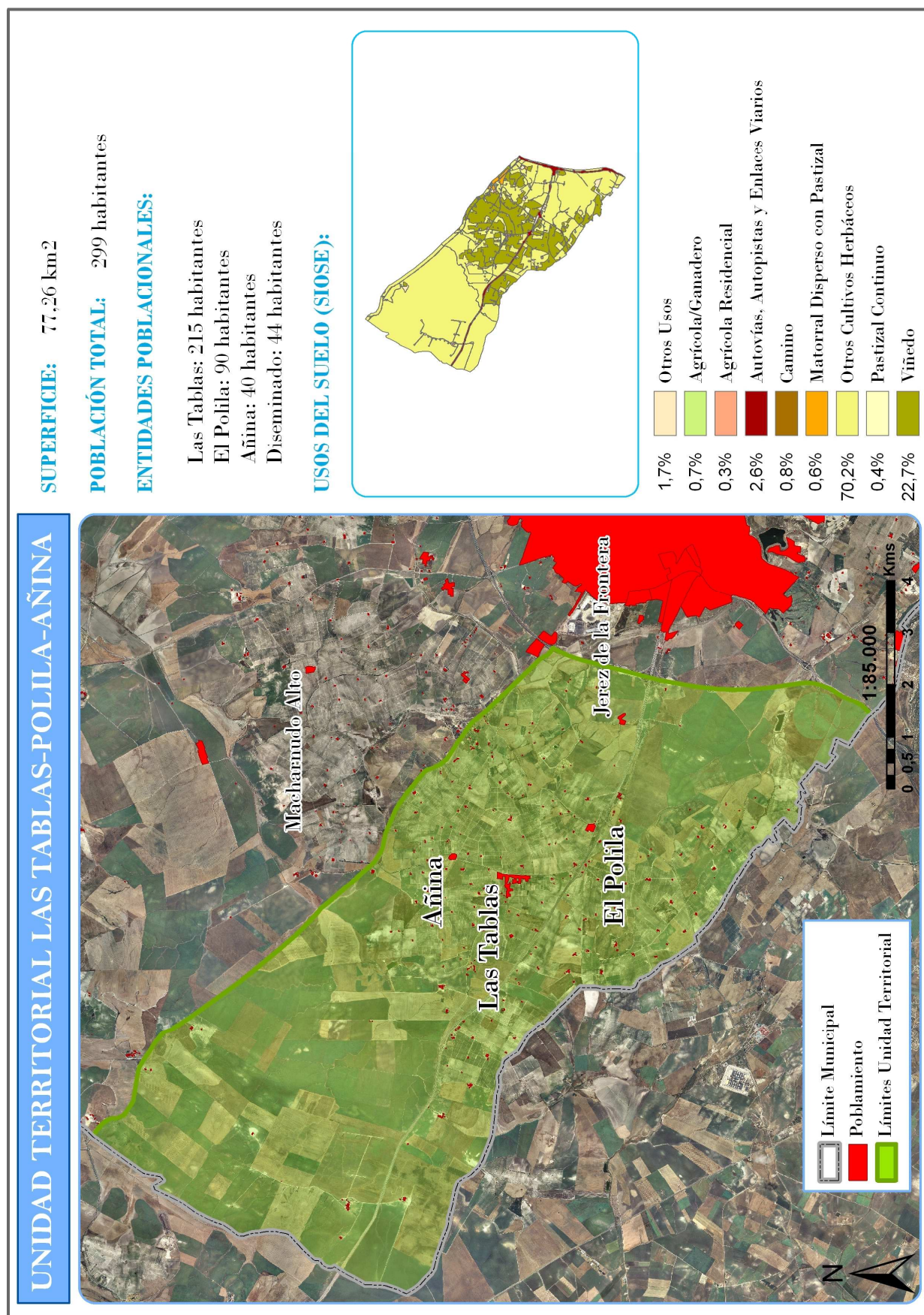
Fuente: Elaboración propia a partir del SIOSE Andalucía (2005), Nomenclátor del INE (2010), Ortofotografía de Andalucía (2010) y DEA100 (2009).

Ficha 15. Unidad Territorial Las Pachecas.



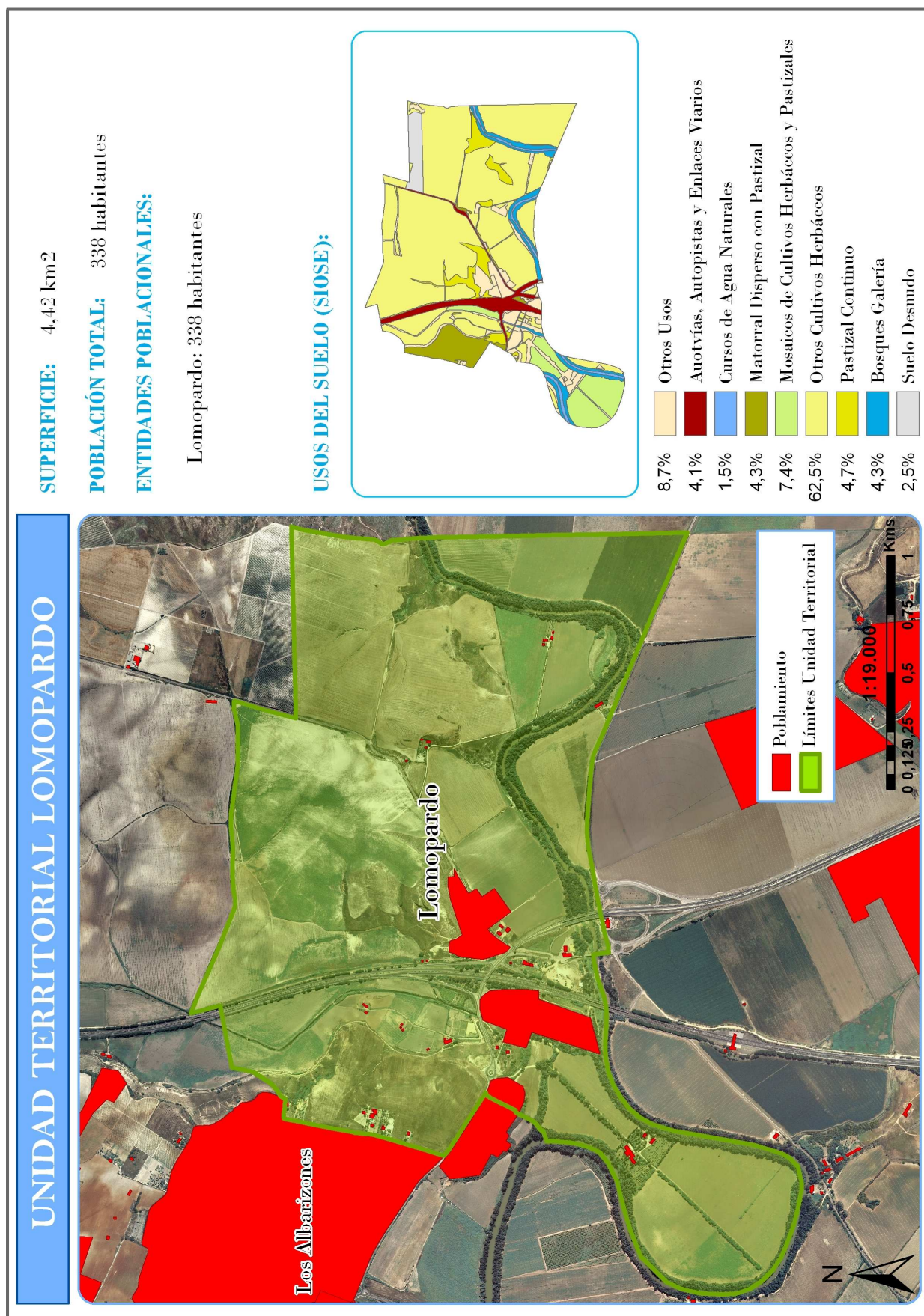
Fuente: Elaboración propia a partir del SIOSE Andalucía (2005), Nomenclátor del INE (2010), Ortofotografía de Andalucía (2010) y DEA100 (2009).

Ficha 16. Unidad Territorial Las Tablas-Polila-Añina.



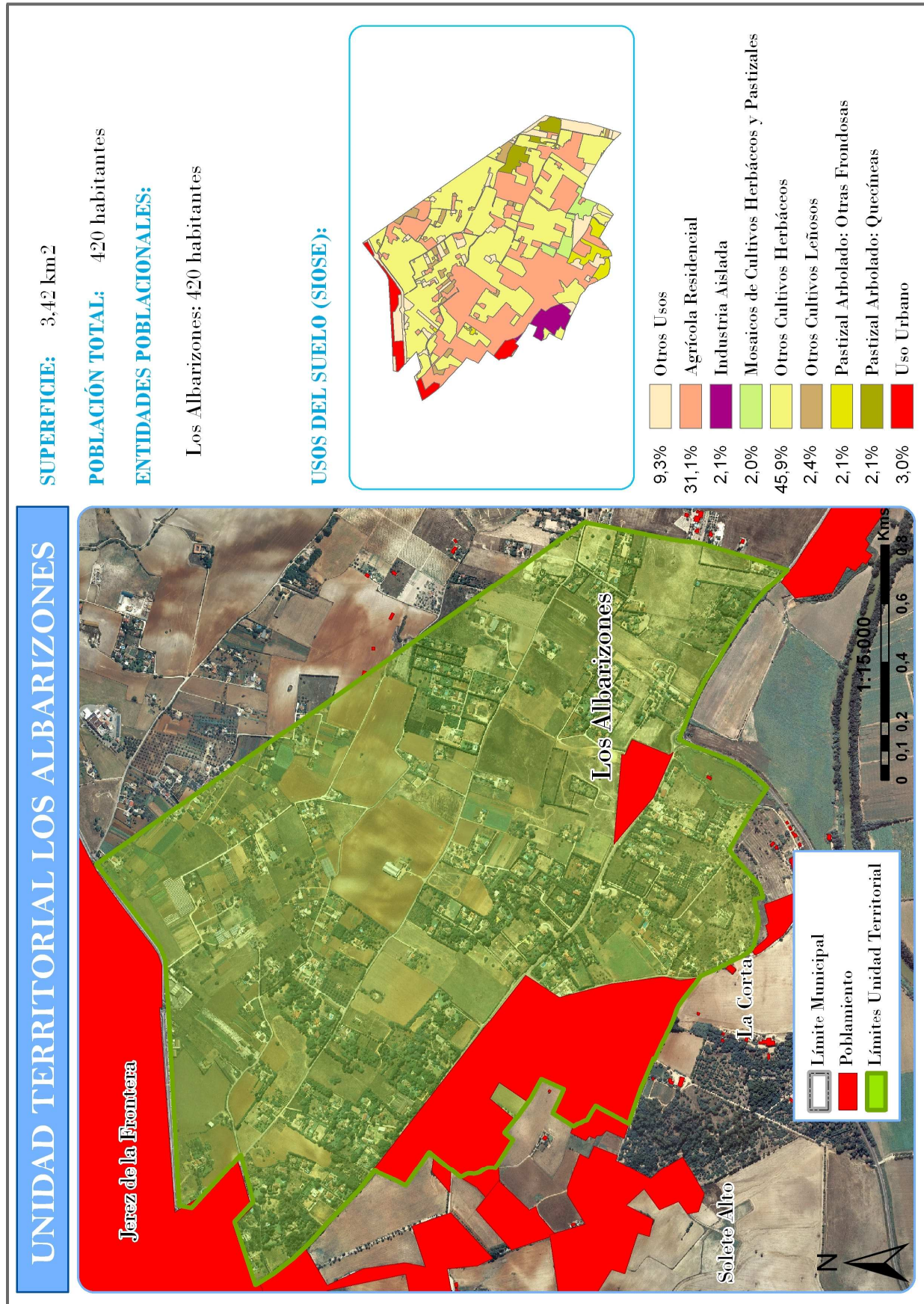
Fuente: Elaboración propia a partir del SIOSE Andalucía (2005), Nomenclátor del INE (2010), Ortofotografía de Andalucía (2010) y DEA100 (2009).

Ficha 17. Unidad Territorial Lomopardo.



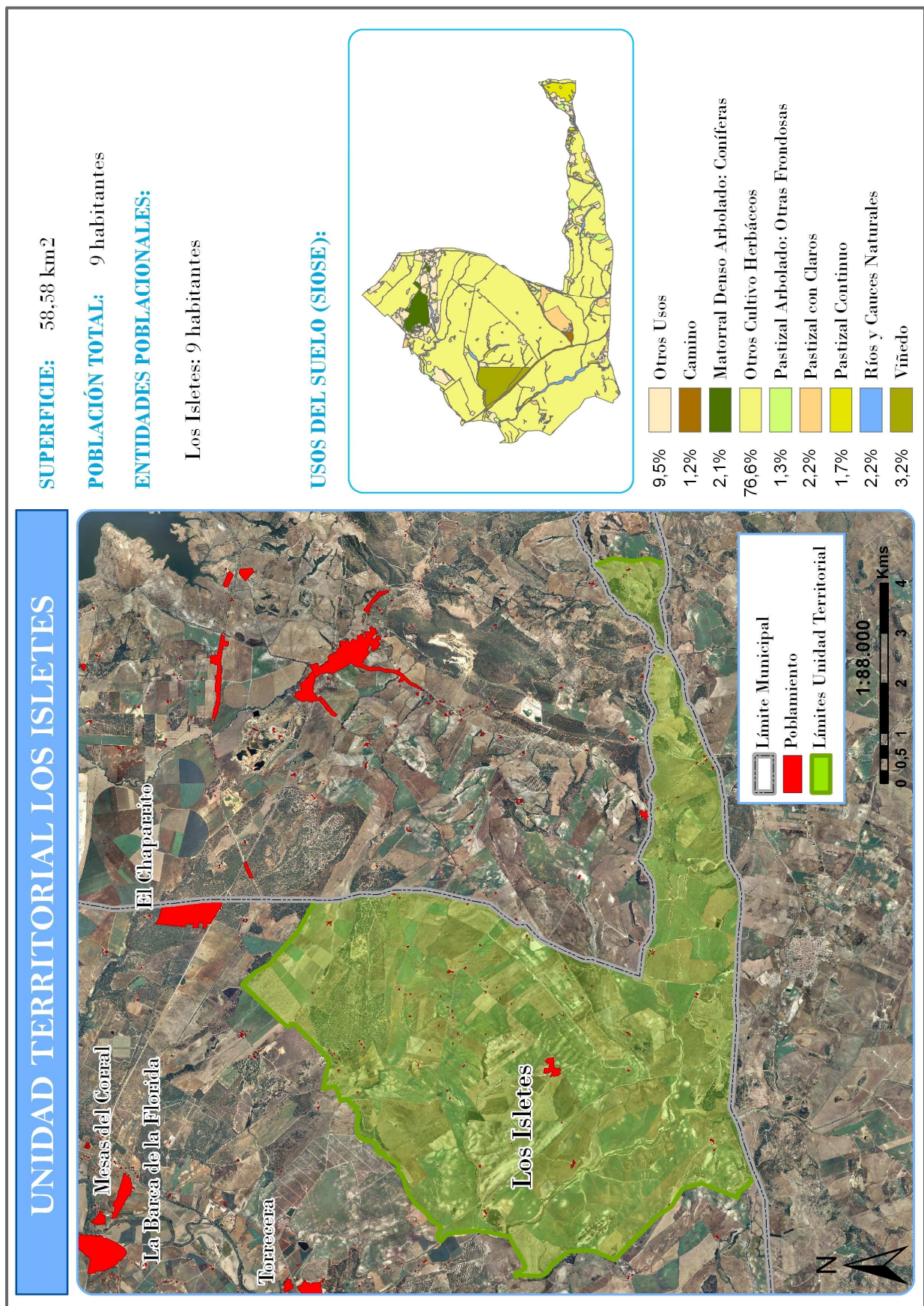
Fuente: Elaboración propia a partir del SIOSE Andalucía (2005), Nomenclátor del INE (2010), Ortofotografía de Andalucía (2010) y DEA100 (2009).

Ficha 18. Unidad Territorial Los Albarizones.



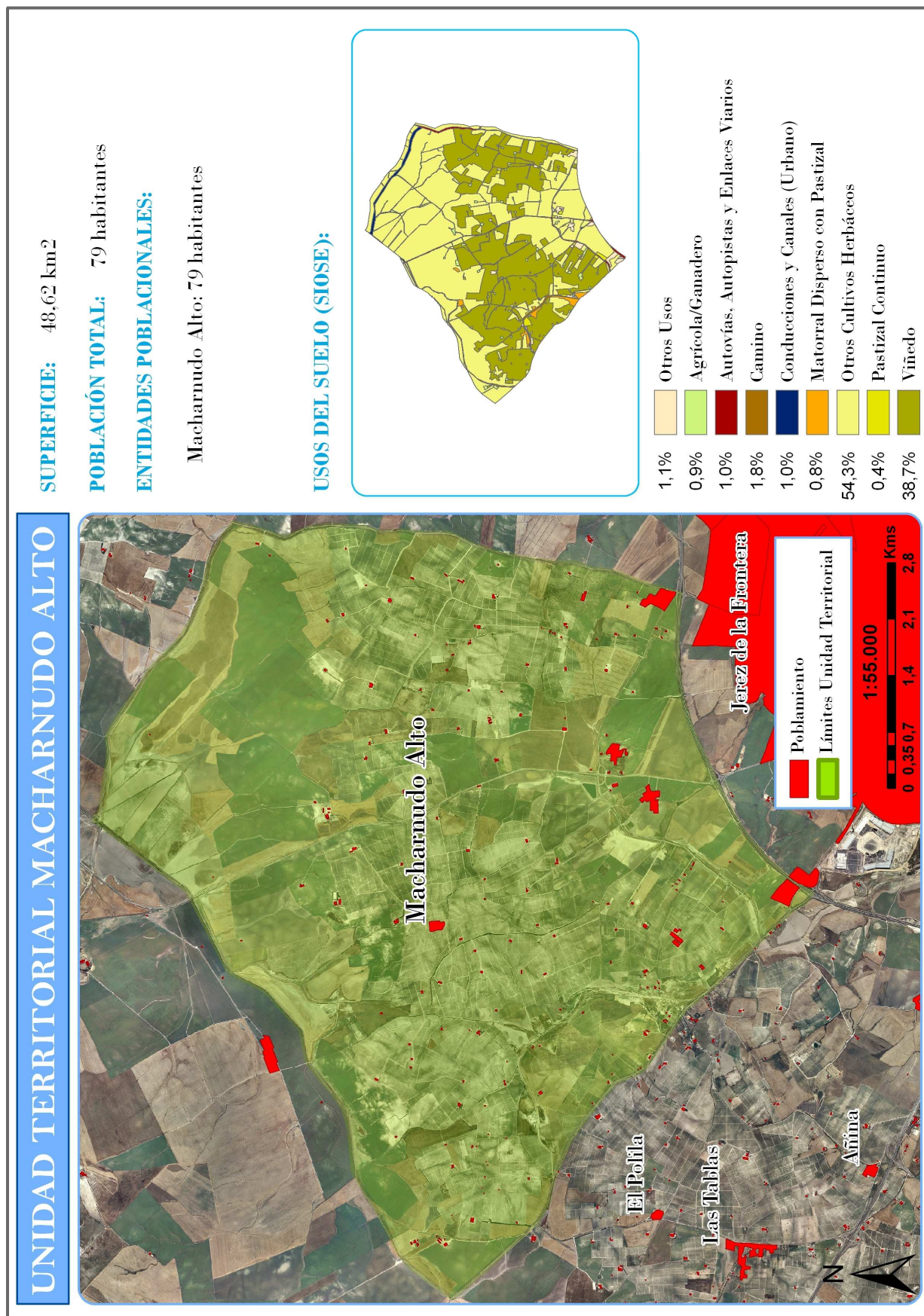
Fuente: Elaboración propia a partir del SIOSE Andalucía (2005), Nomenclátor del INE (2010), Ortofotografía de Andalucía (2010) y DEA100 (2009).

Ficha 19. Unidad Territorial Los Isletes.



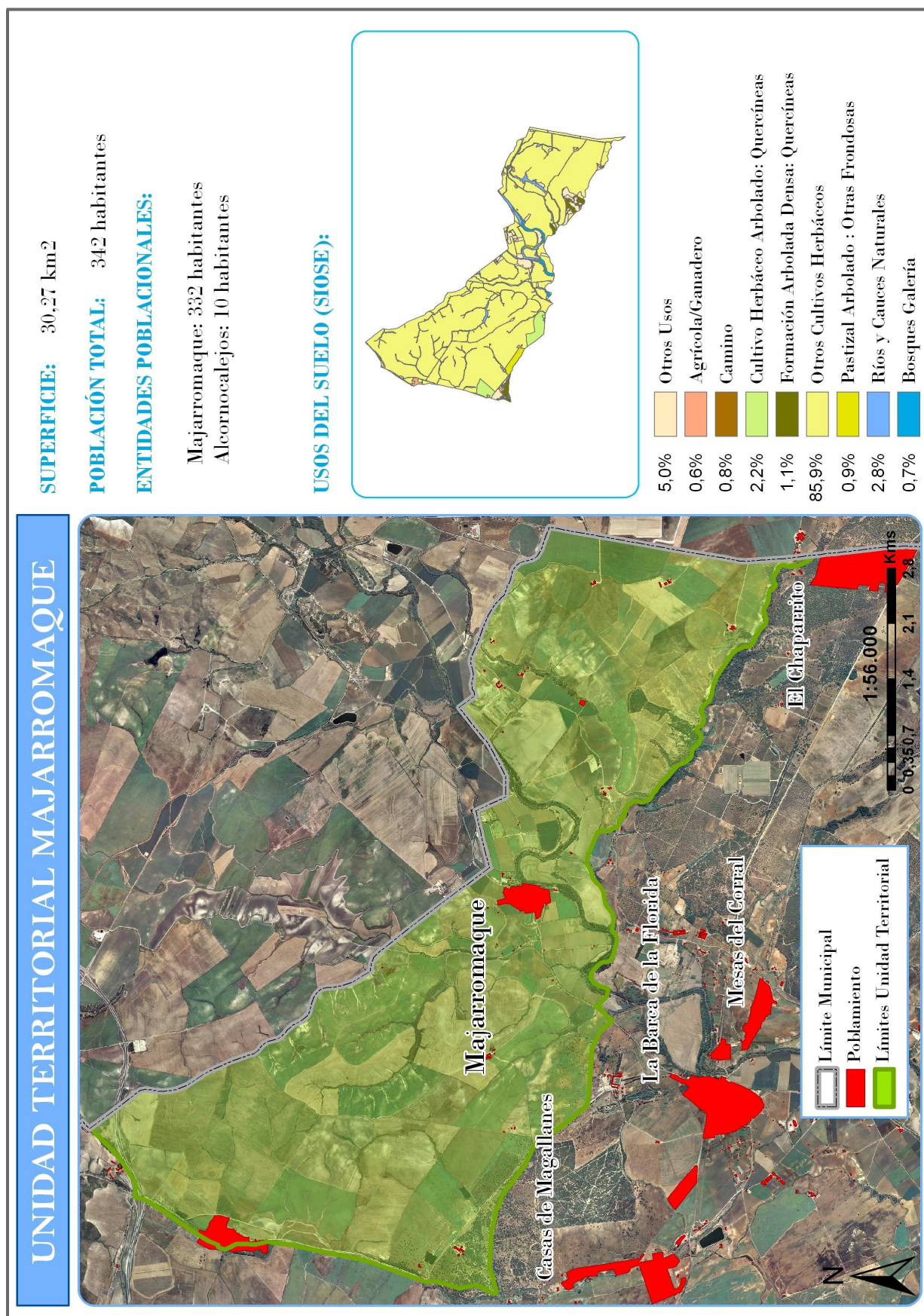
Fuente: Elaboración propia a partir del SIOSE Andalucía (2005), Nomenclátor del INE (2010), Ortofotografía de Andalucía (2010) y DEA100 (2009).

Ficha 20. Unidad Territorial Macharnudo Alto.



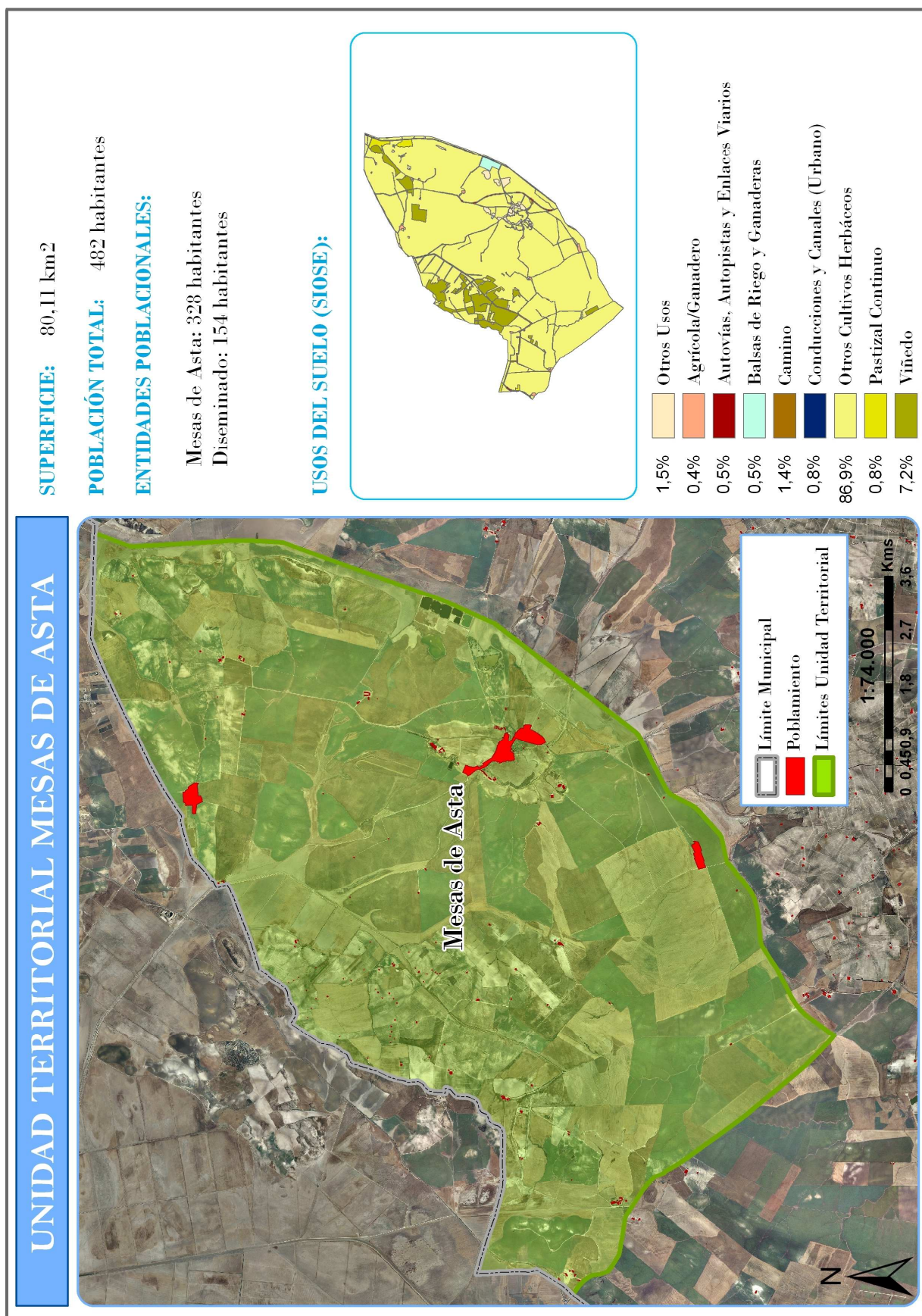
Fuente: Elaboración propia a partir del SIOSE Andalucía (2005), Nomenclátor del INE (2010), Ortofotografía de Andalucía (2010) y DEA100 (2009).

Ficha 21. Unidad Territorial Majarromaque.



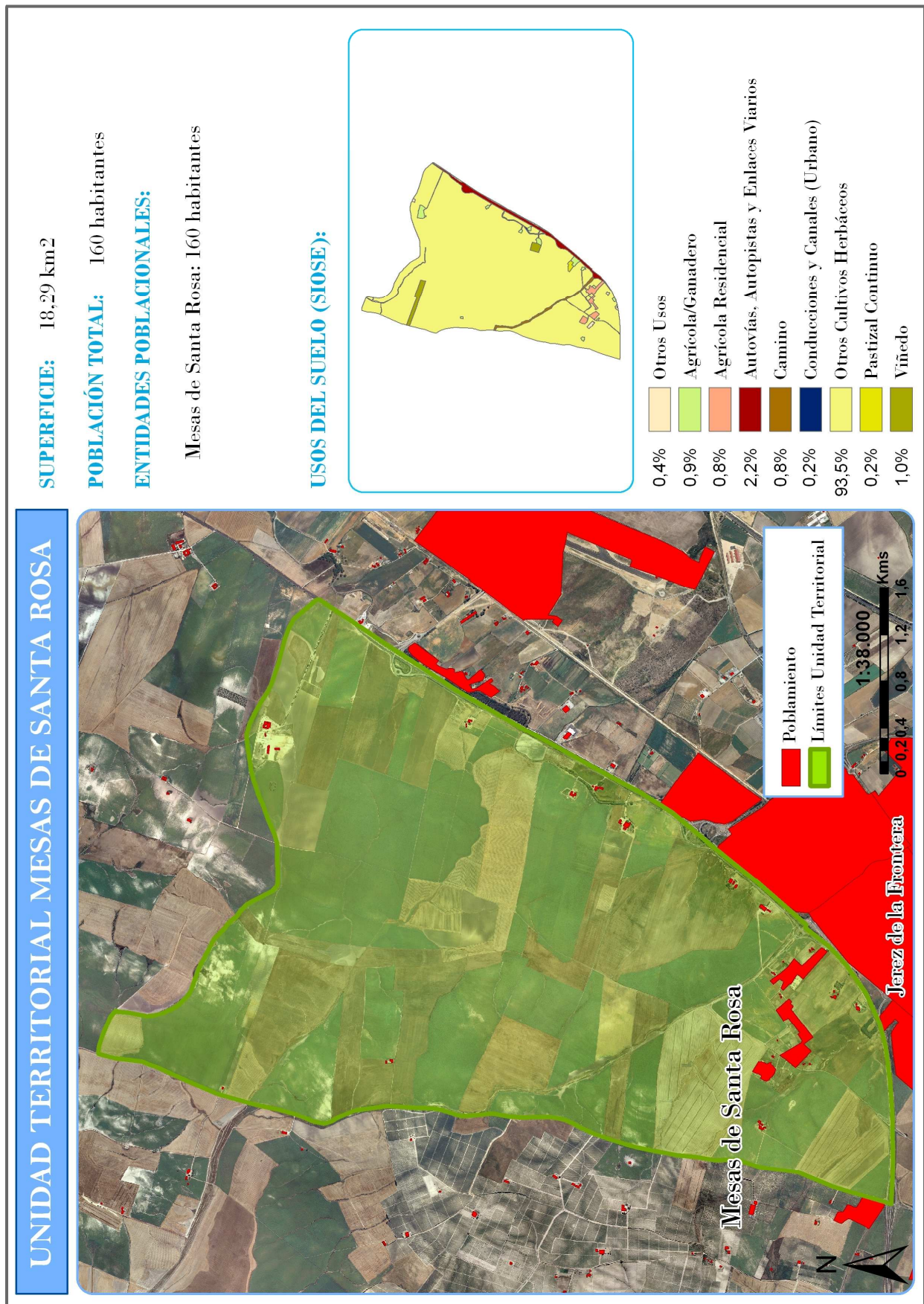
Fuente: Elaboración propia a partir del SIOSE Andalucía (2005), Nomenclátor del INE (2010), Ortofotografía de Andalucía (2010) y DEA100 (2009).

Ficha 22. Unidad Territorial Mesas de Asta.



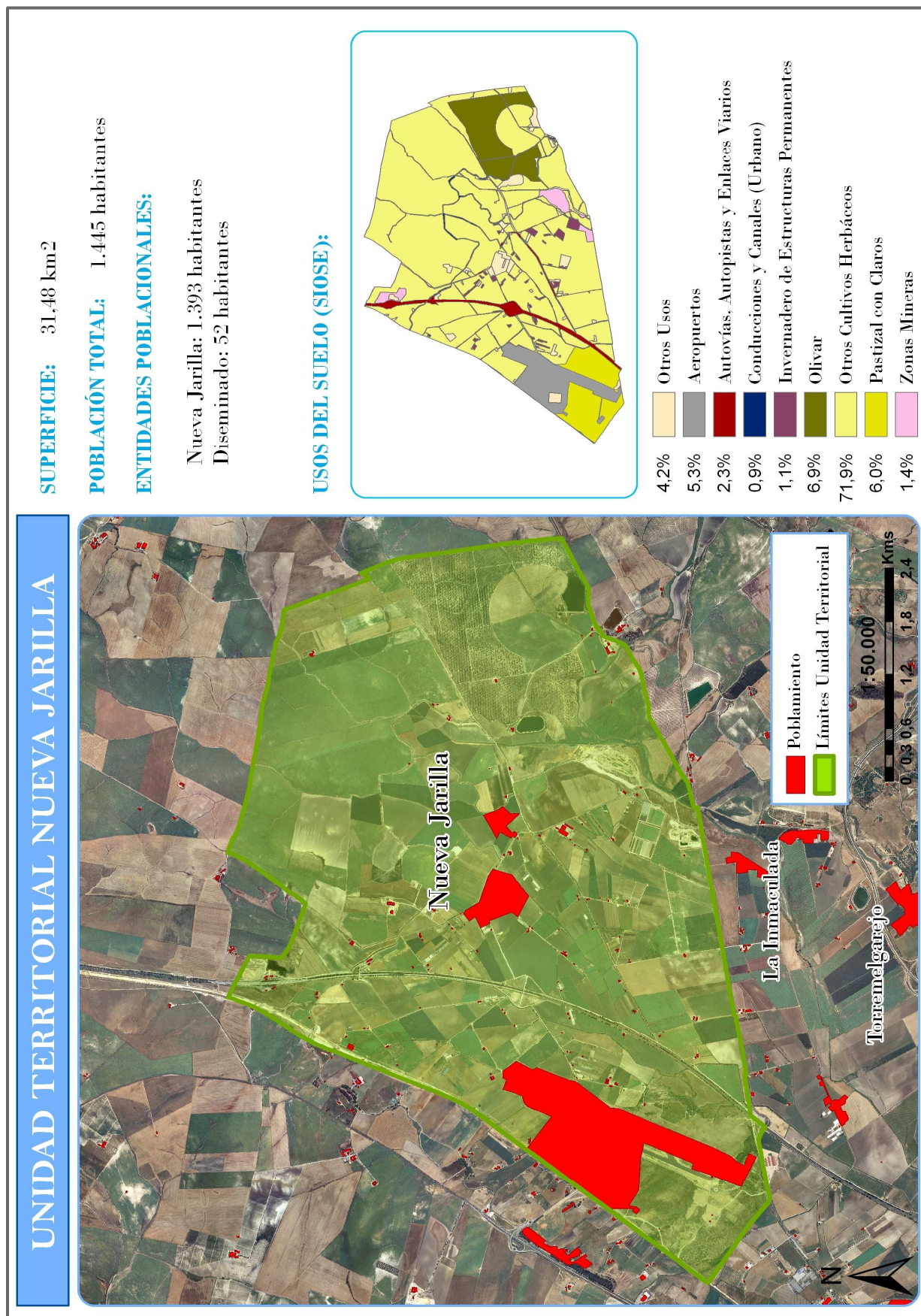
Fuente: Elaboración propia a partir del SIOSE Andalucía (2005), Nomenclátor del INE (2010), Ortofotografía de Andalucía (2010) y DEA100 (2009).

Ficha 23. Unidad Territorial Mesas de Santa Rosa.



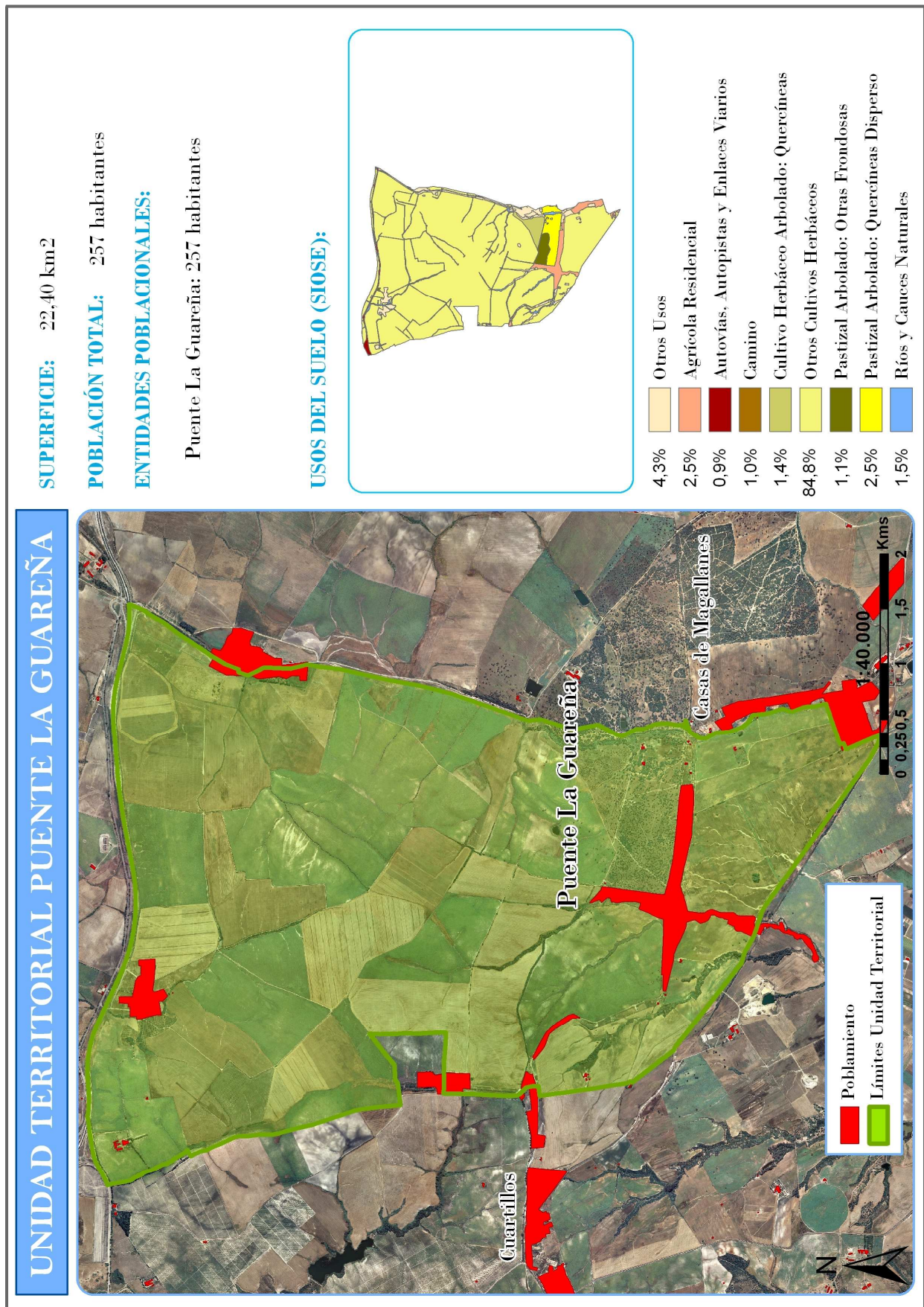
Fuente: Elaboración propia a partir del SIOSE Andalucía (2005), Nomenclátor del INE (2010), Ortofotografía de Andalucía (2010) y DEA100 (2009).

Ficha 24. Unidad Territorial Nueva Jarilla.



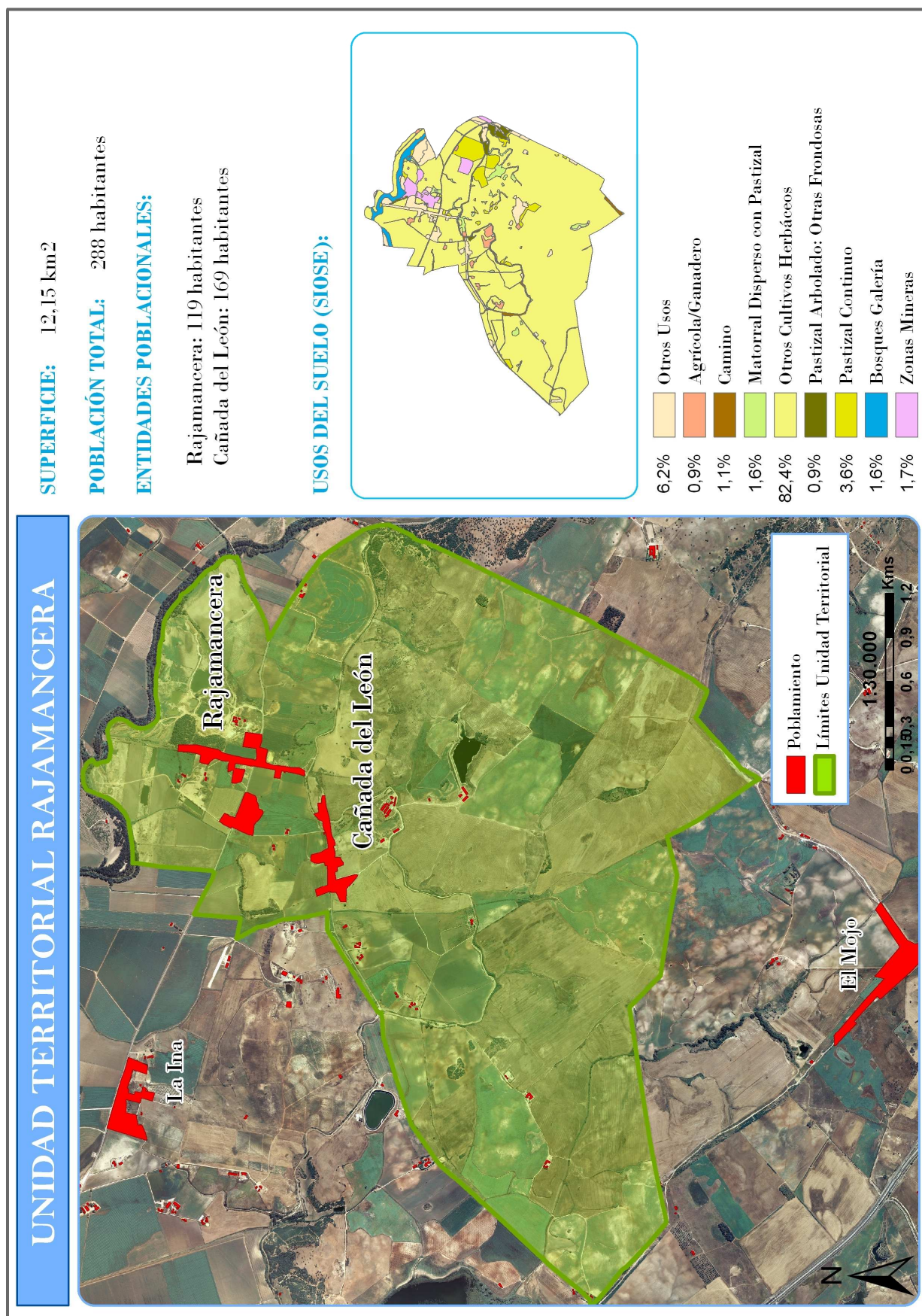
Fuente: Elaboración propia a partir del SIOSE Andalucía (2005), Nomenclátor del INE (2010), Ortofotografía de Andalucía (2010) y DEA100 (2009).

Ficha 25. Unidad Territorial Puente La Guareña.



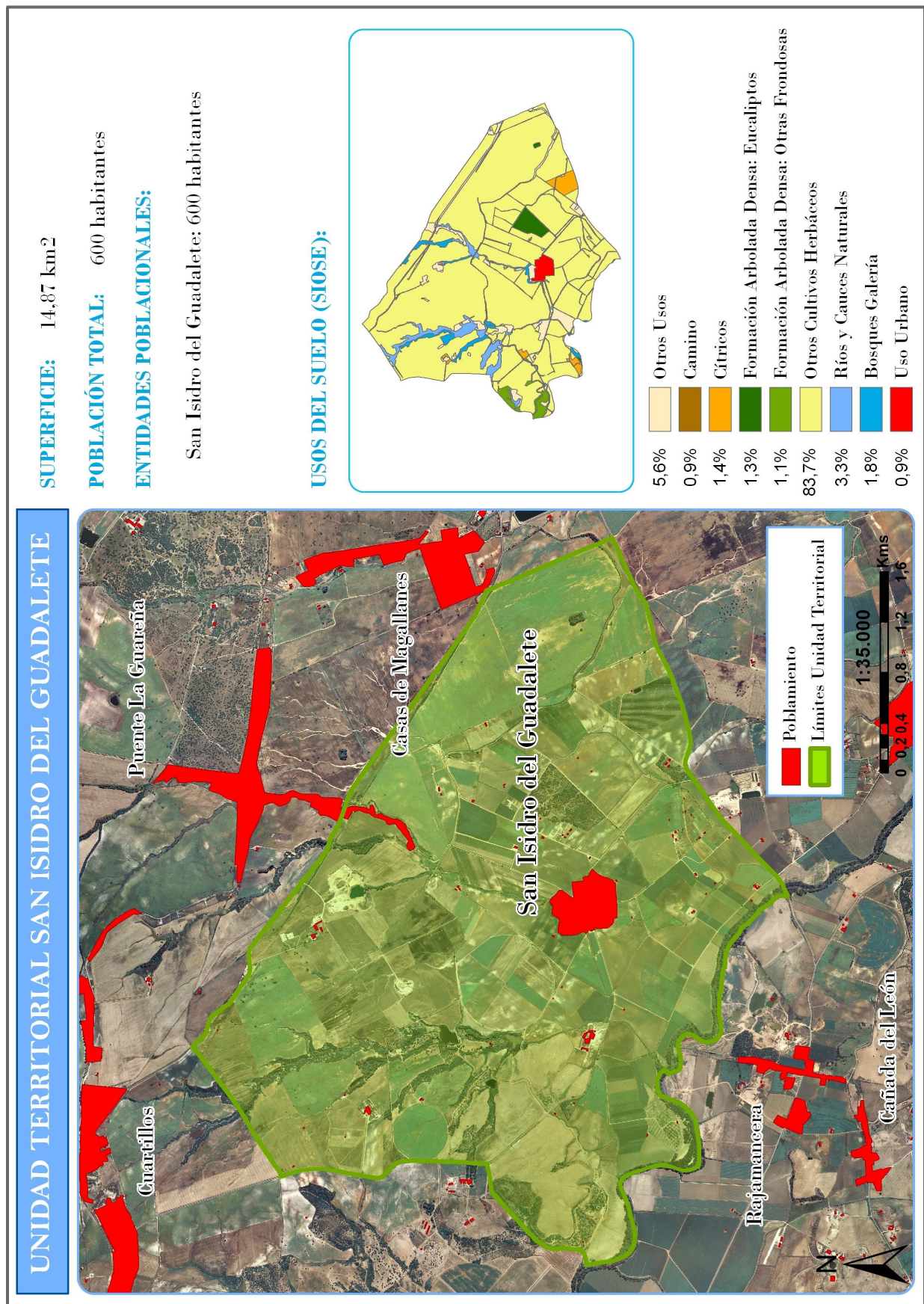
Fuente: Elaboración propia a partir del SIOSE Andalucía (2005), Nomenclátor del INE (2010), Ortofotografía de Andalucía (2010) y DEA100 (2009).

Ficha 26. Unidad Territorial Rajamancera.



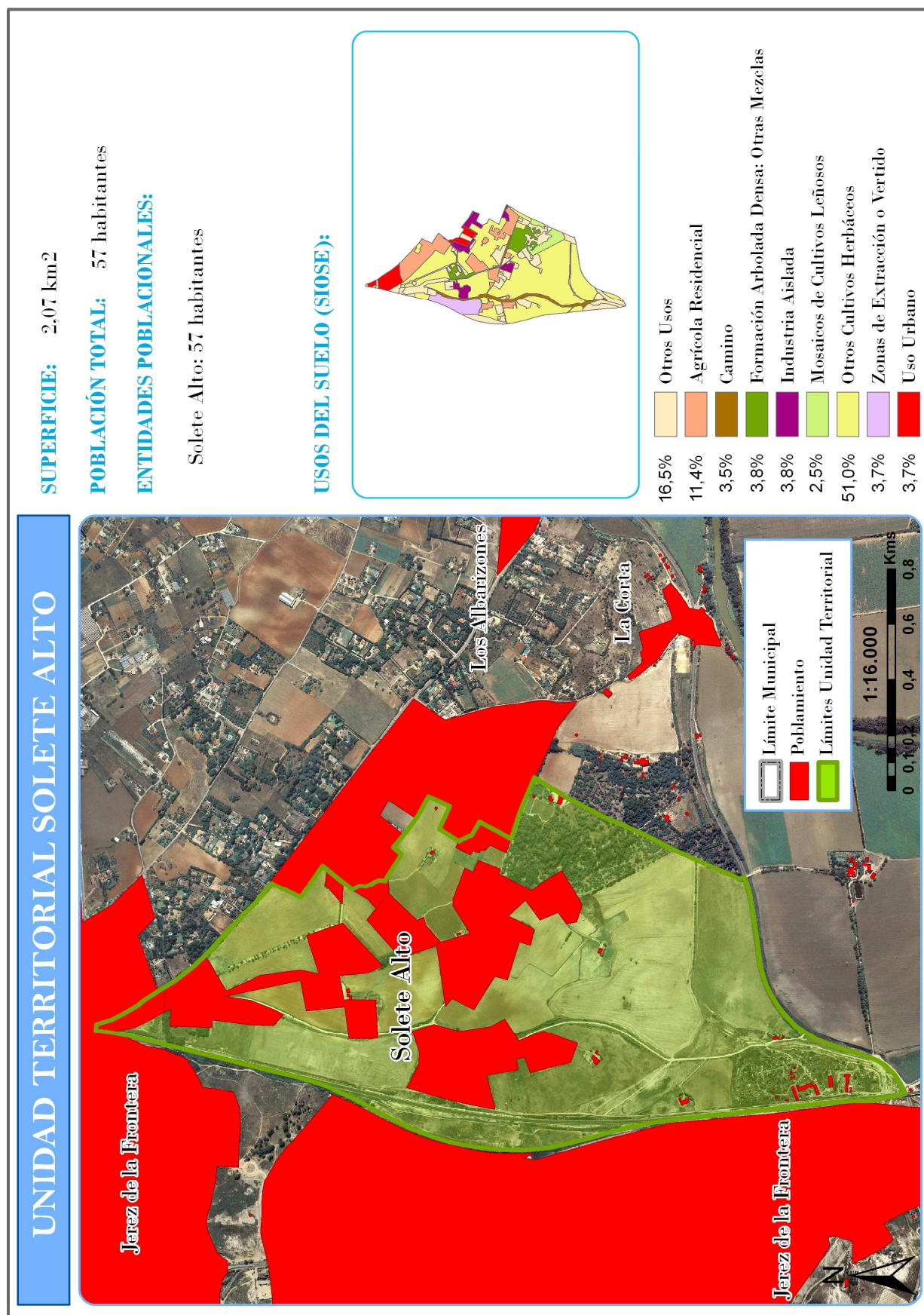
Fuente: Elaboración propia a partir del SIOSE Andalucía (2005), Nomenclátor del INE (2010), Ortofotografía de Andalucía (2010) y DEA100 (2009).

Ficha 27. Unidad Territorial San Isidro del Guadalete.



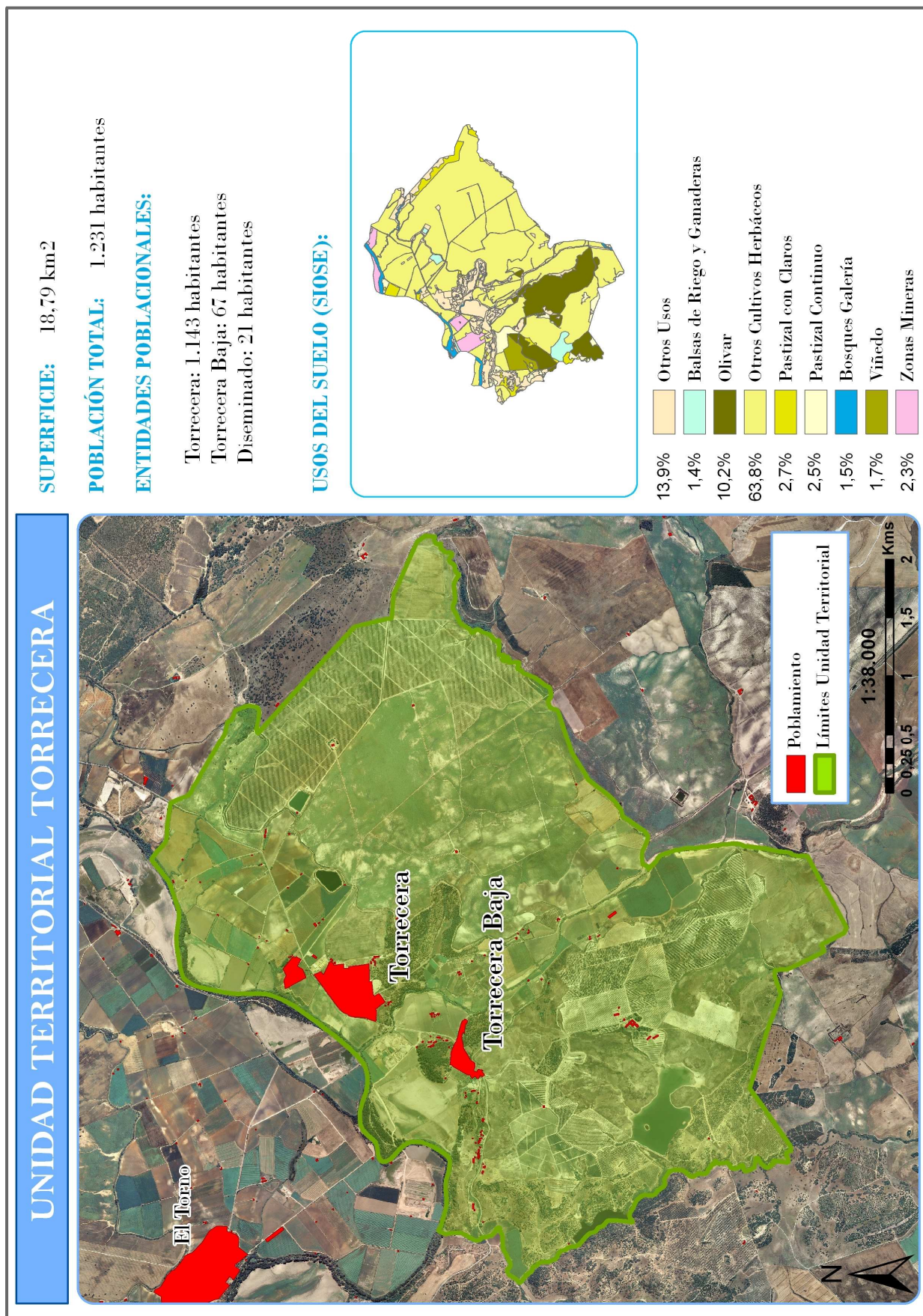
Fuente: Elaboración propia a partir del SIOSE Andalucía (2005), Nomenclátor del INE (2010), Ortofotografía de Andalucía (2010) y DEA100 (2009).

Ficha 28. Unidad Territorial Solete Alto.



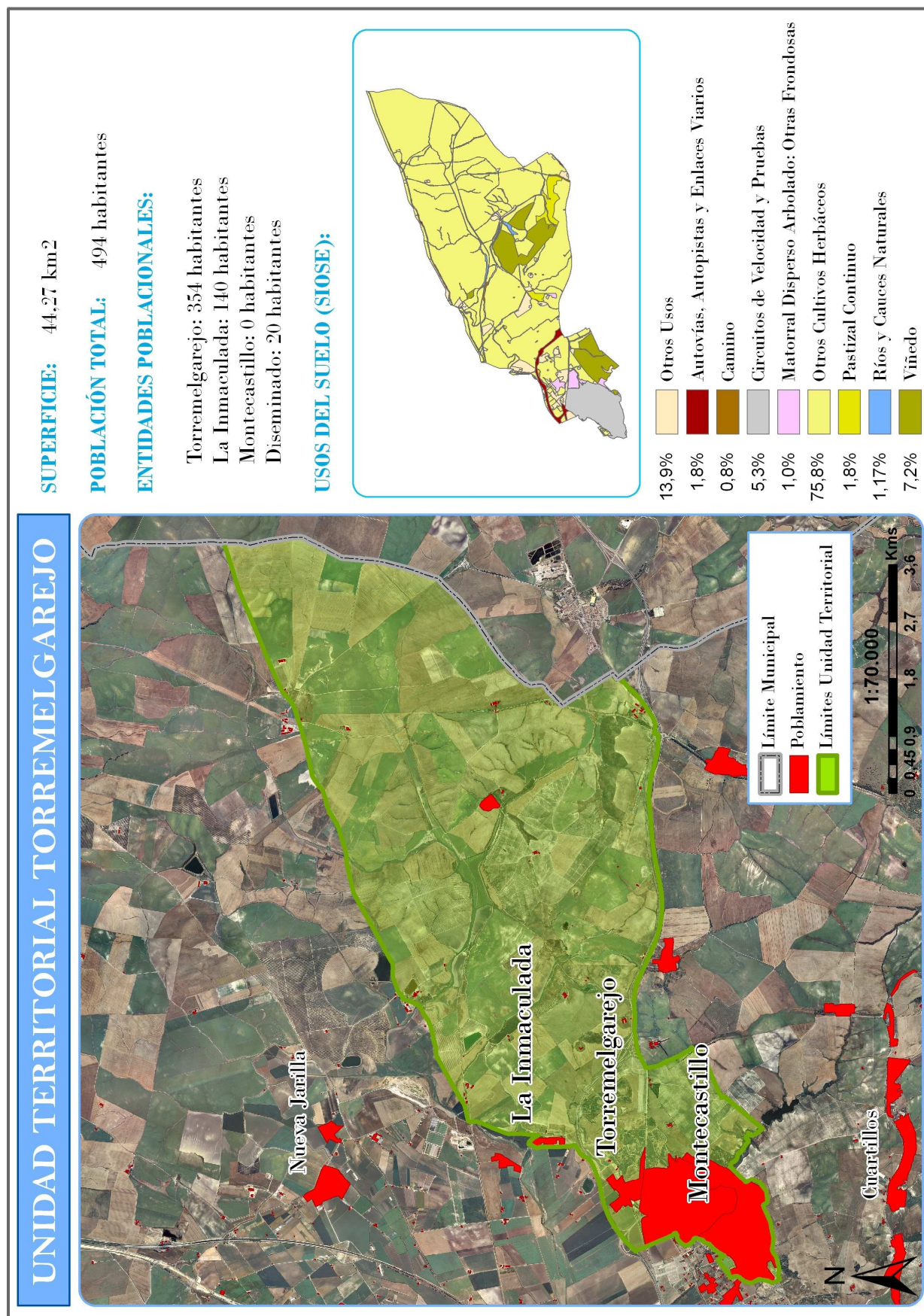
Fuente: Elaboración propia a partir del SIOSE Andalucía (2005), Nomenclátor del INE (2010), Ortofotografía de Andalucía (2010) y DEA100 (2009).

Ficha 29. Unidad Territorial Torrechera.



Fuente: Elaboración propia a partir del SIOSE Andalucía (2005), Nomenclátor del INE (2010), Ortofotografía de Andalucía (2010) y DEA100 (2009).

Ficha 30. Unidad Territorial Torremelgarejo.



Fuente: Elaboración propia a partir del SIOSE Andalucía (2005), Nomenclátor del INE (2010), Ortofotografía de Andalucía (2010) y DEA100 (2009).

8

Conclusiones.

La presente investigación ha tenido que solventar tres inconvenientes o dificultades principales para alcanzar unos resultados inicialmente pensamos que satisfactorios:

1. Por un lado, la base científica del estudio se fundamentaba en unos amplios conocimientos en materia legal; de esta forma, se hacía necesario comprender la legislación vigente en régimen local, tanto a escala estatal como regional, al igual que la normativa derogada, puesto que nos aporta los criterios clave de las delimitaciones territoriales anteriores a la entrada en vigor de la Ley 5/2010, de Autonomía Local de Andalucía. Para esta tarea se ha contado con la ayuda y asesoría de D. José Antonio Rodríguez Hervella, asesor técnico del Servicio de Régimen Jurídico de la Dirección General de Administración Local de la Consejería de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía.
2. Para el planteamiento de este tema de investigación se pensó en aportar soluciones a una problemática territorial de actualidad. Así, con la entrada en vigor de la Ley de Autonomía Local pasaban a considerarse Entidades Locales Autónomas, según su Disposición Transitoria Segunda, *“aquellas otras entidades de ámbito territorial inferior al municipio que se hubiesen constituido conforme a normativas anteriores”*, sin embargo, a pesar de ser un criterio indispensable (ver artículo 116.2 de la LAULA) que una ELA cuente con la delimitación de su ámbito territorial donde ejercitar sus competencias, existen aún en Andalucía 23 ELAs que no tienen establecido sus límites, de las cuales 7 se localizan en el municipio de Jerez de la Frontera. Cuando se recurrió a bibliografía científica relativa a la delimitación inframunicipal de un municipio, se constató la ausencia casi total de la misma, lo que obligó a trabajar con multitud de informes y documentación obrante en los archivos de la Consejería de

Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía, que ofrecían diversos criterios a considerar para la delimitación de las ELAs, lo que obligó a sistematizarlas.

3. Por último, uno de los criterios de delimitación territorial de unidades inframunicipales más recurrente está en relación con la titularidad de la propiedad de las parcelas del entorno de un núcleo de población que, en caso de pertenecer a población residente en la entidad, se consideraría como integrante del ámbito territorial de una Entidad Local Autónoma o Entidad Vecinal. Obtener esta información procedente de la Dirección General del Catastro o del propio Ayuntamiento de Jerez ha sido imposible para su utilización en el presente trabajo, puesto que se trata de información que se encuentra limitada por la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal. No obstante, es necesario limitar la importancia que hubiera tenido manejar dicha información para nuestra investigación, ya que este criterio no tiene especial relevancia después de haber pasado unos 60 años desde el reparto de tierras entre los colonos y de haber sufrido estos pueblos un claro aumento poblacional e importantes cambios en la propiedad de la tierra.

9

Bibliografía y referencias utilizadas.

ABELLÁN PÉREZ, Juan: *El concejo de Jerez de la Frontera en la primera mitad del siglo XV: composición, sistemas de elección y funcionamiento del cabildo*. Jerez, Biblioteca de Urbanismo y Cultura. 1990.

ASTILLERO RAMOS, José Manuel: "La delimitación del ámbito territorial de una entidad local autónoma: método de análisis y propuestas". Universidad de Sevilla. 2001.

BEATO ESPEJO, Manuel: "El ámbito territorial en las entidades locales creadas por motivo de colonización interior". Universidad de Extremadura. 1988.

BENITO ARRANZ, Juan y DE LA VEGA BENAYAS, Sofía: "Consideraciones geográficas sobre la superficie de los municipios de Andalucía". Espacio y Tiempo: Revista de Ciencias Humanas. Núm. 17, pp.9-28. 2003.

BERMEJO AGUÑA, Antonio: "La Estadística municipal y su esperanza en el aprovechamiento de los registros administrativos". Seminario Internacional: el papel de los registros administrativos en relación con el análisis social y económico y el desarrollo del sistema estadístico municipal". Instituto de Estudios Fiscales. 2006.

BORREGO SOTO, Miguel Ángel: "Jerez, los orígenes de una ciudad islámica". Centro de Estudios Históricos Jerezanos.

BURGUEÑO RIVERO, Jesús: "Geografía y Administración. Proyectar territorios en el siglo XXI". Boletín de la AGE. Núm. 32, pp.191-207. 2001.

BURGUEÑO RIVERO, Jesús: "El eterno debate sobre la reforma del mapa municipal. El caso de Cataluña". Revista de Geografía. Núm. 3, pp.7-33. 2004.

CABALLERO RAGEL, Jesús: "Ceret: unas jornadas clarificadoras". Actas de las XV Jornadas de Historia de Jerez. Centro de Estudios Históricos Jerezanos.

CABRAL CHAMORRO, Antonio: *La colonización ilustrada y liberal en Jerez de la Frontera (1750-1850)*. Jerez, Biblioteca de Urbanismo y Cultura. 1996.

CARO CANCELA, Diego (Coordinador): *Historia de Jerez de la Frontera. Tomo I. De los orígenes a la época medieval*. Cádiz, Servicio de Publicaciones Diputación de Cádiz. 1999.

CARO CANCELA, Diego (Coordinador): *Historia de Jerez de la Frontera. Tomo II. El Jerez moderno y contemporáneo*. Cádiz, Servicio de Publicaciones Diputación de Cádiz. 1999.

CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA: "La demarcación municipal en Andalucía". 2011.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE: *Base cartográfica SIOSE Andalucía*. 2005.

CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA: *Web de Elecciones a Presidente/a de Entidad Local Autónoma de Andalucía 2011*.

CONSEJO DE EUROPA. Carta europea de la autonomía local. 1985.

COPANO ORTIZ, Luis: "Proceso de comarcalización y descentralización administrativa municipal del alfiz jerezano. La influencia del poblamiento". Trabajo Fin de Experto Universitario en Planificación y Desarrollo a escala Subregional. 2009.

CONSTITUCIÓN Española. 1978.

DECRETO 287/1988, de 27 de septiembre, por el que se deniega la aprobación interesada por el ayuntamiento de Bédmar y Garcéz (Jaén), para la segregación de su núcleo de Garcéz, a fin de constituirse en municipio independiente con igual denominación.

DECRETO 41/1994, de 22 de febrero, por el que se aprueba la segregación de la entidad de ámbito territorial inferior al Municipio de Villafranco del Guadalquivir, perteneciente al Municipio de La Puebla del Río, de la provincia de Sevilla, para constituirse en un nuevo e independiente municipio, con la denominación y capitalidad de Villafranco del Guadalquivir.

DECRETO 82/1995, de 28 de marzo, por el que se aprueba la segregación de parte del término municipal de Jerez de la Frontera para constituir el nuevo e independiente municipio de San José del Valle.

DECRETO 177/1996, de 7 de mayo, por el que se acuerda la inadmisión de la solicitud de segregación de la entidad de ámbito territorial inferior al municipio de Aldea de Fuente Carreteros del municipio de Fuente Palmera (Córdoba) para constituir un municipio independiente.

DECRETO 56/1999, de 9 de marzo, por el que se crea la Entidad Local Autónoma Las Marismillas en el municipio de Las Cabezas de San Juan (Sevilla).

DECRETO 94/1999, de 20 de abril, por el que se crea la Entidad Local Autónoma San Martín del Tesorillo, en el municipio de Jimena de la Frontera (Cádiz).

DECRETO 95/1999, de 20 de abril, por el que se crea la entidad local autónoma Isla Redonda-La Aceñuela, en el municipio de Écija (Sevilla).

DECRETO 110/1999, de 11 de mayo, por el que se crea la Entidad Local Autónoma de Serrato, en el municipio de Ronda (Málaga).

DECRETO 116/2001, de 8 de mayo, por el que se crea la Entidad Local Autónoma de Mures, en el municipio de Alcalá la Real (Jaén).

DECRETO 148/2001, de 19 de junio, por el que se crea la Entidad Local Autónoma de Castil de Campos, en el Municipio de Priego de Córdoba, de la provincia de Córdoba.

DECRETO 107/2002, de 19 de marzo, por el que se crea la Entidad Local Autónoma de Valderrubio, en el municipio de Pinos Puente, de la provincia de Granada.

DECRETO 168/2002, de 4 de junio, por el que se crea la Entidad Local Autónoma de Montecorto, en el municipio de Ronda, de la provincia de Málaga.

DECRETO 59/2003, de 4 de marzo, por el que se crea la entidad local autónoma de Domingo Pérez, del término municipal de Iznalloz, en la provincia de Granada.

DECRETO 60/2003, de 4 de marzo, por el que se crea la Entidad Local Autónoma de El Palmar de Troya, del término municipal de Utrera, en la provincia de Sevilla.

DECRETO 83/2003, de 25 de marzo, por el que se crea la entidad local autónoma de Dehesas Viejas, del término municipal de Iznalloz, en la provincia de Granada.

DECRETO 283/2003, de 7 de octubre, por el que se crea la Entidad Local Autónoma de Garcéz, del término municipal de Bédmar y Garcéz, en la provincia de Jaén.

DECRETO 185/2005, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Demarcación Municipal de Andalucía y del Registro Andaluz de Entidades Locales.

DECRETO 163/2006, de 12 de septiembre, por el que se determinan los límites territoriales de la Entidad de Ámbito Territorial Inferior al Municipio de La Redondela del municipio de Isla Cristina (Huelva).

DECRETO 34/2007, de 6 de febrero, por el que se desestima la solicitud de creación de la Entidad Local Autónoma de Ochavillo del Río, en el término municipal de Fuente Palmera, de la provincia de Córdoba.

DECRETO 82/2007, de 20 de marzo, por el que se acuerda la inadmisión de la solicitud de creación del municipio de Balanegra, por segregación del término municipal de Berja (Almería).

DECRETO 296/2007, de 11 de diciembre, por el que se desestima la iniciativa relativa a la creación del nuevo Municipio de La Barca de la Florida, por segregación del término municipal de Jerez de la Frontera (Cádiz).

DECRETO 286/2009, de 23 de junio, por el que se aprueba la constitución de la Entidad Local Autónoma de Ochavillo del Río, en el término municipal de Fuente Palmera, de la provincia de Córdoba, en ejecución de la Sentencia dictada el 3 de junio de 2008, por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

DECRETO 65/2011, de 28 de marzo, por el que se convocan elecciones a los órganos de Gobierno de las Entidades Locales Autónomas existentes en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

DECRETO del Ministerio de Gobernación de 23 de diciembre de 1870, sobre señalamiento de los términos municipales.

DICTAMEN 478/2009, sobre consulta facultativa relativa a la problemática que se suscita en los supuestos en los que difieren el deslinde oficial del término municipal y los límites del suelo clasificado por el planeamiento urbanístico general.

DOCUMENTACIÓN sobre informes y consultas de la Dirección General de Administración Local, Consejería de Gobernación y Justicia.

ESRI: *ArcGIS 9. Using ArcGIS Geostatistical Analyst*. United States of America. 2003.

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO: Plan General de Ordenación Urbana de Jerez. Ayuntamiento de Jerez. 1984.

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO: Revisión del Plan General Municipal de Ordenación del término de Jerez de la Frontera. Ayuntamiento de Jerez. 1995.

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO: Revisión adaptación del Plan General de Ordenación Urbanística de Jerez de la Frontera. Ayuntamiento de Jerez. 2009.

GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús: "La colonización de zonas regables. La Ley de 21 de Abril de 1949".

GRUPO DE DESARROLLO RURAL DE LA CAMPIÑA DE JEREZ: *Nueva Estrategia Rural de Jerez*. 2008.

GUTIÉRREZ MOLINA, José Luis: "Jerez rural: cien años de evolución (1870-1970)".

INFORME emitido por el Servicio de Régimen Jurídico de la Dirección General de Administración Local, relativo a la pregunta parlamentaria del Grupo Socialista acerca de la creación de la Entidad Local Autónoma de La Guijarrosa. 2006.

INFORME del Servicio de Régimen Jurídico de la Dirección General de Administración Local sobre ejecución de la Sentencia de 4 de abril de 2006, de la Sala de los Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en procedimiento judicial en el que figura como parte la EATIM de Algallarín. 2006.

INFORME del Servicio de Régimen Jurídico de la Dirección General de Administración Local, relativo a cuestiones sobre actualización de la asignación presupuestaria a una Entidad Local Autónoma. 2008.

INFORME sobre la solicitud de la entidad local de Balanegra relativa a la revisión de oficio del Decreto 82/2007, de 20 de marzo, por el que se inadmitió la solicitud de creación del municipio de Balanegra, por segregación del término municipal de Berja (Almería).

INFORME del Servicio de Régimen Jurídico de la Dirección General de Administración Local, sobre la normativa aplicable para la constitución de la Comisión Gestora de la Entidad Local Autónoma "Zahara de los Atunes". 2011.

INFORME del Servicio de Régimen Jurídico de la Dirección General de Administración Local de 16 de junio de 2011, sobre la iniciativa vecinal del núcleo poblacional de la Rábita, en el término municipal de Albuñol (Granada), relativa a su acceso a la condición de Entidad Local Autónoma. 2011.

INFORME-PROPUESTA de Orden por la que se deniega la realización de un nuevo deslinde entre los términos municipales de Chipiona y Rota, ambos en la provincia de Cádiz, en el área denominada "La Ballena".

INSTITUTO DE CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA: *Datos Espaciales de Andalucía para escalas intermedias*. Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio. 2009.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA: *Nomenclátor. Relación de Unidades poblacionales*. 2010.

JIMÉNEZ BLANCO, José Ignacio: *Privatización y apropiación de tierras municipales en la Baja Andalucía. Jerez de la Frontera 1750-1995*. Jerez, Biblioteca de Urbanismo y Cultura. 1996.

JUÁREZ SÁNCHEZ-RUBIO, Cipriano y CANALES MARTÍNEZ, Gregorio: "Colonización agraria y modelos de hábitat (siglos XVIII y XX)". Agricultura y Sociedad nº49. 1988.

JURADO ALMONTE, José Manuel y GARCÍA GÓMEZ, Antonio: "Inventario de la planificación sectorial y territorial en Andalucía". Sevilla, Revista de Estudios Andaluces Nº18. 1992.

LEY 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local.

LEY 11/1987, de 26 de diciembre, reguladora de las relaciones entre la Comunidad Autónoma de Andalucía y las Diputaciones Provinciales de su territorio.

LEY 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública.

LEY 7/1993, de 27 de julio, reguladora de la Demarcación Municipal de Andalucía.

LEY 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local.

LEY 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía.

LEY de Colonización y Distribución de la Propiedad de las Zonas Regables de 21 de Abril de 1949.

LEY ORGÁNICA 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

LEY ORGÁNICA 6/1981, de 30 de diciembre, Estatuto de Autonomía para Andalucía.

LOZANO SALADO, María Dolores: *Jerez a principios del siglo XIX: urbanismo y propiedad*. Jerez, Biblioteca de Urbanismo y Cultura. 1992.

MARTÍN GUTIÉRREZ, Emilio: *La identidad rural de Jerez de la Frontera: territorio y poblamiento durante la Baja Edad Media*. Cádiz, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz. 2003.

MARTÍN GUTIÉRREZ, Emilio: *La organización del paisaje rural durante la Baja Edad Media. El ejemplo de Jerez de la Frontera*. Cádiz, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz. 2004.

MEDINA CASTAÑO, Juan Alfonso: “El componente espacial del municipio y su administración a la luz de la potestad de autoorganización”. Sin publicar.

MONTAÑÉS PRIMICIA, Enrique: *Transformación agrícola y conflictividad campesina en Jerez de la Frontera (1880-1923)*. Jerez, Biblioteca de Urbanismo y Cultura. 1997.

MONTERO VÍTORES, Jesús: “El Ager Ceretanus y el poblamiento romano de la Campiña de Jerez”. Actas de las XV Jornadas de Historia de Jerez. Centro de Estudios Históricos Jerezanos.

ORDEN de 9 de junio de 1993, por la que se aprueban los límites territoriales de la entidad de ámbito territorial inferior al municipal de Tharsis, perteneciente al municipio de Alosno (Huelva).

ORDEN de 28 de julio de 1993, por la que se aprueban los límites territoriales de la Entidad de ámbito territorial inferior al Municipal de Torrenueva, perteneciente al Municipio de Motril (Granada).

ORDEN de 1 de diciembre de 1994, por la que se aprueban los límites territoriales y la separación patrimonial de la entidad de ámbito territorial inferior al municipio de Bácor-Olivar, perteneciente al municipio de Guadix (Granada).

ORDEN de 5 de junio de 1997, por la que se aprueban los límites territoriales y la separación patrimonial de la entidad de ámbito territorial inferior al municipio de la Zarza-Perrunal, perteneciente al municipio de Calañas (Huelva).

ORDEN de 13 de junio de 1997, por la que se regula el proceso de adaptación de las entidades de ámbito territorial inferior al municipio en entidades locales autónomas.

ORDEN de 19 de junio de 2008, por la que se acuerda la adaptación de la Entidad de Ámbito Territorial Inferior al Municipio de Játar, en el término municipal de Arenas del Rey (Granada), a la condición de Entidad Local Autónoma.

OSLÉ MUÑOZ, Julián: *Guadalquivir: una Historia en imágenes. Los años cincuenta y sesenta*. Servicio de Publicaciones Diputación de Cádiz. 1999.

PÉREZ PÉREZ, María del Milagro: “*Las Entidades Locales Autónomas en la Ley de Autonomía Local de Andalucía (LAULA)*”. El consultor de los Ayuntamientos. 2010.

PLAN General de Colonización aprobado por Decreto de 12 de Febrero de 1954.

PLAN de Ordenación del Territorio de Andalucía. Decreto 206/2006, de 28 de noviembre. Consejería de Obras Públicas y Transportes. 2006.

PLAN Cartográfico de Andalucía 2009-2012. Acuerdo del Consejo de Gobierno de 16 de septiembre. Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio. 2008.

REAL DECRETO 1690/1986, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales.

REAL DECRETO 2612/1996, de 20 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales aprobado por el Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio.

REAL DECRETO LEGISLATIVO 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.

REAL DECRETO 2697/1966, de 20 de octubre, sobre el régimen para la constitución y funcionamiento de los pueblos contruidos por el Instituto Nacional de Colonización como Entidades municipales.

RECURSO 727-2005 de la Entidad Local de Balanegra.

RESOLUCIÓN de 9 de abril de 1997, de la Subsecretaría, por la que se dispone la publicación de la Resolución de 1 de abril de la Presidenta del Instituto Nacional de Estadística y del Director general de Cooperación Territorial, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión y revisión del padrón municipal.

SORIA MEDINA, Enrique (Coordinador): *Nomenclátor de Andalucía 1860*. Sevilla, Secretariado de Publicaciones Universidad de Sevilla. 2010.

SISTEMA CARTOGRÁFICO DE ANDALUCÍA: *Ortofotografía Color de Andalucía, cuadrante suroeste*. 2010.

SUÁREZ JAPÓN, Juan Manuel: *Frontera, territorio y poblamiento en la provincia de Cádiz*. Cádiz, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz. 1991.

SUÁREZ JAPÓN, Juan Manuel: "Algar, un ejemplo de villa planificada en la sierra de Cádiz". Madrid. Anales de Geografía de la Universidad Complutense. 1987.

TEIJEIRO LILLO, María Eugenia: "Datos para el estudio de un fenómeno de descentralización administrativa: los poblados de colonización como entidades locales menores". Jerez. I Congreso de Ciencia Regional de Andalucía: Andalucía en el umbral del siglo XXI.

VEGA GEÁN, Eugenio José y GARCÍA ROMERO, Francisco Antonio: "Cerret revisitado". Actas de las XV Jornadas de Historia de Jerez. Centro de Estudios Históricos Jerezanos.

VENTURA FERNÁNDEZ, Jesús: "Tensiones en el poblamiento andaluz y problemas de administración territorial". Revista de Estudios Andaluces. Núm. 16, págs. 93 a 113. 1991.

VERES FERRER, Ernesto Jesús: "Ordenación de secciones censales según un indicador de pobreza". Estadística Española. Vol. 41, Núm. 144, págs. 169 a 201. 1999.

VV.AA.: *Colonos y colonizaciones en la provincia de Cádiz. Los pueblos de Jerez*. Servicio de publicaciones Diputación de Cádiz. 2005.

VV.AA.: *Evolución de los paisajes y ordenación del territorio en Andalucía occidental. Marco del Viñedo de Jerez*. Casa Velázquez y Diputación de Cádiz. 1986.

VV.AA.: *Las zonas rurales en España. Un diagnóstico desde la perspectiva de las desigualdades territoriales y los cambios sociales y económicos*. Madrid, Cáritas Española y Fundación FOESSA. 2004.

VV.AA. (coordinador Antonio Moreno Jiménez): *Sistemas y análisis de la información geográfica. Manual de autoaprendizaje con ArcGIS*. Madrid, RA-MA Editorial. 2005.

ZOIDO NARANJO, Florencio: "Estudio de la tierra de colonización y sus explotaciones en la zona regable del Guadalquivir. Cádiz", en Romero Rodríguez y Zoido Naranjo *Colonización agraria en Andalucía*. Sevilla. 1977.

10 Anexos.

ANEXO 1. DICCIONARIO GEOGRÁFICO-ESTADÍSTICO-HISTÓRICO DE ESPAÑA Y SUS POSESIONES DE ULTRAMAR (1845-1850).

Elementos de poblamiento para el municipio de Jerez de la Frontera.

ENTIDAD DE POBLAMIENTO	TIPOLOGÍA
Abiertas de Caulina	Pago de viñas
Abrahanejo o Abrajanejo	Cortijo
Aciagos (Los) o Garciagos	Coto y dehesa particular
Alamillo (El)	Dehesa particular
Álamos (Los)	Dehesa
Albardén	Cortijo
Albina de las Flores	Dehesa
Alcántara	Despoblado y pago de viñas (antes Aldea)
Alcaría	Dehesa
Alcázar (Sierra del)	Sierra y dehesa
Alcornocalejo	Dehesa y laguna
Algarres	Cortijo
Algarrobillo	Cortijo
Aljocén o Alhocén	Cortijo
Alíjar	Cortijo
Almendralejo	Pago de viñas
Almocadén	Cortijo
Amarguillo	Pago de viñas
Anaferas (Las)	Pago de viñas
Añina	Despoblado y pago de viñas
Arana o Cápita	Cortijo
Arenosa (La)	Dehesa
Arquillos	Despoblado y cortijo
Arroyo del Membrillar	Pago de viñas
Arroyo-Dulce	Cortijo
Asta (Mesa de)	Despoblado
Atalaya (La)	Dehesa
Ballesteros (Los)	Dehesa
Ballesteros (Los)	Cortijo

ENTIDAD DE POBLAMIENTO	TIPOLOGÍA
Baños (Los)	Dehesa
Barbaina	Pago de viñas
Barja	Cortijo
Barreros (Los)	Pago de viñas
Barroquejo	Dehesa
Barrosillo (El)	Cortijo
Barroso (El)	Cortijo
Barrueco (El)	Dehesa
Basurta (La)	Cortijo
Berlanga	Dehesa
Berlanguilla	Dehesa
Bernala (La)	Cortijo
Bocanegra	Dehesa
Bolanos	Despoblado y dehesa
Bollo (El)	Dehesa
Boquete del Valle	Dehesa
Buenavista	Dehesa
Bugeos	Cortijo
Bujón	Cortijo
Burugena	Despoblado
Cabeza de Alcaide	Cortijo
Cabeza de Santa María	Cortijo
Cabeza de las Ovejas	Dehesa
Cabezadas de Caulina	Cortijo
Cádiz (Mesa de)	Despoblado
Cantero (Venta del)	Venta
Cantina	Despoblado
Capirete	Despoblado
Cárdenas	Despoblado
Cartuja	Monasterio
Casa-Alta	Cortijo
Casa-Blanca	Cortijo
Casa Blanquilla	Cortijo
Casarejo	Despoblado
Casas del Cuervo	Venta
Cera o Torre-Cera	Despoblado
Compañía (Cortijo de la)	Cortijo
Conejeras (Cortijo de la)	Cortijo
Cortijo de la Sierra	Cortijo
Coto (El)	Cortijo
Crespellina	Cortijo y despoblado (antes Aldea)
Cuartillos de Plata	Cortijo
Cuervo-Alto	Cortijo
Cuervo-Bajo	Cortijo

ENTIDAD DE POBLAMIENTO	TIPOLOGÍA
Chorreadero	Cortijo
Dehesa-Boyal	Cortijo
Efe	Despoblado
Espartinas	Cortijo, despoblado y pago de viñas
Esparragal	Despoblado
Fantasía (La)	Despoblado
Fuente del Rey	Cortijo
Fuente Imbro	Cortijo y coto
Gibalbín	Despoblado
Gigonza	Casa y baños minerales
Gordilla	Dehesa
Gradera (La)	Cortijo
Graderuela (La)	Cortijo
Granja (La)	Quinta de recreo
Isletes	Despoblado
Isletes (Los)	Coto
Jarda	Dehesa
Jardilla	Dehesa
Lobatón	Dehesa
Olivar de las Monjas	Dehesa

ANEXO 2. NOMENCLÁTOR DE ANDALUCÍA DE 1860.

POBLACIONES	TIPOLOGÍA	DISTANCIA	EDIFICIOS, VIVIENDAS, ALBERGUES HABITADOS		EDIFICIOS		ALBERGUES, BARRACAS, CUEVAS, CHOZAS	TOTAL
			SIEMPRE	TEMPORAL	1 PISO	2 PISOS		
Abadin (El)	Caserío de huertas y dehesa	-	3	0	2	0	1	3
Aceñuela	Casa de dehesa	13,9	1	0	1	0	0	1
Aduza	Casa de dehesa	16,7	1	1	1	0	1	2
Aína (La)	Ermita y casas de dehesa	-	2	0	1	1	1	3
Alamillo (El)	Caserío	-	5	0	1		4	6
Álamo	Caserío de viña	5,5	6	0	2	1	3	6
Alcántara	Cortijo (caserío de labor)	11,1	7	0	3	2	2	7
Alcantarilla de los Alunados	Caserío de viñas	0,6	1	10	7	0	5	12
Alcaría (La)	Caserío de dehesa	44,5	4	0	1	0	3	4
Alcornocalejo (El)	Caserío de dehesa	23,6	16	0	4	0	12	16
Alcubilla	Casa	0,3	0	1	2	0	0	2
Algama	Caserío de labor	5,5	3	0	1	0	2	3
Algar	Caserío de labor y de dehesa	50,1	1	3	1	0	3	4
Algarbe	Cortijo (caserío de labor)	11,1	7	0	2	0	5	7
Algarrobilló (El)	Cortijos (caserío de labor)	-	5	0	2	1	2	5
Alijar	Cortijo (casa de labor)	11,1	4	0	0	1	3	4
Almendro (El)	Caserío de huerta	0,6	2	0	1	0	1	2
Almocaden (El)	Caserío de labor	5,5	9	0	4	2	3	9
Amarguillo	Casa de dehesa	15,3	2	0	1	0	1	2
Añina	Caserío de viñas	4,8	32	15	28	14	13	55
Arboledilla (La)	Caserío de viñas	0,3	4	2	2	0	4	6
Arenosa (La)	Casa de dehesa	25	1	0	1	0	1	2
Armáio	Casa de labor	5,5	1	0	1	0	0	1
Arquillos (Los)	Cortijo (casas de labor)	25	3	0	1	1	1	3
Arroyo del Membrillar	Caserío de viñas	2,7	10	40	21	1	28	50
Arroyodulce	Rancho (casa de labor)	11,1	2	0	1	0	1	2
Atalaya (La)	Casa de dehesa	50,1	3	0	1	0	2	3
Baladejo (El)	Caserío de labor	5,5	3	1	3	0	1	4
Ballesteros	Cortijos (caserío de labor)	-	6	2	2	2	4	8
Barbadillo	Caserío de viña	2,7	10	8	12	1	5	18
Barbaína	Caserío de viña	4,1	61	9	34	30	7	71
Barja	Cortijo (casas de labor)	16,7	5	0	2	0	3	5
Barroquejo (El)	Casa de dehesa	25	1	0	1	0	0	1
Barrosillo	Cortijo (casa de labor)	5,5	2	0	0	1	1	2
Barroso (El)	Cortijo (casas de labor)	5,5	3	0	1	1	1	3
Basurta (La)	Cortijo (casa de labor)	16,7	1	0	1	0	0	1
Beato (El)	Casa de labor	13,9	1	0	1	0	0	1
Benahú	Casa de dehesa	61,2	1	1	1	0	1	2
Berlanga	Casa de dehesa	19,5	1	1	1	0	1	2
Berlanguilla	Casa de dehesa	18,1	2	0	1	0	1	2
Bernada (La)	Cortijo (casas de labor)	25	3	0	1	1	1	3

Desconcentración y descentralización administrativa en Andalucía. Criterios para la delimitación de unidades territoriales inferiores al municipio. Aplicación en el término de Jerez de la Frontera.

POBLACIONES	TIPOLOGÍA	DISTANCIA	EDIFICIOS, VIVIENDAS, ALBERGUES HABITADOS		EDIFICIOS		ALBERGUES, BARRACAS, CUEVAS, CHOZAS	TOTAL
			SIEMPRE	TEMPORAL	1 PISO	2 PISOS		
Bizarrona (La)	Rancho (casas de labor)	4,8	2	0	2	0	0	2
Blanquito	Cortijo (casas de labor)	22,2	4	19	2	1	20	23
Bogás	Caserío de olivar y de viñas	1,3	3	25	11	0	17	28
Bollo (El)	Caserío de dehesa	39	5	0	3	0	2	5
Bonaina, ó Cañada del Carrillo	Caserío de viñas	4,8	3	5	3	0	5	8
Boquete del Valle	Casa de dehesa	30,6	2	0	1	0	1	2
Borrego	Ventorrillo	5,5	0	1	1	0	0	1
Buelos	Cortijo (casas de labor)	16,7	4	0	2	0	2	4
Buenavista	Caserío de labor y olivar	5,5	2	1	3	0	0	3
Bujéos (Los)	Rancho (casa de labor)	6,9	2	0	1	0	1	2
Burujena	Rancho (caseríos de labor y de viña)	-	9	0	3	0	6	9
Caballerías (Las)	Casa de dehesa	8,3	2	1	1	0	2	3
Cabezadas de Caulina	Cortijo (casas de labor)	16,7	3	0	2	1	0	3
Cabeza de la Aceña	Rancho (caserío de labor)	4,8	13	1	2	0	12	14
Cabeza de Santa María	Cortijo (casas de labor)	22,2	5	0	2	0	3	5
Cabracoja	Caserío de huertas	2,7	3	0	1	0	2	3
Calderera (La)	Caserío de labor y de viña	2,7	2	3	1	1	3	5
Caleras	Casa de huertas	16,7	2	0	1	0	1	2
Canalejas	Caserío de viñas	2,7	22	9	17	8	6	31
Canchal	Rancho (casa de labor)	27,8	2	0	1	0	1	2
Cándalo (El)	Casa de dehesa	61,2	1	0	1	0	0	1
Cantarranas	Caserío de viñas	4,1	10	2	7	0	5	12
Cantero	Venta	25	1	0	1	0	0	1
Cañada del Carrillo	Caserío de labor	4,1	6	1	4	1	2	7
Cañada del León	Casa de dehesa y coto	13,9	2	0	1	0	1	2
Cañada de los Muertos	Rancho (caserío de labor)	22,2	3	0	1	1	1	3
Caños (Los)	Casa de dehesa	41,7	1	0	1	0	0	1
Cañuelo (El)	Casa de dehesa	27,8	1	1	1	0	1	2
Capellanía del Mimbral	Casa de labor	39	2	0	1	0	1	2
Capirétes	Caserío de viñas	3,4	3	7	4	0	6	10
Capitas	Cortijo (caserío de labor)	13,9	5	0	1	1	3	5
Caribe (El)	Caserío de viñas	4,8	7	0	5	0	2	7
Caridad (La)	Casa de huertas	1,3	2	0	0	1	1	2
Cartuja (La)	Convento y molinos harineros	-	2	1	3	2	0	5
Carrascal	Caseríos de labor y de viñas	-	64	20	53	19	32	104
Carrascal de Cabeza	Cortijo (casas de labor)	25	2	0	2	0	0	2
Carrizosa, ó Pinogordo	Cortijo (caserío de labor)	4,8	17	0	1	1	15	17
Casaalta	Cortijo (caserío de labor)	8,3	4	0	0	2	2	4
Casablanca	Cortijo (caserío de labor)	13,9	6		3	2	2	7
Casablanquilla	Cortijo (casa de labor)	11,1	1	0	1	0	0	1
Casagüía	Rancho (casa de labor)	0,5	1	1	1	0	1	2
Casaréjos	Cortijada (grupo de cortijos)	11,1	4	0	1	1	2	4
Casa-Várgas	Cortijo (casa de labor)	16,7	1	0	1	0	0	1

POBLACIONES	TIPOLOGÍA	DISTANCIA	EDIFICIOS, VIVIENDAS, ALBERGUES HABITADOS		EDIFICIOS		ALBERGUES, BARRACAS, CUEVAS, CHOZAS	TOTAL
			SIEMPRE	TEMPORAL	1 PISO	2 PISOS		
Caserío de Juan Pedro Vela	Caserío de labor y de viñas	0,6	7	12	4	0	17	21
Castaña (El)	Cortijo (caserío de labor)	18,1	5	0	2	0	3	5
Castillejos (Los)	Casa de dehesa	52,9	1	1	1	0	1	2
Catalana (La)	Caserío de labor y de viña	5,5	5	9	1	0	13	14
Caulina	Albergues	11,1	4	0		0	4	4
Cementerio (El)	Casa y capilla	0,4	1	0	2	0	0	2
Cerfate, ó Amarguillo	Caserío de viñas	4,8	4	2	4	0	2	6
Cerro de la Horca	Caserío de labor y de dehesa	39	4	0	2	0	2	4
Cerro del Pelado	Caserío de viñas	4,8	5	5	2	0	8	10
Cerro de Santiago	Caserío de viñas	4,1	24	1	13	6	6	25
Cerrosanto	Casa de labor	20,8	1	0	1	0	0	1
Cestelo	Cortijo (casas de labor)	8,3	2	0	2	0	0	2
Clérigo	Casas de viñas	2,7	2	0	1	1	0	2
Colores	Caserío de viñas	1,3	6	0	3	0	3	6
Compañía (La)	Cortijada (grupo de cortijos)	11,1	4	4	2	1	6	9
Conde (El)	Casa de huerta	1,3	1	0	1	0	0	1
Conejeras (Las)	Cortijo (casa de labor)	8,3	3	0	1	0	2	3
Corchadillo, y Huertezuelos	Albergues	52,9	1	1	0	0	2	2
Corchuela	Caserío de viñas	2,7	28	8	19	9	8	38
Coronela (La)	Casa de dehesa	30,6	1	0	1	0	0	1
Cortadados, ó Cerro de Obregón	Caserío de viñas	4,8	6	0	5	0	1	6
Crespellina	Cortijo (caserío de labor)	8,3	5	0	1	1	3	5
Cruzcolorada	Caserío de viñas	1,3	5	2	2	0	5	7
Cuadrado	Caserío de viñas	8,3	3	0	2	1	0	3
Cuadros	Caserío de labor y de viña	2,7	5	0	3	0	2	5
Cuartillos (Los)	Caseríos de olivar y de viñas	-	47	49	27	4	70	101
Cuartillos de Plata	Cortijo (casa de labor)	22,2	6	0	1	0	5	6
Cuatronórias (Las)	Casa de recreo	2	1	0	1	0	0	1
Cuchara (La)	Caserío de viña y venta	2	5	1	3	0	3	6
Cuellar	Casa de dehesa	16,7	2	0	1	0	1	2
Cuervo (El)	Cortijo (casas de labor)	16,7	6	0	3	0	3	6
Cuevas (Las)	Casa de dehesa	13,9	2	0	1	0	1	2
Cuevas de las Palomas	Caserío de dehesa	52,9	6	0	3	0	3	6
Culebra (La)	Casa de viña	5,5	2	0	1	0	1	2
Cuquillos (Los)	Casa de labor	41,7	1	0	1	0	0	1
Chamorro (El)	Cortijo (caserío de labor)	16,7	5	0	3	0	2	5
Chipipe	Caserío de dehesa	16,7	3	0	1	1	1	3
Chorreadero (El)	Cortijo (caserío de labor)	26,4	4	0	3	0	1	4
Chozas de labor	Albergues	-	28	2		0	30	30
Chozas de pastores	Albergues	-	48	12		0	60	60
Dehesaboyal	Cortijo (casas de labor)	22,2	3	0	2	1	0	3
Dehesilla (La)	Casa de dehesa	26,4	1	0	1	0	0	1
Delicias (Las)	Caserío	0,3	1	1	1	1	1	3
Don Nuño	Casa de olivar	0,6	1	0	1	0	0	1

Desconcentración y descentralización administrativa en Andalucía. Criterios para la delimitación de unidades territoriales inferiores al municipio. Aplicación en el término de Jerez de la Frontera.

POBLACIONES	TIPOLOGÍA	DISTANCIA	EDIFICIOS, VIVIENDAS, ALBERGUES HABITADOS		EDIFICIOS		ALBERGUES, BARRACAS, CUEVAS, CHOZAS	TOTAL
			SIEMPRE	TEMPORAL	1 PISO	2 PISOS		
Doña Benita	Cortijo (caserío de labor)	22,2	3	0	2	1	0	3
Doña Inés	Casa de labor	4,1	3	0	1	0	2	3
Dos Hermanas	Casa de dehesa	39	2	1	1	0	2	3
Ducha	Caserío de labor y de viña	8,3	17	1	8	7	3	18
Duende (El)	Caseríos de huertas y olivar	-	4	0	3	0	1	4
Duque (El)	Casa de olivar	2,7	1	0		1	0	1
Egido (El)	Caserío del ferro-carril	0,2	28	0	17	0	18	35
Era de Morales	Caserío de viñas	0,1	2	6	1	0	7	8
Escribana (La)	Casas de labor	5,5	2	0	1	1	0	2
Espantaperros	Casa de huertas	2,7	1	0	1	0	0	1
Espartinas	Caseríos de labor y viña	-	23	0	7	4	12	23
Esperanza (La)	Caserío de viñas y fábrica de gas	-	10	1	15	1	1	17
Espinola	Casa de dehesa	16,7	2	0	1	0	1	2
Fantasía (La)	Casa de dehesa	61,2	1	1		1	1	2
Flamenco (El)	Caserío de viñas	1,3	1	7	2	0	6	8
Florida (La)	Caseríos de labor y venta	-	8	1	3	4	2	9
Florinda	Casa de labor	-	3	0	1	0	2	3
Frías	Caserío de dehesa	11,1	6	0	2	0	4	6
Fuentebermeja	Cortijo (casa de labor)	16,7	3	0	1	0	2	3
Fuente de la Cierva	Casa de dehesa	39	3	0	1	0	2	3
Fuente del Rey	Cortijo (caserío de labor)	22,2	6	0	1	1	4	6
Fuente Imbrós	Cortijo (casas de labor)	37,6	2	0	1	1	0	2
Galana (La)	Casa de huerta	2,7	1	0	1	0	0	1
Gallega (La)	Caserío de labor y viña	5,5	6	0	4	2	0	6
Gallego (El)	Venta	4,1	1	0	1	0	0	1
Gallegos, ó Caserío del Viento	Casas de huertas	4,1	2	0		2	0	2
Gallo (El)	Casa de labor	25	1	0	1	0	0	1
Garcíagos (Los)	Caserío de labor y de dehesas	8,3	7	0	3	1	3	7
Garcisobaco	Caserío de dehesa	50,1	4	0	1		3	4
Garganta- Millán	Caserío de dehesa	65,4	3	0		1	2	3
Gasniz bajo	Caserío de dehesa	55,7	1	2	0	0	3	3
Geraldino	Caserío de labor y de olivar	1,3	2	3	0	1	3	5
Gibalcon	Caserío de viñas	2,7	4	1	4	1	0	5
Gibaldín	Torreón antiguo	22,2		0	1		0	1
Gigonza	Caserío	26,4	5	2	4	1	2	7
Gradera (La)	Caserío de labor	11,1	3	0	1	1	1	3
Grederuela (La)	Cortijo (casas de labor)	8,3	2	0	1	1	1	3
Guillena (La)	Cortijo (casa de labor)	19,5	6	0	1	0	5	6
Guzman	Casas de labor	22,2	2	0	1	1	0	2
Hatilloviejo	Casa de dehesa	44,5	3	0	0	1	2	3
Hato de la Carne (El)	Caserío de dehesa	5,5	3	0	2	1	0	3
Haza de Cartuja	Casa de labor	11,1	1	0	1	0	0	1
Herrador, ó Alijarillo	Cortijo (caserío de labor)	8,3	5	0	3	0	2	5

POBLACIONES	TIPOLOGÍA	DISTANCIA	EDIFICIOS, VIVIENDAS, ALBERGUES HABITADOS		EDIFICIOS		ALBERGUES, BARRACAS, CUEVAS, CHOZAS	TOTAL
			SIEMPRE	TEMPORAL	1 PISO	2 PISOS		
Hortela (La)	Molino harinero	50,1	3	0	3	1	0	4
Hoyas de Cabaña (Las)	Caserío de labor	25	6	0	2	0	5	7
Huertapintada	Caserío de huerta	0,2	8	0	4	0	4	8
Humeruéllos	Casa de dehesa	11,1	1	0	1	0	2	3
Isleta de la Cartuja (La)	Casa de olivar	5,5	1	0	0	1	0	1
Islétes (Los)	Cortijada (grupo de cortijos)	25	6	0	4	2	0	6
Jara (La)	Cortijo (casas de labor)	10,4	3	0	2	1	0	3
Jarda (La)	Caserío de dehesa	51,5	11	1	2	0	10	12
Jardilla (La)	Caserío de dehesa	57,1	3	1	1	0	3	4
Jareta (La)	Cortijo (casas de labor)	10,4		2	2	0	0	2
Jarilla (La)	Cortijo (casas de labor)	10,4	4	0	2	0	2	4
Jerez de la Frontera	Ciudad	-	2881	26	1193	1653	0	3478
Juncal (El)	Caserío de dehesa y huerto	-	4	0	1	0	4	5
Junquera	Casas de huertas	1,3	2	0	0	2	0	2
Laja (La)	Casa de labor	22,2	2	0	1	0	1	2
Laratrápos	Casa de labor	39	1	0	1	0	0	1
Lárgalo (El)	Caserío de viñas	2,7	6	18	15	2	7	24
Leyes	Casa de labor	18,1	2	0	1	0	1	2
Loma de la Azuela	Cortijo (casas de labor)	16,7	2	1	1	1	1	3
Loma de la Flores, ó Dehesa de los Llanos	Caserío de dehesa	44,5	11	0	1	0	10	11
Loma de la Flores, ó Dehesa de Pajarete	Casa de dehesa	41,7	1	0	1	0	0	1
Lomo del Orégano	Cortijo (caserío de labor)	22,2	5	0	2	1	2	5
Lomopardo	Cortijo (casas de labor)	6,9	2	0	1	1	0	2
Llanos del Pinar (Los)	Casa de labor	30,6	1	0	0	1	0	1
Llanos del Puente (Los)	Casa de labor	6,9	1	0	0	1	0	1
Macharnudo (Los)	Caseríos de viña	-	85	13	54	13	35	102
Majada alta (La)	Casa de labor	6,9	1	0	1	0	0	1
Majadas (Las)	Caserío de dehesa	12,5	4	1	1	0	4	5
Majarrazotan	Caserío de dehesa	0,6	7	0	2	2	4	8
Majarromaque	Cortijo (casa de labor)	16,7	3	0	1	0	2	3
Majuelo de Haurie (El)	Caserío de viñas	5,5	5	0	4	4	0	8
Malabrigo	Caserío de labor	25	10	0	0	6	4	10
Malduerme	Caserío de labor	25	9	0	4	0	5	9
Manjon	Caserío de viñas	1,3	4	5	3	0	7	10
Manzanillos (Los)	Casa de labor	4,1	2	0	1	0	1	2
Maricuerda	Casa de labor	2,7	2	0	1	0	1	2
Mariscala (La)	Cortijo (caserío de labor)	8,3	4	0	1	1	2	4
Maritata	Cortijo (caserío de labor)	13,9	6	0	2	1	3	6
Matacardillo	Casa de viñas	1,3	1	1	1	0	1	2
Matanga	Casa de labor	5,5	2	0	1	0	1	2
Matanza	Caseríos	-	4	0	2	1	1	4
Matanzuela	Cortijo (casa de labor)	22,2	3	0	1	0	2	3
Merced (La)	Casas de huerta	0,6	2	0	2	0	0	2
Mercedes (Las)	Casa de labor	8,3	2	0	1	0	1	2

Desconcentración y descentralización administrativa en Andalucía. Criterios para la delimitación de unidades territoriales inferiores al municipio. Aplicación en el término de Jerez de la Frontera.

POBLACIONES	TIPOLOGÍA	DISTANCIA	EDIFICIOS, VIVIENDAS, ALBERGUES HABITADOS		EDIFICIOS		ALBERGUES, BARRACAS, CUEVAS, CHOZAS	TOTAL
			SIEMPRE	TEMPORAL	1 PISO	2 PISOS		
Mesa de Asta (La)	Caserío de labor	8,3	14	3	1	0	19	20
Mesa de Boláños (La)	Casa de dehesa	11,1	3	0	1	0	2	3
Mesa de Cádiz (La)	Casa de labores	8,3	2	0	1	0	1	2
Mesa de doña Rosa (La)	Caserío	4,1	9	0	1	1	7	9
Mesa de Santiago (La)	Cortijo (caserío de labor)	16,7	4	0	3	0	1	4
Mimbral (El)	Ermita y venta	39	2	0	1	2	0	3
Mojonblanco (El)	Cortijo (casas de labor)	12,5	3	0	2	0	1	3
Montana (La)	Caserío de labor	6,9	17		7	6	4	17
Montealegre	Caserío de labor y de viñas	-	12	64	28	4	44	76
Montecorto	Cortijada (grupo de cortijos)	11,1	10	0	7	0	3	10
Montegil	Caserío y torre telegráfica	-	7	1	3	0	5	8
Montegilillo	Cortijo (caserío de labor)	12,5	4	0	1	1	2	4
Montenegro	Casa de olivar	0,6	2	0	1	0	1	2
Morla	Casa de dehesa	8,3	2	0	1	0	1	2
Norieta (La)	Caserío de labor y viñas	-	7	4	5	1	7	13
Nueva, ó Bóveda	Casa de huerta	2,7	1	0	1	0	0	1
Olivillo (El)	Cortijo (casas de labor)	8,3	3	0	1	1	1	3
Orbaneja	Caserío de viñas	4,8	10	2	8	4	1	13
Pachecas (Las)	Cortijo (casa de labor)	11,1	3	0	1	0	2	3
Padilla, ó Carrasco	Cortijo (casa de labor)	19,5	1	0	1	0	0	1
Pajarete	Cortijada (grupo de cortijos)	-	11	0	1	2	8	11
Palmar de la Trinidad	Caserío de labor	25	2	0	3	0	0	3
Palmetin	Caserío de labor y de dehesa	39	14	2	7	0	9	16
Palomar (El)	Cortijo (caserío de labor)	-	8	0	5	0	3	8
Palomar de Zurita	Casas de dehesa	13,9	3	0	2	0	1	3
Palomas (Las)	Venta	4,1	1	0	1	0	0	1
Panadero (El)	Caserío de labor	8,3	3	0	2	1	0	3
Panés	Casa de olivar	11,1	2	0	1	0	1	2
Pantanar (El)	Caserío de viñas	4,8	1	5	3	0	3	6
Paquete (El)	Hacienda (caserío de recreo)	1,3	4	0	2	1	1	4
Parada del Valle	Venta	30,6	1	0	1	0	0	1
Paraíso (El)	Venta	0,6	2	0	1	0	1	2
Parpalana	Caserío de labor y de viñas	5,5	16	4	13	2	5	20
Parrilla (La)	Cortijo (casas de labor)	25	2	0	1	1	0	2
Pasada del Rayo	Casa de labor	22,2	1	0	1	0	0	1
Peliron	Caserío de viñas	0,6		3	3	0	0	3
Peñas (Las)	Casa de labor	16,7		1	1	0	0	1
Peñuela (La)	Cortijo (caserío de labor)	13,9	5	1	3	1	2	6
Peral del Cangrejo (El)	Caserío de viñas	0,6	6	1	5	2	0	7
Percebá	Caserío de viñas	2,7	7	7	10	0	4	14
Peréa	Caserío de labor	13,9	4	0	2	0	2	4
Peruela (La)	Cortijo (casa de labor)	30,6	1	0	1	0	0	1
Picado (El)	Cortijada (grupo de cortijos)	50,1	3	2	3	0	2	5

POBLACIONES	TIPOLOGÍA	DISTANCIA	EDIFICIOS, VIVIENDAS, ALBERGUES HABITADOS		EDIFICIOS		ALBERGUES, BARRACAS, CUEVAS, CHOZAS	TOTAL
			SIEMPRE	TEMPORAL	1 PISO	2 PISOS		
Picadueñas	Caserío de viñas	0,4	14	6	6	3	11	20
Pié de Rey	Casa de labor	1,3	2	0	1	0	1	2
Piletas (Las)	Cortijo (casa de labor)	19,5	2	0	1	0	1	2
Pinar (El)	Casa de huerta	4,1	1	0	1	0	0	1
Pinar de Brianda (El)	Caserío de viñas	4,1	6	8	6	2	7	15
Pino (El)	Cortijo (caserío de labor)	5,5	4	0	2	0	2	4
Plantalina	Caserío de viñas	5,5	2	2	4	0	0	4
Plata	Cortijo (caserío de labor)	22,2	5	0	3	1	1	5
Plaza de Toros	Casa de la plaza de toros	0,3	1	0	1	0	0	2
Pocillos (Los)	Casas de huerta	0,6	2	0	1	1	0	2
Polos (Los)	Casas de viñas	6,9	1	1	2	0	0	2
Pozo de los Llanos	Caserío de dehesa	41,7	3	0	2	0	1	3
Pozo del Rey	Casa	0,6	1	0	0	1	0	1
Pozo de Ramos	Caserío de huertas	0,5	3	0	1	1	1	3
Pozonuevo	Caserío de viñas	4,1	3	0	3	0	0	3
Pozuélas (Las)	Cortijada (grupo de cortijos)	8,3	8	0	3	2	3	8
Prados (Los)	Cortijo (caserío de labor)	13,9	5	0	2	1	2	5
Prúnes	Caserío de labor	8,3	2	0	1	0	1	2
Puerto (El)	Casa de labor	6,9	1	0	1	0	0	1
Puerto del Higueron	Casa de dehesa	37,6	1	0	1	0	0	1
Puertoescondido	Caserío de labor y viñas	4,8	6	0	4	0	2	6
Puertofrontino	Caserío de dehesa	44,5	3	4	3	0	4	7
Puertolucero	Casa de caleras	14,1		2	1	0	1	2
Quinientas (Las)	Caserío de dehesa y olivar	11,1	6	0	3	1	2	6
Rábía (La)	Caserío de labor	0,6	5	0	1	0	4	5
Raboatun (El)	Caserío de viñas	1,3	5	15	8	0	12	20
Rajamancera	Albergue de dehesa	16,7	1	0	0	0	1	1
Rancho de Juan Pedro Vela	Caserío de viña	0,6	7	12	4	0	17	21
Rendona (La)	Cortijo (casas de labor)	25	2	0	2	0	0	2
Resille	Casas de huertas	0,3	2	0	1	1	0	2
Río Viejo (El)	Casa de labor	4,8	1	0	1	0	0	1
Rivilla	Caserío de dehesa	13,9	3	0	1	0	2	3
Rizo	Casa de olivar	11,1	1	0	1	0	0	1
Róa-la-Bota	Cortijo (casas de labor)	15,3	3	0	1	1	1	3
Rodadero	Caserío de dehesa	55,7	2	8	1	0	9	10
Rogitan	Cortijo (caserío de labor)	51,5	1	3	0	1	3	4
Rogitanillo	Cortijo (casa de labor)	47,3	1	0	0	1	0	1
Romanina	Cortijada (grupo de cortijos)	18,1	8	0	4	2	2	8
Romanito	Cortijo y caserío de olivar	-	5	0	2	1	2	5
Romera (La)	Cortijo (caserío de labor)	16,7	7	0	1	0	6	7
Rosario (El)	Cortijo (casa de labor)	9,7	1	0	1	0	0	1
Ruí-Díaz	Caserío de viñas	4,1	3	1	4	0	0	4
Salinilla	Caserío de labor y de viñas	-	6	0	3	2	1	6
Salto del Cielo (El)	Caserío de dehesas	11,1	5	0	0	1	4	5

Desconcentración y descentralización administrativa en Andalucía. Criterios para la delimitación de unidades territoriales inferiores al municipio. Aplicación en el término de Jerez de la Frontera.

POBLACIONES	TIPOLOGÍA	DISTANCIA	EDIFICIOS, VIVIENDAS, ALBERGUES HABITADOS		EDIFICIOS		ALBERGUES, BARRACAS, CUEVAS, CHOZAS	TOTAL
			SIEMPRE	TEMPORAL	1 PISO	2 PISOS		
San Benito	Caserío de huertas y de viñas	0,6	5	0	4	1	0	5
San Cristóbal	Caserío de viñas y de canteras	5,5	8	9	7	0	11	18
Sangarriana	Cortijo (caserío de labor)	11,1	5	0	0	1	4	5
San José	Caserío de viñas	1,3	14	10	10	1	13	24
San Julián	Caserío de viñas	5,5	30	1	14	8	11	33
Sante Fé	Caserío de viñas	2,7	3	1	3	1	0	4
San Telmo	Caserío	0,5	2	0	1	0	2	3
Santo Domingo	Cortijo y caserío de dehesa	-	7	0	1	1	5	7
Segullo (El)	Caserío de labor y viñas	2,7	1	8	5	0	4	9
Sepúlveda	Casa de dehesa	5,5	2	0	1	0	1	2
Serrana (La)	Caserío de viñas	2,7	1	3	1	0	3	4
Sierra (La)	Cortijo (caserío de labor)	20,8	4	0	0	1	3	4
Silla (La)	Casa de labor	19,5	0	0	1	0	0	1
Soledad (La)	Caserío de viñas	6,9	4	1	3	2	0	5
Solés (Los)	Caserío de viñas	2,7	27	20	33	2	12	47
Sotillos (Los)	Cortijada (grupo de cortijos)	22,2	7	0	3	1	3	7
Suara (La)	Casa de dehesa	19,5	1	0	0	1	0	1
Tabajete	Cortijo (caserío de labor)	6,9	7	0	1	1	5	7
Tablas (Las)	Caserío de labor	39	1	3	4	0	0	4
Tapa (La)	Caserío de labor y de dehesa	-	3	0	0	1	2	3
Taramal (El)	Caserío de labor	39	3	0	3	0	0	3
Teja (La)	Casa	1,3	1	0	1	0	0	1
Tempul, ó Valle del Tempul	Caserío	44,5	8	1	5	3	5	13
Tinaonquemado	Caserío de dehesa	55,7	6	1	1	0	6	7
Tizon (El)	Caserío de viñas	5,5	19	3	5	3	14	22
Tocina	Caserío de viñas	4,8	3	1	3	0	1	4
Torno (El)	Caserío de labor y dehesa	13,9	5	0	2	1	2	5
Torongil (El)	Casa de dehesa	58,5	1	2	1	0	2	3
Torre (La)	Caserío de recreo y de viñas	4,1	5	0	1	3	0	5
Torre (La)	Cortijo (caserío de labor)	13,9	6	0	4	2	0	6
Torrecera	Cortijo (casa de labor)	22,2	1	0	1	1	0	2
Torrecilla	Cortijo (casa de labor)	13,9	1	0	1	0	0	1
Torre del Melgarejo	Cortijo (casas de labor)	8,3	3	0	2	0	1	3
Torro alto y bajo	Caserío de viñas	2,7	21	8	18	4	7	29
Trobal	Cortijo (casas de labor)	11,1	3	0	2	1	0	3
Valcargado	Caserío de viñas	5,5	5	3	5	3	0	8
Valdetoro	Caserío de viñas	2,7	7	5	8	1	3	12
Valle (El)	Convento y huerta	30,6	2	0	2	1	0	3
Valleseguillo, ó Vallehermoso	Caserío de recreo	0,3	3	0	2	0	2	5
Várgas	Casa de huerta	0,5	1	0	1	0	0	1
Vegas de Elvira (Las)	Cortijo (casas de labor)	30,6	2	0	1	1	0	2
Veinticinco (Las)	Caserío de viñas	2,7	2	2	2	0	2	4
Ventorrillo del Toro	Venta	11,1	2	0	0	0	2	2

POBLACIONES	TIPOLOGÍA	DISTANCIA	EDIFICIOS, VIVIENDAS, ALBERGUES HABITADOS		EDIFICIOS		ALBERGUES, BARRACAS, CUEVAS, CHOZAS	TOTAL
			SIEMPRE	TEMPORAL	1 PISO	2 PISOS		
Ventosilla	Cortijo (casa de labor)	13,9	2	0	0	1	1	2
Vicaría (La)	Cortijo y huerta	-	8	0	4	1	3	8
Vícos	Caserío de labor y viñas	13,9	6	0	5	0	1	6
Villamarta	Caserío de labor	8,3	3	0	2	0	1	3
Villavicencio	Casas de huerta	0,6	2	0		2	0	2
Viña (La)	Caserío de labor	22,2	3	0	1	0	2	3
Vistalegre	Venta	1,3	1	0	1	0	0	1
Zarpa (La)	Cortijo (casa de labor)	6,9	2	0	1	0	1	2

ANEXO 3. NOMENCLÁTOR DE UNIDADES POBLACIONALES DE 2010.

Relación de unidades poblacionales para Jerez de la Frontera.

Unidad Poblacional	Año 2010		
	Población total	Varones	Mujeres
000000 JEREZ DE LA FRONTERA	208896	102315	106581
000100 ALCORNOCALEJOS	65	32	33
000102 CHAPARRITO (EL)	55	27	28
000199 *DISEMINADO*	10	5	5
000200 AÑINA-POLILA	130	70	60
000299 *DISEMINADO*	130	70	60
000300 BARCA DE LA FLORIDA (LA)	4221	2130	2091
000301 BARCA DE LA FLORIDA (LA)	4043	2024	2019
000399 *DISEMINADO*	178	106	72
000400 CASABLANCA	17	9	8
000499 *DISEMINADO*	17	9	8
000500 CUARTILLOS	1042	519	523
000501 CUARTILLOS	986	486	500
000599 *DISEMINADO*	56	33	23
000700 DEHESILLA DE ALGAR	0	0	0
000799 *DISEMINADO*	0	0	0
000800 ESTELLA DEL MARQUES	1550	790	760
000801 ESTELLA DEL MARQUES	1408	720	688
000899 *DISEMINADO*	142	70	72
000900 FUENTE DEL REY	2	1	1
000999 *DISEMINADO*	2	1	1
001000 GIBALBIN	580	306	274
001001 GIBALBIN	519	272	247
001099 *DISEMINADO*	61	34	27
001100 GUADALCACIN	5255	2645	2610
001101 GUADALCACIN	4521	2253	2268
001199 *DISEMINADO*	734	392	342
001200 ISLETES (LOS)	9	6	3
001299 *DISEMINADO*	9	6	3
001300 JARDA (LA)	2	1	1
001399 *DISEMINADO*	2	1	1
001400 JEREZ DE LA FRONTERA	187205	91309	95896
001401 JEREZ DE LA FRONTERA	187205	91309	95896
001500 JOSE ANTONIO	695	357	338
001501 JOSE ANTONIO	332	168	164
001502 PUENTE LA GUAREÑA	257	135	122
001599 *DISEMINADO*	106	54	52
001600 INA (LA)	789	407	382
001601 INA (LA)	345	180	165
001602 BALDIO GALLARDO	28	14	14
001603 CAÑADA DEL LEON	169	85	84
001604 RAJAMANCERA	119	59	60
001699 *DISEMINADO*	128	69	59

Unidad Poblacional	Año 2010		
	Población total	Varones	Mujeres
001700 MACHARNUDO ALTO	79	43	36
001799 *DISEMINADO*	79	43	36
001800 MESAS DE ASTA	482	247	235
001801 MESAS DE ASTA	328	173	155
001899 *DISEMINADO*	154	74	80
002000 NUEVA JARILLA	1585	802	783
002001 NUEVA JARILLA	1393	706	687
002099 *DISEMINADO*	192	96	96
002100 PORTAL (EL)	576	315	261
002101 PORTAL (EL)	473	257	216
002102 SIERRA SAN CRISTOBAL	28	11	17
002199 *DISEMINADO*	75	47	28
002200 REPASTADEROS (LOS)	925	469	456
002201 LOMOPARDO	338	163	175
002202 MOJO (EL)	140	67	73
002203 PACHECAS (LAS)	27	12	15
002299 *DISEMINADO*	420	227	193
002300 ROMERO (EL)	0	0	0
002399 *DISEMINADO*	0	0	0
002400 SAN ISIDRO DEL GUADALETE	600	325	275
002401 SAN ISIDRO DEL GUADALETE	597	323	274
002499 *DISEMINADO*	3	2	1
002600 SOLETE ALTO	57	27	30
002699 *DISEMINADO*	57	27	30
002700 TABLAS (LAS)	169	85	84
002701 TABLAS (LAS)	125	65	60
002799 *DISEMINADO*	44	20	24
002900 TORNO (EL)	1276	642	634
002901 TORNO (EL)	1273	641	632
002999 *DISEMINADO*	3	1	2
003000 TORRE MELGAREJO	354	176	178
003001 TORRE MELGAREJO	334	166	168
003099 *DISEMINADO*	20	10	10
003100 TORRECERA	1231	602	629
003101 TORRECERA	1210	592	618
003199 *DISEMINADO*	21	10	11